



*Estado y Política(s)*

## ***Fuerzas Armadas, fronteras y territorios en Sudamérica en el siglo XX***

***Perspectivas y experiencias desde Argentina y Brasil***

***José Miguel Arias Neto, Fernando da Silva Rodrigues  
y Germán Soprano  
(Coordinadores)***

**Fuerzas Armadas, fronteras y territorios  
en Sudamérica en el siglo XX**  
Perspectivas y experiencias desde  
Argentina y Brasil

José Miguel Arias Neto,  
Fernando da Silva Rodrigues y Germán Soprano  
(Coordinadores)

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Edición: Libros de la FaHCE

Diseño: Delia Contreras

Tapa: D.C.V. Daniela Nuesch

Editora por Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión: Natalia Corbellini

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

©2021 Universidad Nacional de La Plata

ISBN 978-950-34-2005-8

Colección *Estado y Política(s)*, 2

---

**Cita sugerida:** Arias Neto, J. M., da Silva Rodrigues, F. y Soprano, G. (Coords.). (2021). *Fuerzas Armadas, fronteras y territorios en Sudamérica en el siglo XX: Perspectivas y experiencias desde Argentina y Brasil*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estado y Políticas ; 2). Recuperado de <https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/178>

---



Licencia Creative Commons 4.0 Internacional  
(Atribución-No comercial-Compartir igual)

**Universidad Nacional de La Plata**  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

**Decana**

Ana Julia Ramírez

**Vicedecano**

Mauricio Chama

**Secretario de Asuntos Académicos**

Hernán Sorgentini

**Secretario de Posgrado**

Fabio Espósito

**Secretario de Investigación**

Juan Antonio Ennis

**Secretario de Extensión Universitaria**

Jerónimo Pinedo

**Prosecretaria de Gestión Editorial y Difusión**

Verónica Delgado

# Índice

## Introducción

*José Miguel Arias Neto, Fernando da Silva Rodrigues y Germán Soprano*  
..... 13

Os conflitos regionais e a reconstrução das fronteiras  
sul-americanas na visão dos militares brasileiros

*Fernando da Silva Rodrigues* ..... 15

A conquista do Amazonas: dimensões da política defesa  
brasileira no oitocentos

*José Miguel Arias Neto* ..... 39

Las Fuerzas Armadas argentinas en la Antártida: obra pionera  
y trayectoria profesional del alférez de navío José María Sobral

*Gonzalo Manuel Torchio* ..... 75

La profesionalización de los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile  
a principios del siglo XX

*Hernán Cornut*..... 109

O Serviço militar brasileiro na hora da verdade: a preparação para  
o combate em tempos de paz e a participação brasileira na  
Campanha da Itália

*Francisco Cesar Alves Ferraz* ..... 141

A influência estadunidense na estruturação da Força Aérea Brasileira: Uma análise das transformações arquitetônicas do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos da década de 1940 <i>Jefferson Eduardo dos Santos Machado</i> .....	171
O projeto político do Estado brasileiro sobre colonização, fronteiras e imigração para a defesa territorial durante a Primeira República <i>Érica Sarmiento</i> .....	203
Ejército Brasileño: demandas por su modernización en las décadas de 1960 y 1970 <i>Fernando Velôzo Gomes Pedrosa</i> .....	225
Conflicto de límites con Chile y operaciones militares de las Fuerzas Armadas argentinas en 1978. Experiencias de la artillería de campaña en el «Operativo Soberanía» <i>Germán Soprano</i> .....	251
De las palabras a las armas: las concepciones geopolíticas de Isaac Rojas y Osiris Villegas entre las décadas de 1960 y 1970 <i>Cristian Di Renzo</i> .....	301
Los autores .....	335

# Introducción

La fragmentación temática de la historiografía contemporánea es un hecho establecido desde hace tiempo en los medios académicos, pero lejos de ser un dato inmodificable de la realidad, es una cuestión que requiere de una permanente problematización. Tal como destaca José D'Assunção Barros (2004), esa fragmentación se ha acentuado como consecuencia de dos situaciones: la continua especialización del historiador y la posibilidad de generar múltiples perspectivas sobre un mismo problema u objeto de estudio.

La producción de la historia militar se dio en forma diferente en función de distintos contextos científicos y universitarios de las instituciones académicas de los países metropolitanos y periféricos. En los Estados Unidos y Europa ocupa un lugar destacado cuando menos desde mediados del siglo XX, no solo por motivos académicos sino quizás porque la historia de esos Estados en ese siglo se confunde con sus propias guerras.

La historia militar no comprende únicamente el fenómeno de la guerra y, por esa razón, no puede ser percibida solo en las perspectivas y experiencias de los militares, aun cuando las Fuerzas Armadas como institución del Estado contemporáneo y los militares como un grupo social, concentran en sus manos –como afirma Samuel Huntington (2006)– el recurso del ejercicio socialmente legítimo de la violencia en la defensa externa de un país.

La administración de la fuerza militar, entonces, y no solo de la violencia, se presenta como objeto principal de la historia militar que, por consiguiente, acaba comprendiendo la organización de las instituciones castrenses, la adquisición y mantenimiento de su material y recursos humanos y, principalmente, la forma como son utilizados, entre otras cuestiones. Tales dimensiones de estudio deben ser entendidas en sus inscripciones y

relaciones en contextos políticos, sociales y culturales más amplios, como extensión de otros abordajes disciplinarios que le sirven de referencia teórica y metodológica. En este sentido, los críticos de la historiografía militar tradicional han señalado con acierto que esta no concebía a las Fuerzas Armadas y a los militares en esos contextos más comprensivos (Castro, Izecksohn y Kraay, 2004).

Desde enfoques propios de la historia social, los trabajos aquí reunidos tienen por objeto analizar cuestiones relativas a la historia de la Argentina y el Brasil a través del estudio de sus Fuerzas Armadas. Abarcan el papel que tuvieron en la construcción de sus fronteras, en la configuración de sus territorios y en las relaciones mantenidas entre ambos países y con otros vecinos de América del Sur en el siglo XX. En ocasiones, también abordan la emergencia y continuidad con procesos, instituciones y actores desde mediados del siglo XIX.

La concreción de este libro ha dado continuidad a una historia de intercambios académicos entre los coordinadores –José Miguel Arias Neto, Fernando da Silva Rodrigues y Germán Soprano– desarrollados en los últimos años entre la Argentina y el Brasil. En el año 2017, esos intercambios recibieron un renovado impulso con la invitación de la directora del Doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Patricia Flier, quien nos propuso avanzar en acuerdos de cooperación entre este Doctorado y los programas de posgrado de la Universidade Estadual de Londrina y la Universidade Salgado de Oliveira. En este marco realizamos el *workshop* “Fuerzas Armadas, Fronteras y Territorios en Sudamérica del siglo XX” durante los días 5 y 6 de abril de 2018, en la sede del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP) y como parte de las actividades del PICT 2015-1428 “Profesionales, intelectuales y Estado. Análisis comparado de trayectorias y configuraciones sociales en la Argentina”, dirigido por Germán Soprano. En ese evento tuvimos oportunidad de presentar y discutir una primera versión de los artículos, los cuales se vieron enriquecidos en el curso de intercambios ulteriores. Otro resultado de estas interacciones ha sido el diseño e implementación del Trayecto Académico 2018-2019-2020 denominado



“Historia social de los militares y la guerra en Sudamérica (siglos XIX-XX)” en el Doctorado en Historia de la mencionada Facultad y Universidad.

Fernando da Silva Rodrigues abre el libro con “Os conflitos regionais e a reconstrução das fronteiras sul-americanas na visão dos militares brasileiros: olhando através dos documentos produzidos pelo Exército na primeira metade do século XX”, donde analiza cómo fueron interpretados en el Ejército brasileño dos conflictos que ocurrieron prácticamente en simultáneo en la década de 1930: la Guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay (1932-1935) y el conflicto entre Colombia y Perú por la denominada Cuestión Leticia (1932-1934). Dichas interpretaciones, lejos de ser solo ejercicios intelectuales, tenían efectos prácticos en el modo en que el pensamiento político-militar concebía la geopolítica y las relaciones entre los países de la región, la defensa nacional, la definición de las fronteras y la ocupación del territorio nacional.

Por su parte, en “A conquista do Amazonas: dimensões da política defesa brasileira no oitocentos”, José Miguel Arias Neto retrocede en el tiempo hasta el siglo XIX para comprender las concepciones sobre la política externa, la Amazonia, las fronteras y la navegación fluvial en el Brasil imperial y el modo en que esas concepciones incidieron en el curso ulterior de la historia del país y de la región, pues recordemos que este país limita con todos los de Sudamérica, excepto con Chile.

El artículo de Gonzalo Manuel Torchio “Las Fuerzas Armadas argentinas en la Antártida: obra pionera y trayectoria profesional del alférez de navío José María Sobral” está referido al papel que tuvieron los militares argentinos en la proyección de la política antártica de este país desde principios del siglo XX. A su vez, en “La profesionalización de los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile a principios del siglo XX”, Hernán Cornut compara los cambios organizacionales, doctrinarios y logísticos que tuvieron los ejércitos de esos países, y destaca que no es posible dar cuenta de los procesos desplegados en esas Fuerzas sin comprender sus relaciones.

En “O serviço militar brasileiro na hora da verdade: a preparação para o combate em tempos de paz e a participação brasileira na campanha da Itália”, Francisco César Alvez Ferraz efectúa un análisis de la influencia que tuvo el servicio militar obligatorio en la preparación militar de los combatientes de la

Força Expedicionária Brasileira que participaron como parte de los Aliados en la campaña de Italia de la Segunda Guerra Mundial. Y Jefferson Eduardo dos Santos Machado aborda las relaciones entre las Fuerzas Armadas del Brasil y de los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en su texto “A influência estadunidense na estruturação da Força Aérea Brasileira: Uma análise das transformações arquitetônicas do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos da década de 1940”.

En “O projeto político do Estado brasileiro sobre colonização, fronteiras e imigração para a defesa territorial durante a Primeira República”, Érica Sarmiento estudia las iniciativas estatales de colonización y vigilancia para ocupar y defender el territorio de la región del sertão norte del Brasil. Al igual que en el artículo de Arias Neto, la autora busca comprender esta cuestión reconociendo relaciones entre las políticas modernizadoras del Imperio y de la Primera República en el proceso de construcción de un Estado nacional. Por su parte, en su artículo “Ejército Brasileño: demandas por su modernización en las décadas de 1960 y 1970”, Fernando Velôzo Gomes Pedrosa retoma las relaciones entre proyectos de modernización del Estado nacional y el papel que le cupo a los militares en ellos en la segunda mitad del siglo XX. A tal efecto, el autor estudia los cambios doctrinarios y organizacionales que supuso el involucramiento del Ejército en ese proceso de modernización autoritaria del país durante gobiernos dictatoriales encabezados por las conducciones militares brasileñas.

Por último, dos autores analizan las raíces históricas y el curso de las acciones diplomáticas y militares que tuvo el conflicto entre Argentina y Chile en 1978 por la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox en el extremo sur del continente sudamericano. Germán Soprano en el “Conflicto de límites con Chile y operaciones militares de las Fuerzas Armadas argentinas en 1978. Experiencias de la artillería de campaña en el ‘Operativo Soberanía’”, y Cristian Di Renzo en ““De las palabras a las armas: las concepciones geopolíticas de Isaac Rojas y Osiris Villegas entre las décadas de 1960 y 1970”.

Esperamos que este libro sea un aporte académico destinado a profesores-investigadores, estudiantes, funcionarios estatales civiles y militares y, de manera más amplia, a ciudadanos interesados en pensar históricamente

las relaciones entre Fuerzas Armadas, fronteras y territorios en Sudamérica durante el siglo XX. Somos conscientes de que en esta ocasión nuestros esfuerzos han estado enfocados específicamente en la comprensión de las perspectivas y experiencias argentinas y brasileñas de ese período, pero confiamos en que en una próxima instancia nos será posible diversificar nuestra labor incorporando los puntos de vista de actores sociales de otros países de la región.

José Miguel Arias Neto, Fernando da Silva Rodrigues y Germán Soprano  
La Plata / Londrina / São Gonçalo, diciembre de 2018.

## Referencias

- Barros, J. D'A. (2004). *O campo da história: especialidades e abordagens*. Petrópolis: Vozes.
- Castro, C., Izecksohn, V., Kraay, H. (Orgs.) (2004). *Nova História Militar Brasileira*. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
- Huntington, S. (2006). *O soldado e o estado: teoria e política das relações entre civis e militares*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.



# Os conflitos regionais e a reconstrução das fronteiras sul-americanas na visão dos militares brasileiros: olhando através dos documentos produzidos pelo Exército na primeira metade do século XX

*Fernando da Silva Rodrigues*

## Introdução

Neste capítulo tem-se como objetivo investigar a importância histórica de alguns conflitos contemporâneos da América do Sul, na reconstrução das fronteiras nacionais e no aumento das tensões militares pela segurança e defesa. Nesse estudo, será dada atenção especial a dois conflitos regionais ocorridos no século XX, próximos às fronteiras brasileiras, dos quais o Brasil, além de manter vigilância constante, veio a participar da arbitragem internacional: a Guerra do Chaco, conflito entre a Bolívia e o Paraguai (1932-1935), na fronteira oeste, e a Questão Letícia, conflito entre a Colômbia e o Peru (1932-1934), na fronteira norte.

Os estudos foram aqui apresentados foram embasados pela análise do papel histórico das Forças Armadas como instituições políticas de Estado utilizadas em intervenções, com o exercício da violência, ou seja, como instrumentos de guerra; pela influência da geopolítica no pensamento

político-militar; pela análise da reconstrução das fronteiras regionais, e pelas tensões envolvendo a ocupação histórica dos territórios sul-americanos.

Se existe uma região mundial na qual o tema discutido aqui pertence às grandes narrativas, e assim às disciplinas importantes da pesquisa histórica, das ciências sociais e, sobretudo, da geografia, são sem dúvida as Américas, por conta da sua complexa formação. Até porque a exploração e o desenvolvimento, sobretudo na Argentina, no Chile e no Brasil, tornaram-se o instrumento essencial de colonização, de segurança, da defesa, da valorização econômica dos espaços vazios e de controle da população do interior.

No caso brasileiro, até a primeira metade do século XX, o principal foco regional de preocupação em relação ao desenvolvimento da fronteira agrária e às tensões políticas concentrava-se no sul do continente (leia-se Argentina), ou no centro-oeste (leia-se Bolívia e Paraguai). Na segunda metade do século XX, os focos regionais de tensão foram deslocando-se para os extensos territórios da Amazônia, ao norte do continente.

Com relação à metodologia, além do debate com a literatura pertinente a temáticas tão complexas, como os estudos de fronteiras e os conflitos regionais, farei uma breve análise de alguns documentos selecionados, que foram produzidos pelo Exército brasileiro durante o século XX, e que se enquadram dentro de uma perspectiva de defesa e manutenção das fronteiras conquistadas. Os documentos consultados localizam-se no Arquivo Histórico do Exército, sendo os acervos de origem pública e oficial, e dividido em importante conjunto documental formado por fontes manuscritas, acervos pessoais de militares, fontes impressas e livros escritos no período, reveladores do pensamento político desses militares.

O acervo documental pesquisado recebeu tratamento em nível qualitativo, através da análise intratextual. A abordagem qualitativa visou investigar a bibliografia, os acervos pessoais e os relatórios produzidos pelo Exército brasileiro, cujos textos foram investigados, enquanto discurso de época a ser compreendido e questionado quanto à formulação dos atores políticos, ao papel no processo interventor e à construção da soberania do Estado.

O que percebemos é que essa vasta documentação, a qual temos investigado, sobre fronteiras, território e conflitos armados, produzida no Exército brasileiro está formando um mosaico que vai dar forma aos projetos de Estado esquecidos ou ainda pouco investigados, produzidos sob a influência de pensamentos

políticos de intelectuais nacionais e estrangeiros, os quais influenciaram gerações e épocas importantes da história brasileira e americana. Nesse contexto, a geopolítica parece ter sido a ciência que mais agiu sob os interesses políticos e militares ligados aos estudos de fronteiras, do território e da defesa.

## A geopolítica brasileira: preparando para a defesa e o desenvolvimento do Estado

Para o internacionalista português Freitas, a geopolítica produzida no Brasil durante os anos 1920 e 1930 deve ser incluída numa tradição histórica de defesa da soberania e expansão territorial, com raízes nas atividades de Alexandre de Gusmão, durante os trabalhos realizados na defesa do Tratado de Madri, de 1750 (Freitas, 2004, pp. 12-13). Ao tratar dos modernos precursores do pensamento geopolítico brasileiro, Freitas corrobora com a formulação de Miyamoto, que divide a evolução do pensamento geopolítico brasileiro em cinco fases temporais e insere a geopolítica de Mário Travassos na primeira fase, relativa aos estudos pioneiros realizados nos anos de 1920 e 1930, quando a geopolítica começou a ser sistematizada. Segundo Freitas (2004, p. 13), para Shiguenoli Miyamoto, no artigo publicado em 1995, a primeira fase da evolução do pensamento geopolítico brasileiro abrange os estudos pioneiros realizados nas décadas de 1920 e 1930; a segunda fase coincide com a Segunda Guerra Mundial; a terceira fase coincide com o surgimento da Escola Superior de Guerra; a quarta fase inicia-se com o Golpe Civil-Militar de 1964, e a quinta fase corresponde aos anos 1980 e 1990 (Miyamoto, 1995).

Para entender o interesse político do Estado brasileiro nos conflitos regionais da primeira metade do século XX é importante analisar o pensamento geopolítico de Mário Travassos, formado ao longo da sua carreira militar, e refletir sobre suas obras produzidas. A principal obra *Projeção Continental do Brasil*, de 1935, apresenta a política interna brasileira indissociável de uma política continental. A obra foi inicialmente tratada em um ensaio intitulado *Aspectos Geográficos Sul-Americanos*, editado em 1931.

O que se percebe é que o pensamento de Travassos influenciou diretamente na formação da geração de militares que produziram e renovaram conhecimento teórico sobre geopolítica no Brasil, do pós 2ª Guerra Mundial, desde o coronel Golbery do Couto e Silva (1967), até o general Carlos de Meira Mattos (1975; 1977; 1990), que basearam suas análises acerca da América

do Sul no antagonismo entre bacia do Prata e bacia Amazônica, tal como foi definido no livro *Projeção Continental do Brasil*.

A obra do então capitão do Exército Mário Travassos, influenciada pela Escola francesa de Geografia (Possibilismo<sup>1</sup>), pelos trabalhos do geógrafo Halford John Mackinder (teoria geopolítica e estratégica do poder terrestre<sup>2</sup>) –membro da Real Sociedade Geográfica de Londres–, e pela Escola alemã de Friedrich Ratzel (Determinismo Geográfico<sup>3</sup>), tem por objetivo fundamentar a posição do Brasil na América do Sul, e sinalizar os rumos de uma política externa capaz de guiar o Brasil a uma posição de hegemonia<sup>4</sup> regional, superior

---

<sup>1</sup> A escola possibilista foi criada por Paul Vidal de la Blanche (1896), e acreditava na possibilidade de haver influência de reciprocidade entre o homem e a natureza, e não acreditava no determinismo ambiental preconizado por Ratzel.

<sup>2</sup> A teoria do poder terrestre postula, na sua essência, que a concorrência pela hegemonia mundial, entre grandes potências, pode-se resumir a uma rivalidade histórica entre dois polos antagônicos, o poder marítimo e o poder terrestre. Em termos de estratégia mundial de poder, isso significava que caso o poder terrestre pudesse obter uma frente oceânica poderia ser capaz de desenvolver um poder anfíbio que lhe possibilitaria concorrer com o poder marítimo, simbolizado na época de Mackinder pela Inglaterra. No cerne da reflexão de Mackinder, se encontraria a possibilidade de que o poder marítimo inglês viesse a ser suplantado pelo poder terrestre russo-alemão. As hipóteses que tanto preocupavam o geógrafo inglês não se sustentaram. Como argumenta Raymond Aron (1986) em *Paz e guerra entre as Nações*, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial houve, ao contrário do sustentado pela teoria do poder terrestre, a aliança de poderes terrestres e marítimos para vencer poderes de igual natureza geográfica. Ademais, o fim da Guerra Fria mostrou a vitória do poder marítimo americano sobre o poder terrestre soviético.

<sup>3</sup> O pensamento ratzeliano se sustenta na relação entre a rede geográfica (circulação e comunicação) e o valor das vantagens da situação territorial Ratzel (1882).

<sup>4</sup> Segundo o verbete: “Hegemonia é a supremacia e um Estado nação ou de uma comunidade político-territorial dentro de um sistema. A potência hegemônica exerce sobre as demais uma preeminência não só militar, como também frequentemente econômica, e cultural, inspirando-lhes e condicionando-lhes as opções, tanto por força do seu prestígio como em virtude do seu elevado potencial de intimidação e coerção; chega mesmo a ponto de constituir um modelo para as comunidades sob a sua hegemonia. O conceito de Hegemonia não é, portanto, um conceito jurídico, de direito público ou de direito internacional; implica antes uma relação interestatal de potência, que prescinde de uma clara regulamentação jurídica. Segundo esse critério, poder-se-ia definir a Hegemonia como uma forma de poder de fato que, no *continuum* influência-domínio, ocupa uma posição intermédia, oscilando ora para um ora para outro polo” (Pasquino, 2000, p. 579).



a da Argentina. Travassos transpôs o conceito mackinderiano de *heartland* para os altiplanos bolivianos, em que se dava a hegemonia de Buenos Aires, que ainda detinha a vantagem da situação geográfica em relação à extensa bacia do Prata. Logo, o pensamento de Mário Travassos sistematiza os interesses de poder do Estado brasileiro, nos anos 1930 e 1940, e as relações do Brasil com a Argentina. O discurso nacional-desenvolvimentista alerta para três problemas que o Estado brasileiro deveria ficar atento: a emergência de potências rivais como a Argentina e os Estados Unidos da América; a vulnerabilidade dos países limítrofes da América do Sul, em especial, o caso da Bolívia, cujo planalto era considerado geograficamente contínuo ao atual Estado do Mato Grosso do Sul, e a falta de organização nacional em relação aos desafios anteriores apontados. O debate de Travassos está contextualizado com o esforço de integrar o território brasileiro, aproveitando seus recursos hídricos e econômicos, principalmente em áreas consideradas vulneráveis, como Foz do Iguaçu e a bacia Amazônica.

No contexto da disputa de poder do continente sul-americano, a obra de Travassos identifica uma Argentina melhor estruturada economicamente e que possui outras vantagens em relação ao Brasil, como a bem organizada rede de transportes. No entanto, o tamanho do território brasileiro e a possibilidade de influenciar outros países deveriam ser observados como fatores essenciais para a organização de uma qualificada e diversificada rede de transportes, com uma rede fluvial na bacia do Amazonas, uma rede fluvial na bacia platina, um sistema ferroviário e um sistema aéreo em toda extensão do território nacional.

Foi dentro desse projeto político nacionalista que se enquadra o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que o livro de Mário Travassos contribuiu para o desenvolvimento dos estudos geopolíticos, em face aos seus debates em torno da construção do Estado nacional. Travassos (1935, p. 186) propõe como estratégia levar o debate político e o desenvolvimento econômico para o interior do Brasil, aumentando o fator demográfico, para diminuir o vazio populacional dos ertões brasileiros.

Podemos inserir nesse debate a importância, dada à potencialidade do papel dos portos marítimos, na condição de elemento de integração do conjunto continental, do litoral ao sertão norte e centro-oeste do Brasil. Como exemplo, Travassos cita o caso da Bolívia, país localizado na fronteira

oeste com o Brasil e centro geográfico do continente sul-americano, que estava estrategicamente dividido entre a necessidade de ter um porto no oceano Pacífico ou outro no oceano Atlântico. A decisão poderia resultar no aumento da instabilidade regional, pois, no caso de um conflito bélico, haveria o aumento das tensões políticas entre Brasil e Argentina, nações que disputavam a hegemonia política sul-americana (Travassos, 1935, p. 64).

No contexto desse debate e no estudo das condições geográficas da América do Sul, Travassos analisa o potencial estratégico e econômico do triângulo formado pelas cidades bolivianas de Cochabamba, Santa Cruz de La Sierra e Sucre, como uma alternativa para limitar as vantagens do acesso viário a bacia platina, e por localizar-se no limite do estado brasileiro do Mato Grosso, região central do continente (Travassos, 1935, p. 4). Na opinião de Travassos, somente o controle desse triângulo geopolítico permitiria a neutralização efetiva da superioridade dos países da bacia do Prata e, naturalmente, a hegemonia da Argentina sobre a região central da América do Sul e sobre os Estados periféricos, formados pelo Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Como podemos observar, para Mário Travassos, o Estado da América do Sul que conseguisse controlar esse ponto estratégico poderia manobrar com a dinâmica econômica da região, e dominaria o poder continental ao sul do equador. Para o autor, a cidade de Santa Cruz de La Sierra seria o polo de convergência das influências amazônicas e platinas; a cidade de Cochabamba, o polo de influência andina e também sujeita a atrações amazônicas, e a cidade de Sucre, o centro das influências platinas.

Para Freitas (2004, p. 18), dentre as medidas sugeridas por Travassos podemos identificar como a principal a construção de uma infraestrutura de transportes, por meio da navegação fluvial na bacia do Amazonas e da utilização de uma rede ferroviária no Mato Grosso. Essa infraestrutura de transportes teria capacidade de carregar produtos da região boliviana para os portos no oceano Atlântico, do litoral brasileiro, melhorando os pontos de passagens da cordilheira dos Andes pela bacia amazônica, de forma a projetá-la como centro de influência sobre a Bolívia e a Colômbia, o que permitiria quebrar o controle exercido pelo Estado argentino sobre a economia da Bolívia.

A consolidação do pensamento geopolítico, principalmente no meio militar brasileiro, a partir dos anos 1930, atualizou a rivalidade com a Argentina. A obra de Mário Travassos, *Projeção Continental do Brasil* (1935), passou a ser

identificada como referência para estudos militares e diplomáticos brasileiros. A discussão central da obra, que coloca a Argentina como a principal potência da região, vai encontrar no meio militar da época, ambiente favorável para intensificação dos debates e das tensões que envolviam as duas nações.

### As nossas porosas fronteiras com a América do Sul

No Brasil, trabalhar com a temática fronteira-limite, com sua divisão natural ou artificial, foi historiográfico, durante longo tempo, discutir espaço, fruto da produção histórica baseada na escola política tradicional. Autores clássicos produziram suas obras, a partir da ideia de um Estado nacional e continental. Nessa perspectiva, entra a produção historiográfica sobre os grandes personagens de uma história da pátria, sobre o bandeirantismo, sobre o personagem do barão do Rio Branco, estudos que olhavam para um Brasil estruturado no século XIX e ampliado no início do século XX. O espanto e a admiração dessa produção estariam atrelados, pela historiografia produzida no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e no ministério das Relações Exteriores, a fatores considerados então fundamentais ao Estado brasileiro: a extensão do território nacional e a sua unidade política, além do papel político e militar desse Estado, seja no tempo do domínio português, ou no tempo do Brasil independente. O dimensionamento do processo de formação das fronteiras estaria articulado a esses agentes, que deteriam conhecimento implícito da formação de uma futura nação continental.

Neste sentido, as investigações sobre fronteiras enfatizavam questões sobre a posse de terras e as ações dos Estados na definição dos limites acordados pelos tratados internacionais. Por outro lado, na direção contrária a essa tendência, uma bibliografia atualizada passou a utilizar novos conceitos como porosidade, circulação de ideias, e a sua articulação com as dinâmicas sociopolíticas locais. A operacionalidade desses conceitos permite entender melhor sobre as investigações atuais sobre fronteiras, na medida em que sua definição ultrapassa as questões exclusivamente territoriais e cartográficas, ou de políticas de Estado. Uma importante contribuição é a análise a partir da lógica da porosidade territorial, que considera o comportamento dos fluxos fronteiriços como consequência da atual conjuntura globalizante. As chamadas “cidades gêmeas” (Letícia e Tabatinga) são o objeto principal dessa abordagem, talvez pelo menor esforço que é despendido pela comunidade

acadêmica para uma efetiva observação desse fluxo de pessoal e material no modal terrestre através da fronteira (Euzébio, 2014, pp. 109-124).

O novo nóculo conceitual permitiu uma diversidade de abordagens que não fogem às questões dos Estados, mas que as ultrapassa. Zonas sociais fronteiriças são abordadas através da construção do conhecimento como fator estratégico da atuação do Estado, mas também como amplas áreas de circulação das ideias políticas, assim como em espaços sociais específicos de fortes características étnicas. Essas abordagens históricas entrelaçam estudos de casos em uma longa duração, permitindo as análises tanto das especificidades quanto dos fatores estruturantes das questões sobre fronteiras.

No Brasil, durante a Primeira República (1889-1930), uma das primeiras ações realizadas pelo Estado foi dar continuidade ao projeto de integração do litoral com o interior, através da construção de linhas telegráficas. A segunda foi ratificar/retificar a demarcação dos limites terrestres através de inspeções de fronteiras. Havia consenso político e militar de que uma das vulnerabilidades brasileira, no início do século XX, ainda era a pouca penetração do Estado no interior do Brasil, com uma grande concentração populacional no litoral e o predomínio de vazios demográficos no sertão. Ocupar o interior era, ainda, uma das prioridades do Estado brasileiro, considerada obra de maior importância para a segurança nacional.

No ano de 1927, o presidente da república do Brasil, Washington Luis Pereira de Sousa (15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930), determinou que fosse realizada a inspeção das fronteiras do Brasil até o final de seu governo, com o objetivo de estudar as condições de seu povoamento e segurança, sendo nomeado inspetor de fronteira o general de divisão Cândido Mariano da Silva Rondon. A inspeção tinha por objetivo percorrer toda linha de fronteiras terrestres do Brasil com a Guiana Francesa, Guiana Holandesa (República do Suriname), Guiana Inglesa (República da Guiana), Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Por conta da Revolução de 1930, no Brasil, as inspeções foram finalizadas na cidade de Urucum, no Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. A Inspeção de fronteiras foi dividida em três campanhas realizadas pelos Estados brasileiros do Pará, do Amazonas e do Mato Grosso (atuais Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

O reconhecimento das fronteiras brasileiras no Norte e Centro-Oeste se tornou uma necessidade primordial para a consolidação da soberania sobre o território. A intervenção cultural nos grupos indígenas foi o complemento desse processo de integração do litoral ao interior, sendo essa etapa passo bastante importante para a manutenção e controle da região. A criação da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (Comissão Rondon<sup>5</sup>), entre os anos de 1906 e 1909, ajudou a controlar a comunicação com o interior. No entanto, a inspeção das fronteiras (1927-1930) realizadas pelo general Rondon completara o serviço de consolidação territorial, ratificando as antigas demarcações e projetando, nos anos 1930 e 1940, o Brasil para uma intensa atividade diplomática. O resultado dessa projeção foi a atuação de diplomatas e militares como pacificadores na superação de grandes conflitos regionais da América do Sul, como foi o caso da Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai (1932-1935), e da Questão Letícia, conflito entre a Colômbia e o Peru (1932-1934).

A Primeira República no Brasil foi um momento de extrema importância para a nossa história política e para o desenvolvimento das nossas relações internacionais, principalmente, com a consolidação do território e o controle das fronteiras norte e centro-oeste. Em 1936, em um estudo relativo aos dispositivos constitucionais que regeriam as questões limítrofes da próxima fase do governo Vargas (Estado Novo), o general Pedro Aurélio Góes Monteiro colocava:

As fronteiras, além de suas funções políticas e econômicas têm aspectos militares predominantes. São partes do território que devem existir sob um regime especial para evitar que se desnacionalizem e venham a se desprender do sistema nacional para cair na órbita de sistemas econômicos, sociais e políticos das nações vizinhas (Brasil, 1936, p. 76).

---

<sup>5</sup> O objetivo primordial desta comissão era estender uma linha telegráfica entre as cidades de Cuiabá e Porto Velho, às margens do rio Madeira, atualmente localizadas respectivamente nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Com isso estaria completa a ligação telegráfica do Rio de Janeiro como o estado do Amazonas e a região do Acre, recém adquirida pelo Brasil através do tratado de Petrópolis, assinado em 1903 e onde se executavam os trabalhos de construção da Ferrovia Madeira-Mamoré.

## A Guerra do Chaco e as tensões fronteiriças no oeste brasileiro

A Guerra do Chaco, importante conflito sul-americano, constituiu-se, na época, em um laboratório para o emprego dos mais avançados tipos de materiais bélicos disponíveis no mundo, alguns dos quais seriam utilizados posteriormente durante a Segunda Guerra Mundial, como foi o caso do uso de aviação e de carros de combate (Zook, 1962, p. 45).

A história da Bolívia e do Paraguai mostra que, depois de conquistadas suas independências, e por estarem envolvidos em suas questões políticas internas, não puderam dedicar grande atenção à região do Chaco. Nem uma, nem outra nação teve ali uma intervenção efetiva, uma ocupação real. Apenas a Bolívia manteve, por suas missões militares, o domínio do médio Pilcomayo, a posse efetiva da Bahia Negra e de suas vizinhanças, ao longo do grande rio, e as salinas ao noroeste. A república do Paraguai, que depois da independência viveu afastada da região, até meados do século XIX ocupava apenas a parte da orla leste do rio e o delta do Pilcomayo. O interior do Chaco em quase sua totalidade era praticamente um vazio demográfico.

Com relação a aspectos geográficos, o Chaco Boreal era uma vasta planície, em ligeiro declive para leste, apresentando as características de um fundo do mar. Na parte central oferece relevos pronunciados, que alcançam altitudes de 225 metros sobre o nível do mar. Na margem do rio Paraguai, entre o Forte Olimpo e a foz do Confuso, havia algumas elevações. No terreno há ausência de pedra, sendo salobro em alguns lugares. Havia várias salinas no interior, e na época da seca produzia-se uma camada de pó que, ao contato com as águas das chuvas, formava uma lama espessa, que tornava quase impossível o trânsito. Existia uma cobertura de vegetação, de grande talhe, formando matas descontínuas e também espécies menores, no intervalo de extensos campos, em que se encontravam lagoas passageiras, geradas pelas águas pluviais, e rios que se originam dessas lagoas (Carvalho, 1958, p. 34).

No verão eram intensas as chuvas, não só sobre a planície, como na vertente oriental dos Andes. Transbordavam os rios e, como as margens eram muito baixas, as águas estendiam-se por vastas áreas, fazendo surgir as lagoas temporárias, formando enormes pantanais. As condições climáticas desfavoráveis, combinadas com o regime peculiar do escoamento das águas, prejudicavam o aproveitamento do solo, numa região dotada de imensas extensões de terra, mas cuja utilização sistemática requeria uso de vultosos

capitais, indispensáveis à regularização do escoamento das águas e à perfuração de poços.

A principal via de comunicação com o Chaco Boreal foi sempre o rio Paraguai até início dos anos 1930, apesar da opção proporcionada pela estrada de ferro Central da Argentina, cujos trilhos levavam, por Jucuiba, até à região oeste do território, já próximo à parte oriental dos Andes.

O litígio em torno do Chaco Boreal iniciou com a nota de protesto apresentada em Buenos Aires pela Bolívia, ao pleitear sua inclusão entre as nações ribeirinhas do rio Paraguai durante a assinatura do Tratado de Navegação, Comércio e Limites, de 15 de julho de 1852. Argentina e Paraguai celebraram o acordo e deixaram a Bolívia de fora.

Depois de 1927, muitas tensões e incidentes desenrolaram-se na região do Chaco. Ocorreu, a partir daquele ano, uma reedição, bem mais grave e de maior vulto, dos conflitos que haviam envolvido o Paraguai e a Bolívia, em Puerto Olimpo e Puerto Pacheco, entre 1886 e 1888, e da própria ocupação militar do Pilcomayo pela Bolívia, em 1905. A região passou a viver uma verdadeira corrida armamentista, com a mobilização de forças, contextualizada pela intensa propaganda dos dois países e a iminência da guerra. As principais providências foram: impulsionar o voluntariado, criação de novas unidades e serviços e empréstimo de guerra.

Em 1930 ocorreu a concentração de tropas bolivianas e paraguaias ao longo do Pilcomayo, no setor Bahia Negra. Por fim, temos o incidente de Pitiantuta, ocasionado quando um destacamento de vigilância boliviano ocupou o abandonado fortim da localidade, no dia 15 de junho de 1932, o que serviu de justificativa para o início a guerra.

Com o fim da guerra, em 1935, iniciaram-se os debates diplomáticos que definiram a posição de cada ator político nesse evento, a divisão do território em litígio, e a confecção do Tratado de Paz assinado em 1938.

A Conferência de Paz decidiu, em um último esforço para alcançar uma solução para o processo de mediação, convidar os ministros de Relações Exteriores da Bolívia e do Paraguai para irem a Buenos Aires negociar a questão. Depois de muitas idas e vindas, e muitas tensões diplomáticas, no dia 21 de julho de 1938, após três anos de conversações de paz iniciada em território argentino, na cidade de Buenos Aires, o Tratado de Paz, Amizade e

Limites foi assinado entre os governos da Bolívia e do Paraguai, na presença do presidente da Argentina, Roberto M. Ortiz.

Esse tratado foi submetido à arbitragem dos presidentes da Argentina, Brasil, Chile, Peru, Uruguai e Estados Unidos, que decidiram a disputa da faixa de terra de 41.500 km<sup>2</sup>, que se estendia do rio Pilcomayo até o rio Paraguai, na altura que ocupavam os exércitos beligerantes, ao término do conflito. O tratado estabeleceu a paz entre Bolívia e Paraguai (artigo 1º) e fixou a linha divisória no Chaco. Conforme previsto no artigo segundo do Tratado de 21 de julho de 1938, o tribunal arbitral proferiu o seu acórdão em 10 de outubro do mesmo ano.

O tribunal arbitral, em resposta à demanda da delegação paraguaia, sentenciou que os fortins Patria e Galpón, assim como Yrendague, ficariam dentro da jurisdição paraguaia. Em 13 de outubro, o governo boliviano informou ao tribunal arbitral que acatava o laudo, e, em 20 de outubro o governo paraguaio fez o mesmo. Em 25 de novembro foi constituída uma comissão mista encarregada da demarcação, e em 28 de dezembro teve lugar, na cidade de Villa Montes, a solenidade de entrega e tomada de posse do território distribuído a cada uma das partes envolvidas no conflito.

O território submetido à arbitragem internacional foi distribuído da seguinte forma: o Paraguai obteve 31.500 km<sup>2</sup>, e a Bolívia recebeu 14.678 km<sup>2</sup>. O resultado desta decisão arbitral ficou sujeito a interpretações historiográficas diferentes, de acordo com a origem dos debates. Se tomarmos a interpretação do lado boliviano, mais prejudicado com as decisões, como foi o caso da análise de Querejazu Calvo (1965, p. 473), o Paraguai ficou como dono de quase todo o terreno disputado, enquanto que a demanda portuária boliviana foi contemplada com a concessão de uma parte de terra que penetrava até o rio Paraguai na zona inundada de seu afluente Otuquis. Se tomarmos por base os autores do lado paraguaio, as produções bibliográficas confirmariam a vantagem nas decisões arbitrais, como foi o caso da obra de Salum-Flecha (1983, p. 192), que defendeu do ponto de vista diplomático e jurídico as decisões arbitrais.

O que percebemos com essa breve história é que a guerra do Chaco pode ser considerada um evento importante e de grande interesse para a política externa brasileira, o qual foi acompanhado nos bastidores pelo alto comando do Exército, e de onde foram produzidos diversos documentos secretos e



sigilosos. Dentre esses documentos destacamos os seguintes: o estudo sigiloso feito sob a direção do general Waldomiro Castilho de Lima, da Inspetoria do 1º Grupo de Regiões Militares, *A Questão do Chaco Boreal*, de 1934; e o relatório secreto *Synthese das informações colhidas sobre a guerra boliviano-paraguaya, no Chaco Boreal, e seus antecedentes*, produzido pela 2ª Seção do Estado Maior do Exército (EME), em 1935, guardado no Arquivo Histórico do Exército. São dois documentos complementares, no contexto de produção de informações militares e diplomáticas de interesses estratégicos para tomada de decisões políticas relacionadas à defesa nacional e às fronteiras.

Para a leitura bibliográfica, optamos por analisar a visão brasileira sobre a Guerra do Chaco e as tensões políticas regionais, baseada em uma importante obra de um militar do Exército brasileiro marcada pela escrita da escola historiográfica política tradicional. Apesar de termos vários livros e artigos produzidos no Brasil e no exterior, nesse momento, procuramos estabelecer um diálogo específico com essa obra escolhida (Bandeira, 1998; Doratioto, 2000; Silveira, 1997; Zook, 1962). O livro oferece informações relevantes acerca da temática e intitula-se *A paz do Chaco: como foi efetuada no campo de batalha*, do general Estevão Leitão de Carvalho, de 1958. Essa obra foi produzida segundo o modelo da história militar tradicional, que se desenvolveu ao longo do século XIX, junto com a historiografia positivista, valorizando a guerra no contexto dos grandes temas da história política, como os estudos sobre o Estado, a formação territorial, o controle das fronteiras e as relações diplomáticas.

A História Militar tradicional tem sido o campo de “militares historiadores”. Em geral, tem pouca acuidade metodológica, pois não resulta do trabalho de historiadores profissionais, mas de aficionados. Tende, portanto, à grandiloquência e à adjetivação excessiva. É basicamente uma história descritiva e busca o ideal de apresentar “os fatos como aconteceram”. Em função dessas características, ficou conhecida depreciativamente nos Estados Unidos como “História-Batalha” ou História de “tambores e clarins”. Em função de sua origem não especializada e “corporativa”, tem clara tendência ao mito, ao enaltecimento de figuras históricas e a certa condescendência no julgamento dos fatos e protagonistas (Pedrosa, 2011, p. 8).

Os eventos militares eram investigados de modo cientificista, através de estudo metódico, e valorizados na medida em que legitimavam os interesses políticos do Estado. Os dois principais modelos historiográficos da História Militar foram elaborados pelo prussiano Karl Von Clausewitz, no livro *Da Guerra*, principal tratado sobre o tema, e ainda muito discutido no campo das ciências humanas e sociais; e Leopoldo Von Ranke, um dos fundadores da história científica alemã, cujo arcabouço teórico se baseava na História Narrativa ou historicismo, que apresentava os fatos históricos como eles realmente se passaram, e sua metodologia tinha como princípio a objetividade e neutralidade dos historiadores. Ranke “baseava-se principalmente nos documentos diplomáticos para fazer a história do Estado e de suas relações exteriores, pois acreditava que as relações diplomáticas determinavam as iniciativas internas do Estado” (Reis, 1996, p. 11).

Podemos destacar dois grandes temas da historiografia, que foram construídos neste contexto e que se manifestam nos estudos militares do século XX: a História Batalha, formada a partir da busca de uma descrição precisa e de uma análise detalhada dos eventos militares propriamente ditos; e a História Militar, no contexto da História Política, como é muitas vezes definitiva, e que pode remeter para a própria História Batalha em suas análises finais. O livro do general Estevão Leitão de Carvalho (1958), publicado pela Biblioteca do Exército treze anos após seu afastamento das atividades militares, se enquadra perfeitamente nesse modelo historiográfico identificado como história militar tradicional.

O autor do livro participou como testemunha ocular do fato histórico, na condição de representante oficial do Brasil na Comissão Militar Neutra, encarregado de executar, no campo de batalha, as cláusulas de segurança do Protocolo de Paz, assinado em 12 de junho de 1935. A obra foi construída com base no desempenho de sua função militar-diplomática na região do conflito e nos entendimentos obtidos com as lideranças militares dos países envolvidos diretamente na guerra. Produzida treze anos após o seu afastamento das atividades militares regulares, teve como objetivo central construir um livro histórico sobre a guerra, que pudesse servir de fonte de estudo para os militares brasileiros. O interesse despertado pelas informações que obteve levou o autor a estender o período temporal de sua obra, na busca das origens do litígio e das etapas sucessivas pela qual passou, até o final da guerra. O

livro é dividido em duas partes: a primeira trata da história do litígio, em que são estudadas as numerosas fases diplomáticas; a segunda diz respeito aos fatos e comentários ligados à execução das cláusulas de segurança do protocolo de 12 de junho de 1935.

### A Questão Letícia e as tensões na tríplice fronteira norte do Brasil

Com essa parte da investigação ligada à análise da Questão Letícia fecharemos esse capítulo e a nossa ideia inicial de uma nova proposta de investigação, ligada ao entendimento, pelo menos em parte, desse mosaico, que foi o projeto político e militar do Estado brasileiro, da primeira metade do século XX. Talvez um estudo mais profundo, do que seria um projeto político para as fronteiras do Brasil (1889-1945), com análise das coleções de documentos da Primeira e Segunda Comissão Demarcadora das Fronteiras (Século XIX e XX), da Vigilância das Fronteiras (1917-1940), dos Planos de Operações na América do Sul (1934-1943), e da criação da Defesa Territorial Aérea (1938-1944). Sendo que as três últimas coleções se encontram no Arquivo Histórico do Exército, e a primeira está quase toda digitalizada e disponível na internet.

Quanto ao levantamento da literatura produzida sobre o conflito, diferentemente da produção referente à Guerra do Chaco, existe pouca investigação dos fatos ocorridos, entre 1932 e 1934, na cidade de Letícia, situada entre os rios Putumayo e Amazonas, ao lado da cidade de Tabatinga, no Brasil, ponto estratégico da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, seja na forma historiográfica analítica, seja na forma de narrativa, escrita preferida pela historiografia política tradicional. No Brasil, com exceção dos livros produzidos por diplomatas (Costa, 1942; Lyra, 1941) e mais recentemente por cientistas do campo das relações internacionais (Bueno e Cervo, 2002), praticamente não encontramos nenhuma obra de referência que investigasse com mais profundidade o fato. O embaixador Sergio Costa (1942), ao que parece, foi o único intelectual brasileiro a dedicar uma produção integral ao assunto, em uma obra factual construída numa narrativa linear, escrita em noventa e sete páginas. Enquanto outros autores, basicamente, limitaram-se a tratar superficialmente do assunto, enquadrando dentro de uma história geral das relações diplomáticas brasileira. Como exemplo, citamos a passagem sobre o conflito estudado por Clodoaldo Bueno e Amado Cervo (2002), no

livro *História da Política Exterior do Brasil*, que totaliza quinhentas e noventa e cinco páginas, sendo apenas duas páginas e meia dedicadas à Questão Letícia (2002, pp. 259-261). Para completar, a obra só utiliza um livro de referência para estudar o fato histórico, justamente, o livro do embaixador Sérgio Costa, de 1942.

A historiografia americanista parece seguir o mesmo caminho da historiografia brasileira, com uma produção bastante limitada sobre o fato. Com exceção dos poucos livros produzidos no Peru e na Colômbia, palco do conflito, praticamente não se encontra nada na literatura universal. Entre os poucos livros escritos integralmente sobre o tema, podemos citar *El Putumayo y el conflicto Colombo-peruano 1932-1934* (1970), de Luis Cajiao; *La Guerra con el Perú* (1995), de Alberto Donadio; *1932. La Guerra con el Perú, sus batallas y sus héroes* (1957), de Guillermo Plazas; *El conflicto colombo-peruano y el resurgimiento de la Armada colombiana 1930-1936* (1994), de Enrique Román; *Historia sanitaria del conflicto amazónico colombo-peruano 1932-1934* (1994), de Reynel Salas; *La verdad sobre la guerra* (1935), de Carlos Uribe; e *Historia militar del conflicto con Colombia de 1932* (1965), de José Zárate. No entanto, a maioria das obras produzidas segue a mesma lógica, de enquadrar o fato na história geral das relações diplomáticas colombianas e peruanas, e, para não ficar exaustivo, citamos algumas obras de referência: *La política internacional entre Perú y Colombia* (1988), de Juan Bákula; *La política internacional de Colombia 1903-1959* (1959), de Germán Cavelier; e *Historia diplomática de Colombia 1810-1934* (1961), de Raimundo Rivas.

Com relação à história do conflito, é fato que Colômbia e Peru tinham pendências sobre questões de fronteiras, desde a época da independência. O primeiro marco normativo que afetou o espaço em questão foi o estabelecimento dos atuais limites internacionais entre os três países limítrofes. O Tratado de Bogotá definiu a linha divisória entre o Brasil e a Colômbia, em 1907. Segundo o Tratado Salomón-Lozano, assinado em 24 de março de 1922, pela Colômbia e pelo Peru, o território de Letícia foi incorporado à Colômbia. Foi cedida toda área situada entre os rios Putumayo e Caquetá, e uma parte do território entre os rios Putumayo e Amazonas (Trapézio Amazônico), parte que interessava à Colômbia por conta da acessibilidade a esse rio. Ao Peru foi cedida uma área entre os rios Napo, Amazonas e Putumayo, que pertencia à Colômbia.

O novo tratado trouxe preocupação ao governo brasileiro pelo fato dos territórios a leste da linha Apapóris-Tabatinga, reconhecidos como sendo do Brasil pela república do Peru, poderiam ser reivindicados pela república da Colômbia, que ficou com a posse das terras peruanas, a oeste da linha demarcatória (Costa, 1942, pp. 5-15, 37-39). Em 04 de abril de 1925, por intermediação do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, foi assinado o Protocolo de Washington, em que a pendência entre os três países a respeito da linha divisória foi resolvida, assentando-se a legitimidade e o reconhecimento do tratado de 1922.

Resolvidas as pendências fronteiriças do tratado Salomón-Lozano, com o reconhecimento pela Colômbia da linha Apapóris-Tabatinga como limite com o Brasil, e o Brasil cedendo à Colômbia a livre navegação no Amazonas e em outros rios adjacentes, o tratado seria ratificado. A atividade da diplomacia brasileira garantiria a manutenção da linha divisória contestada. Como desdobramento da Ata de Washington, Brasil e Colômbia assinaram, em 15 de novembro de 1928, na gestão do embaixador Mangabeira, o tratado de limites, considerando a linha Apapóris-Tabatinga como divisória entre os dois países (Costa, 1942, pp. 37-39).

No ano de 1930 ocorreu, pelo lado da Colômbia, a tomada de posse do território de Letícia, e, pelo lado do Brasil, o término dos trabalhos da Comissão de Demarcação das fronteiras colombianas e peruanas, realizados pelas turmas de Inspeção de Fronteiras (1927-1930), chefiada pelo general Cândido Mariano da Silva Rondon, que completara o trabalho de consolidação da soberania territorial brasileira, ratificando os limites terrestres. A inspeção no norte e no centro-oeste tinha por objetivo atingir a linha de fronteiras do Brasil com a Guiana Francesa, Guiana Holandesa (República do Suriname), Guiana Inglesa (República da Guiana), Venezuela, Colômbia, Peru, e Bolívia, dividida em campanhas pelos Estados do Pará e do Amazonas.

Após a tempestade veio a bonança, e em 1º de setembro de 1932 retornou a tempestade. Já estava solucionada a questão de limites entre Colômbia e Peru no campo diplomático quando oficiais peruanos da guarnição de Chimbote, da cidade de Loreto, inconformados com a transferência da região para os colombianos atacaram e ocuparam Letícia comandando um grupo de forças regular (cinquenta praças e cerca de duzentos civis). O Estado peruano, quando iniciou o levante, não deu apoio, e o tipificou como uma agressão

política movida por seus inimigos comunistas inspirados pela Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Não tardou a rever a sua opinião em face das manifestações internas em favor da reincorporação do território cedido. Em seguida, passou a se opor à intenção colombiana de restabelecimento da ordem na região.

Durante os meses de setembro de 1932 a fevereiro de 1933 ocorreu a concentração das tropas de ambos os países na região de Letícia, servindo o rio Amazonas brasileiro como via de transporte e de reabastecimento as forças estacionadas. As tensões diplomáticas entre os dois países aumentaram, e o primeiro choque ocorreu no dia 14 de fevereiro de 1933.

O governo do Brasil ofereceu a sua mediação diplomática no final do ano de 1932, quando ainda não tinha sido deflagrado o conflito direto. A proposta não foi aceita, e a questão passou para observação e acompanhamento da Sociedade das Nações, que designou, em 1933, um comitê consultivo formado por três membros. O Brasil permaneceu neutro e permitiu a livre navegação nos seus rios, aos dois países beligerantes. No entanto, o Estado brasileiro não permitiu a passagem de aviões sobre o seu território.

Os dois países assinaram um acordo em 25 de maio de 1933, chancelado pela Sociedade das Nações, que constituiu uma comissão administradora, integrada por um oficial da Marinha do Brasil, por um diplomata da Espanha e por um oficial do exército dos Estados Unidos da América. A comissão administrou o território por um ano, enquanto transcorria na cidade do Rio de Janeiro a conferência entre o representante diplomático peruano e colombiano, instalada em outubro de 1933, e presidida pelo embaixador brasileiro Afrânio de Melo Franco.

Apesar das negociações tensas, as delegações chegaram a um acordo, firmado em 25 de maio de 1934, pelo qual os dois países aceitaram os termos do Tratado de Salomón-Lozano, que só poderia ser modificado por um consentimento mútuo, ou por decisão da Justiça Internacional. Pelo Protocolo de Amizade do Rio de Janeiro, os dois países renunciavam a métodos violentos e submetteriam suas questões à Corte Permanente da Justiça Internacional de Haia. Como parte do acordo foi firmada uma ata adicional, que regulava, entre outras questões, a navegação fluvial das duas nações. Em 19 de junho de 1934, retirava-se da região a comissão administradora instalada pela Sociedade das Nações.

De acordo com o artigo 6º do Protocolo de Amizade do Rio de Janeiro, organizou-se uma comissão incumbida de zelar pela execução dos acordos especiais sobre alfândega, comércio, livre navegação dos rios, trânsito, policiamento das fronteiras, e outros assuntos. Para o chefe dessa comissão, foi escolhido o general de divisão Cândido Mariano da Silva Rondon, a contento das duas partes envolvidas. Rondon permaneceu de 1934 a 1938 como mediador no local, tendo mantido a paz através de um acordo aceito, sem maiores problemas. Seu conhecimento de cartografia, topografia, astronomia de posição, fotogrametria e geodesia foi essencial para suas atividades. Seu prestígio internacional e habilidade diplomática foram decisivos para o sucesso da missão.

Por último, torna-se relevante registrar e realizar uma breve análise constitutiva da extensa produção de documentos sobre o conflito, realizada pelo exército brasileiro. É importante assinalar que a Questão chamou a atenção do Estado Maior do Exército desde o momento inicial, com a ocupação de Letícia, e que não se descartava a possibilidade de o Brasil usar força para manter a sua soberania territorial naquela área de fronteira, o que aumentou o processo nacional de militarização da região. Com ofício reservado (Brasil, 1932), de 1º de novembro de 1932, o chefe do Estado Maior do Exército brasileiro informava ao ministro da Guerra a necessidade de ocupação militar da fronteira com o Peru e com a Colômbia, por conta da iminência da guerra e dos acontecimentos que se desenrolavam na região de Letícia, na fronteira Brasil-Colômbia-Peru.

Pela natureza do teatro de operações, a concentração de forças tanto peruanas como colombianas tornava-se difícil e vagarosa, dependente, praticamente, da navegação dos rios da região, tendo inevitavelmente que atravessar o Amazonas no território brasileiro. A marcha no território de Letícia era impraticável e desfavorável, mesmo para operações de pequenos destacamentos, pela falta de estradas. Por essas condições naturais e pelas tensões militares e diplomáticas, o governo brasileiro tomou uma série de medidas para manter a neutralidade e a inviolabilidade do seu território.

Em dezembro de 1932, o governo brasileiro determinou ao comando da 8ª Região Militar que organizasse uma força de ocupação e observação da fronteira Brasil-Colômbia-Peru, reforçando com tropas vindas de outros pontos do país a guarnição 8ª Região Militar (Brasil, 1934). Dessa maneira

foi constituído o Destacamento do Solimões, estacionado em Tabatinga, constituído pelo 27º Batalhão de Caçadores, que também daria cobertura à região de Benjamin Constant, pela 7ª Bateria do Regimento de Artilharia Mixta e pelo contingente especial local. Em Tocantins foi instalado o 21º Batalhão de Caçadores e o contingente especial do Içá, constituindo o Destacamento do Içá. Em Manaus ficou estabelecido o 23º Batalhão de Caçadores e o 25º Batalhão de Caçadores. Em Belém estacionou a 1ª Divisão Naval, e em Manaus, Tabatinga e Óbidos estacionaram outros elementos da esquadra em ação de observação. A observação da fronteira brasileira passou a constituir simples vigilância quando foi assinado o Protocolo de Amizade do Rio de Janeiro, em 1934, e a Comissão Administradora da Sociedade das Nações se retirou da região de Letícia.

Observando a documentação produzida na época pelo Exército brasileiro sobre Vigilância da Faixa de Fronteira, parece que não foi “simples vigilância”, mas uma vigilância sistemática, uma forma de monitoramento físico constante das nossas fronteiras terrestres. Depois dos conflitos no Chaco e em Letícia, a preocupação do Estado Maior do Exército aumentou consideravelmente. Informações eram produzidas constantemente sobre novas tensões envolvendo essas regiões, e havia uma preocupação constante em aumentar os efetivos militares das áreas de fronteiras. No plano político normativo, o general Góes Monteiro produziu um estudo (projeto de constituição) relativo aos dispositivos constitucionais que deveriam reger os domínios de fronteiras (Brasil, 1936). Propostas bastante rígidas, com relação ao controle e manutenção das fronteiras nacionais.

Como dissemos, a documentação produzida sobre a Questão Letícia pelo Exército brasileiro é bastante extensa; por isso, pretendemos realizar um estudo mais pormenorizado em um futuro bem breve. Esse conjunto documental é constituído basicamente de:

- Juntada de documentos sobre a Questão Letícia produzidos pelo Estado Maior do Exército (documentos diversos e secretos), com 269 páginas digitalizadas, referente ao período, de 1932 a 1937. A documentação se refere, basicamente, a recebimento de informações, que são acompanhadas pelo Estado Maior do Exército brasileiro, em relação ao conflito. A temporalidade das fontes vai desde os primeiros



momentos, quando ocorreu a ocupação da região, até o final das atividades diplomáticas do general Rondon como mediador especial;

- Memórias do Conflito de Letícia, produzida pelo Estado Maior do Exército, de 1934. Estudo sigiloso baseado em diversas publicações da imprensa e informações do Ministério das Relações Exteriores, acompanhado de croquis baseados num trecho da carta do Ministério do Exterior da Colômbia, de 1931, correspondente às fronteiras com o Peru e com o Brasil, completada por elementos tomados da carta do Peru, no Estado Maior do Exército (Reservado);
- Informações diversas sobre o conflito, tensões e violações do território brasileiro na área de conflito, posicionamento dos beligerantes, e outros assuntos;
- Documentos diversos (ofícios, telegramas, radiogramas) do período de janeiro a fevereiro, de 1933;
- Documentos diversos (ofícios, telegramas, radiogramas) do período de março, de 1933;
- Documentos com decifração de criptograma;
- Relatório do oficial encarregado do inquérito sobre os acontecimentos de Tarapacá (fevereiro de 1933), assinado pelo general Almério de Moura, comandante das Forças em Observação;
- Documentos diversos (ofícios, telegramas, radiogramas) do período de abril a maio, de 1933.

## Conclusões

Em pesquisas anteriores, sobre a relação do Estado brasileiro com a construção e manutenção das fronteiras norte e centro-oeste, demonstramos como os militares, desde a segunda metade do século XIX, foram responsáveis pela intervenção “civilizadora” na região, considerando, para este propósito, a ocupação territorial, o controle sobre a população local, e a participação na construção dos limites com as nações sul-americanas. Pudemos evidenciar, também, que o Estado brasileiro utilizou-se da força dos militares (Exército

e Marinha) e da persuasão diplomática, como principais agentes executores desse processo interventor de ocupação do interior do Brasil.

Nesse novo momento, ao estudar os conflitos regionais contemporâneos da América do Sul, ocorridos na primeira metade do século XX – especificamente a Guerra do Chaco e a Questão Letícia –, a partir de interesses geopolíticos regionais, ampliamos nossa discussão historiográfica, nossa visão histórica, e confirmamos as tensões políticas que se estabeleceram entre o Brasil e a Argentina devido à rivalidade tradicional na região e à conseguinte disputa pelo poder na América do Sul, no contexto de transição dos regimes políticos liberais para os regimes autoritários dos anos 1930 e 1940.

O resultado dessa pesquisa abre espaço para entender, a partir da análise dos conflitos armados na América do Sul, na primeira metade do século XX, o projeto político e militar do Estado brasileiro para as fronteiras, abrindo espaço também para discutir, no campo político nacional e internacional, os interesses militares intervencionistas. Além disso, com esta investigação científica, pudemos contribuir para o desenvolvimento de uma análise historiográfica e metodológica mais plural e inovadora, ao colocar na pauta da discussão os questionamentos político-militares característicos da História, auxiliando na compreensão da política intervencionista dos Estados, e o controle das fronteiras.

Reconhecemos, ainda, o surgimento de novas áreas do conhecimento dentro da História Militar, articulada aos estudos de fronteiras e territórios, que procuram estudar esses conflitos nas zonas fronteiriças que o circundam, assim como os seus impactos na estruturação das ações de ocupação e as relações entre os agentes envolvidos no processo. Identificamos as possibilidades de interface entre a história social das fronteiras e a história dos conflitos armados com as suas dimensões na política, na sociedade, na economia e na cultura.

## Referências

Bandeira, L. A. M. (1998). A Guerra do Chaco. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 41(1), 162-197.

Brasil (1932). Arquivo Histórico do Exército. Relatório do EME – *Questão Letícia (Documentos Diversos)*. Rio de Janeiro: Estado Maior do Exército.

Brasil (1934). *A Questão do Chaco Boreal (Estudo Sigiloso)*. Rio de Janeiro:

Inspetoria do 1º Grupo de Regiões Militares.

Brasil (1934). *Conflitos de Letícia (memórias)*. Reservado. Rio de Janeiro: Estado Maior do Exército.

Brasil (1935). *Synthese das informações colhidas sobre a guerra boliviano-paraguaya, no Chaco Boreal, e seus antecedentes (Relatório Secreto)*. Rio de Janeiro: Imprensa do Estado Maior do Exército.

Brasil (1936). Arquivo Histórico do Exército. Acervo Vigilância da Faixa de Fronteiras. *Dispositivos Constitucionais (Estudos)* (Vol. III). Rio de Janeiro: Estado Maior do Exército.

Bueno, C., e Cervo, A. L. (2002). *História da política exterior do Brasil*. Brasília: Universidade de Brasília.

Calvo, R. Q. (1965). *Masamaclay: Historia de la Guerra Del Chaco*. La Paz: Los Amigos del Libro.

Carvalho, E. L. (1958). *A paz do Chaco: como foi efetuada no campo de batalha*. Rio de Janeiro: Bibliex.

Costa, S. C. (1942). *A diplomacia brasileira na Questão Letícia*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.

Doratioto, F. (2000). As políticas da Argentina e do Brasil em relação à disputa boliviano-paraguai pelo Chaco (1926-1938). Em Fundação Alexandre de Gusmão, *A visão do outro. Seminário Argentino-Brasil* (pp. 439-477). Brasília: FUNAG.

Euzébio, E. F. (2014). A porosidade territorial na fronteira da Amazônia: as cidades gêmeas Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia). *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 23(1), 109-124.

Freitas, J. M. C. (2004). *A Escola Geopolítica Brasileira: Golbery do Couto e Silva, Carlos de Meira Mattos e Therezinha de Castro*. Rio de Janeiro: Bibliex.

Lyra, H. (1941). *História diplomática e política internacional (Ensaio)*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.

Miyamoto, S. (1995). Geopolítica - poder e relações internacionais. *Revista A Defesa Nacional*, 712, 67-93

Pasquino, G. (2000). Revolução. Em N. Bobbio, N. Matteuci, e G. Pasquino (Eds.), *Dicionário de Política*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

Pedrosa, F. V. G. (2011). A História Militar Tradicional e a “Nova História Militar”. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: Anpuh Nacional. Recuperado de [http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300540601\\_ARQUIVO\\_Artigo-HistMilTradeNovaHist-Envio.pdf](http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300540601_ARQUIVO_Artigo-HistMilTradeNovaHist-Envio.pdf)

Reis, J. C. (1996). *A história entre a filosofia e a ciência*. São Paulo: Editora Ática.

Salum-Flecha, A. (1983). *Historia Diplomatica del Paraguay: de 1869 a 1938*. Asunción: Litocolor.

Silva, G. C. (1967). *Geopolítica do Brasil*. Editora José Olympio.

Silveira, H. G. (1997). *Argentina X Brasil: a Questão do Chaco Boreal*. Porto Alegre: PUCRS.

Travassos, M. (1935). *Projeção Continental do Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Zook, D. H. Jr. (1962). *La Conducción de la Guerra del Chaco*. Buenos Aires: Editorial Lito.

# A conquista do Amazonas: dimensões da política defesa brasileira no oitocentos

*José Miguel Arias Neto*

## Introdução

Em dezembro de 1853 o Correio Mercantil anunciava a venda da obra intitulada *O Amazonas e as costas atlânticas da América Meridional*, de autoria de Mathew F. Maury, na ocasião tenente da marinha dos Estados Unidos da América. Maury fazia uma defesa intransigente da abertura da livre navegação do rio Amazonas pelo Brasil. De fato, ao longo da obra relatava a realização de algumas expedições pelo rio à revelia do governo brasileiro, e afirmava que a política dos Estados Unidos era pacífica, fundamentada no comércio, mas deixava claro que os princípios exclusivistas não seriam tolerados por aquele país. No que caracterizou uma ameaça ao Brasil, Maury não apenas procurou indispor as repúblicas vizinhas com o Império, como fez notar que os Estados Unidos a elas se uniriam para forçar a abertura da livre navegação do Amazonas. Afirmava o tenente:

O Brasil por ser senhor de 2000 milhas do Amazonas, entre (...) cinco repúblicas e o mar, não tem mais direito de excluí-las das grandes vias de comércio, do que teria no caso de possuir somente duas milhas. A política dos Estados Unidos é a política do comércio, e nós não desejamos estar em outros termos com o Brasil, que não sejam os de paz e amizade. Compramos presentemente metade de todo o seu café, e o café constitui o seu principal artigo de comércio. Ele também é um bom consumidor de nossos gêneros, e muito apreciamos as atuais relações de amizade que

existem entre os dois países; porém por mais alto apreço que elas nos mereçam, prezamos ainda mais os eternos princípios de direitos. Nada queremos de exclusivo do alto Amazonas, estamos, porém, mais perto dele, ou antes da sua foz, do que qualquer outra nação, sem excetuar o mesmo Brasil, calculando-se a distância em tempo e medida do Rio de Janeiro e tomando Nova York ou Nova Orleans, como centro dos dois países. (...) A mesquinha política do Brasil em manter fechadas ao homem civilizado, esclarecido e cristão, as portas da mais bela porção do globo, será considerada pelo povo americano como um (...) insulto (...) As repúblicas hispano-americanas desejam também comerciar (...) o Brasil, pior que o Japão, está justamente na porta de entrada e diz: Não quero aproveitar-me eu mesmo do Amazonas, nem permitirei que outros o façam (...) Semelhante proibição é (...) tão prejudicial como um estado de guerra. Enfim o povo americano não pode olhar com indiferença para a política que o Brasil tem seguido e parece disposto a seguir relativamente ao Amazonas (Maury, 1853, p. 38.)

Neste fragmento verifica-se que o autor contrapõe o exclusivismo brasileiro aos princípios liberais, especialmente a doutrina de Locke em relação à propriedade, à produtividade e ao direito de conquista –tema ao qual retornarei. Consequentemente, condenava as práticas brasileiras caracterizando-as como política japonesa, numa referência ao que ficou conhecido como “isolamento nipônico” naquele período, situação à qual os EUA teriam buscado opor uma “política de portas abertas” (Panikkar,1977). Além disto, procurava indispor os governos dos estados vizinhos com o Império, sugerindo uma aliança de repúblicas com os EUA contra o Brasil. Enunciava a possibilidade de uma conquista armada do território amazônico ao afirmar –e a referência novamente é a Locke– que o exclusivismo brasileiro é prejudicial a todos como um “estado de guerra”.

Tal ameaça foi percebida imediatamente pelos brasileiros. De fato, no mesmo momento em que a venda do livro era anunciada, o mesmo *Correio Mercantil* publicou um texto, em duas partes como era comum à época – (dezembro de 1853 e janeiro de 1854), intitulado “O Amazonas”, cujo autor procurou rebater com veemência a perspectiva de Maury. Embora as publicações não estejam assinadas, o que também era bastante comum naquele período, sabese que foram redigidas pelo coronel João Batista de Castro Moraes Antas,

pois no ano de 1854 este autor publicou um livro chamado *O Amazonas: breve resposta à Memória do tenente da armada americana-inglesa F. Maury sobre as vantagens da livre navegação do Amazonas*, reeditado em 2013 pela Fundação Alexandre de Gusmão. Cabe destacar que o texto publicado no Correio foi incorporado ao livro por João Batista. Entre maio e junho de 1854, a *Revista Marítima Brasileira*, periódico militar, também publicou sob o mesmo título de “O Amazonas” um artigo crítico à obra de Maury dividido em três partes e distribuído entre os números 21 e 23. No conjunto esses artigos refutavam o conhecimento de Maury sobre o Brasil, o Amazonas e a América Meridional, e enfatizavam a ação conquistadora dos EUA para além dos princípios de direito. Afirmou o articulista da *Revista Marítima Brasileira*:

Conquanto sejamos nós mesmos os primeiros a convir em que muito resta ainda a fazer, não é por isso menos certo, que não seja um norteamericano o mais habilitado a nos lançar em rosto nosso atraso a semelhante respeito. Tomando para exemplo a Califórnia: se sua atual posse pelos Estados Unidos não é resultado da mais revoltante usurpação, se como efeito assistia legitimo direito a aqueles estados, isto é se ela fazia parte de seu território, o fato de ser disputada pelo México a não ser solvida a questão senão pela razão do mais forte, depõe que, a respeito daquele território assistia a todos menos conhecimento, do que aos astrônomos sobre a geografia da lua (Marinha do Brasil, 1854, p. 8).

Em suma, os brasileiros desqualificavam as descrições que Maury faz da região, apontando a falta de conhecimento do mesmo. Para além disto, enredado no discurso dos críticos estava a ideia de que estes falsos conhecimentos serviriam apenas para caracterizar o Amazonas como deserto, e, diante desta falta de ocupação, justificar uma invasão sustentada, ao cabo, pela força *stricto sensu*.

Para além deste debate público, nesta ocasião a questão já era vista e sentida em toda sua gravidade no núcleo de poder do governo imperial. Em 1853, o visconde de Abaeté afirmava no *Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros*, apresentado à Câmara dos Deputados:

passavamse nos Estados da União Norte-Americana fatos de grave consequência. Constou à legação do Brasil em Washington que alguns

aventureiros naqueles estados, levados de exageradas informações sobre as riquezas do vale do Amazonas, e vantagens que poderiam colher da navegação daquele rio (...) projetavam desde logo, sem o assentimento prévio do Brasil por via diplomática, empreender a sua navegação (Brasil, 1978b, p. xvii).

As tensões vivenciadas pelos estadistas do Império resultaram do fato de que a abertura do rio Amazonas à navegação internacional, posta como agenda dos Estados Unidos, ocorreu simultaneamente à implementação, pelo Brasil, de uma doutrina de definição de fronteiras que tornou evidente a importância de se vincular àquela a questão ribeirinha. Além disto, os Estados Unidos ganharam lugar definido na política imperial como ameaça expansionista na América do Sul. Esta ameaça perpassa a história do Brasil, mas é na questão da abertura do Amazonas que tomou contornos mais definidos e agudos.

Parademonstrara simultaneidade dos processos, isto é, do estabelecimento de uma doutrina de fronteiras e de como a questão do Amazonas implicou na reformulação desta levando à inclusão da questão ribeirinha, dividimos o texto em duas partes. Na primeira há algumas notas, à guisa de situar a questão da política externa do Brasil e a transformação que se operava nos anos cinquenta do século XIX, quando os estadistas do Império travaram a mais consistente discussão sobre a doutrina ribeirinha e consolidaram um modelo de encaminhamento político das questões das fronteiras. Na segunda parte analisar-se-á a discussão propriamente dita sobre a questão ribeirinha e sobre a abertura do rio Amazonas à navegação internacional<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> O presente texto está vinculado ao Projeto: a inserção brasileira em um sistema internacional em transformação: alcances e possibilidades na segurança internacional e na defesa, financiado pela CAPES. Fazem parte da pesquisa os seguintes programas de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP-UNICAMP-PUC-SP); Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFRGS; Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNB; Programa de Pós-Graduação em Economia da UNICAMP; Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da UFRGS; Programa de Pós-Graduação em História Social da UEL e Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado Maior do Exército.



## A questão das fronteiras e da navegação fluvial até por volta de 1850

No que diz respeito ao Brasil, a política externa portuguesa, até início do século XIX, se preocupou sobretudo com a defesa da costa e com a proteção ao comércio colonial –o que projetou as fronteiras brasileiras, de um lado, até o rio da Prata, e, de outro, até a África, devido à extraterritorialidade do mercado de trabalho– ou, dizendo de outra forma, ao tráfico negreiro (Matos, 1987). Estabeleceu-se assim uma íntima conexão entre a expansão territorial para além do meridiano de Tordesilhas, a defesa do comércio colonial e o domínio do Atlântico, legitimado pela teoria das fronteiras naturais, que encontrava seu princípio político ativo na definição da soberania a partir do conceito de *uti possidetis*, oriundo do direito civil romano (Magnoli, 1997; Moniz Bandeira, 1988).

Esta concepção acerca das fronteiras e da política externa fortaleceu-se com a fuga da família real para o Brasil, ocasião em que a casa reinante portuguesa buscou realizar os antigos planos, acalentados no passado por Antonio Vieira, D. Luís da Cunha, Aranda e Pombal, entre outros, de fundar um poderoso Império aristocrático e escravista nos trópicos (Magnoli, 1997, pp. 81-2).

À chegada da família real seguiu-se a organização da defesa marítima do litoral e o impulso vigoroso à construção e armamento de navios de guerra, bem como a ofensiva militar contra a Guiana Francesa e contra a Banda Oriental, que redundou na incorporação desta última à monarquia portuguesa, e, posteriormente à independência, ao Império do Brasil.

O Império surgiu como resposta à necessidade das elites coloniais de construção de uma unidade territorial, corolário da consolidação da independência, ou seja, da manutenção da estrutura de produção escravista e, ao mesmo tempo, da preservação da liberdade de comércio. Estes interesses, muitas vezes contraditórios, conduziram a um conflito entre o parlamento e o imperador, que se arrastou durante todo o primeiro reinado, e redundou na abdicação em 1831. No mês de novembro de 1823, logo após a capitulação da Cisplatina, a Assembléia Constituinte foi dissolvida em função dos conflitos entre o imperador e os constitucionais acerca da definição das atribuições dos poderes legislativo e executivo –expressão do confronto estrutural entre interesses regionalistas e centralistas no primeiro reinado.

Neste mesmo ano, Brasil e Portugal assinaram, tendo como intermediário a Inglaterra, o reconhecimento da independência, que abriu às portas à configuração de um sistema de tratados (Cervo & Bueno, 1992; Santos, 2002), moldou a política exterior do Brasil nestes anos, e "viabilizou a subordinação nacional no esquema do desenvolvimento capitalista desigual" (Cervo & Bueno, 1992, p. 42), tema que será retomado. Também em 1825 iniciou-se a guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata, que se prolongou até 1828 e resultou na independência do Uruguai. Este resultado, após anos de impasse militar, foi visto da perspectiva imperial como uma derrota do Brasil. Internamente produziu a bancarrota financeira do estado, agravou a instabilidade política do país e acirrou o confronto entre o imperador e o parlamento, novamente convocado a partir de 1826.

Neste contexto, a política externa do Brasil se desdobrou em dois sentidos: no reconhecimento da independência e na tentativa de manutenção da Cisplatina, derivada ainda da política portuguesa, que via no Rio da Prata os limites ou fronteiras naturais do Império português. Assim, se desenhou na região platina um teatro cronicamente conflituoso, ao mesmo tempo em que a monarquia brasileira era vista no restante das Américas como ponta de lança da política restauradora do Congresso de Viena e da Santa Aliança (Santos, 2002, p. 35). A despeito disto, como já observaram alguns estudiosos das relações exteriores, as possibilidades de intervenções europeias restauradoras na América eram muito improváveis, posto que, de fato, as independências latino-americanas eram do interesse tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, que se opunham a estas intervenções inequivocamente (Cervo & Bueno, 1992; Santos, 2002). Por outro lado, o Brasil mantinha relativo isolamento em relação aos países do Pacífico. Como observa Luís Cláudio V. G. Santos:

o pouco interesse que o Império dedicou às repúblicas do Pacífico foi para afastar a hipótese de uma aliança antibrasileira, que, efetivando-se seria um risco à sobrevivência do regime brasileiro. (...) A despeito dessas dificuldades, já nas primeiras décadas da independência brasileira foram estabelecidas relações diplomáticas com as repúblicas. (...) Absorvidos pelos seus graves problemas internos, tanto o Império como as repúblicas tinham pouco o que oferecer, seja em termos políticos ou econômicos, e a política brasileira foi meramente reativa. A exemplo disso, as tentativas

de ajustes de fronteiras seriam recusadas pelo Império que buscava evitar uma discussão para a qual não estava preparado. E não seriam levadas adiante, tampouco, as poucas tratativas em relação ao comércio com essas repúblicas que era na prática quase inexistente (Santos, 2002, p. 42).

Ao lado das tentativas de preservação da Cisplatina, que visava entre outras coisas impedir a unificação dos territórios que compunham o antigo Vice-Reino do Rio da Prata em um único estado, o governo imperial procurou, como já mencionado, o reconhecimento da independência. Este processo consolidou a inserção do Brasil nos quadros do capitalismo internacional na posição de país dependente.

A perspectiva portuguesa de construção de um poderoso Império nos trópicos implicava diretamente na desvinculação de Portugal e de suas colônias da influência inglesa, estabelecida desde o início do século XVIII, porém amenizada pelos efeitos da política pombalina. À chegada da família real sucedeu-se o fim do pacto colonial com a abertura dos portos às nações amigas e com decretos que estimulavam e protegiam o desenvolvimento industrial e a navegação. Esta abertura atraiu imediato interesse das colônias espanholas e os Estados Unidos ao mercado brasileiro. A Inglaterra, contrariada em seus interesses, exerceu fortes pressões para garantir privilégios comerciais e políticos e a abolição do tráfico negreiro. Em 1810 foram firmados três tratados que garantiram os privilégios ingleses, extinguíram a nascente indústria brasileira e inseriram o Brasil no “sistema internacional de supremacia inglesa” (Cervo & Bueno, 1992; Manchester, 1973). No momento da ruptura do Brasil com Portugal esta posição privilegiada inglesa ficou em suspenso.

No quadro de fracasso de uma aliança continental no momento da ruptura –devido à fragmentação das repúblicas hispânicas, à neutralidade dos Estados Unidos<sup>7</sup> e à forma monárquica do regime brasileiro que tanta desconfiança provocava–, o Brasil voltou-se para a Europa em busca do reconhecimento da sua independência. Foi neste contexto que, através da mediação inglesa,

---

<sup>7</sup> Pela doutrina de Monroe, enunciada em 1823, os Estados Unidos adotam os princípios de não intervenção na Europa ou em suas colônias na América; reconhecem os governos *de fato* como legítimos, e consideram como inamistosa em relação a eles qualquer tentativa de intervenção nas regiões que se tornaram e se mantêm independentes. Doutrina de Monroe (Syrett, 1995, pp. 141-142).

Portugal assinou o tratado de 1825 através do qual D. João VI recebeu o título de imperador, outorgou a independência ao Brasil, garantiu a não união brasileira às colônias africanas, e recebeu a indenização de dois milhões de esterlinos (Cervo & Bueno, 1992, p. 30).

Por estes chamados “serviços” a Inglaterra recebeu tratamento preferencial no Brasil, garantindo a prorrogação dos tratados de 1810 até a conclusão do Tratado de Amizade, Navegação e Comércio assinado em 1827, que renovava por quinze anos os privilégios concedidos naqueles acordos. Além disto, o tratado ainda estabelecia que nenhuma nação pagaria taxas menores que os ingleses exceto Portugal. Em 1826 foi assinada a convenção sobre o tráfico negreiro –revalidando os tratados de 1815 e 1817 feitos com Portugal–, que estabelecia a extinção do “infame comércio”, como se dizia à época. Seguiram-se a estes uma avalanche de outros, com países que buscaram também garantir, pelo reconhecimento da independência, tarifas preferenciais no comércio internacional: em 1827 com a Áustria, a Prússia as Cidades Hanseáticas, em 1828 com a Dinamarca, os Estados Unidos e os Países Baixos.

Estes acordos realizados sem a participação do parlamento não apenas agravaram a relação deste com o imperador, ensejaram também atozes críticas à política externa baseada neste sistema de tratados. Em 1828 o parlamento:

estabeleceu a igualização dos direitos de todos os produtos importados, independente da procedência. Teve por intuito essa medida, eliminar o monopólio, estabelecer a concorrência externa, destruir o privilégio comercial e reparar a injustiça contra as nações americanas excluídas do mercado brasileiro, à exceção dos Estados Unidos. Era a universalização do sistema, abrindo-se o Brasil à concorrência do capitalismo industrial, de forma completa e perfeita, com o sacrifício dos instrumentos internos de defesa (Cervo & Bueno, 1992, p. 30).

No período regencial esta situação foi questionada e lentamente se iniciou um processo de elaboração de uma doutrina brasileira para as relações internacionais. Foi, contudo, no segundo reinado, que se consolidou uma forma brasileira para as relações exteriores, mantendo a subordinação ao capitalismo internacional e, ao mesmo tempo, garantindo ao país, não sem muitos conflitos, um papel hegemônico na América do Sul.

A longa crise do período regencial e do início do segundo reinado, ao lado da instabilidade dos países hispânicos, não propiciou um ambiente favorável a qualquer política exterior consistente. Três elementos são discerníveis no período.

Durante a regência, no plano interno, o país enfrentou várias revoltas: a guerra dos Cabanos (1832-1835), a Cabanagem (1835-1840), a Sabinada (1837-1838), a Balaiada (1838-1840). De todas as revoltas do período regencial, a Revolução Farroupilha foi a mais longa e implicou em uma prolongada ação militar. Pode-se afirmar que em determinados momentos os conflitos assumiram a proporção de uma guerra entre estados. Primeiramente a província do Rio Grande e depois as repúblicas de Piratini e Juliana possuíram uma marinha de guerra e arsenais próprios, além de autorizar a guerra de corso contra o Império. Iniciada em 1836, a guerra terminou somente em 1845, isto é já no segundo reinado. Em 1842 ocorreram revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais e em 1848 iniciou-se a Praieira, derrotada em 1850.

Os ingleses não conseguiram em 1844 renovar os tratados de 1825 e 1826, o que agravou as já conflituosas relações com a Inglaterra. Desde 1830, quando segundo o tratado de 1826 deveria cessar o tráfico, a Inglaterra passou a solicitar a assinatura de artigos adicionais que permitiriam a apreensão de navios que, mesmo sem a presença de africanos a bordo, exibissem indícios de tê-los transportados. No período regencial, o executivo, que não podia assinar tratados sem a aprovação prévia da Assembléia Geral, enfrentou a oposição dos comerciantes escravistas e proprietários. Em seguida houve a promulgação da lei de 7 de novembro de 1831, que proibia o tráfico e declarava livres todos os africanos desembarcados no Brasil após aquela data. Esta lei, no entanto, permaneceu letra morta e a pressão inglesa recrudescceu ao longo do período. No ano de 1842 os portugueses haviam assinado tratado com a Inglaterra reconhecendo o tráfico negreiro como pirataria. Ainda em 1842, também expirava o tratado que concedia tarifas preferenciais às manufaturas inglesas e o Império não concordou em renová-lo. Ao contrário, em 1844 a tarifa Alves Branco dobrou os direitos alfandegários de 15 para 30 e até 60 % (Pantaleão, 1995; Manchester, 1973; Moniz Bandeira, 1998). Em 1845 findavam também os efeitos da Convenção de 1817, pela qual o governo português autorizara a Grã-Bretanha a reprimir o tráfico negreiro no Reino Unido. Como o governo brasileiro recusouse a revalidá-lo, o parlamento inglês aprovou o *Brazilian Act*, mais conhecido como *Bill Aberdeen*, que decretou o tráfico como pirataria.

Houve, declaradamente, uma ameaça de intervenção inglesa em 1850. Mediante o aprisionamento dos vapores Santa Cruz e São Sebastião, entre o Rio de Janeiro e Santos, Joaquim Tomás do Amaral (Visconde de Cabo Frio), encarregado de negócios em Londres, enviou à Palmerston nota de protesto contra as violências cometidas a navios brasileiros que não eram negreiros. Como resposta, Amaral ouviu do plenipotenciário inglês, que não apenas aprovava o proceder dos comandantes, como reforçaria os cruzeiros com a esquadilha inglesa estacionada no Rio da Prata. Amaral informou ao governo que Palmerston afirmara:

O Brasil tem dado à Inglaterra direito de guerra que o governo inglês, não desejando fazer mal aos brasileiros, se abstém de usar desse direito e de ocupar alguma parte do nosso território, mas está resolvido a continuar a política que adotou (Souza, 1979, p. 12).

Em setembro do mesmo ano, o parlamento brasileiro aprovava a lei Eusébio de Queiroz, considerando o tráfico como pirataria.

No que tange às relações com as repúblicas americanas, a situação não era menos instável. Na questão platina, os conflitos entre o Brasil e a Confederação Argentina tornaram-se agudos. Na perspectiva do Império era importante manter a fragmentação política na bacia do rio da Prata para promover uma abertura da navegação daquele rio e seus afluentes e ter acesso às províncias interiores, em especial o Mato Grosso, bem como a independência do Uruguai, profundamente vinculado à indústria saladeiril do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a ascensão de Rosas promoveu certa harmonia dos interesses de Buenos Aires com os interesses das províncias da Confederação quanto à manutenção do monopólio portuário sobre o comércio do Rio da Prata. A eficácia desta medida dependia, como demonstrou Moniz Bandeira, do controle do porto de Montevidéu e “a integração do Uruguai e do Paraguai na Confederação Argentina, nacionalizando virtualmente o Prata e seus tributários, em quase toda a extensão, o que permitiria considerá-los como rios interiores” (Moniz Bandeira, 1998, pp. 58-9). O Uruguai, premido entre estes interesses opostos, era dilacerado pela guerra civil que se instaurara no país, decorrente dos conflitos entre Oribe e Rivera. Em 1838, derrotado, Oribe se refugiou na Argentina buscando o apoio de Rosas, que entreviu nisto a possibilidade

de intervir no Uruguai. Em 1842 iniciouse a guerra entre a Argentina e o Uruguai. Neste contexto, como bem observou J. A. Soares de Souza:

O Brasil (...) era arrastado para o torvelinho do rio da Prata, sem querer nem poder envolver-se naquelas lutas, pois, retalhado como se achava pelas revoluções, enfraquecido pela insubordinação geral e crise financeira, se tornara incapaz de defender seus interesses continentais (Souza, 1987, p.17).

Em 1844 o Brasil teria solicitado então uma intervenção anglo-francesa na região para conter o avanço argentino, que se efetivou em 1845 e durou até 1848. As interpretações sobre esta questão são muito diversas. Moniz Bandeira (1998) sugere que a intervenção já estava decidida por aqueles países, devido aos interesses comerciais que possuíam na região. Por outro lado, autores, como Demétrio Magnoli (1997), por exemplo, sugerem que a intervenção foi articulada pela missão do visconde de Abrantes, e que o acordo firmado previa que o Império mantivesse total discricção, deixando as ações militares a cargo daqueles países. Uma consulta aos papéis da Seção dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Estado (Brasil, 1978b) sugere, no entanto, uma interpretação diversa. A intervenção aparece como um desar ao Império, que teria somente solicitado uma mediação no conflito e foi dispensado das negociações pela diplomacia inglesa em virtude dos conflitos em relação à renovação do acordo de 1829, da tarifa Alves Branco e da repressão ao tráfico negreiro. De qualquer modo, a divulgação da missão Abrantes pela Inglaterra e pela França em 1845 contribuiu para a deterioração das relações com Buenos Aires. A partir daí a diplomacia imperial constituiu uma rede de alianças que se iniciou com o reconhecimento da independência do Paraguai, com os vultuosos empréstimos concedidos por Mauá à praça de Montevideú, com os acordos com Urquiza, governador de Entre-Rios, e culminou na aliança de 1850 contra Rosas. Em 1851, Rosas declarou guerra à aliança e foi derrotado em Tonelero e Monte Caseros em 1852. Em relação às repúblicas do Pacífico, a situação não era menos complexa. Isto por que também elas passavam por um processo de “instabilidade política ainda maior que a vivida pelo Império” (Santos, 2002, p. 46).

Como se viu, uma das reações do parlamento brasileiro ao sistema de tratados foi estender às repúblicas hispânicas os privilégios concedidos aos

países europeus. Mas naquele período: “Não poderiam as jovens repúblicas americanas, nem mesmo os Estados Unidos (...) abastecer o Brasil das manufaturas que importava, nem tampouco podiam substituir o mercado europeu” (Santos, 2002, p. 48). Apesar disto o Brasil insistiu na necessidade de buscar mercados alternativos e procurou estabelecer tratados de comércio e navegação com o Peru, a Bolívia e o Chile. No ano de 1836 o governo regencial enviou Manuel Cerqueira Lima e Duarte da Ponte Ribeiro ao Chile e ao Peru, respectivamente. Os dois diplomatas encontraram-se, contudo, em meio a um conflito entre o Chile e a federação Peru-Bolívia motivado por um tratado de amizade e navegação. A guerra foi deflagrada neste mesmo ano e terminou em 1839 com a derrota da federação Peru-Bolívia, não antes de esta ter derrotado a Confederação Argentina, que procurava, através da guerra, resolver questões de fronteira com a Bolívia. Em 1838, contudo, após a vitória da federação sobre a Argentina, o Brasil procurou aproximar-se da Bolívia. Às negociações sobre comércio agregaram-se as discussões sobre as fronteiras e:

foi então que se declarou pela primeira vez, em discussão com um representante das repúblicas de origem espanhola, o *uti possidetis* por base para fixação dos limites do Império com aquelas repúblicas, em contraposição ao tratado de 1º de outubro de 1777, que lhes herdaram Portugal e Espanha, já inteiramente caduco (Santos, 2002, p. 53).

Outro aspecto a se destacar é que, com o final da guerra desfez-se a federação e o novo governo peruano interessou-se em negociar um tratado de navegação fluvial. Ponte Ribeiro propôs então a negociação dos acordos de comércio e navegação conjuntamente e, em 1841, os representantes do Brasil e do Peru assinaram dois tratados, um de comércio e navegação e outro de limites e extradição sob o princípio do *uti possidetis*. O tratado de navegação garantia aos peruanos chegarem ao Atlântico através da travessia do rio Amazonas. E como quem antecipava a questão mais espinhosa que o Brasil iria enfrentar no decênio seguinte, Ponte Ribeiro argumentava: “Se este direito se lhe nega [ao Peru], mal poderá o Brasil exigir de Buenos Aires quando chegar a desejada época de navegarmos o Paraguai até o Jaurú” (Santos, 2002, p. 55). Assim, Ponte Ribeiro terminou por formular uma política que reuniu na mesma negociação a discussão das fronteiras e da navegação fluvial.



Por outro lado, no Chile as negociações dos tratados comerciais transcorreram mais facilmente pois não sendo aquele país fronteiro com o Brasil, as questões pendentes com o Peru e a Bolívia estavam excluídas da pauta. Assim, no mesmo ano, Cerqueira Lima assinou tratados de amizade, comércio e navegação com o Chile. Estes, contudo, dada a aversão do parlamento brasileiro ao sistema de tratados, não foram ratificados pelo Brasil, mas também não o foram pelo Chile e pelo Peru. Os três países, no entanto, passaram, a partir de 1841, a reger suas relações comerciais pela cláusula da nação mais favorecida, o que, em outras palavras, permitia a entrada de produtos brasileiros nos dois mercados com as menores tarifas concedidas a outras nações. Como observou Soares de Souza (1987), dos conflitos internacionais nos quais o Brasil estava envolvido e da instabilidade interna do país ressumbrava a fraqueza na ação governamental, que “repercutia poderosamente na política externa, dificultando os passos da diplomacia, já pela falta de estabilidade dos dirigentes, já por não se dispor dos meios necessários à implantação de uma política externa” (Souza, 1987, p. 115).

A partir de 1850, a abolição do tráfico negreiro, que provocou um desvio de capital para as atividades econômicas internas, a consolidação do café como o principal produto de exportação, a resolução das questões da propriedade com a edição da lei de terras, e o estabelecimento do domínio do Partido Conservador representaram um momento específico de redefinição da inserção do Brasil na dinâmica do capitalismo internacional, o que permitiu também redimensionar a política externa do país.

Na política interna, estabeleceu-se a partir de 1848 o domínio conservador, o reordenamento político-administrativo, a promoção da reforma do estado e a consolidação de um sistema agroexportador de base escravista. No plano externo, a defesa do *laissez faire*, advogando a favor do livre comércio e da escravidão as peculiaridades da formação social brasileira, posição que não destoava dos plantadores de algodão do sul dos Estados Unidos e da oligarquia açucareira cubana (Marquese, 2004). Nas relações com as repúblicas latino-americanas firmou-se o princípio do *uti possidetis* como doutrina para a resolução de fronteiras e na navegação fluvial os acordos bilaterais entre os estados ribeirinhos. Foi o início da construção da hegemonia brasileira na bacia do rio da Prata, que conduziu

à guerra com o Paraguai e às tentativas de definição de fronteiras e de um melhor relacionamento com as repúblicas do Pacífico.

## A questão da abertura do rio Amazonas à navegação internacional

Um dos mais importantes fatores que se destaca neste período é a longa continuidade do predomínio do partido conservador. Em uma visão mais ampliada podese afirmar que no período de 1848 a 1862 o governo foi exercido pelo partido, incluindo-se aí os dois gabinetes da conciliação, o primeiro (1853) presidido por Honório Hermeto Carneiro Leão (logo depois conde e marquês de Paraná) e o segundo (1857) por Pedro de Araújo Lima (marquês de Olinda) (Holanda, 1985).

Para se ter ideia desta estabilidade, basta uma comparação em relação ao período anterior. No espaço de dezoito anos que vai de 1831 a 1849, os titulares da Repartição dos Negócios Estrangeiros foram substituídos vinte e sete vezes, já no período de 1848 a 1862, catorze anos, portanto, a mesma repartição teve nove titulares. Ainda assim é necessário ponderar que em nove anos, o ministério foi ocupado por três titulares: Paulino Soares de Souza (1848-1852), Antonio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, (1853-1855), e José Maria da Silva Paranhos (1855-1857; 1858-1859).

Foi, segundo Luiz Cláudio V. G. Santos (2002), durante a gestão de Paulino Soares de Souza que o principio do *uti possidetis* tornou-se doutrina sustentada pelo Brasil para resolver as questões de pendências fronteiriças. Tratava-se, na visão do autor, de uma doutrina eminentemente defensiva que visava, antes de tudo, garantir uma fronteira que se afigurava máxima em virtude da percepção de que a população brasileira refluía ao litoral, e expressava o temor de que a população dos países vizinhos penetrasse nas longínquas fronteiras do país.

Mas foi a partir do confronto com os Estados Unidos que a política externa para a resolução de limites ganhou seu acabamento mais completo. Foi neste processo que se definiu que as questões fronteiriças seriam resolvidas em conjunto com a navegação fluvial através de acordos bilaterais entre os estados ribeirinhos. Esta definição dependeu fundamentalmente da representação que os estadistas do Império tinham, em contraposição às imagens divulgadas nos Estados Unidos sobre a região amazônica e do rio Amazonas.

O governo imperial despachou em 1851 Duarte da Ponte Ribeiro em uma missão especial às repúblicas do Pacífico e à Venezuela “concebida inicialmente como um elemento da estratégia contra Rosas, destinada a afastar possíveis apoios destas repúblicas ao caudilho argentino na guerra, que já era dada como certa” (Santos, 2002, p. 75). As instruções de Paulino Soares de Souza permitiam que fossem feitas concessões à navegação do rio Amazonas aos estados ribeirinhos superiores por meio de tratados: “a abertura da navegação fluvial devia ser utilizada como elemento de barganha caso fosse aceito o princípio do *uti possidetis* na determinação das fronteiras” (Santos, 2002, p. 76). Para os fins deste texto interessa registrar que no mesmo ano Brasil e Peru firmaram um tratado de limites, extradição e navegação do Amazonas. O tratado foi ratificado pelo congresso peruano e pelo governo imperial no ano de 1852.

Neste mesmo ano foi criada a Companhia de Navegação do Amazonas, subsidiada pelos dois governos, com a concessão exclusiva de exploração da navegação naquele rio durante trinta anos e com a obrigação de promover a colonização daquele território. Em abril de 1853, o governo peruano editou decreto ampliando a navegação do Amazonas em seu território, do qual é pertinente destacar os dois primeiros artigos:

Art. 1º - De conformidade com o tratado concluído com o Império do Brasil em 23 de outubro de 1851 e durante o tempo de sua duração declarase livre a navegação, o comércio e o tráfico aos navios e súditos brasileiros pelas águas do Amazonas, na parte do litoral pertencente ao Peru até Nauta na boca do Ucayali.

Art. 2º - Os súditos e cidadãos de outras nações que tem também tratados com o Peru, pelos quais gozem dos direitos de nação mais favorecida, ou a quem se deverão conceder os mesmos direitos pelo que diz respeito a comércio e navegação de acordo com os ditos tratados, poderão no caso de obter a entrada nas águas do Amazonas, gozar no litoral do Peru dos mesmos direitos concedidos aos navios e súditos brasileiros pelo artigo anterior (Brasil, 1978b, p. xv).

Este decreto foi questionado pela legação imperial em Lima, como contrária ao espírito do tratado de 1851, a que o governo peruano respondeu afirmando:

que com a condição expressada no artigo 2º do decreto de 15 de abril de ser necessária a obter a entrada nas águas do Amazonas para gozar da concessão feita aos súditos das potencias com quem o Peru tem tratados, tinha-se tido especialmente em consideração os direitos do Brasil, e que se o dito decreto tinha feito aparecer pretensões em oposição aos interesses do Brasil ou aos seus direitos, não podia o governo do Peru responder por esse resultado (Brasil, 1978b, p. xv).

De fato, a questão das pretensões a que se refere a nota peruana havia tomado uma enorme proporção. A publicação da obra de Maury –bem como de várias matérias jornalísticas nos Estados Unidos noticiando a formação naquele país de várias de navegação com o fito de empreender a navegação do rio Amazonas sem autorização do governo brasileiro– chamou a atenção da legação imperial em Washington que, como visto, notificou a Repartição dos Negócios Estrangeiros no Rio de Janeiro, que por sua vez informou ao parlamento no já mencionado relatório de Abaeté do ano de 1853.

Além disto, os governos da Inglaterra e dos Estados Unidos passaram a exercer pressões diplomáticas sobre o Brasil com o intuito de obter a abertura não apenas da navegação do rio Amazonas, mas também do alto Paraguai para além do porto de Albuquerque, invocando para isto os tratados já firmados com o Uruguai, a Confederação Argentina e o Paraguai que lhes haviam propiciado a navegação da bacia platina<sup>8</sup>.

O governo peruano, procurando diluir as pressões brasileiras, convidou, em julho de 1853, o governo imperial para conferência diplomática a ser realizada pelos estados ribeirinhos para tratar da abertura da navegação do rio Amazonas. Diante da gravidade da crise que se anunciava, o caso foi remetido para o Conselho de Estado tendo sido analisado pela Seção de Negócios Estrangeiros em 17 de janeiro de 1854 e apreciado em sessão plena do Conselho a primeiro de abril do mesmo ano. Cumpre notar que a ata

---

<sup>8</sup> Nos relatórios da Repartição dos Negócios Estrangeiros de 1853 e 1854 vem apensada copiosa correspondência diplomática referente a estes eventos. Além disto, o caso todo é narrado com uma vivacidade e uma riqueza de detalhes incomuns frente até mesmo à costumeira densidade dos relatórios ministeriais do Império.

da sessão plena do Conselho reproduz os termos elaborados pela Seção de Negócios Estrangeiros<sup>9</sup>.

O imperador, através de ofício reservado, apresentou seis quesitos que a seção transformou nas seguintes questões: a) quais são os princípios de direito que regem a matéria? b) qual nossa posição nesta questão? Quais são os seus perigos e inconvenientes? c) qual a política que nos convém seguir? (Brasil, 1853, p. 19) O relator do parecer foi Paulino José Soares de Souza, que, certamente, redigiu um dos mais longos pareceres da seção. Para responder a estes quesitos realizou extenso levantamento das doutrinas jurídicas acerca da navegação fluvial e as contrapôs às práticas em vigor na Europa e na América. Tratava-se de estabelecer a questão da propriedade do estado sobre os rios e, portanto, sobre o direito da navegação fluvial.

Apoiando-se na doutrina dos tratadistas do direito das gentes, como Klüber, Martens e Vattel, Paulino sustentava que:

1º - Que as nascentes dos rios não determinam a sua propriedade, a qual é determinada pelo seu curso.

2º - Que as nações têm propriedade na extensão dos rios, que correm por seus respectivos territórios.

3º - Que a propriedade não está sujeita como a particular, pelo direito civil, a servidão alguma, e que a nação possuidora do rio pode negar passagem e trânsito às que ficam superiores.

4º - Que essa servidão somente pode ser estabelecida por direito convencional, nos termos e com as condições por ele declaradas (Brasil, 1978a, p. 20).

---

<sup>9</sup> É fundamental destacar a natureza secreta desta documentação no momento de sua produção o que constitui um rico acervo para o historiador na medida em que, tratando-se do conselho privativo da coroa, os conselheiros de estado falavam livre e francamente. Na ocasião a seção era composta pelos conselheiros José Joaquim de Lima e Silva, Caetano Maria Lopes Gama, Visconde de Olinda, Visconde de Abrantes, Francisco Ge Acaiaba de Montezuma, Paulino José Soares de Souza e Candido José de Araújo Viana. Para efeitos deste texto utilizar-se-á a edição da Consulta da Seção de Negócios Estrangeiros e da Ata do Conselho Pleno.

Seriam estas as doutrinas que prevaleciam nas relações internacionais, não se distinguindo os estados ribeirinhos dos não ribeirinhos. Paulino relacionou algumas situações concretas para fortalecer o argumento, como a recusa do governo de Rosas em abrir a navegação aos navios de bandeira inglesa, do rio Uruguai em 1841 e do rio da Prata em 1845. Também relacionou uma declaração do governo dos Estados Unidos de 1823, segundo a qual em virtude da independência americana cessavam os direitos da Espanha à navegação dos rios interiores nos territórios da União, e acrescentou, já apontando qual a questão fundamental em discussão naquele momento:

É verdade que o alvo ao qual pretendia atirar o Governo dos Estados Unidos era a Europa, e especialmente a Espanha, mas o Brasil tem muito mais a temer da ambiciosa, insaciável e inquieta atividade dos americanos, que pautam somente pelo seu interesse, as noções de direito, do que das nações da Europa (Brasil, 1978a, p. 22).

Paulino assim aparentemente instaurou uma primeira clivagem entre a “velha civilização européia” e os Estados Unidos, cuja atividade é ambiciosa e insaciável. Para comprovar esta diferença fez notar que no tratado celebrado entre a Confederação Argentina e a Inglaterra para por termo ao bloqueio inglês no Rio da Prata em 1849, a potência européia reconhecia que a navegação do rio Paraná “to be an inland navigation of the Argentine Confederation, subject solely to its laws and regulations” e, do mesmo modo “as that of the river Uruguai in common with the Oriental State” (Brasil, 1853-1854-1855, p. 23).

Deste reconhecimento deduz que a Inglaterra e a França não teriam direito de exigir a abertura do Amazonas, rio que é muito mais interior que o Uruguai e o Paraná, cuja extensão pelo território brasileiro é extraordinariamente maior que aqueles. Remontou ainda aos tratados de Madri, de 1750, e de Santo Idelfonso, de 1777, celebrados entre Portugal e Espanha, nos quais se reconhecia o direito exclusivo que tinham estes países na navegação dos rios fronteiriços. E indicando a transformação que se processava na diplomacia imperial, vinculava a discussão da definição das fronteiras e da navegação fluvial a um único critério.

Se o direito das gentes vinha servindo de princípio à regulação de fronteiras e navegação, notava Paulino que o desenvolvimento do capitalismo estava provocando uma mutação nas noções de direito e nos princípios jurídicos no tratamento destas questões. A expansão econômica, mais especificamente a dos Estados Unidos assombrava e atemorizava o espírito do estadista do Império, que estabelecia com o tenente Maury um tenso diálogo ao repetir as críticas dos publicistas brasileiros:

A extensão e progresso da navegação por vapor, as estradas de ferro, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das máquinas e todos os meios de produção, o conseqüente aumento dos interesses e relações comerciais; a necessidade de novos mercados, o furor das especulações e empresas; o espírito movediço, inquieto e aventureiro, dos que procuram enriquecer muito depressa, excitados por uma imoderada ambição de habilitarem-se para gozarem quanto antes de todos os cômodos, vantagens e regalos e consideração que rodeiam a riqueza no estado social moderno, têm sobretudo nestes últimos tempos, mudado a face de certas sociedades, e modificado até as noções de direito. Não é, portanto, de admirar que escritores dos Estados Unidos da América do Norte, tenham sido os primeiros a modificar aqueles princípios (...) dos direitos das gentes de um modo mais conforme ao seu espírito ambicioso e invasor. (...) A posição dos americanos os levou desde o princípio a estabelecer e sustentar doutrinas que favorecessem as pretensões de romper para o mar pelo Mississipi, e pelo São Lourenço. Hoje tendem a alargar mais essas doutrinas para estender o seu comercio e levar a sua dominação até onde for possível chegar. Não há nada mais temível do que as democracias fortes e ávidas! (Brasil, 1978a, pp. 26-27.)

Paulino realiza aqui uma nova clivagem, não mais entre os Estados Unidos e a Europa, mas acrescenta àquela distinção anterior esta outra, entre as repúblicas, identificadas à democracia e as monarquias. Esta distinção constituiu um aspecto fundamental no pensamento do estadista e na política externa brasileira, uma vez que durante todo o século XIX a diplomacia imperial teve que enfrentar o clima de desconfiança entre o Brasil, a única monarquia no continente, e as repúblicas americanas. Assim, não perdeu ele a oportunidade para contrapor imagens: do Império pacifista à república

americana ávida, interesseira, ambiciosa, modificando o direito em favor de seus interesses, que, em última instância, os fazia valer através da força. Este temor não era destituído de fundamentos.

No período de 1800 a 1850 a população dos Estados Unidos aumentara de 5,3 para 23,1 milhões de habitantes, enquanto que a do Brasil passara de 3,8 para 7,5 milhões (Eisemberg, 1982, p. 18). No mesmo período a fronteira americana havia se expandido do rio Mississipi ao Pacífico. O Texas, pertencente ao México, havia sido colonizado por americanos e em 1835 estabeleceu-se como república independente tendo sido incorporado à União em 1845. A região do Oregon no extremo noroeste (área composta hoje pelos estados de Oregon, Washington, Idaho, partes de Montana e Wyoming) fora anexada como território em 1846. Neste mesmo ano a União moveu uma guerra de conquista contra o México por que este país se recusara a vender os territórios a oeste do Texas. Após dois anos de guerra, que resultaram inclusive na captura da Cidade do México, os EUA compraram “quase metade do território nacional mexicano, uma área hoje em dia compreendendo os estados da Califórnia, Nevada, Utah e partes do Arizona, Novo México, Colorado e Wyoming” (Eisemberg, 1982, pp. 32-3). No total, com a anexação do Texas, os EUA ampliaram o território em cerca de 2,4 milhões de quilômetros quadrados (Nevins, 1986, p. 222). No ano de 1853, quando se iniciou o confronto pela abertura do rio Amazonas, os EUA compraram mais uma faixa do território mexicano ao sul do Arizona e do Novo México, região na qual pretendiam construir uma estrada de ferro até a Califórnia, e onde logo em seguida foram descobertas minas de ouro. É pertinente destacar ainda que no espaço de dez anos, entre 1840 e 1850, a malha ferroviária americana havia aumentado de aproximadamente 4.400 para 15.400 km (Hobsbawm, 1979, p. 73). Já no Brasil, enquanto Paulino apresentava seu parecer à Seção de Negócios Estrangeiros, estava em construção o primeiro trecho da Estrada de Ferro Mauá, a primeira do país com 14,5 km de extensão, inaugurado naquele ano de 1854 (Pinto, 1978; Leonardi & Hardmann, 1982). A mutação do direito que notava Paulino, assim como o temor expressado, tinha como fundamento não apenas um processo de expansão até então sem precedentes na história, como também, uma ideologia –a do destino manifesto– que a justificava.

Paulino ainda demonstrava que os tratadistas norte-americanos, como Weaton e Kent, passaram a defender que as nações ribeirinhas superiores



tinham o direito de trânsito até o mar; este direito não podia ser tolhido sem boas razões; esta navegação devia ter um fim inocente, o comércio. Por razões de segurança estes direitos podiam ser modificados, e, finalmente, como este direito era imperfeito devia ser regulado através de convenções. Ressaltava, contudo, que o governo dos Estados Unidos quer na discussão da navegação do Mississipi, quer na discussão da navegação do São Lourenço, defendera a ideia de que o livre trânsito para o mar era um direito natural dos estados ribeirinhos. Esta “contradição”, no entender de Paulino, decorria do desenvolvimento da ambição americana que:

Vai lançando suas vistas para o exterior, [e] o governo dos Estados Unidos procurou modificar, e esticar, no sentido que lhes convém, os princípios do direito das gentes, que tem afinidade com suas pretensões. (...) recorre este governo, com a maior semcerimônia, a argumentos de conveniência própria sem se importar com a alheia, e não demos os de direito, limitando-se a afirmá-los (Brasil, 1978a, p. 43).

Esta nova interpretação dos tratadistas norte-americanos conduziu Paulino à seguinte indagação: se o direito de navegação dos estados ribeirinhos é imperfeito e deve ser regulado por convenções, qual será o direito dos estados não ribeirinhos? Esta questão é fundamental, pois permitiu ao estadista estabelecer a fronteira entre o direito e a força: “A seção não conhece precedente algum, discussão alguma pela qual uma nação não ribeirinha, e sem direito convencional pretendesse ter o de navegar rios do domínio de outra” (Brasil, 1855, p. 43). Frente às riquezas imaginadas do Amazonas, representando como um Eldorado nas campanhas americanas mencionadas pelo visconde de Abaeté no relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros de 1853, o direito seria uma frágil barreira para a fúria expansionista da potência do norte, e, mais do que isto, mesmo para as velhas nações européias, como:

A Inglaterra e a França hão de acompanhá-los em certa distância para participarem do imaginado grande banquete comercial que há de trazer a abertura do deserto Amazonas. Não podendo, ou não se atrevendo a contrastar a marcha rapidamente invasora dos Estados Unidos, acompanham-nos para tirar algum partido ainda que pequeno, e para que

não gozem sós. Os Estados Unidos aceitam e estimam a cooperação para disfarçar a sua ambição e facilitar a empresa, certos como estão de que será seu o quinhão principal (Brasil, 1978a, p.44).

É fundamental destacar as representações do vale do rio Amazonas, que poderia oferecer então, dado às suas riquezas, farto banquete comercial àqueles que o explorassem. Estas representações são minimizadas pelo visconde de Abaeté, quando qualifica, no mencionado relatório, as notícias sobre estas riquezas como exageradas, e Paulino afirmou, no parecer da seção, que em face destes exageros o banquete comercial era apenas imaginado e invocava para comprovar sua posição o relatório do presidente da província do Pará:

tudo o que se pode dizer do vale do Amazonas é que ele é vasto, cortado de canais naturais, e fértil; ,mas esta imensa vastidão deserta já é uma dificuldade, outra é as sezões que nela dominam principalmente em quase toda a zona de algumas léguas de largura, que acompanha o equador principiando em Macapá; longas estradas seriam dificultosíssimas e a sua conservação quase impraticável pela vegetação incessante que dela se apossaria; muitos desses preconizados canais naturais precisariam de trabalhos dispendiosíssimos para se tornarem navegáveis; quanto à fertilidade do solo, ela é inútil sem a agricultura, e sem os braços necessários para o seu desenvolvimento; pouco se pode esperar do constrangido africano, e menos ainda do indolente indígena; resta apelar para o braço do colono europeu, que facilmente se aclimata debaixo do equinocial; mas não está provado de que ele possa como agricultor conservar a saúde e a robustez, que tinha em seu país natal, devendo notar-se que os gêneros de maior valor, que daqui se exportam, gomaelástica, cacau, salsa, óleo e outros produtos vegetais são colhidos em terrenos alagados ou úmidos, e por consequência, insalubres (Brasil,1978a, pp. 64-5).

Havia, portanto, quase que um consenso, uma unidade de visão dos estadistas do Império, acerca, não apenas do exagero das notícias sobre a riqueza do Amazonas como também acerca das enormes dificuldades –sempre superlativas (estradas dificultosíssimas; trabalhos dispendiosíssimos)– de ocupação e colonização da região, tida como deserta. Isto porque o índio

(indolente) e o escravo africano não ofereciam os braços necessários à colonização capitalista. De fato, a riqueza do Eldorado aparece como potência que somente se realiza pela ação civilizatória. Os estadistas do Império não acreditavam na força das imagens das dificuldades que a natureza interpõe à ocupação humana para desanimar os interesses americanos no Brasil. Comentando o relatório do presidente do Pará, Paulino observava objetivamente:

Tudo isto é verdade, posto que haja também nas margens do Amazonas grande quantidade de terrenos elevados, férteis e salubres. Mas por mais que aquelas considerações sejam repetidas, e comentadas, elas não podem hoje mudar os ânimos e desviar o perigo que nos ameaça (Brasil, 1978a, p. 65).

Se Paulino não discorda efetivamente do presidente do Pará, ele dá a devida perspectiva para a questão: as dificuldades são superlativas para o governo imperial e para a sociedade brasileira carente de capitais e de iniciativas. Mas estas mesmas representações, estas dificuldades eram pouco eficientes para afastar o avassalador expansionismo americano. Na apreciação do segundo quesito elaborado pela seção ele dedica um parágrafo inteiro à discussão dos perigos e inconvenientes da abertura do Amazonas, no qual traçou um minucioso quadro da expansão recente dos Estados Unidos –a anexação do Texas, a guerra com o México– e entrevista naquele momento, não apenas a possibilidade da anexação total daquele país como uma provável expansão sobre a América Central que faria com que ficassem “vizinho e fronteiro ao Amazonas que reputa um novo Eldorado” (Brasil, 1978a, p.72). Explicava ainda o método de expansão dos Estados Unidos:

um meio de ocupação e anexação irresistível. Faz-se por meio da imigração dos aventureiros que a União encerra, e que já não encontram nela alimento para sua avidez, e desordenada atividade (...) Companhias americanas têm aberto caminhos de ferro o território das repúblicas vizinhas, e essas empresas são um poderoso meio de influência (...) O anglo-americano (...) está intimamente convencido de que ele tem de regenerar o mundo todo, e dar nova forma de governo, a toda a sociedade humana, da qual ocupa hoje o centro, em razão de sua posição que domina

os dois grandes oceanos, o Golfo do México e o Mar das Antilhas. Identifica, absorve, e assemelha a si todas as raças caucasianas que em porções imensas emigram todos os anos para o seu território. Não admite mistura da sua raça com o índio, ou com o homem de cor. A emigração americana para o Amazonas seria um imenso perigo. Diante dela desapareceriam a nossa raça, a nossa religião, as nossas leis (Brasil, 1978a, p. 73).

Tratava-se, portanto, do desaparecimento da civilização que o Império do Brasil começava a edificar na América. E ao exemplo do México, acrescentava observações acerca da expansão anglo-americana sobre o Japão e sobre a China. No julgamento do parecer da consulta na sessão plena do Conselho de Estado, realizada em primeiro de abril daquele ano, o Conselheiro Lopes Gama apresentou um voto em separado, no qual demonstrou possuir a mesma perspectiva do olhar de Paulino sobre a questão, ultrapassando a concepção de natureza como superlativo obstáculo, representação questionada por Paulino. Em uma passagem, em que traça uma analogia do Brasil com a China observou:

Pensam alguns brasileiros que, por se encontrarem no Amazonas algumas terras alagadiças, onde reinam as febres intermitentes, e abundam os mosquitos, os ianques desistirão da sua empresa mas esta confiança em tais meios de defesa não terá melhor sucesso do que a dos chins, quando, na invasão britânica, guarneceram as suas praias e estradas com colossais artefatos representando tigres, e leões para afugentarem os ingleses. Nem os mosquitos do Mississipi nem a febre amarela obstaram à fundação de Nova Orleans, uma das principais cidades comerciais dos Estados Unidos. A navegação daquele rio cada vez mais se aumenta com a grande produção do terreno que ele banha (Brasil, 1978a, p. 199).

Assim, diante das pretensões americanas, os estadistas do Império demonstraram que as imagens da natureza como obstáculo eram ineficientes e como defesa eram ilusórias frente ao impulso que as representações do Eldorado davam ao expansionismo americano. A esta desvalorização das imagens da região amazônica como selva indevassável correspondeu uma valorização da visão do deserto que justificava a implantação de um projeto de colonização, antes do qual não se deveria tratar quer da navegação fluvial, quer das questões de fronteiras “que devemos procrastinar enquanto

conservarmos tão deserto, como está, esse lado do Império” (Brasil, 1878a, p. 200). Esta contraposição entre natureza e técnica aliada à consciência da fraqueza do Império orientou uma política de procrastinação e resistência ao movimento avassalador da expansão americana que buscou resguardar os interesses específicos do Brasil.

Avaliando o decreto peruano de 1853, que estimulou as pretensões norte americanas à navegação do Amazonas, Paulino observou que se tratava de um procedimento hábil: “por meio de uma concessão, hoje de nenhum valor, livrou-se (e era-lhe isso fácil porque é ribeirinho superior) dos americanos, e empurrou-os para nós” (Brasil, 1978a, p. 47). Mais do que isto, no entanto, da documentação diplomática peruana verificava que o governo daquela república concebia a navegação até a embocadura do Amazonas um direito comum de todos os estados ribeirinhos, numa mudança de linguagem não autorizada, segundo a perspectiva do governo brasileiro, pelo tratado de 1851, que estabelecia claramente o direito de navegação apenas entre Tabatinga e Nauta e a uma porção correspondente deste trecho em território brasileiro.

O problema, entretanto, ultrapassava, também na América do Sul, apenas as pretensões peruanas. Coligindo o recente tratamento dado pelas demais repúblicas americanas à questão, verificava-se que houvera um movimento geral de liberalização da navegação dos rios, através de vários tratados que haviam celebrado entre si com as potências européias e mesmo com os Estados Unidos. Assim, para Paulino, a situação do Brasil era a pior possível:

Pode-se dizer que (...) está o Brasil na mesma posição em que estava ultimamente a respeito do tráfico. Se nos opusermos aberta e completamente à navegação do Amazonas, teremos todos contra nós, e ninguém por nós. Seremos malgrado nosso, arrastados, é quem é assim arrastado não pode dominar e dirigir o movimento que o arrasta pra dele tirar partido. Basta lançar os olhos sobre uma carta da América Meridional do Atlântico. As repúblicas que o cercam pelo lado de Oeste possuem imensas porções de território encravado no meio desse grande continente, e separadas das costas do Pacífico por imensas distâncias e por cordilheiras e serras que impossível transpor se ímprobo trabalho e enormíssimo dispêndio. Forcejam e hão de forcejar cada vez mais essas regiões para abrir os caminhos fluviais que mais facilmente as podem por em contado com o resto do mundo. (...) Se há 20, 15 ou

10 anos tivéssemos com decisão e firmeza (...) tomado a iniciativa nestas questões poderíamos tê-las dirigido (Brasil,1978a, pp. 65-69).

A situação, contudo, resumia Paulino, era outra: o Brasil não inspirava confiança aos Estados ribeirinhos; a Inglaterra, a França e os Estados Unidos maquinavam com as demais repúblicas americanas contra o país; as questões de limites haviam se tornado bem mais complexas, assim como a da navegação fluvial. Assim, era necessário adotar uma política que conviesse ao Brasil, a melhor possível de um ponto de vista prático.

Em primeiro lugar, tratava-se de definir uma doutrina a partir da qual esta política seria enunciada, isto porque: “Como tem os Estados Unidos, a Inglaterra e outras nações poderosas, não temos nós força, posição e importância que nos dispense de produzir razões coerentes, de fundar-nos em doutrinas aceitáveis pelos nossos contendores” (Brasil,1978a, p. 77). A doutrina do direito das gentes, que fundamentava o princípio da navegação exclusiva pelos estados ribeirinhos, estava superada. Se o Brasil insistisse em restabelecê-la, não apenas entraria em luta com todos os demais países, mas também “prejudicaria e ataria os braços quanto à navegação do Paraguai e do Paraná, pondo-nos inteiramente à mercê da República do Paraguai e da Confederação Argentina” (Brasil, 1978a, p. 78).

A opção entrevista por Paulino foi a adoção das doutrinas enunciadas pelos tratadistas americanos, que reconheciam o direito comum das nações ribeirinhas em navegarem os rios que correm pelos seus territórios e de entrarem e saírem para o mar; em outras palavras, o direito de trânsito. Na medida em que este direito era imperfeito, isto é, não acompanhado do direito de constranger, deveria ser fixado por convenções recíprocas apenas para uso inocente, isto é, para o comércio. Todas as demais decorrências destes usos, a garantia de segurança, a fiscalização e tarifas, o estabelecimento de faróis, balizas, obras de melhoramento, a cobrança de taxas seria do direito de cada um dos Estados.

O governo imperial deveria, portanto, reconhecer o direito dos Estados ribeirinhos ao trânsito, mas não o de exigirem a extensão daquele aos Estados não ribeirinhos. O Brasil também deveria acenar aos Estados não ribeirinhos sua disposição em estabelecer com eles convenções e tratados com as necessárias garantias à navegação do Amazonas que corre pelo território

que lhe pertence. Seria necessário também, dada a gravidade das questões, resolver antes ou conjuntamente as definições dos limites territoriais. Para Paulino, a política proposta tinha:

a grande vantagem de destacar os ribeirinhos dos não ribeirinhos, desinteressando aqueles de se ligarem com estes contra nós (...). Os Estados Unidos e a Inglaterra (...) obtida do Brasil a passagem não tem mais interesses que os una a essas repúblicas contra nós. Não tem interesse em que estas obtenham a livre navegação do Amazonas. Ficam os ribeirinhos a sós conosco, e com eles podemos nós (Brasil, 1978a, p. 81).

Recomendava ainda que o Brasil antes de fixar qualquer tratado com os Estados Unidos deveria resolver as pendências de fronteiras com a Inglaterra e a França pelo lado das Guianas, pois, do contrário, aqueles países exigiriam as mesmas concessões independentemente das questões de limite. Era preciso estabelecer o Império no Amazonas. Em outras palavras, fazer valer a lei de terras de 1850 em suas margens, regular a venda das mesmas a estrangeiros, impedir o estabelecimento de povoados e colônias de população estrangeira indivíduos de uma só nação –ou seja, evitando-se que a Amazônia se tornasse um novo Texas–, e implantar fortalezas para realizar o patrulhamento da navegação.

Na possibilidade da realização de acordos bilaterais com estados ribeirinhos e não ribeirinhos –isto é, promover uma navegação regulada do rio– seria necessário revogar a exclusividade da Companhia de Navegação do Amazonas. Isto quer porque o governo peruano, pelo decreto de 1853, já o havia feito de fato, quer porque a abertura regulada do Amazonas seria incompatível com a existência de uma companhia possuidora de direitos exclusivos de navegação. Não eram, no entanto, estas as únicas recomendações em relação à Companhia. Paulino indicava a necessidade de aumentar a subvenção dada a Companhia para que ela pudesse fazer “concorrência vantajosa à navegação por vapor estrangeira, e a diminuir, portanto a importância desta que de outro modo poderá excluir completamente a nacional” (Brasil, 1978a, p.87). Paulino, ainda observava:

Essa concorrência pode contribuir para desenganar e afastar aqueles estrangeiros que vêm nos desertos que banham o Amazonas um novo Eldorado, e que desenganados de seus sonhos de riqueza nos hão de

incomodar muito menos. Quanto mais insistíssemos em conservar cerrado o Amazonas, mais cresceria a fama, e a cobiça das fabulosas riquezas que encerra, e portanto o excitamento contra o Brasil (Brasil, 1978a, p. 87).

Assim, ao cabo, não podendo mais defender a exclusividade de navegação dos estados ribeirinhos, proprietários do rio, Paulino traçava uma política de resistência e procrastinação a uma abertura franca, ao acenar com a possibilidade de acordos bilaterais com os estados não ribeirinhos e, ao mesmo tempo, criando condições tais que viessem a desinteressá-los da navegação do Amazonas. Sua intenção era, através do aumento da subvenção à Companhia, instaurar condições desiguais de concorrência com desvantagens para os estrangeiros, fazendo com que o rio permanecesse quase fechado na prática. Finalmente, aconselhava ao governo imperial não aceitar o convite do Peru para uma conferência com os Estados ribeirinhos para tratar da navegação do Amazonas.

O parecer da Seção foi aprovado na sessão plena do Conselho de Estado e a política recomendada foi adotada pelo governo imperial, ou seja, como notaram os especialistas em relações internacionais, o país estabeleceu uma política integral e coerente no trato da questão fluvial e de fronteiras. O Amazonas foi aberto à navegação internacional somente em 1867, no contexto da guerra com o Paraguai, como estratégia para desfazer mais uma vez uma conspiração “republicana” contra o Brasil, encetada pelos Estados Unidos (Moniz Bandeira, 1998).

## Conclusões

As sugestões de Paulino Soares de Souza e dos demais conselheiros da Seção de Negócios Estrangeiros, acatadas pelo governo imperial, parecem descrever um círculo: são introduzidas modificações nas relações internacionais –uma política é firmemente traçada– para se manter o *status quo ante*. Em outras palavras, volta-se ao ponto de origem, ou seja, à prática, não mais à ideia, de que a navegação fluvial pertence exclusivamente aos estados ribeirinhos. Frente às pressões internacionais, o governo brasileiro parece fazer um leve aceno com a possibilidade de abertura da navegação fluvial quando a ela resiste, prolongando para um futuro indefinido medidas mais liberais. Seria possível, portanto, deduzir que se tratava de um jogo de aparências. O termo



foi utilizado algumas vezes por Paulino, como, por exemplo, quando afirmou que colocar os estados ribeirinhos na dependência de resolver as questões de fronteira juntamente com a navegação do Amazonas era muito conveniente “pelo desejo que devem ter de salvar as aparências do justo” (Brasil, 1978a, p.82).

Assim, não é totalmente equivocado caracterizar a política externa do Império para a navegação fluvial como uma política de aparências. Esta avaliação é caracterizada por negatividades: procrastinação, resistência, aparências; é, portanto, apenas um aspecto parcial, pois não responde à questão da motivação ao estabelecimento de uma política de tal natureza. Havia nela, de fato, uma positividade que é fundamental destacar.

Já se observou aqui que Paulino Soares de Souza analisava a questão das pretensões dos Estados Unidos de uma perspectiva ampla. Lendo o relatório do presidente do Pará, não se deixou impressionar pelas inúmeras dificuldades enumeradas para a ocupação da região –todas superlativas. Frente à constatação da existência de terrenos alagadiços, canais intransponíveis, e outras dificuldades mais, ele observou secamente que também era verdade a existência de terrenos elevados e férteis nas margens do rio, propícios à agricultura. De uma perspectiva ampla, as dificuldades eram superlativas para aqueles que não possuíam capitais para empreender uma colonização. Esta visão se reafirma quando, analisando os interesses dos Estados ribeirinhos da América do Sul na navegação do Amazonas, observou as dificuldades –também superlativas– destes países na transposição dos Andes para conseguirem um acesso ao oceano Pacífico. Também eles não possuíam capitais para realizar o vultuoso empreendimento. Mas os EUA possuíam uma população e um governo dispostos a dominar o continente e, mais importante, capitais e técnicas, diante das quais a natureza não seria –obstáculo –ou defesa, na instigante visão de Lopes da Gama–, mas sim possibilidade de desenvolvimento, de acumulação de capital. Ora, é diante desta possibilidade dos países capitalistas avançados, diante da ameaça que eles representavam, que se deveria defender o vale do Amazonas.

Antes, contudo, defendê-lo era fazê-lo existir, isto é, apropriar-se do território, da natureza como uma reserva para futuros empreendimentos –não necessariamente nacionais–, mas sob o controle do estado brasileiro. Daí o lugar fundamental da representação do vale do Amazonas como deserto, como vazio. Era deserto e vazio do Império que necessitava dele

apropriarse definindo fronteiras e a navegação fluvial sincronicamente. Tratavase de estabelecer o Império *de jure* através dos tratados e *de fato* através do estabelecimento da colonização sob o controle do estado para fazer valer a legislação nacional, e da força de polícia por meio das fortalezas a serem implantadas na região. Era necessário, portanto, reconquistar, isto é, conquistar de novo aquilo que era herança portuguesa. Mas conquistar em um sentido capitalista. Assim, ao contrário do que dizem os estadistas do Império e certa historiografia que herdou sua memória, o Império caracterizou-se ao longo do século XIX por uma clara política expansionista na América. A idéia de que o Império garantiu pacificamente as fronteiras nacionais configura, talvez, o mito que fundamentou o expansionismo brasileiro nos séculos XIX e XX. Para os brasileiros tratava-se de ocupar fronteiras, preencher vazios previamente existentes. Esta ideia parece ocupar no imaginário brasileiro, lugar similar ao mito do destino manifesto de expansão da fronteira nas concepções dos norte-americanos. Uma vez que estes não herdaram nenhum território previamente definido, somente um pensamento como o do destino manifesto poderia legitimar a expansão e a conquista. No caso brasileiro, ocupar o espaço vazio é estabelecer a propriedade no sentido atribuído por John Locke no segundo Tratado sobre o Governo (1998). Para Locke o trabalho é fundamento da propriedade como é sabido. A formação da propriedade é resultado da apropriação que os homens fazem da natureza, da terra para a produção de sua sobrevivência, e de riquezas segundo o imperativo da lei natural. Assim, uma terra vazia é passível de apropriação por aquele agente que a torna produtiva. Está presente no pensamento lockeano uma justificativa da conquista, que é a produtividade e o comércio. Ele observou no segundo tratado:

aquele que se apropria da terra mediante seu próprio trabalho não diminui, mas aumenta as reservas comuns da humanidade, pois as provisões que servem ao sustento da vida humana produzidas por um acre de terra cercada e cultivada são (...) dez vezes maiores que as que rende um acre de terra inculca de igual riqueza. (...) Pergunto-me se nas florestas selvagens e nas vastidões inculcas da América deixadas à natureza, sem nenhuma melhoria, lavoura ou cultivo, mil acres rendem aos habitantes necessitados e miseráveis tanto quanto dez acres de terra igualmente fértil em Devonshire, onde são bem cultivadas. (...)

Portanto, sem supor nenhum domínio particular ou propriedade de Adão sobre todo o mundo (...) vemos como o trabalho podia conferir aos homens títulos a diversas partes dele para seus usos particulares; do que não poderia haver dúvida alguma quanto ao direito, nem ocasião para disputas. (...) E era com efeito (...) uma desonestidade, acumular mais do que se era capaz de usar. (...) se trocasse suas nozes por um pedaço de metal (...) e guardasse consigo por toda a vida, não estaria invadindo o direito alheio e poderia acumular tantas dessas coisas duráveis quanto lhe aprouvesse; o exagero nos limites da sua justa propriedade não residia na extensão de suas posses, mas no perecimento inútil de qualquer parte delas. [a] invenção do dinheiro deu-lhes a oportunidade de continua-las e aumenta-las. (...) Portanto, no princípio, o mundo inteiro era a América, ainda mais que hoje, pois nada semelhante ao dinheiro era conhecido em parte alguma (Locke, 1998, pp. 405-428).

Ora, o Brasil, na medida em que mantinha –como observou Maury– o Amazonas fechado, não apenas impedia o estabelecimento da propriedade e da produtividade no vale, como obstruía o comércio, obrigando que a navegação de alguns de nossos vizinhos contornasse o continente para acessar o Atlântico. Neste sentido, colocava-se em um estado de guerra, na medida em que afrontava o direito natural. Em Locke, o governo civil surge como resultado do pacto entre os homens para garantir a segurança e a liberdade da propriedade e do comércio. Neste sentido, estabelecer o Império é também tornar o país o mediador da questão, garantindo aparentemente para todos aquela segurança e liberdade. Na medida em que a política de definição de fronteiras e da navegação fluvial está baseada no *uti possidetis*, a terra precisa ser ocupada e tornada produtiva para que se estabelecesse a propriedade e o império.

Daí o porquê de dividir as negociações entre estados ribeirinhos e não ribeirinhos naquele momento, bem como acenar aos Estados Unidos com a possibilidade de acordos bilaterais, ao mesmo tempo que fazer-lhes desinteressarse da região como resultado da concorrência desigual da Companhia de Navegação do Amazonas (subsidiada pelo Estado). Era o pensamento hobbesiano dos estadistas do Império: diante de uma força maior –os EUA– eram necessárias a astúcia e a sutileza. Com os ribeirinhos –observou Paulino– podemos nós, e a guerra com o Paraguai demonstrou, posteriormente, todo o conteúdo de suas palavras.

Este confronto contribuiu para fixar a imagem dos Estados Unidos como uma ameaça permanente à integridade territorial e à unidade nacional. Esta ideia foi importante elemento na constituição da crítica monárquica à república brasileira. Em 1893 Eduardo Prado publicou um livro intitulado *A ilusão americana* (Prado, 1902), no qual fazia violenta crítica àquele país. Reafirmava as questões apontadas por Paulino e acrescentava outras, como o apoio da União Americana às pretensões de Lopez durante a Guerra do Paraguai. Como observou Maria de Lourdes Monaco Janotti, tratava-se de uma visão pseudocientífica e moralizante dentro da qual se encontrava “a defesa incondicional do capitalismo britânico e da supremacia cultural europeia” (Janotti, 1982). Mas o que em Eduardo Prado era anacrônica moralidade, em Paulino Soares de Souza era a racionalidade –na feliz expressão de Alfredo Bosi– “do registro seco, às vezes duro, da linguagem administrativa. É o estilo da eficiência: o estilo saquarema” (Bosi, 1992). Uma vez estabelecida, esta racionalidade atravessou os séculos XIX e XX e adentrou ao XXI: naquela época a navegação do Amazonas foi tida como barganha para o estabelecimento de limites e fronteiras, atualmente a região amazônica é objeto de barganha na aquisição de empréstimos internacionais. Isto porque aquela racionalidade prosaica não se rendeu às imagens –sempre escorregadias, ilusórias e manipuláveis segundo as circunstâncias–, tendo dimensionado o Amazonas, nem como Eldorado e nem como inferno verde, mas como propriedade e mercadoria.

Finalmente, é importante destacar que, longe de atentar contra o liberalismo econômico, a política exclusivista imperial visava garantir o estabelecimento do *laissez-faire* sob mediação do estado brasileiro. Esta foi a política de defesa criada pelos estadistas conservadores, que tinham clara consciência dos limites da capacidade militar do Império, e procuraram assim garantir a integridade territorial e a unidade nacional brasileiras.

Os liberais, diferentemente dos conservadores, pelo menos em uma ocasião colocaram a integridade brasileira em sério risco, quando, em 1864, não tiveram escrúpulos em prometer o Chaco paraguaio à Confederação Argentina para atraí-la à aliança contra o Paraguai. Essa promessa possibilitaria a extensão da fronteira Argentina até Forte Coimbra no Mato Grosso e foi objeto de amarga controvérsia entre os dois países no pós-guerra, situação conflituosa que foi dirimida pelos conservadores. Também o republicano

Quintino Bocaiuva promoveu a assinatura do Tratado de Petrópolis no início da república, que, para resolver a questão de Palmas, estabelecia uma cunha argentina na região sul, e que foi refutado pelo Congresso Nacional.

Diante destas desventuras liberais –para permanecer apenas em dois exemplos significativos–, será coincidência que o governo nacionalista de Floriano Peixoto tenha chamado Paranhos Júnior, do antigo Partido Conservador, para o Ministério das Relações Exteriores, cargo no qual, o Barão, como é conhecido, dirigiu sob vários governos republicanos a resolução definitiva das fronteiras do Brasil com os países sul-americanos dentro do paradigma criado por Paulino? Será apenas casual o fato de que, ao longo da nossa história, a política brasileira seja marcada pela oscilação entre um intervencionismo desenvolvimentista apropriado quer por uma direita ou por uma esquerda democráticas e um liberalismo selvagem dos grupos internacionalistas? Será mera coincidência que a política externa do governo eleito para o quadriênio 2019-2022 se incline diante dos interesses do atual governo dos Estados Unidos da América?

## Fontes Documentais

Antas, J. B. de C. M. (2013). *O Amazonas Breve Resposta à Memória do Tenente da Armada Americana-Inglesa F. Maury, sobre as Vantagens da Livre navegação do Amazonas*. Rio de Janeiro: Fundação Alexandre de Gusmão.

Brasil (1978a). Atas do Conselho de Estado. *Atas do Conselho de Estado*. Brasília: Senado Federal. <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/188985>

Brasil (1878b). Consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros. *Conselho de Estado. Conselho de Estado 1842-1889: consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros*. Câmara dos Deputados/ Ministério das Relações Exteriores.

Brasil (1853-1854-1855). *Relatório da Repartição dos Negócios Estrangeiros*. <http://bndigital.bn.br/acervo-digital/brasil-ministerio-imperio/720968>

Correio Mercantil (1853). *Correio Mercantil*, 10, (362/363). s/p.

Correio Mercantil (1854). *Correio Mercantil*, 11, (1/2/3). s/p.

Maury, F. (1853). *O Amazonas e as costas atlânticas da América Meridional*. Rio de Janeiro: Typographia de M. Barreto.

Prado, E. (1902). *A ilusão americana*. São Paulo: Escola Typographica Salesiana.

Marinha do Brasil (1854). *Revista Marítima Brasileira*, 21-23. s/p.

## Referencias

Arias Neto, J. M. (2008). Entre o eldorado e o inferno: representações do Rio Amazonas na política externa do Império do Brasil. Em G. Arruda (Org.), *Anatureza dos rios: História, Memória e Territórios* (pp. 227-265). Curitiba: Editora UFPR.

Bosi, A. (1992). *Dialética da colonização*. São Paulo: Companhia das Letras.

Cervo, A. L., & Bueno, C. (1992). *História da política exterior do Brasil*. São Paulo: Ática.

Eisemberg, P. (1982). *Guerra civil americana*. São Paulo: Brasiliense.

Graham, R. (1995). Brasil - Inglaterra, 1831/1889. Em S. Buarque de Holanda (Dir.), *História Geral da Civilização Brasileira: o Brasil monárquico* (tomo 2, vol.6) (pp. 89-137). Rio de Janeiro: Bertand Brasil.

Hobsbawm, E. (1979). *A era do capital 1848-1875*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Holanda, S. Buarque de (Dir.) (1985). Do Império à República. *História Geral da Civilização Brasileira* (tomo 2, vol.5) (pp. 138-169). São Paulo: DIFEL.

Janotti, M. de L. M. (1986). *Os subversivos da República*. São Paulo: Brasiliense.

Leonardi, V., & Hardmann, F. F. (1982). *História da indústria e do trabalho no Brasil*. São Paulo: Global.

Locke, J. (1998). *Dois tratados sobre o governo*. São Paulo: Martins Fontes.

Magnoli, D. (1997). *O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912)*. São Paulo: Editora da Unesp/Moderna.

Manchester, A. K. (1973). *Preeminência inglesa no Brasil*. São Paulo: Brasiliense.

Marquese, R. B. (2004). *Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860*. São Paulo: Companhia das Letras.

Matos, I. (1987). *O tempo saquarema*. São Paulo: Hucitec.

Maxwell, K. (1996). *Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Moniz Bandeira, L. A. (1998). *O expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na Bacia do Prata*. Rio de Janeiro/Brasília: Revan/Universidade de Brasília.

Nevins, A., & Commager, H. S. (1986). *Breve história dos Estados Unidos*. São Paulo: Alfa-Omega.

Panikkar, K. M. (1977). *A dominação ocidental na Ásia*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Pantaleão, O. (1995). Encaminhamento político do problema da escravidão no Império. Em S. Buarque de Holanda (Dir.), *História geral da civilização brasileira: o Brasil monárquico* (tomo 2, vol. 6) (pp. 189-219). Rio de Janeiro:

Bertrand Brasil.

Pinto, V. N. (1978). Balanço das transformações econômicas no século XIX. Em C. G. Motta, *Brasil em perspectiva* (pp. 126-145). São Paulo: Difel.

Santos, L. C. (2002). *O Império e as repúblicas do pacífico*. Curitiba: Editora da UFPR.

Soares, T. (1979). A Marinha e a política externa no segundo reinado. *Navigator: subsídios para a história marítima brasileira*. Rio de Janeiro, 15, 15-42.

Souza, J. A. S. de (1987). O Brasil e o Rio da Prata, de 1828 à queda de Rosas. Em S. Buarque de Holanda, *História Geral da Civilização Brasileira* (tomo 2, vol. 3) (pp. 113-134). São Paulo: Bertrand Brasil.

Syrett, H. C. (1995). *Documentos históricos dos Estados Unidos*. São Paulo: Cultrix.





# Las Fuerzas Armadas argentinas en la Antártida: obra pionera y trayectoria profesional del alférez de navío José María Sobral

*Gonzalo Manuel Torchio*

## Introducción

En el último cuarto del siglo XIX, con el fin de las guerras civiles y la organización del Estado nacional, Argentina comenzó un proceso de extensión territorial hacia el sur mediante la incorporación a la jurisdicción nacional de espacios geográficos patagónicos, marítimos y antárticos. En este capítulo abordaremos el caso de la ocupación del continente antártico y el origen de una política estatal hacia el mismo a comienzos del siglo XX.

En el diseño y la implementación de una política antártica nacional, las Fuerzas Armadas argentinas cumplieron un papel clave. Sostenemos como hipótesis, entonces, que el análisis sociohistórico de los perfiles y las trayectorias profesionales específicas de oficiales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea de Argentina considerados “pioneros antárticos”, nos permite comprender cómo las Fuerzas Armadas contribuyeron decididamente a la definición y concreción de esa política pública.

En esta investigación nos limitaremos al momento histórico en que emergió, de forma incipiente, nuestra política antártica, cuando la Armada Argentina irrumpió en las aguas de dicho continente para rescatar a la accidentada expedición sueca de Otto Nordenskjöld en 1903 y cuando en 1904 el Gobierno nacional adquirió un observatorio meteorológico en las

islas Orcadas del Sur, primer asentamiento permanente y único por casi cuatro décadas. Esta adquisición fue el comienzo de una larga presencia argentina en aquel continente, que se consolidará décadas más tarde durante los primeros gobiernos peronistas (1946-1955).

El estudio sobre el involucramiento de la Armada Argentina en la proyección antártica del país se llevará a cabo mediante el análisis de la obra antártica y el perfil y la trayectoria profesional de un oficial de marina reconocido como precursor de la presencia nacional en el Continente Blanco: el alférez de navío José María Sobral. Como veremos, esta participación se dio durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904), figura política clave para la comprensión del proceso de extensión territorial del Estado nacional hacia el extremo sur.

La investigación se inscribe en los estudios sociohistóricos sobre profesión militar, agencias estatales y políticas públicas, en este caso orientadas a la incorporación al territorio nacional de espacios geográficos aislados y desconocidos, pero considerados como propios por la Argentina. El enfoque que guía este trabajo considera a los militares no solo como instrumento de una política pública, sino como un grupo socioprofesional constitutivo del Estado nacional, inscripto en la sociedad argentina y activo en la definición y ejecución de una política pública como la antártica.

Consideramos relevante el enfoque elegido ya que, por lo general, cuando las Fuerzas Armadas son abordadas por las ciencias sociales, suelen ser concebidas como actores monolíticos, básicamente corporativos, represivos, autónomos de la conducción política civil del Estado y en oposición abierta a la sociedad civil. Según Germán Soprano (2016), el intervencionismo político realizado por las propias Fuerzas Armadas desde 1930 y el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura militar entre 1976 y 1983, acabaron orientando los estudios hacia la comprensión de la dimensión ideológica, política y represiva de las mismas. Por esta razón –afirma el autor– las investigaciones que conceptualizan a las fuerzas militares “como instituciones del Estado en democracia y de los militares como ciudadanos, funcionarios públicos y profesionales responsables por el ejercicio legítimo de la violencia en el marco de la política de defensa” (Soprano, 2016, p. 15) han sido minoritarias. Sin embargo –advierte– al calor de la normalización institucional de las Fuerzas Armadas en el régimen democrático en las últimas décadas, ha surgido una

nueva agenda de investigaciones “comprometida con el estudio de la profesión militar y sus inscripciones en el Estado y la sociedad argentina del siglo XXI” (Soprano, 2016, p. 17). Estas investigaciones abordan “el reconocimiento de las características sociales, económicas, políticas y culturales compartidas por los militares con otros grupos del Estado y la sociedad nacional, así como la identificación de aquellas que los singularizan” (Soprano, 2016, p. 13).

A esta nueva agenda pretendemos aportar adoptando el enfoque mencionado, salvando, por supuesto, las distancias temporales que puedan observarse. En efecto, mientras las “nuevas” investigaciones refieren al contexto democrático de principios del siglo XXI –cuando las Fuerzas Armadas han normalizado su inscripción en el Estado y en la sociedad nacional–, la presente alude a los últimos años del siglo XIX e inicios del XX, período caracterizado por la institucionalización y profesionalización de las fuerzas (en este caso la Armada) y por su importante gravitación en la política nacional, en el marco del afianzamiento de la organización del Estado nacional. Sin embargo, afirmamos que esto no impide la realización de un análisis que conceptualice a las Fuerzas Armadas en general –y a la Armada en particular– no solo como agencia estatal, sino, además, a los militares como grupo social-profesional. El enfoque permite observar la configuración profesional de los mismos y sus relaciones con el desarrollo de las agendas públicas y las políticas estatales (aquí, la política antártica). Se considera necesario dar cuenta no solo de la especificidad de la profesión militar, sino también de sus interlocuciones con otras áreas del Estado o la sociedad, que en este caso orientan su ámbito de acción hacia las cuestiones relacionadas con la Antártida en el período mencionado.

La metodología empleada es fundamentalmente cualitativa, centrada en el análisis crítico de la literatura referida al tema, en particular aquella producida por la denominada “historia militar”. En una primera parte desarrollaremos una breve descripción de la primera presencia nacional en la Antártida y del proceso iniciado en el último cuarto del siglo XIX, cuando el Estado nacional argentino comenzó su proyección hacia el sur patagónico y marítimo, cuyo desenlace fue el desembarco en el Continente Blanco. Luego nos centraremos en ese desembarco a comienzos del siglo XX a partir del análisis de la obra pionera y la trayectoria militar del oficial de marina José María Sobral. Por último, extraeremos algunas conclusiones que buscarán dar

cuenta de la hipótesis y los objetivos planteados en esta introducción.

### La transición de una Armada fluvial a una Armada oceánica

La historia antártica más difundida explica que los primeros argentinos en arribar a la Antártida fueron navegantes dedicados a la caza de focas, ballenas y lobos marinos, y lo hicieron en la segunda década del siglo XIX, recién independizadas las Provincias Unidas del Río de la Plata (Capdevilla y Comerci, 1986; Quevedo Paiva, 1987). En las postrimerías del siglo XVIII la actividad lobera y ballenera de marinos de distinto origen –principalmente ingleses, españoles, estadounidenses y rioplatenses (Pierrou, 1975)– se había intensificado de manera significativa en las costas patagónicas e insulares del Atlántico Sur, por lo que la ambición de encontrar poblaciones de mamíferos marinos los pudo haber hecho alcanzar las islas adyacentes a la península antártica. Los intereses comerciales estaban por encima de los políticos o los científico-geográficos, razón por la cual los nuevos lugares encontrados se mantuvieron en secreto para evitar la competencia (Capdevilla y Comerci, 1986; Pierrou, 1975).

La arqueóloga María Ximena Senatore (2011) considera la llegada del hombre a la Antártida:

... como parte de un proceso de expansión capitalista en busca de nuevas fuentes de materias primas –aceite y pieles– para mercados en crecimiento. Explotación que implicó necesariamente un proceso de exploración y de incorporación de nuevos espacios hasta ese momento desconocidos por el mundo occidental (pp. 168-169).

Según la autora, el descubrimiento y la explotación de tierras antárticas formaron parte de un mismo proceso. Los intereses económicos del negocio lobero-ballenero, que se enmarcan dentro de la expansión colonialista y de consolidación del capitalismo a escala global a fines del siglo XVIII, “fueron extendiendo los límites de lo conocido e incorporando nuevos paisajes y experiencias al mundo moderno” (Senatore, 2011, p. 163).

La caza de mamíferos marinos se convirtió en una actividad predatoria que en nuestro país dio lugar a las primeras disposiciones oficiales orientadas a reglamentarla y regularla. Según Adolfo Quevedo Paiva (1987), las mismas tuvieron la particularidad de ser las primeras manifestaciones de soberanía

sobre estos espacios geográficos australes. Sin embargo, las autoridades de Buenos Aires, envueltas en las guerras civiles que caracterizaron las primeras décadas del naciente país y encerradas sobre sí mismas dentro de los márgenes del Río de la Plata y su *hinterland* pampeano, no desarrollaron un interés definido por los territorios continentales, marítimos e insulares del extremo sur, situación que se revirtió en el último cuarto del siglo XIX.

A lo largo del siglo XIX se fueron dando dos hechos: por un lado, que a las empresas comerciales en los mares antárticos se les fueron sumando exploraciones de carácter científico; por el otro, que con el fin de las guerras civiles y la organización del Estado nacional, Argentina comenzó a extender su soberanía hacia el sur en la década de 1870.

Con respecto al primer fenómeno, los países en pleno desarrollo industrial y expansión colonialista por el mundo comenzaron a hacer expediciones con fines científicos y económicos en regiones remotas del globo, motivados por los progresos que la ciencia estaba dando a grandes pasos y la posibilidad que ello brindaba para la conquista de nuevas tierras, mercados y recursos destinados a aumentar el prestigio nacional y afianzar el poder político y económico de sus Estados. Esto significó un importante cambio, ya que “permitió que del silencio que cubría las actividades de los barcos focueros y balleneros, se pasara a la más completa publicidad gracias a los logros de las campañas científicas” (Facchin, 2013, p. 38).

En cuanto al segundo fenómeno, distinguimos tres eventos: la decisión de ocupar la Patagonia a partir de la llamada “Conquista del Desierto” entre 1878 y 1885; el incipiente interés marítimo que aparece hacia finales de la década de 1870 con la salida de la Armada Argentina de su encierro en los ríos y su apertura al mar; y las primeras intenciones de explorar la Antártida, que tienen su punto culminante en el rescate a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld realizado por la Armada en 1903.

Hasta la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) el país no había contado con una fuerza naval organizada e institucionalizada. Desde la independencia, las escuadras se constituían cuando los conflictos estallaban, pero se desarticulaban apenas estos terminaban.

Según un ensayo publicado en el Boletín del Centro Naval, el punto de quiebre de esta situación fue la Guerra del Paraguay (1865-1870), en la cual las precarias fuerzas navales argentinas cumplieron tareas secundarias

en comparación con las de la poderosa flota brasileña, que fue la verdadera protagonista de los combates fluviales. Dicha situación demostró –al decir de los autores– la necesidad de contar con medios navales aptos para afrontar con anticipación los conflictos internacionales, asegurar el control de los ríos internos y poder negociar en mejores condiciones ante potenciales diferendos diplomáticos (Delamer, Oyarzábal, Montenegro, Bergallo y Santillán, 2010).

De esta manera, durante la presidencia de Sarmiento se adoptaron políticas que constituyeron los primeros pasos para conformar una Marina de Guerra organizada. En 1872 se creó la Escuela Naval Militar, y entre 1874 y 1876 se incorporaron las primeras unidades de hierro y vapor que constituyeron la denominada “Escuadra de Sarmiento”. Se construyeron en estos años el primer Arsenal de Marina en Zárate y los Talleres Navales en el Tigre, sobre el río Lujan. Estos emplazamientos respondieron al pensamiento geopolítico del momento, identificado con el ideario sarmientino que sostenía la prioridad de la defensa del Río de la Plata, “centro político y organizador, fuente principal de distribución de recursos y, tradicional teatro de operaciones de la mayor parte de los conflictos pasados” (Delamer *et al.*, 2010, p. 214).

En aquel momento el pensamiento estratégico naval dominante era el de la escuela francesa de la *Jeune Ecole*. La misma postulaba una Armada limitada a defender puertos, costas y ríos, y, de acuerdo con una postura netamente defensiva, sugería recurrir al torpedo como sistema de armas más adecuado (Oyarzábal, 2005).

Estos criterios geopolíticos se fueron modificando con el creciente influjo político-militar de Julio Argentino Roca, y la extensión del interés nacional a los territorios patagónicos y sus costas. En efecto, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), y con Roca como su ministro de Guerra y Marina a partir de 1877, comenzó a desarrollarse el proceso de incorporación de la Patagonia al Estado nacional. Esta expansión no estuvo exenta de tensiones con Chile, que tenía pretensiones sobre estos espacios y a mediados de la década de 1870 realizó algunas incursiones navales en la zona. Sin embargo, las controversias con el país vecino se resolvieron parcialmente con la firma del Tratado de Límites en 1881.

La proyección hacia el sur en el período roquista comenzó a romper de a poco la concepción tradicional que desde la época de la independencia limitó las operaciones navales al ámbito del Río de la Plata. La expedición

comandada por el comodoro Luis Py a las costas sureñas en 1878, como respuesta a las incursiones chilenas, fue fundacional, y con ella se inauguró el proceso de transición de una Armada fluvial a una Armada oceánica, que terminará de consolidarse en la década de 1890.

Respecto a los medios navales, dicha transición implicó la incorporación hacia 1880 de varias torpederas y un acorazado, el *Almirante Brown*; así se constituyó una escuadra que, sin abandonar el esquema defensivo sobre el Río de la Plata, materializó una incipiente proyección de los intereses nacionales hacia el mar. En esta época también se fomentó el servicio de transporte marítimo para sostener la comunicación y el apoyo efectivo a las poblaciones patagónicas, la actividad marítima comercial con el establecimiento de líneas de navegación hacia Europa, EE. UU. y la costa patagónica, y diversas actividades como estudios hidrográficos, canalizaciones, balizamientos, iluminación de costas, vigilancia policial, etc. (Delamer *et al.*, 2010).

Las adquisiciones navales realizadas entre 1890 y 1893 terminaron de consolidar el esquema defensivo alrededor del Río de la Plata. Sin embargo, como afirma Guillermo Oyarzábal (2005):

... la Marina había logrado la mejor fuerza torpedera de Sudamérica, en el ocaso de la concepción estratégica de defensa y en el preciso momento en que el mundo trataba de consolidar las teorías formuladas por Alfred Thayer Mahan, para quien el dominio del mar representaba la única vía legítima de desarrollo y progreso (Oyarzábal, 2005, p. 222).

A mediados de la década se reavivaron las tensiones con Chile, que tenía un potencial naval más importante que el de Argentina. La situación aceleró la actualización del pensamiento estratégico a partir de las influencias de las ideas de Mahan, y durante la presidencia de José Evaristo Uriburu (1895-1898) y la segunda de Roca (1898-1904) se incorporaron buques y se realizaron construcciones que consolidaron el poder naval con proyección hacia el mar. El concepto mahaniano de “dominio del mar” alentaba la adquisición de cruceros, cruceros-acorazados y buques logísticos para aumentar la potencialidad de la fuerza naval “capaz de imponer su voluntad a cualquier otra que se le opusiera” (Delamer *et al.*, 2010, p. 219). Bajo una estrategia ofensiva, los objetivos a alcanzar fueron la obtención de mayores grados de

velocidad, poder destructivo, capacidad de maniobra y autonomía (Oyarzábal, 2005). De esta forma culminó la transición de la Marina de torpederas y unidades de río hacia una de grandes cruceros-acorazados para maniobrar en espacios marítimos.

Las construcciones antes mencionadas fueron la del Puerto Militar de Bahía Blanca (inaugurado en 1902, hoy denominado Base Naval Puerto Belgrano) y los apostaderos navales de Puerto Madryn, Puerto Deseado, Santa Cruz y Ushuaia. El crecimiento y la profesionalización que estaban alcanzando la Marina de Guerra y también el Ejército, influyeron para que en 1898 el Ministerio de Guerra y Marina se dividiese y se crease uno para cada fuerza (Oyarzábal, 2005). En 1898 se adquirió también la fragata *Sarmiento*, destinada a cumplir funciones como buque-escuela para los cadetes del último año de la Escuela Naval Militar, con la misión de forjar oficiales marinos en los mares del mundo (Destéfani, 1979).

Para Enrique González Lonzieme, en los últimos años del siglo XIX la Marina argentina comenzó a figurar entre las flotas más poderosas del mundo, y su broche de oro fue la adquisición en 1896 de un crucero –el *Buenos Aires*– y en 1898 de cuatro cruceros-acorazados –el *San Martín*, el *Belgrano*, el *Pueyrredón* y el *Garibaldi*– que “dieron a nuestra flota de combate un poder que pesó sustancialmente en las decisiones chilenas de aceptar las negociaciones diplomáticas en el diferendo de límites” (González Lonzieme, 1970, pp. 265-266).

En efecto, el 15 de febrero de 1899 se llegó a un acuerdo con los trasandinos –llamado el “Abrazo del Estrecho”– entre el presidente argentino Roca y el presidente chileno Federico Errázuriz, en Punta Arenas. La pacificación terminó de concretarse con los “Pactos de Mayo” el 28 de mayo de 1902, firmados por los cancilleres de ambos países en Santiago de Chile.

Cabe mencionar que la política territorial del Estado argentino en construcción se articuló en función de un proyecto de país moldeado por los valores sociales y culturales de elite política del último cuarto del siglo XIX, conocida como la Generación del Ochenta (Zusman, 2000). Estos buscaron incorporar al nuevo Estado en el proceso mundial de modernización capitalista, y para ello consolidaron una economía agroexportadora y conformaron un Estado liberal bajo la forma republicana de gobierno. Según Zusman (2000), “la incorporación de Argentina al mercado mundial y la formación de un



estado liberal era acompañada por la adopción de un conjunto de valores culturales que significarían su inserción en el mundo occidental” (p. 60). Estos valores eran los de “civilización” y “progreso”, que “actuaban de marco ideológico que cubría el proyecto nacional estatal” (p. 60).

La formación de instituciones científicas (organismos, universidades, museos, academias, sociedades, etc.) y la contratación de especialistas extranjeros para que sirvieran a estas, cumplieron –según la autora– un papel clave en el proyecto civilizatorio de formación territorial del Estado argentino. El Instituto Geográfico Argentino, institución privada creada en 1879 cuyas actividades contaron con amplio apoyo del Estado y cuyo primer director fue el doctor Estanislao Zeballos, fue un gran promotor de la apropiación territorial de la Patagonia e incluso de la Antártida.

Las expediciones de carácter científico-militar que permitieron el conocimiento, la apropiación, ocupación y colonización de los territorios considerados por la élite política liberal de la época como desiertos (es decir, habitados por pueblos sin formas “civilizadas” de organización social y cultural), utilizaron las mismas estrategias que aplicaron los países europeos en la colonización que estaban realizando en aquella época en Asia y África. Esto permitía que aquella élite liberal “sintiese que su proyecto territorial se situaba al mismo nivel que los proyectos territoriales coloniales, que su acción colonizadora respecto de los indígenas fuera equivalente a la que aquéllos estaban realizando con los habitantes de ultramar” (Zusman, 2000, p. 62). Cabe destacar en este sentido, que el contenido racista de los valores sociales y culturales de la mencionada élite política derivó en que aquel proyecto territorial se llevara a cabo mediante la aniquilación de pueblos nativos. Recordemos estas aclaraciones a la hora de analizar los discursos de Sobral sobre la Antártida.

Es así como llegamos a los primeros años del siglo XX, cuando los espacios territoriales y marítimos del sur son incorporados a la estrategia de proyección nacional que, como veremos, incluirá a las islas del Atlántico Sur y a la Antártida. En este marco sociohistórico se desarrolló la corta carrera militar de José María Sobral y el Estado argentino realizó sus primeras acciones en la Antártida de la mano de la Marina de Guerra.

## Trayectoria militar de José María Sobral

Antes de entrar de lleno en el tema, es necesario hacer unos comentarios sobre las diversas generaciones de marinos que protagonizaron la transición de una Armada de los ríos a una con proyección marítima entre la década de 1870 y comienzos de 1900. Estos son fundamentales para comprender la trayectoria y la obra de Sobral.

De acuerdo con la clasificación de Oyarzábal (2005), identificamos tres generaciones de oficiales: los de *la marina tradicional*, los de *la marina de la transición* y los *marinos de la generación del ochenta*. Según la tesis del autor, este último grupo, que surgió de las primeras promociones egresadas de la Escuela Naval Militar, fue el que impulsó –a medida que iba ascendiendo en la escala jerárquica de la Armada– los grandes cambios que apuntalaron la mencionada transición. La misma no solo se produjo en las concepciones militares y estratégicas, sino también en cuanto a lo organizacional y administrativo. A medida que se proyectaba hacia el mar, la Armada iba estructurando y profesionalizando su organización institucional.

Los oficiales de la marina tradicional fueron los protagonistas de los primeros años de la organización de la Armada en la década de 1870, durante la presidencia de Sarmiento, y ocuparon los principales puestos hasta entrada la década de 1880 (Oyarzábal, 2005). Algunos fueron figuras relevantes de las guerras civiles previas a la organización nacional y de la Guerra del Paraguay. Esta primera camada se caracterizó por la diversidad de orígenes y por la falta de una formación profesional y cultural homogénea. Cada uno provenía de diferentes experiencias, por lo que se dificultaba la incorporación de los nuevos reglamentos. En aquel momento, la evolución de la Armada dependía mucho de la impronta individual con la que cada oficial conducía sus responsabilidades. Cada uno imponía su propio criterio y ello llevaba a rivalidades y tensiones más de carácter personal que profesional.

Estos marinos no tenían formación académica; por el contrario, habían forjado sus conocimientos en los campos de batalla. Tenían, además, vínculos y compromisos con las diversas facciones políticas e incluso habían participado en bandos diversos en las revueltas de 1874, encabezada por Ricardo López Jordán, o de 1880, por Carlos Tejedor. A pesar de ello, “se fue conformando un cuerpo de oficiales permanente que, aunque escaso en número, se manifestaba

con continuidad, y en su seno se generaron las primeras discusiones tendientes a lograr la organización definitiva” (Oyarzábal, 2005, p. 320).

Por su parte, el grupo de los marinos de la transición estuvo conformado en su mayoría por veteranos de la Guerra del Paraguay. Estos oficiales se caracterizaron por una mayor prescindencia de lo político y por escuchar y alentar los proyectos e ideas de los oficiales más jóvenes de las primeras promociones de la Escuela Naval Militar, quienes, al estar mejor preparados académicamente que sus antecesores, concibieron ideas y proyectos orientados a superar las deficiencias estructurales de la Marina. Estas ideas las expresaron a través del Centro Naval, creado por estos jóvenes marinos en 1882.

Oyarzábal describió a estos últimos como los marinos de la Generación Del Ochenta. Según afirma, este grupo:

Se constituyó en los primeros años de la década de 1880 y apareció como consecuencia y reacción de lo sucedido durante el decenio anterior. La fe en el progreso, y la confianza en el potencial nacional y en sus propias capacidades, definen el espíritu de estos hombres que surgían a la actividad profesional en el mismo momento en que Roca comenzaba a digitar los hilos de la política argentina. El grupo estaba constituido por oficiales navales formados académicamente en el país y en escuelas navales extranjeras (...) Se trataba del sector ilustrado que, animado por ideales coincidentes y comprometido en un proyecto de transformación social, se identificaba categóricamente con las miras, metas y objetivos reconocidos por los hombres de la llamada Generación del Ochenta (2005, pp. 322-323).

Esta generación de marinos se hizo cargo de la conducción de la Armada entrada la década de 1890, en el momento en que aumentaban las tensiones con Chile. Su impulso y energía, sumados a la situación internacional, generaron las condiciones favorables para que desde el Gobierno se terminara de estructurar una Marina de Guerra moderna en lo operativo, lo técnico, lo administrativo, lo profesional, lo educativo y en el plano estratégico y geopolítico. Estos marinos no solo se limitaron a pensar las cuestiones propias de su área, sino que se proyectaron más allá y debatieron cuestiones de interés nacional. Para los oficiales de la Marina –y también del Ejército– las cuestiones militares eran únicamente una parte de su función primordial,

que era aportar al crecimiento nacional y al interés del país (Oyarzábal, 2005). Prueba de ello en la Armada fueron las expediciones, los estudios científicos, la integración de comisiones de límites, los balizamientos en costas del sur y en los ríos internos, la instalación de puertos y observatorios meteorológicos.

Planteada esta cuestión, pasamos a analizar la trayectoria militar de nuestro oficial de marina. José María Sobral nació el 14 de abril de 1880 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Luego de rendir exámenes, a fines de 1894 y con catorce años de edad, ingresó a la Escuela Naval Militar, que desde 1893 funcionaba en lo que fue la residencia de Juan Manuel de Rosas en Palermo, (Buenos Aires).

Como indica Oyarzábal (2005), el proceso de organización de la Escuela Naval desde su creación en 1872, si bien progresivo, también fue muy problemático, cargado de marchas y contramarchas. La falta de un establecimiento adecuado, las continuas mudanzas, la carencia de materiales y recursos necesarios, la discontinuidad de proyectos, los cambios constantes en las reglamentaciones y en los planes de estudios, los problemas para regularizar los viajes de instrucción, fueron los principales ejes de las críticas que los jóvenes oficiales realizaban desde la prensa o el Boletín del Centro Naval.

Según el reglamento orgánico y el plan aprobado en 1894, los estudios pasaron de durar cinco a cuatro años (Burzio, 1972). Algunas de las materias a cursar eran aritmética, álgebra, geometría, física, química, cálculo diferencial e integral, mecánica, artillería, torpedos, hidrografía, astronomía y navegación, oceanografía, derecho internacional marítimo, historia, geografía, francés, inglés y alemán. También se practicaban deportes como esgrima y natación (Destéfani, 1979). Según Alfio Puglisi (2016), el currículo diseñado por Francisco Beuf y Eugenio Bachmann<sup>10</sup>, ambos directores de la Escuela Naval entre 1881 y 1892, tenía un “sesgo enciclopédico” (p. 137), lo cual respondía a que:

El país necesitaba oficiales con una formación polivalente, pues, además de navegar mar afuera, debían actuar en apoyo de misiones

---

<sup>10</sup> Francisco Beuf (1834-1899) y Eugenio Bachmann (1835-1896), de origen francés el primero y austríaco el segundo, fueron oficiales de la marina de sus respectivos países, a la que se dieron de baja antes de emigrar a la Argentina. Los dos fueron destacados astrónomos que cumplieron un papel relevante en importantes instituciones científicas del país (Puglisi, 2011).

científicas relacionadas con la determinación de límites y el relevamiento cartográfico, por lo que se necesitaba contar con una buena preparación en astronomía y en topografía (Puglisi, 2016, p. 137).

Las direcciones de Beuf y Bachmann fueron importantes para el progreso de la Escuela Naval, más allá de no haberse resuelto sus problemas estructurales. Entre 1893 y 1900, período en que estuvo en Palermo, la Escuela tuvo seis directores (Burzio, 1972).

Por problemas de salud, Sobral fue dado de baja en septiembre de 1895. Sin embargo, una vez recuperado, en diciembre reingresó. Producto de los vaivenes de la institución educativa, en octubre de ese mismo año se volvieron a modificar los reglamentos y el plan de estudios, y la duración del curso se estableció en tres años. Hubo una nueva modificación en 1897 y 1898, que restableció los cuatro años de duración. Según los autores consultados, estos sucesivos cambios respondieron a la incorporación de medios navales que generaron problemas de escasez de oficiales y al aumento de las tensiones con Chile (Burzio, 1972; Destéfani, 1979; Oyarzábal, 2005).

En 1898, debido a todos estos cambios, egresaron cuatro promociones: de la 22.º a la 25.º. Sobral egresó como guardiamarinas junto con otros camaradas de su promoción (la 24.º) el 8 de agosto de aquel año (Burzio, 1972). El entrerriano, que “nunca fue de los mejores estudiantes” (Destéfani, 1979, pp. 26-28), ocupó el puesto 19.º en el orden de mérito, el último de su camada<sup>11</sup>. Recordemos que el orden de mérito de egreso no solo influye en la posición relativa de los guardiamarinas en el inicio de su carrera, sino que puede proyectarse posteriormente en el desarrollo de la misma, dado que deberán hacer notables méritos para poder ascender en la jerarquía de los miembros de su propia promoción.

El primer destino de Sobral fue, a finales de agosto, el recientemente incorporado crucero-acorazado *San Martín*, uno de los cuatro buques de este tipo adquiridos en 1898, en el contexto de las crecientes tensiones con Chile. El buque se hallaba fondeado cerca de Punta Piedras en la desembocadura

---

<sup>11</sup> En realidad, el 8 de agosto de 1898 hubo en total 20 egresados (Burzio, 1972). El vigésimo oficial fue un becado uruguayo que, al ser extranjero, no se contabilizó en el orden de mérito.

del Río de la Plata, por lo que las tareas se hacían rutinarias. Allí Sobral se desempeñó como ayudante oficial de guardia (Destéfani, 1979).

Tres meses después, fue destinado a la también recién adquirida fragata *Sarmiento*, que ante la disminución de las tensiones con Chile, se preparaba para hacer su primer viaje de instrucción alrededor del mundo (Destéfani, 1979). El buque partió desde Buenos Aires en enero de 1899. Su comandante fue el capitán de navío Onofre Betbeder, futuro ministro de Marina, y entre la oficialidad de la nave se encontraba Julián Irizar, a cargo de la derrota del barco (Destéfani, 1979). Luego de veintidós meses de viaje, la fragata *Sarmiento* arribó el 30 de septiembre de 1900 al puerto de Buenos Aires.

Como explica Laurio Destéfani (1979), en estas travesías “el resultado es generalmente el guardiamarina convertido en un hombre, que ha gozado y sufrido, se ha emocionado y ampliado su horizonte y su criterio” (p. 30). En el viaje complementaron con la práctica lo aprendido en los cursos. De esta forma, el 9 de octubre de 1900 los guardiamarinas tripulantes de la *Sarmiento* –entre ellos Sobral– fueron ascendidos a alférez de fragata. “Eran entonces verdaderos oficiales, pues se consideraba al guardiamarina un oficial ‘a medias’” (Destéfani, 1979, p. 42).

El 11 de octubre del mismo año fue destinado a la cazatorpedera *Espora*, apostada en Río Santiago. El buque fue adquirido en 1891, cuando la Marina comenzó a proyectarse hacia el dominio del mar. Allí estuvo poco tiempo, ya que al mes fue trasladado al crucero *Patria*, adquirido en 1895 en plena consolidación del poder naval marítimo y perteneciente a la División del Río de la Plata. Su comandante era el teniente de navío Julián Irizar. En este crucero, Sobral se desempeñó como oficial de cargo y de guardia (Destéfani, 1979).

Dos meses después, en enero de 1901, fue destinado al aviso *Tehuelche*, al mando del teniente Francisco Borges, que estaba preparado para salir en comisión hidrográfica a la costa patagónica. Allí ocupó el cargo de segundo comandante. Entre el 26 de enero y el 31 de mayo el *Tehuelche* zarpó hacia los mares del sur y llegó hasta Santa Cruz, donde se realizaron trabajos hidrográficos, se establecieron estaciones meteorológicas, se repararon balizas y se hicieron diversos sondeos (Destéfani, 1979).

Una vez terminado ese viaje, Sobral volvió al buque *Patria*, el cual debía trasladarse a la Base Naval de Puerto Belgrano para permanecer allí. Dos meses después, en agosto, fue trasladado al crucero-acorazado *Belgrano*,

asentado en el mismo puerto militar. El *Belgrano* fue uno de los cuatro cruceros-acorazados adquiridos en 1898 y era de los más potentes de la Armada. Allí se desempeñó, a comienzos de octubre, como ayudante del jefe de la División Bahía Blanca (Destéfani, 1979). A mediados del mismo mes, se fracturó el pie por accidente, a raíz de lo cual fue internado en el Hospital Militar. Finalmente, el 28 de noviembre de 1901, con 21 años de edad, Sobral fue informado de que sería parte de la expedición sueca a la Antártida, comandada por Otto Nordenskjöld. A partir de esa fecha pasó a revistar en la División Hidrográfica del Ministerio de Marina. Destéfani (1979) afirma que:

La Armada había fortalecido y forjado su cuerpo para la fatiga, había disciplinado su mente con el estudio, forjado su carácter y preparado su futura actuación profesional con conocimientos de navegación, hidrografía, oceanografía, torpedos, etc. En fin, lo había preparado para muchas contingencias, aun para pasar dos años entre los hielos del Polo Sur (Destéfani, 1979, p. 45).

A su regreso a fines de 1903, y como producto de su importante labor antártica, fue nombrado socio honorario del Círculo Militar y del Centro Naval Argentino (Destéfani, 1979). El 17 de octubre de aquel año, mientras se encontraba todavía en la Antártida, Sobral fue ascendido a alférez de navío.

El 26 de febrero de 1904 fue destinado al acorazado *Almirante Brown* donde permaneció ocho meses, hasta que el 27 de octubre fue asignado al crucero *9 de Julio*, que se encontraba en el Río de la Plata (Destéfani, 1979). El *Almirante Brown* fue el primer acorazado que se adquirió en 1881, durante la primera presidencia de Roca, y en aquel momento representó “algo verdaderamente revolucionario” (González Lonzieme, 1970, p. 265). El 9 de Julio, por su parte, se incorporó en 1891.

La estadía en la Antártida despertó en Sobral el interés por el estudio de las ciencias geológicas. Su experiencia polar sumada a su preparación científica podría haberlo convertido en un hombre extremadamente valioso para la Armada y para los intereses argentinos en la Antártida. Pensando que sus estudios podrían complementar su carrera militar, solicitó permiso a las autoridades de la Marina para estudiar geología en la Universidad de Upsala, en Suecia, donde se encontraba Nordenskjöld. Ante la negativa de la Armada,

pidió su baja, que le fue otorgada el 30 de diciembre de 1904. En agosto de 1905 marchó finalmente a Suecia para realizar sus ansiados estudios. De esta manera concluyó la corta carrera militar de este pionero antártico cuya importancia para la soberanía argentina en aquellos territorios australes se relatará a continuación.

## La expedición sueca y la Armada Argentina en la Antártida

Como mencionamos, la extensión del Estado nacional hacia el sur derivó en la proyección naval hacia el Atlántico Sur y la Antártida. En efecto, a partir de los tratados limítrofes con Chile en 1881, que minimizaron la posibilidad de conflictos por la Patagonia con el país vecino, surgieron diferentes proyectos de expedición antártica desde diversos sectores de la sociedad, tanto de interés económico-comercial como científico, que en su mayoría se canalizaron a través del Instituto Geográfico Argentino (Genest, 2013). Algunos contaron incluso con el apoyo de oficiales de la Armada (Capdevilla y Comerci, 1986). Sin embargo, ante la prioridad de consolidar definitivamente el dominio sobre la Patagonia y su costa marítima, no pudieron concretarse.

Al acentuarse la tensión con los trasandinos a fines del siglo XIX, el interés antártico se mantuvo contenido, pero su resolución a partir del “Abrazo del Estrecho” (1899), sumada a la capacidad de proyección naval que el país había logrado en ese tiempo, permitió que aquel interés comenzara a encontrar espacios de concreción. Dos congresos internacionales de geografía –Londres (1895) y Berlín (1899)– fueron vitales en este sentido. En ellos se reconoció la necesidad de profundizar los estudios científicos sobre la Antártida (Capdevilla y Comerci, 1986), el último lugar del globo que permanecía inexplorado casi en su totalidad y que todavía guardaba grandes misterios para la ciencia. Una de las recomendaciones del congreso de Berlín fue realizar observaciones científicas de forma coordinada y en simultáneo en diversas regiones antárticas, para lo cual se organizaron tres expediciones<sup>12</sup>, conocidas en su conjunto como Gran Expedición Antártica Internacional, y se

---

<sup>12</sup> La expedición inglesa comandada por Robert Scott (1901-1904) que se dirigió a la “Tierra de Victoria” al sur del océano Pacífico; la expedición alemana al mando de Erich Von Drygalski (1901-1903) que partió hacia la “Tierra de Guillermo II”, al sur del Índico; y la expedición sueca de Nordenskjöld (1901-1903) (Dietrich, 2003). Posteriormente se incorporaron la expedición escocesa de Williams Bruce y la francesa de Jean Baptiste Charcot.



le solicitó a la Argentina instalar un observatorio meteorológico-magnético en el sur patagónico. Las autoridades nacionales aceptaron la solicitud en octubre de 1900 y delegaron su concreción en la Armada (Capdevila y Comerci, 1986).

La incorporación del país al desarrollo de las investigaciones científicas internacionales en territorios que se consideraban propios derivó en la articulación de un primer Plan Antártico, citado en la obra de Enrique Pierrou *90 años de labor de la Armada Argentina en la Antártida* (1975), con los siguientes puntos:

- 1- Instalación del observatorio en la Isla Año Nuevo con carácter permanente;
- 2- Viaje a la costa oeste de la península antártica para instalar otro observatorio;
- 3- Se arbitrarían medios para adquirir buques balleneros o adecuar algunos existentes;
- 4- Se trataría de formar expertos polares para lo cual se embarcarían oficiales en algunos buques de alguna de las expediciones internacionales antárticas (p. 125).

En consonancia con el plan trazado, el observatorio de la isla Año Nuevo fue inaugurado en febrero de 1902 y puesto bajo la dependencia del Ministerio de Marina, que designó director del mismo al teniente de navío Horacio Ballvé. Se planeó un viaje expedicionario a la región del estrecho de Garleche para la instalación de otra estación en la isla Booth-Wandel; ante la complicación de adquirir buques adecuados, se acondicionó la corbeta *Uruguay* –incorporada en la “Escuadra de Sarmiento” como cañonera en 1874– para realizar las operaciones en los mares del sur y se acordó incorporar al joven oficial de la Armada José María Sobral a la expedición sueca (Pierrou, 1975). De estos hechos nos ocuparemos a continuación.

La expedición que Nordenskjöld planificó realizar en la península antártica completaba en territorio antártico los estudios que realizaba el observatorio argentino desde Tierra del Fuego. En el proceso de coordinación de acciones con las autoridades nacionales, el sueco recibió una carta de Ballvé expresándole que le gustaría que un oficial de la Armada fuese parte de la expedición “como representante del gobierno argentino”; a cambio el país ofrecía carbón y víveres, y prestaría apoyo logístico desde Ushuaia, solicitud que el explorador nórdico aceptó (Destéfani, 1979; Pierrou, 1975). El oficial seleccionado fue

el alferez de fragata José María Sobral, quien por aquel entonces prestaba servicios en el acorazado *Belgrano*, aunque por un accidente se hallaba en rehabilitación en el Hospital Militar. El 28 de noviembre se le informó de su nuevo destino y el 1 de diciembre dejó el hospital (Destéfani, 1979).

El 18 de diciembre Sobral recibió el comunicado del ministro de Marina, Onofre Betbeder, donde se le informaba que había sido designado para formar parte de la expedición sueca y se le instruía que:

De acuerdo con lo convenido con el Doctor Nordenskjöld Ud. tomará parte en todas las observaciones magnéticas, meteorológicas y oceanográficas que lleva a cabo dicha expedición y formará parte de toda expedición y comisión de detalle que se destaque con cualquier fin. (...) Este Ministerio ha dado órdenes para que en Ushuaia se entregue al Antarctic el carbón que solicite y se ha dirigido al Gobernador de Tierra del Fuego pidiendo le preste los auxilios que requieran y crea convenientes; en compensación de cuyas ventajas se ha ofrecido llevar abordo a un Representante de este Gobierno... (Destéfani, 1979, pp. 66-67).

Los expedicionarios a bordo del *Antarctic* partieron el 21 de diciembre del puerto de Buenos Aires rumbo al sur. El capitán del buque fue el noruego Carl Larsen, experimentado navegante polar. El 12 de febrero de 1902 llegó a la isla Cerro Nevado donde desembarcaron seis tripulantes, entre ellos, Nordenskjöld y Sobral. Tal como estaba planificado, el buque pasaría a recogerlos en el verano siguiente. En Cerro Nevado construyeron una cabaña que les sirvió de refugio durante el invierno. Los trabajos que allí se realizaron fueron estudios de meteorología, magnetismo, gravimetría, astronomía, geología, geodesia y recolección de fósiles vegetales y animales (Sobral, 2015).

En noviembre de 1902 el *Antarctic* emprendió la vuelta en busca de los expedicionarios. Sin embargo, la dificultad que presentaba el régimen de hielos en el extremo norte de la península antártica hizo que el barco sufriera algunos inconvenientes al realizar su marcha. Ante la dificultad de llegar a Cerro Nevado pasando por el hoy llamado estrecho de Antarctic, se decidió que tres tripulantes desembarcaran en bahía Esperanza. La idea era que llegaran en trineo a la estación invernal y, si el buque no aparecía allí para determinada fecha, regresaran con Nordenskjöld nuevamente a la bahía para ser recogidos (Dietrich, 2003). Mientras tanto el *Antarctic* intentaría llegar

a Cerro Nevado penetrando el mar de Weddell y alcanzando la isla desde el este. Finalmente, en febrero de 1903 el buque quedó atrapado por hielos cuya presión destruyó el casco y ocasionó su hundimiento. Larsen y su tripulación, que se encontraban bastante lejos de tierra, llegaron a la isla Paulet tras una larga travesía por el mar congelado, y allí construyeron un refugio. Por su parte, el grupo de bahía Esperanza intentó llegar a la estación de Cerro Nevado, pero al no poder hacerlo debieron regresar a la bahía y levantar una choza para refugiarse. De esta manera, tres grupos aislados y sin conocer la suerte de los otros se vieron obligados a pasar el duro invierno polar de 1903 subsistiendo en las condiciones más inhóspitas.

Al pasar la fecha límite de regreso (30 de abril) sin tener noticias del *Antarctic*, se intuyó que algo había ocurrido. Tanto desde Suecia como desde Francia se comenzó a preparar un rescate. Por su parte, el gobierno argentino también empezó a organizar una expedición de salvamento (Destéfani, 1979). El buque elegido para navegar en las aguas del extremo sur fue la corbeta *Uruguay*, que no estaba preparada para semejante viaje, por lo que tuvo que ser refaccionada. Luego de su reacondicionamiento, el 8 de octubre de 1903, ante la presencia del presidente Julio A. Roca, la *Uruguay* zarpó de Buenos Aires. Su capitán fue el teniente de navío Julián Irizar que, como vimos, conocía a Sobral del viaje de instrucción de la fragata *Sarmiento* y del crucero *Patria*.

La expedición no solamente fue humanitaria, sino que también tuvo carácter científico. El Ministerio de Marina instruyó a Irizar para “sacar los mayores beneficios posibles de la expedición, para lo cual aprovechará V. las oportunidades favorables para hacer las colecciones zoológicas y botánicas y recoger todos los datos científicos que le sea posible” (Destéfani, 1979, p. 177).

Mientras tanto, pasado el invierno, los hombres de bahía Esperanza emprendieron su viaje a la isla Cerro Nevado y en las cercanías se encontraron con Nordenskjöld el 14 de octubre, que estaba realizando una patrulla de estudios. Pasados unos días, el 8 de noviembre llegaron a la estación invernal los hombres de la corbeta *Uruguay*, y poco después, el grupo de Larsen.

Cumplida la misión, el 2 de diciembre de 1903 el buque arribó con los expedicionarios<sup>13</sup> –Sobral entre ellos– a Buenos Aires, donde fueron recibidos

---

<sup>13</sup> Se debió lamentar la muerte de uno de los naufragos del *Antarctic*, el marinero Ole Wenneesgaard, quien falleció durante la invernada en la Isla Paulet (Dietrich, 2003).

por una multitud y aclamados como héroes.

Merecen destacarse algunas reflexiones de Sobral, volcadas en su libro *Dos años entre los hielos 1901-1903*. Allí, rememorando el desembarco de los expedicionarios en febrero de 1902 en la isla Cerro Nevado, manifestó la idea de poblamiento de la Antártida, a la que concebía como una extensión de la campaña de conquista patagónica:

Lo he creído en aquella época y continuó creyendo, que la República Argentina ha debido tomar posesión de esas tierras australes. Antecedentes históricos robustecen y dan gran fuerza a estas opiniones. En general, las posesiones que las naciones europeas tienen en los continentes asiáticos y africano, comenzaron por exploraciones de estudio y terminaron por expediciones armadas.

En las regiones antárticas, la vida es penosa (...) En la zona tórrida, donde están comprendidas muchas posesiones de pueblos europeos a que he aludido, es también muy penosa la vida porque el calor es insoportable, pero este calor excesivo se neutraliza con los recursos de la civilización, lo mismo puede hacerse con los fríos glaciares (...) Hace aún pocos años, nuestra Tierra del Fuego era habitada solamente por el salvaje; hoy tenemos allí un Territorio Nacional, un pueblo naciente y un gobierno regular con un radio de acción, donde se respeta la Soberanía Nacional.

Pues esto mismo es lo que en mi concepto se debe hacer en las tierras subpolares, cuyos mares, con más o menos dificultades puede navegarse en cualquier estación del año y que ofrecen pingües beneficios con las pesquerías que allí pueden establecerse (Sobral, 2015, pp. 118-119).

En la conclusión del libro, afirmó lo siguiente:

Si no es una expedición costada por el gobierno, yo creo que no se hará nada; no me parece que en la Argentina tengamos hombres como el sueco Dikson, que dediquen parte de su fortuna al progreso de la ciencia.

Aunque a muchos no les parezca, nuestros futuros intereses en los mares del sur están en juego; de los pasos que demos estos años, dependerán nuestros derechos en los venideros; todo lo que está al este del meridiano

70 es nuestra natural herencia y no debemos abandonarla; exploremos al sur, que todavía no sabemos todas las riquezas que nos puede dar (p. 302).

Muchas expediciones polares de la llamada “etapa heroica” de las exploraciones antárticas (entre fines del siglo XIX y comienzos del XX) tenían financiamiento privado; la de Nordenskjöld es un ejemplo. Por ello, para el caso argentino, Sobral remarcó el rol del Estado nacional como fundamental para la actividad del país en el sexto continente.

Para Sobral, la importancia de la Antártida se explicaba por todos los beneficios que su conocimiento podría traer al desarrollo de la ciencia y por las riquezas naturales que se podrían encontrar allí. En una conferencia que dio el 19 de diciembre de 1903 en el Teatro Politeama, a pocos días de su regreso, dijo lo siguiente:

Se oye decir con frecuencia ¿qué interés puede tener una expedición polar? ¿Qué beneficio puede ella reportar a la humanidad? Para unos una expedición polar, puede significar dinero; para otros, solamente adelanto en la ciencia. Para el profano de estas cosas (...) no significa nada (...) No digo para un hombre de ciencia; para todo aquel que tenga una idea de la importancia de esas cuestiones (...), el simple hecho de explorar lo desconocido, justifica los gastos de un viaje y aún el sacrificio de las vidas; pero cuando se considera que esas observaciones, esos estudios, pueden dar oro, cuando se sepa que algunas de ellas pueden facilitar muchísimo las expediciones de exclusivo carácter comercial, entonces, esos mismos que antes se encogían de hombros, tendrán que concordar con el beneficios de ellas (Destéfani, 1979, p. 74).

Por último, Sobral aludió a la conquista de la Antártida como una extensión de la incorporación de la Patagonia al Estado nacional:

Hace pocos años nuestra Patagonia era una leyenda, nuestros mares del sur inspiraban espanto, y los regulares y placenteros viajes que hoy se hacen hasta el Estrecho, eran en esa época atrevidas aventuras, que hacían dudar del criterio de quienes las realizaban. Un poco de resolución inspiró nuestra conquista del territorio en donde imperaba la ignorancia, y un plan bien combinado destruyó las fronteras de la barbarie y del montonero,

y desde ese feliz momento desapareció del suelo argentino el salvaje, a quien le fueron arrancados sus dominios, en nombre de la civilización.

Exactamente igual, sucede con el casquete polar antártico, adonde, en vez de mandar ejércitos de soldados, debemos llevar legiones de estudiosos, y así, en consonancia con el carácter nacional, en una sola vez, de un solo golpe, debemos romper esas nieves perpetuas, que no se amalgamarán jamás, porque se lo impedirán los ardientes rayos de la vida civilizada que alimentan el sagrado fuego del progreso (Destéfani, 1979, p. 76).

Es interesante observar cómo en las palabras de Sobral se refleja claramente, por un lado, la articulación entre el discurso de “civilización” y “progreso”, y, por el otro, el proyecto territorial de la elite liberal que lideró el proceso de formación del Estado nación argentino entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

### Consecuencias de la expedición sueca y del rescate de la corbeta *Uruguay*

El regreso de la corbeta *Uruguay* generó un clima de euforia y entusiasmo en buena parte de la sociedad argentina. El tema estaba en boca de una enorme cantidad de personas; los diarios se hacían eco de la noticia; el país recibía felicitaciones de todas partes del mundo por el rescate; múltiples desfiles, recepciones, condecoraciones y discursos se realizaron en los días posteriores al regreso. Como afirma Destéfani (1979):

Por primera vez se sintió colectivamente la presencia de la Antártida y se pensó en ella como tierra argentina, en su proximidad, en su influencia, en que estaba allí, detrás del Drake, como un desafío a nuestra iniciativa y vigor (...) Se empezaba a formar la conciencia antártica argentina (Destéfani, 1979, pp. 201-202).

Esta explosión de euforia antártica rindió sus primeros frutos. El puerto de Buenos Aires se había convertido en una especie de puerta de entrada a la Antártida y por allí pasaron en 1904 la expedición francesa al mando de Jean

Baptiste Charcot<sup>14</sup> y la expedición escocesa de William Bruce<sup>15</sup>. Este último instaló, en su paso por las islas Orcadas, un observatorio meteorológico en la isla Laurie, y al notar el interés que se había generado en el país por la Antártida, se lo ofreció al Gobierno del presidente Julio A. Roca. De esta forma, el país adquirió el observatorio, que pasó a manos nacionales el 22 de febrero de 1904, y así se constituyó en el primer asentamiento permanente en el Continente Blanco y el único durante casi cuarenta años. En el preámbulo y el considerando del decreto del 2 de enero con el que se oficializó el traspaso se hace mención a las intenciones del país de instalar observatorios meteorológicos “en los mares del sur de la República” y se afirma la “conveniencia científica y práctica [de] extender a dichas regiones las observaciones que se hacen en la isla Año Nuevo y el Sur de la República” (Destéfani, 1979, p. 224). El nuevo observatorio fue puesto bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, con el objetivo de hacer el primer relevo del personal de la estación de Orcadas, y al no haber noticias de la expedición de Charcot, a fines de 1904 la corbeta *Uruguay* emprendió una nueva misión de rescate. Por segunda vez la Armada nacional surcaría los mares antárticos, en esta ocasión por las aguas cercanas a las islas Shetland del Sur<sup>16</sup>.

Otra consecuencia fue la instalación de la Compañía Argentina de Pesca S. A. en diciembre de 1904 en el puerto de Grytviken, en la isla San Pedro de las Georgias del Sur, empresa dedicada a la pesca, industrialización y comercialización de focas y ballenas. Allí también se estableció un año después otro observatorio meteorológico. El fundador y gerente de la compañía fue el noruego Carl Larsen, quien había sido capitán del *Antarctic*. La empresa

---

<sup>14</sup> La de Charcot fue la expedición francesa antes mencionada, que se había dispuesto rescatar a Nordenskjöld y sus hombres.

<sup>15</sup> Otras expediciones antárticas que pasaron por Buenos Aires o Ushuaia en busca de apoyo logístico fueron las comandadas por Adrien de Garleche en 1897, Jean Baptiste Charcot, que vuelve a pasar en 1908, Wilhelm Filchner en 1911, Roald Amundsen en 1911, Ernest Shackleton en 1914 y Richard Byrd en 1939 (Quevedo Paiva, 2001).

<sup>16</sup> Finalmente, los expedicionarios franceses se encontraban en buenas condiciones, pero debido al buen tiempo habían extendido el período de exploración (Fontana, 2014).

de pesca y la estación meteorológica constituyeron la primera ocupación de aquellas islas<sup>17</sup>.

En 1905 se adquirió un buque más adecuado para las tareas antárticas, al que se denominó *Austral*<sup>18</sup>. El mismo fue incorporado con el propósito de realizar los relevos de Orcadas e instalar una nueva estación meteorológico-magnética en la isla Booth-Wandel, al oeste de la península antártica. La iniciativa no se concretó por el naufragio del buque en 1906 cuando se disponía a cumplir su misión.

Como última consecuencia mencionamos la primera disposición oficial para nombrar autoridades políticas en tierras polares. En efecto, el 7 de diciembre de 1906, mediante un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente José Figueroa Alcorta, se designaron autoridades locales (“Comisaría”) dependientes de la Gobernación de Tierra del Fuego, tanto para el Observatorio de Orcadas como para el que se pretendía instalar en la isla Booth-Wandel (Capdevilla y Comerci, 1986).

¿Qué sucedió con Sobral luego de la expedición? El oficial de Marina estaba convencido de la necesidad de incrementar las expediciones de carácter científico con bandera nacional al sur. Según Destéfani, la estadía en la Antártida había despertado en él una vocación por el estudio de la geología y la mineralogía. “Pensó que como oficial de la Marina podría acumular conocimientos y luego ponerlos en práctica, afirmando la soberanía argentina en el sexto continente” (Destéfani, 1979, p. 230).

Pero al denegarle la Armada la posibilidad de desarrollar estudios universitarios en Upsala, Sobral se vio obligado a pedir la baja. Una vez concedida, marchó a Suecia en agosto de 1905 a realizar sus estudios en geología y mineralogía. En ese país estuvo en total nueve años. Allí se casó y tuvo sus primeros hijos. Fue condecorado por el rey de Suecia Oscar II con la Orden de Caballero de la Espada. En 1913 obtuvo su título, que lo convirtió en el primer argentino graduado en geología. Realizó campañas de estudios

---

<sup>17</sup> La soberanía exclusiva en las islas duró poco, ya que en 1906 los británicos impusieron su poderío y obligaron a la Compañía a pagar impuestos por la caza de ballenas al gobierno de Malvinas. A pesar de ello, la existencia de esta empresa, al igual que la del Observatorio de Orcadas, implicaban la presencia naval en los mares del sur por parte de la Armada Argentina para realizar relevos y abastecimientos, y de los buques de bandera nacional de la Compañía (Destéfani, 1979).

<sup>18</sup> *El Austral* fue, antes de ser adquirido, el buque de la expedición de Charcot.



geológicos y geográficos en Suecia, Finlandia, Rusia, Suiza, España, Francia e Inglaterra (Marensi, 2007). En 1914, ante la inminencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, Sobral regresó a la Argentina. Una vez en el país se desempeñó hasta 1930 en la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, dependiente del Ministerio de Agricultura, donde alcanzó el puesto de director en 1922. Allí fue uno de los mentores de la primera ley de minería del país y realizó diversos estudios en Chile, Uruguay, el sur de Brasil y algunas zonas de la Argentina (Patagonia, La Pampa, Mendoza, La Rioja y Misiones). Entre 1918 y 1919 fue profesor de Mineralogía y Geología de la Universidad de Córdoba (Marensi, 2007).

En 1930 dejó la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, cesanteado “por haber sido funcionario del gobierno radical” (Aceñolaza, 2007, p. 57). A partir de entonces y hasta 1932 se desempeñó como cónsul argentino en Noruega. Al regresar, se incorporó a YPF, donde permaneció hasta su jubilación en 1935. Mientras estuvo en esta empresa realizó un estudio geológico de gran importancia y actualidad en el entonces Territorio Nacional de La Pampa.

Sobral nunca se desentendió de las cuestiones antárticas y tanto a lo largo de toda su carrera profesional como luego de su jubilación publicó artículos y notas referidos al Continente Blanco. Por ejemplo, en una entrevista que le realizaron para el diario *Crítica* el 24 de julio de 1939, defendió los derechos argentinos en la Antártida basándose en la conexión geológica y geográfica entre los Andes sudamericanos y antárticos:

La parte sur de nuestro continente, es decir, lo que se ha dado en llamar tierras de Graham, no sólo tiene analogías geográficas y morfológicas con las de la zona austral de nuestra Patagonia, sino también analogías geológicas. (...) Las bases geológicas que en la época de la expedición Nordensjold se tenían eran relativísimas. Sin embargo, los estudios sucesivos han ido confirmando las conclusiones geológicas de numerosos exploradores, todos los cuales sostiene que las tierras polares antárticas son geológicamente una prolongación del continente sudamericano (Sobral, 1939a, s/p.).

En la edición del 2 de agosto de 1939 del mismo diario, Sobral agrega que los derechos naturales de jurisdicción del país “se afirman con los derechos

que da la ocupación permanente de esas tierras por su observatorio de Las Orcadas. (...) Y este es el argumento más poderoso en la defensa de los intereses nacionales en el Sud” (Sobral, 1939b, s/p).

Recordemos que en 1939 se revitalizaron los intereses argentinos en la Antártida al crearse, durante la presidencia de Roberto Ortiz, la Comisión Consultiva Argentina para los Asuntos de las Regiones Antárticas (Quevedo Paiva, 1987). Luego del hundimiento del Austral en 1906, el programa antártico nacional quedó estancado en Orcadas y no se reactivó hasta los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los intereses nacionalistas se proyectaron con renovada fuerza sobre el Continente Blanco y lo convirtieron en escenario de disputas geopolíticas que obligaron al país a tomar medidas al respecto.

Desde comienzos del siglo XX, tres son los países interesados en el mismo sector antártico: Argentina, Chile y Gran Bretaña. Ante la formalización del reclamo chileno a fines de 1940, los cancilleres se reunieron en marzo de 1941 y, aunque no llegaron a un acuerdo de límites, convinieron en que ambos países – Argentina y Chile – son los únicos con derechos a la porción antártica reclamada.

En ese marco, es interesante una reflexión que hizo Sobral sobre esta cuestión en un artículo de su autoría publicado el 31 de marzo de 1941 en el diario *Crítica*. Allí explicó que la cuestión del trazado de límites, además de ser un asunto político-jurídico, también es geográfico. En ese sentido, explicó que Argentina perdió territorio patagónico frente a Chile en los tratados de 1881 por no tener en cuenta esto.

Si los hombres que redactaron el tratado de 1881 se hubieran asesorado por un geólogo o geógrafo, la Argentina nunca lo hubiera suscrito pues ya se sabía, antes de esa época, que en muchos casos la línea divisoria de las aguas no coincidía con el encadenamiento principal de la cordillera. Por ello cuidado con los tratados de límites en estos momentos en que se dice que la Argentina reconoce derechos a Chile en la Antártida y según parece se trata de dividir, parte de ésta, entre ambas naciones (Sobral, 1941a, s/p).

Sobral terminó el artículo manifestándose en contra de “la solución simplista y mala de los ‘sectores’” para trazar fronteras con Chile (Sobral, 31 de marzo de 1941), que históricamente usó el país para delimitar su reclamo antártico. En cambio, afirmó que “la solución científica sería adoptar la vieja

tesis argentina, sustentada por el Dr. Francisco P. Moreno, para los Andes argentino-chilenos, esto es, la línea de las altas cumbres” (Sobral, 31 de marzo de 1941). Según el entrerriano, este criterio no se siguió para la Patagonia y fue así como se perdió territorio en aquella región.

En el mismo sentido, en otra nota de su autoría aparecida en el mismo diario el 4 de mayo de 1941, Sobral sostuvo que las cuestiones sobre la continuidad geográfica y geológica entre Sudamérica y la Antártida –todavía no resueltas del todo por aquellos años– eran de innegable interés para el país:

El estudio de las llamadas Antillas Australes es una misión que se nos ofrece, que está a nuestras puertas. (...) Empero, para llevarlo a cabo es necesario un buen barco-laboratorio equipado para poder luchar contra el hielo e investigar concienzudamente el mar y las islas del arco, desde todos los puntos de vista que exige la ciencia. (...) El conocimiento de la zona circumpolar y polar tiene el mayor interés para nuestro país, que está tan cerca de ellos y en parte recibe su influencia. (...) No podemos limitarnos a afirmar nuestros derechos en el papel. Es necesario que los hechos demuestren no sólo interés burocrático, sino también nuestra acción y dedicación al estudio de esas tierras y mares tan cercanos, cuyas posibilidades no son todavía bien conocidas (Sobral, 1941b, s/p).

Como vemos, Sobral se sirvió de sus conocimientos profesionales para aportar a los debates sobre la cuestión antártica. Finalmente, el entrerriano murió el 14 de abril de 1961, el mismo día de su cumpleaños número ochenta y uno.

## Conclusiones

En la introducción de este capítulo dijimos que el objetivo era desarrollar un estudio sociohistórico en el cual se relacionaran Estado, políticas públicas, agencias estatales y profesión militar. Nuestra hipótesis fue entonces que el estudio de las trayectorias profesionales militares específicas de oficiales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea de Argentina permitiría comprender el modo en que las Fuerzas Armadas contribuyeron a la definición y concreción de la política antártica. Con este fin, hemos realizado un análisis de la trayectoria y del perfil profesional del oficial de marina José María Sobral a través del cual es posible determinar el modo específico en que la Armada

Argentina se proyectó hacia la Antártida y se involucró en la definición de una política pública para esta región.

Al examinar su trayectoria militar, observamos cómo la carrera de Sobral se desarrolló en el período de organización y profesionalización de esta Fuerza y de consolidación del poder marítimo nacional que la llevaría a proyectarse sobre la Antártida. Su paso por las diversas unidades adquiridas luego de 1880 en los momentos en que la Marina de Guerra se proyectaba hacia el mar, y su formación científica recibida en la Escuela Naval Militar –que preparaba oficiales no solo para la guerra sino subsidiariamente para servir como apoyo en misiones científicas destinadas a la determinación de límites y el relevamiento cartográfico en los nuevos espacios marítimos y patagónicos ocupados–, fueron casi un antecedente de la figura en la que se convertiría: un pionero de las actividades nacionales en la Antártida. Estos aspectos son los que transformaron a Sobral en un exponente de lo que Guillermo Oyarzábal (2005) caracterizó como “marinos de la Generación del Ochenta”, que previamente definimos como la generación que impulsó los cambios que transformaron a la Armada en una institución moderna, organizada y profesionalizada, que no solo discutía cuestiones de su propio ámbito sino también de interés nacional. De esta manera, el caso de Sobral es contundente en lo que respecta a la producción de una convergencia virtuosa entre el perfil y la trayectoria profesional personal, la historia institucional de la Fuerza y la política nacional antártica.

Destacamos que aquella lectura mencionada en la introducción sobre la autonomía corporativa en el interior del Estado y con relación a la política nacional que históricamente se le adjudicó a las Fuerzas Armadas argentinas –cuyo abordaje ameritaría un estudio en profundidad que excede al presente– pareciera quedar, si no negada, por lo menos sí relativizada en este caso particular de la Armada y la proyección nacional a la Antártida. En efecto, la Marina de Guerra necesitó generar apoyos gubernamentales concretos para poder llevar a cabo sus proyectos antárticos. Recordemos que las iniciativas de expediciones surgidas dentro de la fuerza a fines del siglo XIX no prosperaron, y que recién tuvieron su desarrollo durante el segundo gobierno de Julio A. Roca (1898-1904). Hemos destacado la importancia que tuvo el ascenso de Roca como figura protagónica de la política nacional en la modificación de los criterios geopolíticos que orientaron las acciones gubernamentales hasta

ese momento. A partir de allí, la ocupación de los territorios patagónicos, marítimos y antárticos cobró relevancia en la agenda pública. En este sentido, hasta que no se alcanzó una convergencia de intereses y puntos de vista entre la institución castrense y las autoridades políticas nacionales, los proyectos y planes surgidos en la primera para avanzar sobre la Antártida no rindieron sus frutos.

Ahora bien, nos preguntamos cuánto hubo de iniciativa individual de Sobral y cuánto de decisiones institucionales de la conducción de la Armada en la incursión de la fuerza naval en la Antártida. En efecto, el componente institucional puede apreciarse al remarcar que algunos de los proyectos de expedición antártica del último cuarto del siglo XIX tuvieron el apoyo de la Armada, aunque no pudieron concretarse precisamente por no obtener el apoyo de las autoridades políticas del momento. Recordemos también que los organizadores del Congreso de Geografía de Berlín de 1899 solicitaron a la Argentina instalar un observatorio meteorológico y magnético en la isla Año Nuevo para contribuir a la denominada Gran Expedición Antártica, y que la construcción y administración del mismo fue delegada por el gobierno de Roca a la Armada. Comprobamos entonces que la Antártida ya se encontraba presente de forma embrionaria entre los intereses de la oficialidad superior de la Marina de Guerra, lo que podría considerarse un desenlace natural propio de la apertura de la institución naval a los mares del sur argentino.

Estos pasos iniciales fueron independientes de la figura de Sobral, e incluso su propia participación en la expedición sueca fue parte del plan antártico de 1900 elaborado por la Armada. No fue independiente del oficial entrerriano la intervención definitiva de la Armada en el sexto continente, ya que su presencia significó la primera acción institucional del país en tierras polares, cuyo éxito dependió de sus cualidades personales y profesionales.

No obstante, y sin menospreciar la obra de Sobral y de otros oficiales de la Armada responsables de esa primera presencia nacional en tierras australes, hay que decir que el carácter accidentado del hecho le dio una cuota de aventura y heroísmo a la expedición de Sobral y al rescate de la corbeta *Uruguay* que catapultó la cuestión antártica unos cuantos escalones arriba en los grandes asuntos nacionales. El hecho tuvo trascendencia mundial, que en el contexto nacional de optimismo que reinaba en la Argentina “granero del mundo” de fines de siglo XIX –encaminada a constituirse en una sociedad

moderna y buscando abrirse paso en el concierto de los países avanzados– enalteció a la elite dirigente nacional, que había anotado a la Antártida en su agenda pocos años atrás. Ese fervor fue el que aprovechó el expedicionario escocés William Bruce para vender al Gobierno el observatorio de Orcadas.

Es por ello que si bien su carácter de pionero es indiscutible, el aporte de Sobral a la cuestión antártica –además del cumplimiento satisfactorio de las tareas profesionales que la Armada le encomendó– fue el constituirse como “predicador” de la necesidad de una política antártica orientada por el Estado, algo significativo para una época en la cual las exploraciones antárticas eran financiadas por actores privados.

En efecto, a su vuelta de la expedición polar y antes de su retiro de la Armada, Sobral se abocó a realizar algunas reflexiones y recomendaciones, en escritos y conferencias, acerca de cómo debería proceder el país a partir de aquel momento, aconsejando, entre otras cosas, realizar expediciones científicas y planificar la ocupación y poblamiento del territorio antártico, cuyo ambiente inhóspito confiaba vencer “con los recursos de la civilización”.

Esto es de gran importancia ya que el interés por intervenir en la Antártida surgió, en parte, en la propia sociedad, algunos de cuyos sectores fueron tomando conciencia de la magnitud del espacio territorial nacional, de sus riquezas y potencialidades, y de la necesidad de integrarlo al país. De esta manera, pudimos observar en la investigación la coexistencia y la interacción entre intereses de militares, intelectuales, políticos, científicos y empresarios, considerados como grupos sociales desde los cuales emergieron proyectos orientados a ocupar, defender, investigar, poblar o explotar el continente antártico y cuyas pretensiones rindieron sus frutos cuando confluyeron con los intereses institucionales del Gobierno. La prédica de Sobral en este sentido, cargada de conceptos como los de civilización y progreso –propios de la época modernizadora que se vivía– se realizaba en ámbitos de socialización compartidos por los hombres de ciencia, de letras, de armas y de negocios donde se discutían las grandes cuestiones nacionales y se tomaba posición como opinión pública, con la que pretendían influir en la vida política nacional. El Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, estaba integrado por científicos, militares, historiadores, abogados y exploradores, que estaban muy compenetrados con el proyecto político de la elite liberal gobernante y

fueron influyentes en el proceso de extensión territorial del Estado argentino, incluso en la Antártida.

En esta línea, cabe aclarar que si bien los militares constituyen una agencia estatal –y fue en este sentido que describimos su contribución como instrumento del Estado para la emergencia de la política antártica nacional–, también los percibimos como un grupo social-profesional inscripto en la sociedad, y es en el marco de esta inscripción que pensamos las diversas iniciativas referidas a la ocupación antártica que tuvieron ciertos militares, dentro de los cuales estaba José María Sobral.

Queda para un estudio futuro verificar el valor interpretativo de la hipótesis presentada para los casos de las incursiones en la Antártida del Ejército y la Fuerza Aérea Argentina, las cuales se dieron hacia 1951 durante el gobierno justicialista (1946-1955), en el contexto de una consolidación de la política antártica nacional mediante el inicio de las campañas antárticas de verano y la instalación de múltiples bases con el objetivo de reforzar la presencia nacional en el sexto continente.

## Referencias

Aceñolaza, F. (2007). José María Sobral: De Pionero en la Antártida a la Geología del Oeste Argentino. *Historia de la Geología Argentina. Miscelánea*, 16, 57-58.

Burzio, H. (1972). *Historia de la Escuela Naval Militar* (tomo I). Buenos Aires: Departamento de Estudios Históricos Navales.

Capdevilla, R. y Comerci, S. (1986). *Historia Antártica Argentina*. Buenos Aires: Dirección Nacional del Antártico.

Delamer, G.; Oyarzábal, G; Montenegro, G. J.; Bergallo, J. y Santillán, H. (2010). Evolución del pensamiento estratégico naval argentino a lo largo de la historia. *Boletín del Centro Naval*, 828, 209-200.

Destéfani, L. (1979). *El alférez Sobral y la soberanía argentina en la Antártida*. Buenos Aires: Eudeba.

Dietrich, H. (2003). La corbeta *Uruguay* y el rescate de la expedición Nordenskjöld: centenario 1903-2003. *Boletín del Centro Naval*, 806, 65-76.

Facchin, E. (2013). *Antártida, más allá de la soberanía*. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales.

Fontana, P. (2014). *La pugna antártica. El conflicto por el sexto continente*

1939-1959. Buenos Aires: Guazuvirá Ediciones.

Genest, E. (2013). El Instituto Geográfico Argentino como pionero de la actividad científica en la Antártida. En C. León Wöppke y M. Jara Fernández (Eds.), *Esbozando la Historia Antártica Latinoamericana. Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos 1999-2011* (pp. 37-42). Santiago de Chile: LW Editorial.

González Lonzieme, E. (1970). La Armada Argentina de 1850 a 1950. En R. Caillet Bois *et al.*, *Temas de Historia Marítima Argentina* (pp. 255-269). Buenos Aires: Fundación Argentina de Estudios Marinos.

Marenssi, S. (2007). Doctor José María Sobral (1800-1961): De los hielos antárticos al olvido argentino. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 62(4), 495-497.

Oyarzábal, G. (2005). *Los marinos de la Generación del Ochenta*. Buenos Aires: Emecé.

Pierrou, E. (1975). *90 años de labor de la Armada Argentina en la Antártida*. Buenos Aires: Servicio Hidrográfico Nacional.

Puglisi, A. (2011). La enseñanza de física en la Escuela Naval Militar. *Revista de Publicaciones Navales*, 707, 29-43.

Puglisi, A. (2016). El legado Storni. *Boletín del Centro Naval*, 843, 136-144.

Quevedo Paiva, A. (1987). *Antártida. Pasado, Presente... ¿Futuro?* Buenos Aires: Círculo Militar.

Quevedo Paiva, A. (2001). *Medio Siglo del Ejército Argentino en nuestra Antártida 1951-2001*. Buenos Aires: Dunken.

Senatore, M. X. (2011). Antártida como narrativa. *Vestigios. Revista Latino-Americana de Arqueología Histórica*, 5(2), 159-184.

Sobral, J.M. (1939a). Hubo pingüinos tan altos como el hombre en la tierra de Graham. *Crítica*, 24 de julio de 1939. Extraído del Archivo del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina (Colección Sobral, Caja 2).

Sobral, J. M. (1939b). Una expedición argentina debe reafirmar nuestra soberanía en el Polo Sur. *Crítica*, 2 de agosto de 1939. Extraído del Archivo del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina (Colección Sobral, Caja 2).

Sobral, J. M. (1941a). La Línea de las Altas Cumbres Sería la Solución del Problema Antártico. *Crítica*, 31 de marzo de 1941. Extraído del Archivo del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina



(Colección Sobral, Caja 2).

Sobral, J. M. (1941b). Hubo pingüinos tan altos como el hombre en la tierra de Graham. *Crítica*, 4 de mayo de 1941. Extraído del Archivo del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina (Colección Sobral, Caja 2).

Sobral, J. M. (2015). *Dos años entre los hielos 1901-1903*. Buenos Aires: Eudeba.

Soprano, G. (2016). *¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo XXI*. Buenos Aires: Prometeo.

Zusman, P. (2000). Desierto, Civilización, Progreso. La Geografía del Gran Chaco y el proyecto político territorial de la formación del Estado Argentino. *Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía*, 51, 60-67.



# La profesionalización de los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile a principios del siglo XX

*Hernán Cornut*

## Introducción

Tanto la Argentina como Brasil y Chile experimentaron cambios organizacionales, doctrinarios y logísticos desde fines del siglo XIX a las primeras décadas del XX, cuyo modelo provenía del Viejo Continente y estaba en sintonía con el paradigma de una cosmovisión planetaria eu-rocéntrica. En el caso de la Argentina, la carencia de un perfil adaptativo que permitiera superar las diferencias idiosincráticas entre el modelo de largo plazo alemán y el día a día del país, impactó negativamente en la evolución y dio lugar a un fenómeno inconcluso y de dilatada concreción. A ello hay que sumarle una intrincada trama normativa, con vaivenes institucionales, y la reiterada falta de acompañamiento presupuestario, todo lo cual restó continuidad y eficacia a los avances pretendidos.

El objetivo de este trabajo es analizar la profesionalización del Ejército Argentino desde el punto de vista del desarrollo de los procesos particulares que lo conformaron, a fin de determinar las causas y condiciones que influyeron y le impidieron una conclusión oportuna. Asimismo, se examinarán a modo referencial los casos semejantes de Brasil y Chile para inferir acerca de los factores preponderantes que, en cada uno de esos países, caracterizaron el desenvolvimiento de sus instrumentos militares terrestres.

## Las leyes esenciales de la profesionalización **La ley 4031 y la organización del Ejército de la Nación**

Sin duda la ley 4031 constituyó la piedra angular de la profesionalización militar. Habitualmente conocida como *ley Riccheri* –en alusión a su mentor, el ministro de Guerra del presidente Roca– dejó su impronta institucional mediante la instauración del servicio militar obligatorio, que perduraría como única fuente de reclutamiento masivo de la tropa durante más de noventa años. No obstante, no fue ese el único aporte que hizo al país, también favoreció la implementación de un verdadero sistema de defensa nacional basado en el adiestramiento operativo del soldado conscripto y su proyección, en el largo plazo, hacia diferentes obligaciones militares. De esta manera, se planteaba un compromiso militar igualitario de 25 años de duración para los ciudadanos argentinos. A semejanza del modelo militar alemán, la defensa nacional se estructuraba en tres niveles de fuerzas: el Ejército de Línea, la Guardia Nacional y la Guardia Territorial.

Si bien la duración del servicio militar variaba desde un mínimo de seis meses hasta un máximo de dos años, (teniendo en cuenta que este era el tiempo efectivo de incorporación), el ciudadano integraba el Ejército permanente hasta los 28 años de edad; vale decir que más allá del período *bajo bandera* pasaba a componer la Reserva inmediata a ser convocada en caso de conflicto armado. Luego, el individuo integraba la Guardia Nacional hasta la edad de 40 años, y finalmente culminaba con su obligación militar a los 45 años, después de haber formado parte de la Guardia Territorial.

De esta forma se instrumentaba un sistema potencialmente eficaz, toda vez que se aseguraba disponer de una Fuerza apta y adiestrada con continuidad en el tiempo, ya que tanto la Reserva, como la Guardia Nacional y la Guardia Territorial debían ejercitarse con regularidad. Además, se asignaban responsabilidades a los gobiernos provinciales en lo atinente al sostenimiento y organización de los elementos de las guardias nacional y territorial correspondientes a cada distrito, incluyendo la designación de los jefes y oficiales, lo que concretaba una federalización del instrumento militar y su rol defensivo (Quintero, 2014, p. 451). Asimismo, se propiciaban condiciones en cuanto a la preparación militar de los ciudadanos aun antes de ser enrolados, mediante la reducción del tiempo de servicio a quienes demostrasen aptitud para el uso de armas de fuego después de adiestrarse en

los polígonos de tiro. Esta ley esbozó por primera vez una conceptualización integral de la defensa en relación con el territorio nacional, al dividir el país en siete regiones militares (1.<sup>a</sup> RM: Capital Federal; 2.<sup>a</sup> RM: Neuquén; 3.<sup>a</sup> RM: Uruguay; 4.<sup>a</sup> RM: Litoral; 5.<sup>a</sup> RM: Cuyo; 6.<sup>a</sup> RM: Centro; y 7.<sup>a</sup> RM: Norte; los territorios nacionales de Formosa, Chaco Austral, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego constituían distritos separados que dependían en forma directa del Ministerio de Guerra). Pero lo más importante era que dichas regiones constituían el instrumento de movilización que permitía evolucionar de las organizaciones de *pie de paz* a las de *pie de guerra*, conformando una División de Ejército completa. Así, se definía un esquema militar en condiciones de afrontar con razonable éxito una agresión armada, a través del concurso de todas las energías de la Nación, tal como propugnaba el modelo alemán (Der Goltz, 1927). Dentro del articulado se destaca la negativa en cuanto a la participación política y al ejercicio de derechos electorales del personal militar de todas las jerarquías mientras tuvieran mando de tropas. Pero no todo resultaba auspicioso en la ley Riccheri. En efecto, la norma presentaba una debilidad en cuanto a las excepciones al servicio obligatorio, que con el transcurrir del tiempo acabó por alentar conductas elusivas y no pocos actos de corrupción administrativa. En principio, la ley admitía la permuta entre los individuos a los que les correspondían seis meses de servicio y aquellos que por sorteo debían cumplir dos años de conscripción, a cambio de una retribución monetaria. Esto impactaba negativamente sobre las condiciones igualitarias ante la ley, tal como se declamaba en el Art. 2.<sup>o</sup>, a la vez que estimulaba la especulación y así restaba transparencia a los fines altruistas de la norma. En definitiva y en la práctica, la institución militar no lograba superar los vicios del siglo anterior en cuanto a la criticada figura del *personero*<sup>19</sup>. Tampoco eran demasiado claros todos los posibles motivos de excepción al servicio militar, ya que a la heterogeneidad causal se le agregaba una escasa posibilidad de control eficiente –con los instrumentos disponibles en la época– que permitiera corroborar la veracidad de los dichos y hechos. A esto

---

<sup>19</sup> Durante la segunda mitad del siglo XIX, existió en Argentina un recurso jurídico para evitar la obligación de servir en la Guardia Nacional y que luego se hizo extensivo al Ejército de Línea. Consistía en la sustitución de un individuo que tenía la obligación de *enganche*, por otro (*personero*) que cumpliría sus funciones a cambio de una suma de dinero. Esta figura alcanzó su auge durante la Guerra de la Triple Alianza.

se le sumaba un aparato burocrático denominado Junta de Excepciones, que debía gestionar las solicitudes al respecto y autorizar aquellas pertinentes. Lo anterior se complementaba con una suerte de impuesto a la excepción denominado *tasa militar*, por el cual se obligaba al ciudadano eximido de su obligación militar (ya sea en el Ejército de Línea, como en la Guardia Nacional y Territorial) a abonar un gravamen anual, que se hacía efectivo a la Junta de Excepciones en el momento mismo de resolverse el trámite, y anualmente en carácter de renovación. Quedaban exceptuados del pago los *pobres de solemnidad*, cuya situación debía ser acreditada bajo otro procedimiento intrincado (Cornut, 2016, p. 34).

### **La ley 4707 (orgánica del Ejército)**

Esta disposición fue promulgada el 28 de septiembre de 1905, bajo la presidencia de Manuel Quintana, siendo su ministro de Guerra el general Enrique Godoy.

El primer elemento de juicio que se debe sopesar al analizar esta norma es el escaso tiempo transcurrido entre la sanción de la ley 4031 y esta; vale decir, apenas cuatro años, teniendo en cuenta que la ley 4707 derogó a la anterior. Lejos de concluirse, la profesionalización recién iniciaba su largo camino de implementación. Dentro del articulado de esta nueva ley no sufrieron mayores cambios las disposiciones relacionadas con el reclutamiento y composición de las fuerzas, pues respetaba las consideraciones de la derogada ley 4031. Sin embargo, se introdujeron modificaciones en cuanto a la gestión de datos para concretar el enrolamiento, involucrando como parte del sistema a los jefes de Registro Civil de la República, una evidencia acerca de las dificultades que el modelo comenzaba a sugerir. Pero la variación más significativa respecto de la ley anterior estaría dada por consideraciones en torno a la carrera profesional del militar y una primera aproximación al tema previsional; dos aspectos que se mantendrían en vilo en los veinte años siguientes (Cornut, 2016, p. 39).

Por su parte, se incluían (como Título II) nuevas pautas atinentes a cuadros y ascensos –fundamentalmente de oficiales– lo que derogaba la antigua ley de ascensos militares de 1882. Si bien se varió la denominación de algunas jerarquías, se puede decir que la modificación sensible estuvo en la cantidad máxima de las vacantes a llenar por empleos y su tiempo de revista en cada grado, como también la obligatoriedad de que los oficiales

fuesen únicamente reclutados a través del Colegio Militar de la Nación. Asimismo, se establecieron diferentes estadios en la situación de revista, que en la aplicación afectaba esencialmente a los oficiales. Así, en el contexto de un régimen que se pretendía dinámico, se determinaban las condiciones por las cuales el individuo devenía entre la actividad plena y el retiro, según situaciones profesionales, autorizaciones para ocupar cargos públicos en representación de partidos políticos y pases a la Reserva de cualquiera de los tres niveles de fuerzas. Esto propone una interpretación de mejora del sistema de defensa nacional teniendo en cuenta el aprovechamiento del personal durante su vida útil para el servicio, pero también coloca en el centro de la escena la problemática de retiros y pensiones, que acompaña al proceso de burocratización militar. Otro aspecto importante que introdujo esta norma fue la sistematización del cómputo de servicios a lo largo de la carrera militar, condensado en un documento que registraba –y aún hoy lo hace– el derrotero profesional de los oficiales, denominado foja de servicios. También conocido como legajo personal, este registro hacía las veces de historia documentada del oficial hasta su retiro, y servía como instrumento legal para sustentar reclamaciones o argumentar recursos ante potenciales arbitrariedades.

Una mención aparte merece la figura del Tribunal de clasificación de servicios militares, habida cuenta de sus repercusiones a futuro (Cornut, 2016, p. 40). Como su nombre lo indica, este cuerpo colegiado era responsable de evaluar los servicios prestados por los oficiales a partir del registro documentado en el legajo personal, a fin de determinar las listas de ascenso según el establecimiento de un orden de mérito. Este procedimiento de valoración del personal daba preeminencia a la preparación intelectual, pues otorgaba un puntaje mayor a quienes acreditaran diploma de oficial de estado mayor, el de egreso de la escuela de guerra, el de egreso de la escuela de aplicación y el de ingeniero militar. No obstante, una organización inicialmente im-perfecta del procedimiento de clasificaciones acarreo múltiples reclamos e innumerables modificaciones a lo dispuesto, lo que de hecho planteó una prolongación del proceso burocrático, más allá de lo deseable (Cornut, 2016, p. 40).

El 12 de enero de 1907, transcurridos apenas dos años de la puesta en vigor de la ley 4707, esta sufrió la primera modificación parcial mediante la ley 5043. Los ítems enmendados se relacionaban con el sorteo de la clase,

los cupos de incorporación para el Ejército y la Marina, la obligación de dar cuenta una vez desaparecidas las causas que dieran lugar a excepciones y la integración del cuerpo médico y funcionarios del orden judicial del Ejército a los beneficios reconocidos por la extinta ley de retiros militares de 1895, ya que no habían sido tenidos en cuenta en la norma original. Esto prueba las dificultades a que dio lugar una implementación deficiente de la ley orgánica del Ejército, lo que llevaría a constantes reformas que demorarían la conclusión de la profesionalización militar. Así, el general Rafael Aguirre, luego de señalar la superación de los incidentes ocasionados por la revolución del 4 de febrero de 1905, se ex-pide diciendo que:

...constituir un Ejército, cuyos cuadros permanentes basten para formar (...) una fuerza de primera línea eficaz para cubrir en tiempo útil la frontera amenazada, no es obra de un día (...) basta al efecto reflexionar que la ley vigente requiere veinticinco años para dar todo su fruto (Ministerio de Guerra, 1907, p. 61).

Aguirre, como un referente de su época, visualizaba un largo camino para alcanzar los objetivos finales de la modernización, y advertía que “el viejo ejército veterano, suficiente en las campañas contra el indio, no podía, por su reducido número, bastar a las necesidades de nues-tra defensa en caso de conflicto exterior” (Ministerio de Guerra, 1907, p. 59).

### **La ley 9.675 (cuadros y ascensos del Ejército)**

Esta ley fue sancionada el 5 de octubre de 1915, bajo la presidencia de Victorino de la Plaza, con el general Ángel Allaria a cargo de la cartera de Guerra, y fue reglamentada por decreto del Poder Ejecutivo el 28 de abril de 1916. En líneas generales la nueva disposición se dividía en dos grandes partes representadas bajo el nombre de Títulos I y II. El primero de ellos reite-raba las prescripciones ya contenidas en la ley 4707 respecto del estado militar, las jerarquías, los empleos, situaciones de revista y legajo personal. Hacía hincapié en el número máximo de oficiales en actividad por cada grado e introducía ligeras modificaciones a las jerarquías militares, especialmente en el caso de los suboficiales. Pero es en el Título II donde se incluyeron las alteraciones más sensibles. Así, bajo el enunciado de *ascensos* se establecían



una serie de reglas generales tendientes a estandarizar de manera objetiva las condiciones de promoción a una jerarquía superior. Además del tiempo máximo de permanencia en cada grado, se establecían los porcentajes de renovación anual en un todo de acuerdo con la clasificación, ya no solo supervisada por un tribunal a tal efecto, sino como responsabilidad del superior inmediato del calificado. De esta manera, los cupos de ascenso llevaban implícito un número determinado de individuos prescindibles. Como una forma de otorgar prioridad a la faz operativa dentro de la calificación del oficial, se imponía la obligatoriedad de que en cada grado se lo comprobara en el mando efectivo de unidades de tropa, a razón de dos períodos anuales de instrucción como mínimo, lo que en la práctica significaba convocar, durante el período ordinario de maniobras, a todos aquellos oficiales que no estuvieran destinados en cuerpos de tropa, con las lógicas consecuencias de desplazamientos y erogaciones presupuestarias que ello implicaba. El sistema preveía un reaseguro para evitar la eliminación de aquellos oficiales aptos que no pudieran ascender por falta de vacantes, quienes quedaban fuera de cuadros y concursaban para el ascenso al año siguiente. Aun así, quienes no accedieran a la promoción a la instancia jerárquica superior pasaban a retiro administrativamente, y desde teniente inclusive gozaban de un aumento del veinte por ciento sobre la pensión a que tenían derecho por sus años de servicio.

## El marco burocrático de la evolución orgánica

### **El inicio de la evolución (1901–1905)**

Este período se inicia con la sanción de la ley 4031 y culmina con su derogación, al ser reemplazada por la ley 4707. Se caracteriza por dos hechos de importancia nacional. El primero tiene que ver con la crisis prebélica entre la Argentina y Chile, situación que influyó en la estructuración de fuerzas que finalmente fue incluida en la ley 4031, pero que no debe tomarse como causa excluyente de dicha ley. Tal como surge de las opiniones vertidas en la sesión secreta de la Cámara de Diputados de fecha 21 de septiembre de 1901, se discutieron las opciones más convenientes para organizar a las fuerzas militares, cuyos resultados luego serían tenidos en cuenta en las sesiones públicas. Una posterior ronda de sesiones secretas ocurriría el 12 de diciembre del mismo año –esto es, seis días después de la sanción de la ley 4031– y en este caso se daría aprobación al proyecto de ley del Poder

Ejecutivo para completar y fortalecer el poder del Ejército y de la Armada, que luego se concretaría en la ley 4035. El segundo acontecimiento de entidad fue la revolución del 4 de febrero de 1905. Sus consecuencias preocuparon al Ejército porque individuos con estado militar tomaron parte en la sedición de los radicales, y aunque el número no fue relevante, bastó para conmocionar la disciplina interna (Cornut, 2016, p. 48).

Respecto de las organizaciones y funcionalidad del sistema, cabe reiterar que al momento de reglamentarse la ley 4031 se registró la primera alteración de las jurisdicciones originalmente asignadas como regiones militares, que pasaron de diez a siete y que volverían a ser modificadas por decreto del 8 de abril de 1905, disminuyendo a cinco (1.<sup>a</sup> RM: Capital Federal; 2.<sup>a</sup> RM: Sur; 3.<sup>a</sup> RM: Litoral; 4.<sup>a</sup> RM: Centro y Cuyo; y 5.<sup>a</sup> RM: Norte). En esta última decisión primó el criterio de que la regionalización militar coincidiese con la división política del momento y cubriera todas las fronteras con países limítrofes, a fin de satisfacer las expectativas de potenciales movilizaciones (Cornut, 2016, p. 49). El 31 de enero de 1902 se produjo la primera manifestación concreta de evolución orgánica a escala como resultado de la ley 4031. En efecto, fueron creados diez cuerpos de línea de las tres armas. Poco tiempo después, el 25 de febrero, los regimientos 11 y 12 de caballería de línea que se encontraban de guarnición en el Chaco, fueron afectados al servicio de gendarmería de ese Territorio Nacional. Asumieron así una función policíaca, con importantes vaivenes en los sucesivos treinta años y para la cual el Ejército no disponía de un adiestramiento particular.

Las sucesivas organizaciones y variantes de los organismos destinados al mando y administración de la fuerza militar revistieron particular interés en el marco de la modernización. El modelo vigente en oportunidad de la sanción de la ley 4031 presentaba al Departamento de Guerra dividido en un Gabinete Militar, mediante el que se ejercía el comando de todo el Ejército, y un Estado Mayor del Ejército que se ocupaba de la preparación para la guerra. En virtud de ello se reglamentaron las atribuciones y funciones del Estado Mayor del Ejército con fecha 17 de enero de 1904 y fue reorganizado en diciembre de ese mismo año.

En términos educativos los impulsos fueron muchos, y todos se orientaban a dotar de mayor intelectualidad al personal militar (Cornut, 2016, p. 51). Dos aspectos merecen ser especialmente destacados. El primero es la creación de la Dirección General de Tiro y Gimnasia de la República, ya que sería el

principio de una extensa serie de medidas destinadas a fomentar el tiro y la cultura física entre los ciudadanos, a efectos de instruir las reservas tal como lo estipulaba la ley 4031. El otro hecho notorio es el cambio de planes de estudio del Colegio Militar de la Nación –e inclusive de su denominación, por la de Escuela Militar y de Aplicación de Artillería e Ingenieros– en función de incrementar la preparación técnica de algunos oficiales para obtener el título de ingeniero.

Asimismo, cabe señalar las implicancias de la ley 4290 (Construcciones militares). Sancionada el 20 de enero de 1904, otorgó el complemento indispensable al crecimiento en ciernes desde el punto de vista de la infraestructura. Pero los alcances de esta pronto se mostrarían insuficientes para la magnitud de la empresa propuesta. El objetivo inicial fue proveer a la Fuerza de instalaciones propias y adecuadas a los fines militares.

### **La continuidad del proceso (1906–1915)**

El lapso comprendido entre la sanción de las leyes 4707 y 9675 estuvo signado por tres hechos significativos. Por un lado, la tensión de la siempre presente rivalidad con Brasil que a partir de 1908 adquirió características de carrera armamentista en el sector naval. Esta crisis se prolongó hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y fue conocida como *diplomacia de los acorazados*. Si bien las derivaciones de este evento –en lo que a nuestra investigación atañe– afectaron principalmente a la Marina, también alcanzaron al Ejército a través de la ley 6283, para compra de armamentos. Como segundo acontecimiento del período debemos resaltar los festejos del Centenario, que involucraron a todas las instituciones y fuerzas vivas del país, pero en particular demandaron el protagonismo del Ejército, cuya transformación fue objeto de comentarios laudatorios entre los visitantes internacionales. El otro suceso a resaltar fue el inicio de la Gran Guerra, durante el gobierno de Victorino de la Plaza, ante el cual cabe mencionar la postura neutral de la Argentina y las implicaciones económicas negativas como resultado de la inestabilidad comercial con Europa, en el marco de una política económica de complementariedad. Además, el comienzo de la guerra obligó al regreso inmediato de los oficiales alemanes que revistaban en el Ejército nacional, que morigeró en forma temporal su influencia sobre el sector militar argentino.

En octubre de 1910 se reorganizaban las responsabilidades territoriales de las regiones militares y se modificaba su denominación por la de *Cuerpo de Ejército*, manteniendo la capacidad de alistamiento de las divisiones de Ejército encuadradas. Posteriormente, en enero de 1915, se completaría la disposición anterior reglamentando la organización de depósitos de movilización en cada Cuerpo de Ejército; de este modo se consolidaba la tarea iniciada en 1907. Por su parte, las tropas de caballería de guarnición en los territorios nacionales del norte continuaban su tarea civilizadora a la par de sus funciones de gendarmería, lo que en 1912 permitió fundar pueblos a partir de los acantonamientos militares. Independientemente de la importancia que este tipo de acciones revestía para la seguridad y soberanía de la Nación, el hecho de emplear a las fuerzas militares en tareas afines a lo policial, implicaba la distracción de recursos (humanos, materiales y financieros) que retrasaban –en parte– la marcha de la profesionalización (Cornut, 2016, p. 53).

Desde 1908 el general Rafael Aguirre hacía notar la exigencia de “librar al Arsenal Principal del tutelaje de la industria privada en la mayoría de lo que necesita confeccionar o manipular” (Ministerio de Guerra, 1907, p. 89), lo que reiteraba el ministro Gregorio Vélez en 1912, y ratificaba el general Allaria en 1914 y 1915 al afirmar que los arsenales de guerra “deben obtener la capacidad necesaria para producir los reaprovisionamientos del Ejército [en la] tendencia de independizarnos todo lo posible de la industria exterior” (Ministerio de Guerra, 1915, p. 38). Este concepto de emancipación respecto de la manufactura y producción de materiales militares sensibles marcaba una tendencia que se iría profundizando a la par de la burocratización, alcanzando su clímax con la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, pero que persistiría hasta 1929. La profesionalización llevaba implícito el logro de la autonomía industrial como condición *sine qua non* para realmente completar el modelo de fuerzas adoptado.

El año 1912 constituyó un hito dentro de la modernización del Ejército, al crearse la Escuela de Aviación Militar sobre la base del material aerostático donado por el Aero Club Argentino. A partir de esa fecha la actividad aérea recorrería un camino accidentado que recién vería sus frutos en 1927 con la creación de la Fábrica Militar de Aviones, símbolo de la tecnología y la autodeterminación nacionales.

Si bien se registraban avances concretos en la evolución orgánica, no ocurría lo mismo dentro del sistema de enrolamiento. La ley 8129 (enrolamiento general de ciudadanos nativos y por naturalización) de julio de 1911, fue la respuesta a los problemas que el reclutamiento presentaba por dificultades en la gestión de la información, la disponibilidad de organismos para realizar los trámites y la adulteración de documentos; pero como toda solución vinculada con este tema, adoleció de parcialidad, y entonces generó nuevas dificultades a futuro (Cornut, 2016, p. 55). En cuanto al resto de las normas que concurrían a la profesionalización, encontramos que la ley 6013 (3 de octubre de 1908) autorizaba la inversión de \$1 000 000 m/n para el fomento de la instrucción de tiro y cultura física, lo que además incluía la construcción de nuevos polígonos para la práctica de aquel, continuando así con la instrumentación de un régimen sustentable para la preparación militar de los ciudadanos. La ley 6227 (17 de octubre de 1908) ampliaba el crédito autorizado por la ley 4290 (infraestructura), que, como expresamos, resultó insuficiente para el fin previsto y sería el antecedente de la ley 6492 (1909), la que establecía un amplio plan de construcciones militares que, por variaciones presupuestarias y agregación de nuevas obras, se extendería hasta 1929. Asimismo, esta ley promovía la creación de la Superintendencia de Construcciones Militares en 1910, para atender la gestión de lo planificado. La ley 9697 (estadística militar), de septiembre de 1915, definía un progreso en términos de movilización, al legislar sobre la forma de registro de las existencias de los particulares para causas de guerra; dicho trámite quedaba bajo responsabilidad de los distritos militares.

La Gran Guerra que conmocionaba al mundo era seguida con expectativa por los militares argentinos, quienes emitían juicios acerca de los acontecimientos y valoraban las experiencias. El general Allaria, por ejemplo, en referencia a la caballería decía que las “enseñanzas que sobre el empleo de esta arma da la actual guerra europea, no tienen en este país [Argentina] sino un valor relativo, porque en nuestro extenso territorio y dilatadas fronteras la guerra de posiciones no será lo normal” (Ministerio de Guerra, 1915, p. 27). Tal afirmación ponía en evidencia que la guerra en curso comenzaba a incidir sobre el proceso de transformación, e incrementaría su influencia a partir de 1918 con la finalización de la contienda, introduciendo nuevos desafíos para el desenvolvimiento de la modernización, ya que fue preciso atender a las

innovaciones que la guerra europea dictaba con un esfuerzo de adaptación al ambiente operacional probable de la Argentina, pero –lo que era más complejo todavía– sin haber concluido el proceso original de profesionalización iniciado en 1901. Es importante aclarar que la Primera Guerra Mundial introdujo alteraciones sustantivas desde lo tecnológico, pero aplicó los conceptos tácticos y estratégicos que venían siendo observados desde la guerra franco-prusiana de 1870, y sobre los cuales el Ejército Argentino sentó sus bases de cambio desde el principio, aunque en forma irregular e incompleta (Cornut, 2016, p. 56).

### El *impasse* de la profesionalización (1916-1922)

Todo este período coincidió con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y se caracterizó por un contexto internacional dominado por la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique. Como ya vimos, ambos acontecimientos influyeron en la escena nacional de forma decisiva. La guerra mundial –que ya estaba en curso y había hecho sentir sus efectos– produjo una crisis económica en todos los países cuyo comercio exterior estaba ligado a Europa. Así, la debacle financiera que se desató en el Viejo Continente durante 1913 hizo eclosión al comenzar la guerra, y proyectó sus consecuencias mediante un retroceso de las inversiones extranjeras en nuestro país, seguido de una baja en la producción, con su consecuente aumento de los niveles de desocupación y presión inflacionaria. Esto afectó integralmente a la Argentina, pero tuvo un impacto decisivo sobre los materiales de guerra –en su mayoría importados–, aumentando su escasez ante la gran demanda de Europa, especialmente en materia de combustibles.

La Revolución Bolchevique exacerbó los reclamos sociales y generó condiciones para protestas violentas en el territorio nacional, que desestabilizaron a las instituciones por la acción de sectores ligados con el anarquismo. Tanto las huelgas ferroviarias de 1917 como los hechos de la Semana Trágica de 1919, y los episodios patagónicos de 1920 y 1921 fueron el resultado de la combinación de los factores arriba expresados, y obligaron al empleo del Ejército para la restitución del orden social en el marco interno, una función pertinente al instrumento militar, pero al mismo tiempo secundaria en el contexto de la profesionalización. Otro aspecto que signó a este período fue la utilización del poder militar en apoyo a las catorce intervenciones

federales que dispuso el gobierno nacional, “el máximo que tuvo lugar durante un gobierno constitucio-nal en la Argentina” (Fraga, 2002, p. 340)

Ya en términos de gestión, el presidente Yrigoyen se destacó por nombrar ministros civiles tanto para la cartera de Guerra como de Marina, lo que puede ser interpretado como un mensaje de afianzamiento del poder civil sobre los mandos militares del momento. Durante el año 1916, antes de asumir Hipólito Yrigoyen, se había producido una reorganización significativa en el Ministerio de Guerra que profundizaba el arquetipo alemán adoptado quince años antes. Se procedió a desvincular al ministro de Guerra del mando directo del Ejército, reconociéndole antes funciones en la esfera de la alta política nacional. Estos cambios se completaban con una mayor descentralización del poder a favor de los comandantes de regiones militares y responsables de las grandes reparticiones. A su vez, se establecía un rol esencialmente técnico para el Estado Mayor del Ejército. Todavía durante ese año, se registraría un nuevo cambio de denominación en las regiones militares, que pasaron a identificarse como divisiones de Ejército.

La política militar de Yrigoyen en este lapso estuvo marcada por una revisión de todo lo dispuesto por su antecesor, con las consecuencias que estas contingencias ocasionaron en la cul-minación de la marcha del proceso de profesionalización. Entre otras particularidades, podemos mencionar la limitación en los horarios de instrucción y academias para soldados y cuadros, las disposiciones de justicia militar que restringían la administración de sanciones por parte de los oficiales sobre los suboficiales, los procedimientos de contralores más estrictos que limitaban la capacidad de administración autónoma militar en las licitaciones públicas, la dis-minución de sueldos de los agregados militares, la quita de asistencia a los familiares de militares en nosocomios de la Fuerza, las rectificaciones al reglamento de servicio interno en cuanto a reclamos y recursos del personal, las concesiones para que los suboficiales vistieran uniformes correspondientes a oficiales, y la posibilidad de que los oficiales accedieran a su calificación –de carácter reservado– en casos excepcionales, como algunos de los matices de esta ad-ministración (Cornut, 2016, p. 60).

En el marco de la evolución orgánica, propiamente dicha, cabe señalar una reorganización del arma de Caballería que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1917. Por decreto se crearon nuevas unidades y se reordenaron los existentes

en brigadas. Un aspecto de particular relevancia fue la creación, en 1917, de un regimiento de Gendarmería en reemplazo de las funciones que venía cumpliendo el regimiento de Caballería 9 en Formosa, para posteriormente (en 1921) disponerse la activación de diez cuerpos de Gendarmería a fin de prestar servicios en los territorios nacionales. Más allá de la coyuntura social que devino en los hechos anarquistas patagónicos de 1920 y 1921, y que fueron la causa de esta medida, queda claro que los cuerpos del Ejército abocados a esta misión policial debieron alterar su adiestramiento original para hacer frente a esta exigencia, lo que demandó una atención diferente de parte de los altos mandos militares e impactó en la orgánica general de la Fuerza.

La disolución de la Escuela de Aviación Militar y la creación del Grupo N.º 1 de Aviación, el 23 de marzo de 1922, también implicaron un retroceso orgánico, toda vez que las tareas inherentes a la formación de pilotos quedaron bajo la responsabilidad de una unidad operativa con escasa preparación para tal fin. No obstante, esta medida contrastaba con la importancia que la gestión radical le asignaba al medio aéreo, desvinculándolo de lo estrictamente militar y cimentando las bases de la aviación civil.

Los avatares económicos impuestos por el escenario internacional incidieron negativamente en la duración del tiempo de incorporación de las clases sujetas al servicio militar obligatorio. Así, se registraron reducciones del período bajo bandera, y el reemplazo de maniobras finales del Ejército por ejercitaciones de menor envergadura desde 1917 hasta 1921, inclusive. La crisis financiera devenida de la guerra mundial impidió la adquisición de material de reemplazo y partes para el mantenimiento de las aeronaves, al tiempo que enfatizó la dependencia argentina de la importación de productos manufacturados y materias primas estratégicas de uso militar (petróleo, carbón, acero y pólvoras). Nuevamente se manifestó, a lo largo de todo el gobierno de Yrigoyen, la necesidad de alcanzar la autonomía logística como parte indivisible del modelo de transformación en ciernes. Tampoco habían sido suficientes las previsiones financieras para infraestructura contenidas en la ley 6492 del año 1909, tal como lo manifestara el titular del Poder Ejecutivo en su mensaje al Congreso con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del año 1920. Este asunto constituiría una asignatura pendiente de la modernización por un decenio más. La descentralización logística a través de la creación de subintendencias regionales formalizó un progreso



que dotó de mayor flexibilidad y libertad de acción a las divisiones de Ejército. Respecto de los proyectos de normas relativas a la defensa, podemos decir que Yrigoyen percibió tempranamente la urgencia de rectificar las leyes 4707 y 9675, y así lo manifestó al Congreso hasta 1922. En el primer caso la causa era el número insuficiente de oficiales que establecía el escalafón vigente, el que no permitía acompañar un desenvolvimiento armónico del Ejército en su profesionalización; esta iniciativa del Poder Ejecutivo no prosperó y tampoco tendría éxito en este sentido el presidente Alvear. En cuanto a la ley 9675 (cuadros y ascensos), se logró una reforma parcial a través de la ley 11 079, con la cual se suspendió el pase a retiro de aquellos oficiales que habían sido superados por el ascenso de otros más modernos; de esta manera podían permanecer en actividad e incrementar la planta orgánica dentro del cuadro correspondiente. El fenómeno ya mencionado de la conflagración mundial profundizó su impacto sobre el Ejército respecto del período anterior, y llamó la atención del presidente –tal como lo expresara en forma reiterada frente al Congreso– ante la obligación de actualizar los sistemas de armas que la contienda traslucía.

Por último, es menester señalar como un hecho importante de la etapa en estudio, la reglamentación del artículo 51 de la ley 9675, que habilitaba la actuación de los Tribunales de Honor, una figura que tendría vigencia en el Ejército por los siguientes noventa años. La combinación de las circunstancias internacionales con la actitud revisionista del presidente Yrigoyen en materia castrense, junto con la crisis económica y la inestabilidad social, produjeron un aletargamiento en el desarrollo de la profesionalización del Ejército (Cornut, 2016, p. 61).

### La consolidación de la profesionalización (1923-1930)

La situación general de este período queda definida en el mundo por los efectos sociales, políticos y militares propios del ciclo de posguerra y la crisis económica de 1929, agravada por circunstancias climáticas adversas en nuestro país. En líneas generales, Alvear otorgó una clara preponderancia a la defensa como política de Estado a lo largo de todo su gobierno, lo que se reflejó desde el principio en una actitud decidida en materia militar. Prueba de ello es la Orden General impartida el mismo día de su asunción presidencial (12 de octubre de 1922) en la cual se trasuntaba el lugar y el rol que le confería

al factor militar (Servicio Histórico del Ejército, 1922). Pero más importante aún sería la figura de su ministro de Guerra, el general Agustín Pedro Justo, verdadero protagonista de las iniciativas que permitieron estimular la postergada consolidación del proceso que nos ocupa. Fue el ministro Justo quien tomó una medida de orden conceptual –pero con profunda significación simbólica– respecto del Ejército, al sustituir la denominación de Ejército Nacional por la de Ejército Argentino (Domínguez, 1920, p. 252).

Por su parte Yrigoyen mantendría, en su breve segundo gobierno, la inercia de cristalización del profesionalismo militar, en la que le cupo una destacada actuación a su ministro de Guerra, el general Luis Dellepiane. Volviendo a Alvear, diremos que su gestión permitió el encauzamiento de los esfuerzos militares que habían tenido un comportamiento errático a partir de 1916, y proporcionó la estabilidad necesaria para afianzar la idea de la defensa nacional como sistema. En 1924, al dirigirse a la Asamblea Legislativa, sintetizaba su visión sobre el tema ex-presando:

Las naciones que descuidan sus elementos de defensa, ponen en juego su honor, su soberanía y su misma existencia [...] si bien lo esperamos todo de la paz, nuestro amor a ella y los beneficios que nos pueda reportar, no han de ser óbice para que dediquemos a la defensa nacional lo que ella exija. Seguros de nuestra buena fe y de nuestros propósitos y tan respetuosos de los derechos ajenos como de los propios, hemos de limitar nuestras Fuerzas Armadas a lo que exija nuestra seguridad, que eso sí, hemos de basar en el futuro en lo que le sirviera de fundamento hasta el presente: nuestra capacidad propia para hacerla efectiva (Alvear, 1924, s/p).

No obstante, el período comprendido entre 1923 y 1930 presentó una ambivalencia –finalmente superada– en la que el factor disolvente se corporizó en la negación legislativa al tratamiento de los proyectos de ley relacionados con la Constitución del Ejército y Personal del Ejército, que estaban destinados a reemplazar a las leyes 4707 y 9675, respectivamente. En el primer caso, obligó a introducir nuevas y profusas enmiendas que consiguieron sistematizar las obligaciones del servicio militar, más por la experiencia acumulada a lo largo del cuarto de siglo transcurrido desde la sanción de la ley 4031 que por la acción legislativa, sujeta a los vaivenes de la política partidaria. De este modo, se introdujeron veintiséis modificaciones a la ley 4707 durante la gestión del

general Justo. El Ejército, junto al resto de las Fuerzas Armadas, habría de aguardar al año 1971 para disponer de una norma acorde al tratamiento de sus recursos humanos, mediante la sanción de la ley 19 101 (Personal Militar) (Cornut, 2016, p. 63). La gestión de Alvear también descollaría por la cantidad de iniciativas parlamentarias tendientes a articular un sistema de seguridad y defensa. Así, los proyectos de ley relacionados con la navegación aérea, la seguridad en los territorios nacionales, las comunicaciones radioeléctricas, el relevamiento cartográfico del país, la adecuación del código de justicia militar al código penal y la creación de la caja de jubilaciones y pensiones militares –entre otros– propendían a una visión estratégica y acabarían por cimentar la profesionalización militar. En términos de evolución orgánica se procedió a la creación de las Escuelas de Armas, como institutos de perfeccionamiento que complementaban la formación del personal de los cuadros. Por su parte, el establecimiento permanente de la Dirección de Tropas y Servicios de Comunicaciones y de la Dirección de Remonta fortaleció la convergencia entre la pura teoría y la práctica experimentada en la Gran Guerra. Muy importante fue el replanteo de la figura del Inspector General del Ejército, a quien se le restituyó su autoridad operacional plena para el contralor del adiestramiento de la Fuerza en tiempo de paz y la conducción militar en tiempo de guerra, minimizando así el hasta entonces relevante cargo de Jefe del Estado Mayor y desvinculando al ministro de la gestión militar para dedicarse al entorno político, todo lo cual había sido desestimado con anterioridad por Yrigoyen.

Lo anterior se completó con la instauración del cargo de Inspector de Distritos Militares en cada División de Ejército e Inspector de Arma, quienes colaboraban estrechamente en todo lo relativo a las tareas de movilización. Otro hito significativo en el crecimiento organizacional fue la prioridad de desarrollo de las tropas de montaña y la formación de los Destacamentos de Montaña Norte (Jujuy) y Cuyo (Mendoza), en relación con la expansión operacional del Ejército sobre una frontera históricamente litigiosa (Cornut, 2016, p. 64). Como ya se vio, la decisión con que se continuó e impulsó la aeronáutica militar –y sus derivaciones de aplicación civil– encontró su punto culminante en la Fábrica Militar de Aviones en 1927. Entre el reconocimiento oficial de la importancia del medio aéreo con el establecimiento de la Escuela de Aviación Militar en 1912 y la impronta industrial para el montaje y manufactura de partes componentes en el país, medió la labor sostenida de

individuos visionarios como Mosconi, quien transformó las organizaciones existentes en agosto de 1922 en un eficiente Servicio Aeronáutico (Mosconi, 1983, p. 30). Este hecho contribuiría sustancialmente a la conclusión del proceso de modernización.

Ante la insuficiencia de los edificios disponibles –problema al que no habían dado solución final las disposiciones anteriores (leyes 4290 y 6492)– se resolvió una fuerte inversión en construcciones militares que, si bien se prolongaba hasta un plazo de diez años, satisfizo las carencias remanentes del Ejército hacia 1930. También este aspecto contribuyó a concluir con el proceso de burocratización iniciado en 1901.

La creciente preocupación de los mandos militares respecto al logro de la autonomía logística se profundizó en este período. De este modo, se conjugaron dos de las principales cuestiones pendientes para el afianzamiento de la profesionalización: los cambios tecnológicos producidos por la guerra y la promoción de la industria nacional, ambos a instancia de las inquietudes militares del momento. Desde lo estrictamente militar se combinaron las acciones del ministro Justo con las de Mosconi. El primero bregó en forma insistente acerca de la importancia de potenciar la industria bélica nacional, en su más amplio sentido, mientras que el segundo encarnó la profesionalización en términos de autosuficiencia logística. Enrique Mosconi dejó el mando del Servicio Aeronáutico para pasar a desempeñarse como director general y presidente de la Comisión Administrativa de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 19 de octubre de 1922, esto es, apenas siete días después de que se hiciera cargo del gobierno Marcelo T. de Alvear. Tanto Mosconi como posteriormente el general Alonso Baldrich encarnarían lo que Carl Solberg (1986) dio en llamar el nacionalismo petrolero, pero que no era más que la aspiración manifestada desde 1907 por el ministro Rafael Aguirre y sostenida de manera persistente por la conducción del Ejército. Esto señala que la institución militar fue la que alentó una activa participación del Estado en la promoción industrial. Lo relevante es que, durante la década de 1920 –pero especialmente durante la presidencia de Alvear– esta impronta de nacionalismo económico a partir del Ejército contó con el apoyo del Poder Ejecutivo y el consenso de los órganos de gobierno, y transformó el punto de vista militar sobre la industria en una potente visión compartida de desarrollo futuro (Cornut, 2016, p. 65). De esta manera, el Ejército estimuló y sostuvo

el protagonismo del Estado en términos industriales y una renuente postura frente a los trusts extranjeros. Sin embargo, el momento más trascendente vinculado con la de-finición del modelo de autosuficiencia no perteneció a la gestión de Alvear, sino que le cupo a Yrigoyen. En efecto, el 1.º de agosto de 1929 la administración nacional, a través de YPF, pa-só a controlar el mercado interno mediante la formación de precios, regulando la oferta y quitando la iniciativa de manos de las empresas extranjeras como la Anglo Mexican, la Royal Dutch y la Standard Oil. Este jalón en la historia económica argentina aceleró la definición de YPF como una de las pocas empresas petroleras estatales verticalmente integradas en el mundo, y al mismo tiempo cristalizó la aspiración militar de la autonomía logística que apoyase el proceso burocrático iniciado a principios de siglo.

En toda esta etapa se destacan dos leyes vinculadas con la Defensa. La primera y más importante fue la ley 11 266 (Armamentos) de 1923, que suplió la carencia de armas y equipos que el Ejército presentaba desde principios de siglo, a la vez que financió el establecimiento de industrias relacionadas con el material bélico y actividades concernientes al relevamiento topográfico de la República Argentina. La otra ley destacada fue la 11.386 (Enrolamiento) que instrumentaba a partir de los distritos militares una actividad de estadística y censo poblacional con fines militares de movilización, pero cuyos resultados proporcionaban valiosa información a la administración pública en general.

La efímera gestión de Yrigoyen se caracterizó por mantener los incentivos en torno a la defen-sa y, en particular, las derivaciones y continuación de la ley 11 266.

De este modo, la profesionalización emprendida en 1901 alcanzó plena estabilidad y madura-ción alrededor de 1930, y esto fue posible por la perspectiva estratégica de los mandos militares del momento, pero también por la decisión del poder político. Esto se trasuntó en una concepción de la defensa como política de Estado, que aunó la gestión administrativa con la instrumentación operativa para obtener una institución armada en condiciones de cumplir con su rol en forma eficiente.

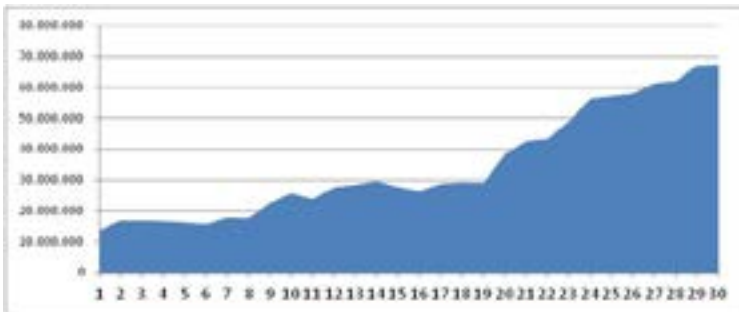
## La dimensión presupuestaria de la profesionalización

En todo proceso de cambio estratégico el aspecto presupuestario y financiero ocupa un lugar importante, y la profesionalización militar no

escapó a esta regla. Sin embargo, una de las variables menos estudiada hasta el presente es la correspondiente a Hacienda, lo que ha inducido a conclusiones erróneas a partir de investigaciones incompletas. En principio es menester discurrir sobre la estructura del presupuesto del Ministerio de Guerra. La masa de las erogaciones era para el funcionamiento normal de la institución, discriminadas por organismo y repartición, donde se destacaban los rubros de haberes, la alimentación del personal y semovientes, y el mantenimiento en general, todo lo cual se denominaba balance o simplemente presupuesto de guerra. Otro ítem importante era el de construcciones militares, completado con los rubros de leyes y acuerdos especiales (referidos a aquellos gastos no previstos con anticipación y cuya autorización requería de una norma o bien de un acuerdo especial de ministros); y, por último, el correspondiente a retiros y pensiones, que en realidad se incluía en las rendiciones del Ministerio de Guerra pero formaba parte del presupuesto general del Estado dentro del Anexo J. Cabe señalar que los fondos destinados al equipamiento a lo largo de todo el período investigado, provinieron de leyes secretas dictadas a tal efecto y no formaban parte del presupuesto ordinario de guerra.

Una primera observación de la evolución correspondiente a Hacienda permite aseverar que las finanzas destinadas al Ejército en el rubro presupuesto de guerra fueron incrementándose en forma progresiva desde 1901 hasta 1920 (Gráfico 1), para crecer exponencialmente desde esa fecha hasta 1930, lo que da como resultado que los últimos nueve años representaron el 59 % del total del presupuesto erogado a través de todo el período en estudio.

Gráfico 1. Presupuesto de Guerra, 1901-1930 (\$ m/n)



Fuentes: elaboración propia (Cornut, 2016, p. 69)

Veamos ahora la situación presupuestaria en el rededor de las incorporaciones de armamento y equipos. Como expresáramos oportunamente, fueron tres las leyes que permitieron la adquisición de armas; dos de ellas (4035 y 6283) regularon las compras tanto para el Ejército como para la Marina, mientras que la ley 11 266 lo hizo en forma independiente para el Ministerio de Guerra. Este factor guarda especial importancia ya que, si bien las leyes 4035 y 6283 establecían montos diferenciados para cada Fuerza, es evidente que la prioridad –en ambos casos– era para la adquisición de buques. La ley 4035 fue producto de la tensión latente que desde 1898 la Argentina vivía con la República de Chile. El proyecto de ley aludía a la necesidad de robustecer el poder disponible del Ejército y la Armada, sin mencionar el monto total del gasto autorizado ni parcializarlo en función de cada Fuerza, lo que en la práctica se tradujo en una inversión de \$ 32 247 616,79 m/n<sup>20</sup> en el período 1901–1907, con un pico de \$30 363 806,08 m/n en 1902, que marca la urgencia del gasto pero no permite determinar la calidad del mismo. De las fuentes investigadas surge con certeza que, del monto adjudicado en 1902, pueden atribuirse a la compra de armamento \$24.042.900,36 m/n, que fue la suma asignada a la Legación Argentina en Londres, a través de la que se liquidaban los gastos de compra de armamentos en Europa, pero que también incluía los viáticos del personal destacado a tal efecto y todos los gastos indirectos en torno a las contrataciones. Vale decir que el remanente de \$6.320.905,72 m/n no se destinó a la compra de armas ni equipos, sino que fue dispensado para atender el mantenimiento de distintas reparticiones del Ejército. En síntesis, la ley 4.035 no formó parte de la profesionalización del Ejército como un hecho deliberado producto de una planificación previa, sino que fue la consecuencia de una crisis regional, y sus efectos fueron circunstanciales; por su parte, los montos asignados a la Marina fueron mayores.

La ley secreta 6.283 fue la segunda norma, en orden cronológico, que dispuso la compra de armamentos a partir de su sanción el 16 de diciembre de 1908. Una vez más, la decisión de fortalecer a la Marina queda manifestada en el texto mismo cuando en el artículo 1.º menciona al Ejército en segunda prioridad, en forma difusa y con carácter accesorio, para finalmente remarcar

---

<sup>20</sup> A los fines de facilitar la comprensión hemos convertido los montos en \$ oro a \$ m/n, siguiendo el cambio de la época de \$2,27 m/n por cada \$1 oro.

en el artículo 4.º que se autorizaban las obras pertinentes en el puerto militar para atender la entrada de los nuevos acorazados. A diferencia de la ley 4.035, en este caso se precisaban en el artículo 3.º los montos máximos autorizados para cada Fuerza los cuales no podían exceder de treinta y dos millones de pesos oro sellado para las adquisiciones navales y de veintidós millones doscientos cuarenta mil pesos oro sellado para armamentos y material de guerra. Si bien se le otorgaba preeminencia a la Marina con un mayor presupuesto para la adquisición de buques, la diferencia de \$10 000 000 oro respecto del Ejército no nos parece tan relevante si se tiene en cuenta la magnitud de la compra. Dicho de otro modo: el monto asignado al Ejército le permitía efectuar una modernización trascendente de su material, teniendo en cuenta que \$50 484 800 m/n (esto es, el equivalente a \$22 240 000 oro) constituía una suma nada desdeñable para la época. Sin embargo, ese no fue el valor finalmente invertido. En efecto, solo se erogó en concepto de la ley 6.283 la suma de \$28 391 486,65 m/n, a lo largo del lapso comprendido entre 1908 y 1916, correspondiendo al año 1911 la mayor valía con \$11 749 327,21. Pero a partir de una observación meticulosa sobre la composición del gasto es dable inferir que gran parte de los recursos disponibles por la ley fueron destinados a optimizar el funcionamiento del Ejército y el estado de mantenimiento del material y equipo ya existentes, a la vez que a liquidar los gastos conexos vinculados con el personal y las comisiones (Cornut, 2016, p. 77).

La última disposición legal por la cual se adquirieron armamentos y materiales bélicos dentro del período analizado fue la ley secreta 11 266 sancionada el 25 de octubre de 1923. A diferencia de lo que había sucedido con las dos leyes anteriores, en esta oportunidad se aprobaron normas separadas para el Ejército y la Armada (a esta última le correspondió la ley 11 378 del año 1926). Sin duda la ley 11 266 vino a resolver no solo la adecuación que los adelantos tecnológicos habían planteado en la Primera Guerra Mundial, sino que permitió concretar –en términos de armamento y equipos– la profesionalización militar largamente postergada, toda vez que dotó a la Fuerza de los materiales para cumplir su función operativa y así dar respuesta a la razón de ser del Ejército.

A modo de síntesis del caso argentino podemos decir que si bien la transformación del Ejército reconoce como punto de partida la ley 4.031 (1901), esta no agotó ni culminó el desarrollo del proceso; de hecho, las leyes



4.707 (1905) y 9675 (1915) constituyeron una prolongación de la primera, toda vez que complementaron aspectos faltantes para desenvolver una evolución armónica. Así, mientras las dos primeras normas pusieron énfasis en el servicio militar obligatorio, la última se ocupó de sistematizar la carrera del oficial –y en menor medida del suboficial o clase– como condición ineludible para cristalizar la mentada profesionalización. Las bases sentadas en 1901 para la conformación de un sistema de defensa fueron perfeccionándose en forma constante, y es posible identificar demandas de reformas hasta bien entrada la década de 1920. En parte, lo anterior obedeció al hecho de que se adoptó un modelo de fuerzas exitoso en el mundo, pero que no fue adecuado a la realidad del entorno argentino. Así, el marco de referencia alemán aparecía a los ojos de los militares argentinos de inicios del siglo XX como el mejor parámetro a replicar para lograr el desarrollo propio desde la teoría, pero al no introducirse las adaptaciones pertinentes en el diseño, se comprometió el desenvolvimiento del proceso a la inestabilidad tácita que el ensayo contiene en su dicotomía de prueba y error. A su vez, las características del modelo de ejército propugnado por Alemania imponían un plazo de veinticinco años para establecer una evaluación definitiva del sistema de Fuerzas, tal como lo advirtieron los altos mandos militares en 1907. Desde el punto de vista presupuestario se alcanzaron los resultados de la profesionalización a través de la ley 11 266 (1923), que estableció en forma deliberada y planificada un programa de adquisiciones que satisfizo las demandas postergadas del Ejército con visión orgánica, algo que las leyes 4035 y 6283 no habían logrado, habida cuenta de la contingencia de crisis que las había originado y lo fragmentario de sus alcances.

### La situación chilena

Desde el punto de vista militar, el escenario trasandino estuvo impregnado por la doctrina y los modelos alemanes aun en mayor medida que el caso argentino. Esto contextualizó la realidad política y social circundante a lo castrense y, al mismo tiempo, se equiparó con el entorno argentino al punto de establecerse una notable analogía entre ambos instrumentos militares.

La coincidencia de gobiernos en Argentina y Chile durante los años veinte en los que no faltaban tendencias conservadoras y elitistas, generó antagonismos en torno al control y soberanía de los espacios patagónicos

y la línea de fronteras (Fernandois, 2009, p. 33), que sentó las bases de un conflicto permanente, aunque controlado para no escalar a la crisis, en el cual acabó prevaleciendo la razón arbitral a la que se refiere Fernandois (2005). Para resolver tal situación ambos países acudieron a la misma fórmula: reforzar la presencia del Estado en los vacíos demográficos con el Ejército en actitud de dirimir el conflicto en forma violenta. Lejos de generar consensos, dicha semejanza operó como un factor de rivalidad y competencia, toda vez que el paradigma germano orientó el pensamiento militar y las subsecuentes acciones, y estigmatizó al *otro* como el enemigo. No obstante, el caso chileno fue más allá en su adhesión al prototipo alemán y se dirigió abiertamente hacia lo que Frederick Nunn (1970) denominó la *prusianización*, y Brahm García (2003) reseñó en forma admirable. Con la finalización de la Guerra del Pacífico en 1883, el Ejército de Chile se propuso una reorganización que le permitiese superar las limitaciones operativas que surgieron del conflicto, fundamentalmente en equipamiento, organización, doctrina y aspectos logísticos.

### La evolución orgánica

En el marco de las necesidades emergentes de la *Guerra del guano*, el 15 de mayo de 1906, el presidente de la República Germán Riesco Errázuriz (1901-1906) al expirar su período presidencial, aprobó la distribución de regimientos y escuelas del Ejército en el territorio nacional y otorgó las atribuciones a los comandantes de divisiones para atender el orden público, con el deber de informar de los sucesos al Ministerio de Guerra. Asimismo, en este documento se dejó constancia de que los futuros cambios de la distribución de las tropas deberían ser por Decreto Supremo, y la ubicación de las guarniciones de acuerdo con las necesidades de movilización del Ejército y el orden interno del país.

Las siete jefaturas de departamentos que representaban cada una de las áreas que comprenden el servicio del Ejército, más los oficiales y empleados puestos a disposición para ejercer este trabajo, constituyeron el Ministerio de Guerra. Los comandantes en jefe de las divisiones (cuatro) ejercieron el mando y dirigieron la instrucción con completa independencia, asumiendo la responsabilidad ante el gobierno. El Inspector General del Ejército fue el representante del presidente de la República en la supervisión operacional de las unidades. El Estado Mayor General del Ejército era el organismo

encargado de preparar en la paz las informaciones y antecedentes que se necesitaban en caso de una campaña y, por último, la Dirección de Material de Guerra representaba el organismo técnico que trabajaba a las órdenes del gobierno. El resultado de tal distribución estratégica fue que, mientras el 85 % del efectivo operacional se en-contraba desplegado sobre la frontera oeste y sur (Argentina), apenas el 15 % restante lo estaba sobre el sector norte, en inmediaciones del territorio obtenido al fin de la Guerra del Pacífico.

Respecto a la guarnición militar de Magallanes, la más alejada dentro de la zona austral, nació como colonia penal en la mitad del siglo XIX. Después de la presencia de algunas compañías independientes que permanecían por meses en la guarnición y regresaban a la zona central, con fecha 15 de marzo de 1911 arribó al puerto de Punta Arenas a bordo del vapor *Magallanes* el contingente acuartelado en el Regimiento Buin al mando del mayor Alberto Lara Espinoza, los que pasaron a conformar el Batallón Magallanes. En 1922 se le otorgó la categoría de Regi-miento de Infantería (Zauritz, 2003, p. 211) al mando del mayor José María Barceló, y en noviembre de 1925 adquirió la categoría de Destacamento Magallanes al mando del coronel Javier Palacios Hurtado.

Las características geográficas del país determinaron la creación de las primeras unidades an-dinas del Ejército, las cuales constaban en la organización de 1924 como Destacamentos de Montaña compuestos por un Batallón Andino con apoyo de artillería de montaña.

La situación que afectó al país en la década de 1920 tuvo sus repercusiones en el Ejército (Ejército de Chile, 1985). Por sendos decretos supremos, el gobierno de Arturo Alessandri eliminó una División e inactivó algunas brigadas. Entre otras consecuencias, se produjo la transformación de las brigadas de infantería en grandes unidades combinadas mediante la articulación de elementos de artillería y zapadores, y se orientó a los destacamentos de montaña de forma prioritaria sobre la frontera argentina. Asimismo, se mantuvo la preponderancia del poder de combate desplegado en forma permanente sobre los sectores oeste y sur, en detrimento del límite norte. Esta proporción, en términos de brigadas, era del 15 % en la frontera peruano-boliviana y 85 % en el resto del territorio. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) se suscribió en Lima, el 3 de junio de 1929, el tratado y protocolo complementario que permitió superar la antigua controversia entre Chile y el Perú. Este documento adjudicó la

provincia de Tacna al Perú y Arica a Chile. Hasta 1929, el Ejército mantenía unidades militares en los territorios conquistados en la Guerra del Pacífico, las que fueron desplazadas al territorio nacional y modificaron las zonas jurisdiccionales de las divisiones y guarniciones militares ya existentes.

Como dijimos, la presencia germana en el ámbito militar era muy importante –mucho más que en la Argentina– por el simple hecho de haber sido un oficial prusiano el máximo responsable de la reorganización y conducción del ejército de Chile, hacia 1910. Así, la injerencia del modelo germano a través del concepto de *nación en armas* sería mayúscula dentro de la realidad chilena (Brahm García, 2003, p. 38), en comparación con la argentina. Para los militares chilenos de la época, el marco teórico que referenciaba su pensamiento y consecuente acción era el darwinismo social, conjugado con una permanente sensación de constituir el objeto de una maniobra ofensiva convergente de parte de sus vecinos. Esto configuró un nacionalismo ex-tremo que hizo de la amenaza externa el fundamento que justificaba la dimensión del poder militar en resguardo de un espacio vital, teoría por cierto muy germana (Cornut, 2016, p. 217).

Dentro de la lógica de *nación en armas* se fortaleció la idea de autonomía industrial para la producción de materiales de guerra sensibles, al igual que en Argentina. Entre 1920 y 1930 adquirió relevancia tanto la adquisición de armas y municiones como la manufactura nacional de los mismos. En 1918 se fabricaban proyectiles de artillería y a mediados de 1920 ocurría lo propio con la munición de infantería, mediante la fundición y laminación del latón. Asimismo, singular trascendencia tuvo en la misma época la primera planta de manufactura nativa de fusiles y carabinas Mauser. La economía chilena durante este lapso se vio fortalecida por la disponibilidad del cobre, que a su vez constituyó la esencia de la incipiente industria bélica de aquel país y permitió el inicio de la metalurgia a escala. Al igual que en Argentina, ya en 1928 la aviación había logrado un desarrollo armónico desde el punto de vista de su empleo dual. Tanto la cantidad de aeródromos y hangares como la existencia de un servicio aeropostal que unía Santiago con Arica, permitían el uso del vector aéreo para el desarrollo del transporte y las comunicaciones en tiempo de paz, a la vez que ofrecía bases de apoyo para la utilización de los medios en caso de conflicto armado.

## La situación brasilera

El espejo eurocéntrico en el que Brasil y Argentina reflejaron su estatura político-estratégica influyó para que ambos países tendieran a identificarse con el Viejo Mundo, antes que con Sudamérica. Como lo sintetizara José de Paula Rodrigues Alves, diplomático brasilero en Buenos Aires, en telegrama al ministro de Relaciones Exteriores Lauro Müller el 26 de octubre de 1914: “Nadie piensa en la guerra en nuestro continente, pero la República Argentina, cuyas intenciones pacifistas no pongo en duda, ya está preparada en el plano militar, sigue progresando y se vuelve cada día más fuerte” (citado en Compagnon, 2014, p. 37).

## La misión militar francesa y las hipótesis de conflicto

Como dijéramos, la influencia militar alemana en los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile se hizo sentir en forma contundente hasta el inicio de la Gran Guerra. En el caso de Brasil, tanto el mariscal Hermes de Fonseca desde el Ministerio de Guerra como el barón de Rio Branco en su cargo de ministro de Relaciones Exteriores, estimularon la presencia de oficiales brasileños en Alemania a partir de 1906. Estos oficiales imbuidos de la doctrina germana, difundieron dichos preceptos y se aglutinaron en torno a un grupo denominado los *jóvenes turcos* y expresaron sus ideas a través de la revista *A Defesa Nacional* (Devoto y Fausto, 2008, p. 189). Durante la guerra, Brasil y Argentina adoptaron posturas diferentes. Mientras que el primero entró en el conflicto a instancias de los Estados Unidos en 1917, la República Argentina se mantuvo neutral, lo que a los ojos de la región y el propio país se traducía como una preferencia en favor del Imperio Alemán (Compagnon, 2014, p. 158). Con el fin de la contienda, la posición aliadófila de Brasil morigeró la influencia alemana al tiempo que se contrató una misión militar francesa para capitalizar las experiencias del conflicto.

El general Maurice Gamelin acentuó el concepto de profesionalismo y profundizó el paradigma de nación en armas ya existente en Brasil, pero ahora de la mano de Francia como potencia vencedora (Mc Cann, 2007, p. 261). Para cumplir su cometido la misión militar francesa puso énfasis en dos institutos para la educación militar de los oficiales, señeros hasta la actualidad en el Ejército brasilero: la Escuela de Comando y Estado Mayor (Eceme) y la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales (EsAO). Si bien en el caso de la Eceme ella

ya existía desde 1905, fue la presencia de Gamelin y su equipo la que impulsó cambios drásticos en los métodos de enseñanza y los contenidos tácticos de la Gran Guerra. En cuanto a la ESAO, fue creada por los franceses en 1919 con vistas a formar a los capitanes como jefes de subunidad. La impronta gala se diseminó por el Ejército a partir del efecto multiplicador de los oficiales que cursaban sus estudios en estos establecimientos, contraponiéndose en lo táctico, pero no en lo estratégico con los preceptos alemanes.

Los antecedentes históricos de rivalidad regional orientaron la labor francesa a la hora de per-geñar el posicionamiento geopolítico de Brasil en el subcontinente, partiendo del concepto de que “el planeamiento estratégico brasilero se basaba en la premisa de una guerra con Argenti-na” (Mc Cann, 2007, p. 327). Durante 1926 los galos pusieron énfasis en los viajes finales de instrucción de la Eceme a las zonas de frontera, e hicieron que los futuros oficiales de Estado Mayor estudiaran la situación militar de Brasil en relación con “ciertos países vecinos para analizar las hipótesis de ofensivas y la mejor respuesta de defensa propia” (Mc Cann, 2007, p. 322). La misión francesa se mantuvo en Brasil hasta 1939, más simbólicamente que en condiciones efectivas, cuando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial brindó la oportunidad del regreso a Europa.

## La evolución orgánica

En virtud de la presencia militar francesa, el Ejército de Brasil experimentó una sensible reorganización que se manifestó en el decreto del Poder Ejecutivo N.º 15 235 de fecha 31 de diciembre de 1921. Esta norma contemplaba la composición del Ejército activo en tiempo de paz y preveía la creación y reordenamiento de las unidades y grandes unidades de infantería, caballería y artillería, como también de los servicios de material bélico (arsenales) y administración (intendencia). Fiel a la doctrina de nación en armas, Brasil fundamentaba –dentro de la región– la necesidad de incrementar su fuerza terrestre a partir de su extensión territorial y cantidad de población. Asimismo, utilizaba estos argumentos para justificar su política de rearme, aunque su economía y situación financiera fueran bastante endebles y comparativamente menores que las de Argentina.

En términos aritméticos Argentina era el país que menor cantidad de tropas disponía, mientras que Brasil triplicaba el número de efectivos

respecto del primero. Los ejércitos permanentes de los siete países limítrofes con Brasil sumaban 75 742 hombres, a los que aquel oponía más de 80 000, de los cuales 33 672 pertenecían a las fuerzas estaduais. Por su parte, Argentina tenía un ejército de 27 368 individuos, lo que era cuatro veces menos que el conjunto de las cinco naciones vecinas.

Coherente con la influencia francesa en términos militares y comerciales, las compras de cañones beneficiaron a la Casa Schneider-Le Creusot del país galo que, en líneas generales, duplicaba el alcance del material Krupp del Ejército argentino. Una mención aparte merece la incorporación de sistemas de armas particulares. Entre 1920 y 1921 se adquirieron alrededor de 160 aviones del modelo Bréguet, lo que significó un sensible aumento del poder de combate y colocó a Brasil en posición hegemónica en la región. La innovación más trascendente estuvo dada por la compra del ingenio bélico más adelantado para su tiempo: el tanque. Una vez más bajo la doctrina y los diseños del comercio exterior francés, Brasil accedió a 12 tanques Renault de última generación, y fue entonces el único país en contar con dicho material en el Cono Sur.

Para sostener el nivel de compras con fines de equipamiento militar, Brasil debió erogar sumas muy significativas que superaban por mucho a los montos argentinos destinados al mismo fin. Así, durante la década analizada, mientras Brasil destinó el 14,5 % del total de su presupuesto anual al rearme de su ejército, Argentina solo adjudicó el 8,5 %, sin soslayar que en el quin-quenio 1917-1922 la nación lusoparlante de América ya había gastado un monto equivalente a 250 millones de pesos moneda nacional para reorganizar su fuerza terrestre. El máximo desafío en materia industrial para la defensa estaba constituido por la autonomía para la fabricación de acero, base de la industria metalúrgica y principal preocupación de Brasil. Para ello, en 1921, el gobierno firmó contratos con la empresa norteamericana Itabira Iron Company Limited.

En cuanto al orden de batalla y despliegue del Ejército en tiempo de paz, se observa que conforme al Decreto N.º 15 235 (31 de diciembre de 1921) el Ejército estaba compuesto por una cantidad variable de entre cinco y ocho regiones militares y hasta dos circunscripciones militares. Cada Región Militar encuadraba brigadas de infantería y caballería más elementos de artillería, ingenieros, transmisiones y servicios auxiliares. Por su parte, la

Circunscripción Militar estaba bajo el comando de una autoridad diferente a la regional y su finalidad consistía en complementar el apoyo logístico de las regiones militares más cercanas y, al mismo tiempo, planificar y ejecutar la movilización de los recursos humanos y materiales en caso de conflicto.

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la distribución territorial de fuerzas tuvo su centro de gravedad sobre el sector sur (fronteras con Argentina, Paraguay y Uruguay), donde se concentraban las tres cuartas partes del efectivo total y, por su parte, el Estado de Rio Grande do Sul albergaba más de la mitad de las unidades. Otra característica que marca la importancia militar de la III Región estaba materializada en el mismo decreto, en el que se establecía que las únicas tres divisiones de caballería de todo el Ejército debían emplazarse en este sector, lo que significaba un total de 12 000 jinetes. Pero además esta Región contó, durante todo el período analizado, con la masa de la aviación de combate disponible en el Ejército, cuyas guarniciones se repartían entre las ciudades de Alegrete y Santa Maria, a excepción de la escuadrilla mixta de Mato Grosso. En síntesis, tanto la organización como el despliegue y la asignación de medios permiten comprobar que la prioridad del Ejército brasileiro estaba dada por la hipótesis de guerra con Argentina y, en muy menor medida, con Uruguay. Esta orientación del poder de combate en el escenario estratégico fue, al mismo tiempo, causa y efecto del proceso de reestructuración militar de Brasil (Cornut, 2016, p. 231).

## Conclusiones

El paradigma militar eurocéntrico, materializado en el concepto alemán de nación en armas, modeló las estructuras de los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile a instancias de procesos similares de reforma y profesionalización, en las primeras décadas del siglo XX.

Si bien las transformaciones se desarrollaron a ritmos diferentes, es posible identificar patrones homogéneos relacionados con la idea del vecino como enemigo natural y las fronteras como zonas de litigio antes que de cooperación. Así, los instrumentos militares terrestres de Argentina, Brasil y Chile se reorganizaron y evolucionaron en el marco de la hipótesis de conflicto que sostenía no solo la defensa del propio territorio, sino también la expansión de los límites, en la idea de que el mayor tamaño del país, el número creciente de población y efectivos militares y la presencia efectiva del Ejército a lo largo



y ancho del país, manifestaban una soberanía fuerte y un Estado saludable. La adopción del mismo modelo de fuerzas definió una conducta ofensiva e inhibió las posibilidades de confluencia en el escenario de las relaciones regionales. El extrañamiento que implicaba la visualización del otro como adversario impulsó a los ejércitos a profesionalizarse sobre la base de una guerra determinada y con un enemigo bien definido. Esto, durante la paz, las acciones de preparación del potencial económico con fines militares, y dio lugar al inicio de un desarrollo industrial que, con suerte diversa, acompañó el crecimiento de los países involucrados.

La Primera Guerra Mundial concentró la atención de las transformaciones militares regionales más en lo tecnológico que en los conceptos tácticos o estratégicos, e influyó sobre los ejércitos pero sin llegar a constituir la causa singular de los cambios, ya que las modificaciones habían comenzado alrededor del 1900.

Finalmente, el Ejército Argentino –o más propiamente, Ejército Nacional– experimentó una profesionalización errática por la falta de continuidad e interés en gran parte del accionar previsto. Los procesos particulares (normativos, logísticos, presupuestarios y doctrinarios) no se desarrollaron de manera uniforme ni coordinada, y su evolución permaneció ligada a la coyuntura política del país, antes que a un plan deliberado en tal sentido. Esto ocasionó que los efectos del progreso del Ejército quedasen muy distantes de las causas que le habían dado origen y alcanzasen su culminación – fragmentaria y desarticulada– hacia 1930.

## Referencias

Alvear, M. (1924). *Mensajes presidenciales*. Recuperado de <http://nic.utexas.edu/la-rrp/pm/sample2/argentin/alvear/240181.html>.

Archivo General del Ejército de Chile (1906). *Archivo Histórico. Decreto Supremo N° 719 del 15 de mayo de 1906*. Santiago de Chile: Archivo General del Ejército de Chile.

Brahm García, E. (2003). *Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo influencia alemana 1885-1930*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.

Compagnon, O. (2014). *América Latina y la gran guerra. El adiós a Europa (Argentina y Brasil, 1914-1939)*. Buenos Aires: Crítica.

Cornut, H. (2016). *Profesionalización y pensamiento militar en el Ejército Argentino. Conflic-tividad regional y defensa nacional, 1923 – 1930* (Tesis de Doctorado en Historia). Buenos Aires: Universidad del Salvador.

Der Goltz, C. (1927). *La nación en armas*. Buenos Aires: Círculo Militar.

Devoto, F. y Fausto, B. (2008). *Argentina Brasil 1850 – 2000: Un ensayo de historia comparada*. Buenos Aires: Sudamericana.

Domínguez, E. (1920 – 1930). Colección de leyes y decretos militares concernientes al Ejército y Armada de la República Argentina. Con anotaciones de modificaciones y derogaciones. Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco.

Ejército de Chile (1985). *Historia del Ejército de Chile*. Santiago de Chile: Estado Mayor General del Ejército.

Fernandois, J. (2005). *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial. 1900 – 2004*. Santiago: Universidad Católica de Chile.

Fernandois, J. (2009). El Cono Sur y los conflictos interestatales: la ruta a 1978. En: AA. VV. *Los frutos de la paz. La mediación de Su Santidad Juan Pablo II en el diferendo austral entre Argentina y Chile* (pp. 27-48). Buenos Aires: UCA.

Fraga, R. (2002). *La política de Defensa a través de los mensajes presidenciales al Congreso (1854 – 2001)*. Buenos Aires: Instituto de Historia Militar Argentina.

Mc Cann, F. (2007). *Soldados da Pátria. História do Exército Brasileiro (1889 – 1937)*. São Paulo: Companhia das Letras.

Ministerio de Guerra (1908). *Memoria del Ministerio de Guerra 1907–1908*. Buenos Aires: Arsenal Principal de Guerra.

Mosconi, E. (1983). *El petróleo argentino 1922 – 1930*. Buenos Aires: Círculo Militar.

Nunn, F. (1970). *Chilean politics, 1920 – 1931: the honorable mission of the armed forces*. Al-buquerque: University of New Mexico Press.

Quinterno, H. (2014). *Fuego amigo. El ejército y el poder presidencial en Argentina (1880 – 1912)*. Buenos Aires: Teseo.

Servicio Histórico del Ejército (1922). Publicaciones Militares. *Boletín Militar*, 6297 – Iª Parte. Buenos Aires: IGM.

Solberg, C. (1986). *Petróleo y nacionalismo en Argentina*. Buenos Aires: Hyspamérica.

Zauritz, W. (2003). *Historia Militar de Magallanes*. Punta Arenas: Prensa Austral.

# O Serviço militar brasileiro na hora da verdade: a preparação para o combate em tempos de paz e a participação brasileira na Campanha da Itália

*Francisco Cesar Alves Ferraz*

## Introdução

Em outubro de 1915, o mundo acompanhava, apreensivo, os eventos da maior guerra já ocorrida até então na história da humanidade, que já havia completado mais de um ano sem solução ou vencedor. Era a maior não apenas na abrangência geográfica, mas principalmente no envolvimento de massas de milhões de jovens recrutados no meio civil. Esse recrutamento de conscritos acabou sendo adotado até por países beligerantes que não possuíam o serviço militar em tempos de paz, como a Inglaterra e, mais tarde, os Estados Unidos.

Embora a guerra parecesse distante, no Brasil também se discutia a necessidade de suas forças armadas serem dotadas de uma reserva de jovens conscritos. Propagandistas militares e civis do serviço militar alertavam que a guerra em curso mostrava a necessidade de uma reserva selecionada e treinada de jovens, que, em caso de necessidade, seriam encaminhados para defender o país.

Um desses propagandistas civis era Olavo Bilac. Em 9 de outubro de 1915, o poeta discursava aos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo e defendia a instituição do serviço militar obrigatório no Brasil. Para o palestrante não se tratava apenas da necessária defesa nacional mas, sobretudo, de transformar o país através da experiência dos jovens nos quartéis.

Que é o serviço militar generalizado? É o triunfo completo da democracia; o nivelamento das classes; a escola da ordem, da disciplina, da coesão; o laboratório da dignidade própria e do patriotismo. É a instrução primária obrigatória; é a educação cívica obrigatória; é o asseio obrigatório, a higiene obrigatória, a regeneração muscular e psíquica obrigatória. (...) A caserna é um filtro admirável, em que os homens se depuram e apuram: dela saíam conscientes, dignos, brasileiros, esses infelizes sem consciência, sem dignidade, sem pátria, que constituem a massa amorfa e triste da nossa multidão (Bilac, 1965, p. 27).

Trinta anos depois desse discurso, chegava ao porto do Rio de Janeiro o último contingente de jovens componentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que combateram na Segunda Guerra Mundial as forças do Eixo, na Campanha da Itália, entre 1944 e 1945. Eram aproximadamente 25 mil jovens que, de uma forma ou outra, foram submetidos ao serviço militar, ao treinamento para a guerra e enfrentaram nove meses de combate em território, clima e cultura estranhos àqueles que vivenciavam no Brasil. Seu envolvimento na guerra foi consequência do Estado de Beligerância declarado pelo governo brasileiro contra Alemanha e Itália, em agosto de 1942, após submarinos alemães terem afundado vários navios mercantes brasileiros em sua costa litorânea, com centenas de mortos. O serviço militar brasileiro, instituído no ano seguinte ao discurso de Bilac, teve sua prova de fogo após mais de duas décadas de implantação.

O objetivo deste estudo é colocar em questão o papel do serviço militar no preparo dos conscritos brasileiros para formarem a Força Expedicionária Brasileira, especialmente para a constituição, na tropa, de motivações para o combate e para seu desempenho eficiente. Para este estudo serão utilizadas prioritariamente as memórias de praças e oficiais combatentes, bem como fontes oficiais, além da bibliografia especializada.

## O serviço militar no período pré-Segunda Guerra Mundial

O Brasil da década de 1940 ainda estava bem distante da redenção imaginada por Olavo Bilac. Era um país de industrialização incipiente, dependente, que enfrentava graves problemas sociais, como baixos níveis de

educação, saúde pública e grande desigualdade socioeconômica. O Exército, a Marinha e a Força Aérea não estavam preparados para fazer uma guerra das dimensões da Segunda Guerra Mundial. Havia, inclusive, oposição de lideranças militares brasileiras a uma participação efetiva no conflito; temiam tanto um insucesso militar quanto um enfraquecimento interno que pudesse atizar os inimigos potenciais do Prata e das colônias de súditos do Eixo no sul do país. À política externa do governo Vargas, no entanto, interessava as vantagens da participação no campo de batalha, mais do que apenas fornecer matérias-primas e ceder bases aéreas e navais para as forças aliadas. Do lado dos Aliados, havia a oposição de comandantes militares americanos e ingleses à inclusão de uma força que tivesse que ser criada, armada, treinada e mantida pelos recursos dos Aliados. Contudo, apesar de tantos oponentes, uma participação maior do Brasil na guerra poderia consolidar uma união nas Américas, e nessa participação Vargas encontrou apoio em Franklin Roosevelt. Na cidade de Natal, no nordeste do Brasil, Vargas e Roosevelt se encontraram no início de 1943, e decidiram pelo envio de uma força expedicionária em lugar não definido no momento –ou o norte da África ou o teatro de operações do Mediterrâneo.

No bojo dessa aliança com os Estados Unidos, as autoridades militares e civis dos dois países negociaram o envio de uma força expedicionária com apoio material e organizacional americano. Os planos iniciais previam a mobilização e envio de um corpo de exército, ou seja, três divisões totalizando cerca de 60 mil homens. Seria um esforço gigantesco para o Exército brasileiro de então, pois as forças terrestres regulares no Brasil somavam não mais que 90 mil homens, espalhados por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mal armados e mal treinados. Seriam forças que, com reforço emergencial de mobilização material e bélica, poderiam, no máximo, fazer frente a ameaças fronteiriças.

Dadas essas circunstâncias foi uma vitória enviar uma pequena força expedicionária para lutar na Europa, composta por uma divisão do exército e alguns esquadrões de combate da força aérea. Se, no caso da força aérea, a composição dos esquadrões combatentes e do pessoal de manutenção era formada por militares profissionais da própria força, o recrutamento para a formação da divisão expedicionária do Exército enfrentou muitas dificuldades, uma vez que sua base se assentava, quase que exclusivamente,

no serviço militar. Este, instituído no Brasil em 1916, tinha um duplo objetivo: proporcionar uma mobilização militar eficiente para uma eventualidade bélica e propagar as noções de patriotismo e civismo entre os jovens conscritos. Era essa a estrutura que seria colocada à prova no envolvimento brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando as exigências de preparo militar e psicológico para o combate a um inimigo em território estrangeiro deveriam mostrar que as noções de disciplina e patriotismo, aliadas ao treinamento adequado, proporcionariam as condições necessárias para alcançar a vitória com baixas aceitáveis.

Conquanto houvesse sido previsto em Lei em 1908, somente em 1916, através da regulamentação do alistamento e sorteio militar, o serviço militar obrigatório tornou-se realidade. As expectativas eram grandes, mas as primeiras turmas de conscritos frustraram os ideais dos propagandistas do serviço militar. O número de jovens que não atenderam à convocação era maior que o daqueles que se alistavam: “De 1917 até 1929 foram sorteados 619.753 nomes, dos quais 75.286 foram dispensados e 409.111 não se apresentaram, restando apenas 135.354 para ingressar nos quartéis” (McCann, 2007, p. 295). As falhas no recrutamento eram ampliadas, principalmente nos municípios mais distantes do interior do país, devido ao desconhecimento por parte dos jovens de sua convocação. Outro obstáculo era a exigência do registro civil para o alistamento. Sem esse documento, os jovens do campo e de lugares distantes não poderiam ser alistados e recrutados (Lobo da Silva, 1928, pp. 23-24).

Tampouco o nivelamento social foi conseguido. Os jovens selecionados para o serviço militar no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial foram, na sua maioria, egressos das classes trabalhadoras rurais e das cidades, de nível baixo de instrução escolar e profissional. Os trabalhadores agrícolas predominavam (37,5 %), seguidos dos operários (31,1 %) e empregados do comércio (Lobo da Silva, 1928, pp. 38-39). Os filhos de classes média e alta valiam-se dos mais variados expedientes, tais como conseguir isenções concedidas por padrinhos locais poderosos, servir nas linhas-de-tiro, participar de manobras do exército como voluntário, cursar escolas com treinamento militar, e fazer cursos preparatórios para oficiais da reserva. A conscrição se tornava, assim, um serviço que atingia predominantemente os pobres e analfabetos, afastando-os do mundo do trabalho justamente na idade em que estavam sendo contratados para seus primeiros empregos, ou

aprendendo uma profissão. Frequentemente, um indivíduo transformava-se em “cidadão-soldado” porque não tinha alternativa para desviar-se daquela obrigação. Essa era a forma como tais grupos sociais eram incorporados à cidadania.

Uma parte significativa dos selecionados (aproximadamente 30 %, entre as décadas de trinta e quarenta) era analfabeta. Ainda assim, era uma taxa menor que a de analfabetos na população masculina brasileira em idade militar, que no Censo Demográfico de 1940 atingiu a cifra de 51,6 % (Brasil, 1950, p. 6). A esses números menos desfavoráveis se deve a existência de escolas nos regimentos, para combater o analfabetismo nas tropas e para disseminar as noções de civismo e pertencimento à pátria brasileira (McCann, 2007, p. 298).

Os exames médicos acusavam o deficiente estado sanitário do país, que servia de base ao recrutamento e em que era reprovada quase a metade dos jovens examinados. No início da década de 1940, até uma publicação oficial do Estado Novo, como a revista *Cultura Política*, reconhecia o estado físico e instrucional precário dos selecionados para o serviço militar. O coronel Tristão de Alencar Araripe, então comandante do 2º Regimento de Infantaria, comentou:

nos corpos em que tenho servido, dos sorteados apresentados, cerca de 50 a 60% têm sido recrutados como incapazes fisicamente, e mesmo os que ficam são atestados de tolerância da junta médica, pois, em sua maioria, trazem consigo a miséria física resultante da subnutrição flagrante. O coeficiente de analfabetismo anda pela casa dos 40%. É muito raro encontrar entre mil conscritos três ou quatro com instrução primária completa (Araripe, 1942, p. 209).

A debilidade do contingente recrutado, das estruturas físicas e materiais do Exército, e a imagem negativa do recrutamento militar, bem como campanhas militares protagonizadas pelo Exército no próprio país durante a Primeira República, como Canudos e Contestado, afugentavam a população da caserna, especialmente os filhos de famílias das classes médias e abastadas. Com tamanhas deficiências, o único civil que ocupou o Ministério da Guerra no século XX, Pandiá Calógeras, liderou um processo de reforma e construção de instalações militares por todo o país, melhorando pelo menos o estado

sanitário dos quartéis e os campos de treinamento. Para o aperfeiçoamento dos oficiais, uma missão militar foi contratada da França, nas décadas de 1920 e 1930. Esperava-se um fortalecimento da força terrestre que fosse capaz de dissuadir ambições de vizinhos continentais, como a Argentina, que já tinha estruturado sua conscrição desde 1901, assim como outros rivais continentais, como Peru, Bolívia e Chile (Beattie, 2001, pp. 210-211; 232).

O problema, contudo, era mais complexo do que a construção de instalações adequadas e o treinamento orientado pela missão francesa. Alguns problemas eram estruturais, típicos de um país sem capacidade de prover seus próprios armamentos. Havia também um envolvimento do oficialato na política, que desviava a atenção do aprimoramento profissional para os tentadores apetites políticos. Além do mais, nos níveis mais subalternos, o Exército ainda era composto por oficiais e graduados que concebiam a vida militar e suas relações com os civis conscritos da mesma maneira que seus antecessores do século anterior: a soldadesca deveria ser tratada com pulso firme e, em alguns casos, até com violência. Os castigos físicos, se bem que fora dos regulamentos mais recentes, ainda eram usados com liberalidade: surras com chibatadas, marchas forçadas com tijolos ou pedras nas mochilas, confinamento solitário, palmatória nas mãos e pés e o famigerado “estaqueamento” (McCann, 2007, pp. 111-112).

Mesmo com a melhoria das instalações físicas, a imagem pública do serviço militar era afetada pelas condições muito ruins de alimentação e de higiene, que contribuíam para a disseminação de doenças. O soldo dos praças, em geral, era baixo, e seu pagamento atrasado, uma rotina. Uma das consequências dessa situação era fazer a vida social dos soldados regulares e de suas famílias circular em torno dos quartéis. Relações de dependência entre soldados e oficiais eram comuns, e tais laços sociais reproduziam e, ao mesmo tempo, reforçavam o caráter patriarcal das relações sociais existentes fora dos quartéis, principalmente nas unidades mais distantes dos grandes centros urbanos (McCann, 2007, pp. 116-118; Andrade, 1949, pp. 314-315).

Assim, em alguns tópicos, os relatórios dos ministros de Guerra das décadas de 1930 e de 1940 pouco diferiam do retrato devastador da situação do Exército em 1918, traçado pelo então ministro Pandiá Calógeras: insucesso do sistema de alistamento e sorteio militar, pouca ou nenhuma indústria de base militar, depósitos vazios, munição escassa e deficiente, instrução



mediocre da tropa, o oficialato ocupado mais da burocracia militar do que as missões e o aperfeiçoamento profissional (Calógeras, 1933).

Alguns progressos foram feitos a partir da década de 1930. A reorganização do quadro de oficiais estimulou a reforma dos mais antigos e uma política de promoções mais profissional que política. Esta, por sinal, também foi colocada a serviço da instituição, na clássica formulação do então chefe de Estado-Maior do Exército, general Goes Monteiro, de que era tempo de acabar com a política no Exército para haver uma política do Exército (Goes Monteiro, 1933). Uma política de reequipamento material fortaleceu relativamente às forças armadas, em relação aos vizinhos.

### Momento de mudanças

As negociações da aliança com os Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial, significaram não somente uma aquisição de armas e equipamentos, mas também uma troca de doutrina militar. Essa troca deveria ser sentida no treinamento, principalmente quando os expedicionários brasileiros estivessem prestes a entrar em combate, em 1944.

O treinamento para combate que o Exército brasileiro adotava antes da Segunda Guerra Mundial era voltado para as principais missões no período entre-guerras: a repressão a conflitos internos e a defesa de fronteiras. Mesmo assim, era deficiente. Os exercícios de infantaria, quando realizados, eram feitos com munição racionada, por pelotões e companhias, raramente por batalhões. A artilharia também sofria com a escassez de munições para exercícios. A preparação priorizava a guerra defensiva, de posições, e não acompanhava a evolução das doutrinas de combate para a guerra de movimento, sendo mais adequada para a Grande Guerra do que para a Segunda Guerra Mundial (Arruda et al., 1949, p. 13)

Para os recrutados civis, o nível do treinamento era ainda mais rudimentar: em geral, exercícios de educação física, ordem unida, marchas de média e longa distância, sessões de tiro com munição parcimoniosamente controlada. Um oficial da reserva que combateu na FEB foi categórico quanto à utilidade do serviço militar para uma guerra de verdade:

A nossa experiência de instrutores convenceu-nos de que a estada de um homem, por um período de um ano ou mais, em nossos quartéis,

nos padrões atualmente adotados pelo Exército, é inútil e dispendiosa à nação. A sua instrução é deficiente para qualquer guerra e, com mais razão, para a guerra moderna e, passados três ou quatro anos, o reservista é apenas um recruta que já passou pelo quartel. Na emergência de uma campanha, todos terão de receber instrução, de novo, partindo das noções mais elementares, como aconteceu com os convocados, de 1942 em diante e com os destinados à F. E. B. (Arruda et al., 1949, p. 14).

A instrução deficiente, combinada com uma disciplina rotineira no quartel, era uma sucessão de demonstrações de autoridade imanente dos graduados e oficiais, e humilhações diárias dos recrutados, para que “soubessem o seu lugar”.

A vida do conscrito é constituída por uma série permanente de desfalques na sua vontade e liberdade, em benefício da equipe, do conjunto. (...) Em qualquer exército de qualquer parte do mundo esta iniciação da vida militar é desagradável. Uma porção de princípios, etiquetas, formalidades, simbolismos, teorias, disposições regulamentares, reduz o pobre mortal a uma vontade comandada por outrem. (...)

Desde que acorda até a noite, tem que fazer as coisas às carreiras. A ordem-unida, o manejo das armas, a maneabilidade, a instrução física, as marchas, o serviço de guarda, a limpeza dos armamentos, a instrução geral, toda uma invenção diabólica comprimida em um ano de serviço militar, como se fora mesmo de propósito para não “dar vez” ao soldado (...) Sua, esfola-se, suja-se na terra ou na lama, lambuza-se de óleo quando não se “perfuma” no “cheiro dos muares” (Andrade, 1949, p. 351).

As opiniões sobre a instrução dos oficiais da reserva tampouco eram lisonjeiras. De acordo com esses civis que, durante o período de formação universitária, fizeram o serviço militar visando ao oficialato da reserva, a instrução era deficiente para o tipo de guerra então em curso. E o fato de que, na mobilização para a FEB, foram muitas vezes os oficiais da reserva que instruíram os convocados, ao invés dos oficiais da ativa, só agravava mais ainda tal situação (Arruda et al., 1949, pp. 17-19).

A necessidade da guerra ressaltou os problemas do treinamento dos expedicionários no país. A mudança da estrutura das unidades, que deveriam embarcar para a guerra, não encontrou instalações adequadas. O segundo-

sargento Ivan Alves, um ex-combatente de São João del Rei recorda: “um regimento, com cerca de mil homens, passou a ter cinco mil. (...) não havia como acomodar todo mundo no quartel; foi necessário ocupar uma instalação na cidade, além das barracas” (Fröhlich, 2015, p. 29). Nesses casos, os mais velhos de quartel tinham que dar lugar para os novatos e dormir nas barracas instaladas próximas aos quartéis. As dificuldades logísticas de fornecer abrigo, alimentação, fardamento e outras necessidades para os novos ingressantes tornava a vida nas cidades-sedes dessas mobilizações uma experiência caótica (Oliveira, 2011, p. 53; Viotti, 1998, p. 16).

Essa mudança de padrões obrigou o Exército brasileiro a alterar também a composição das unidades para o sistema americano, no qual “cada pelotão de fuzileiros tem três sargentos, mais um adjunto, cada companhia tem três pelotões de fuzileiros e assim por diante. Em consequência, o número de sargentos multiplicou várias vezes. Houve, então, cursos emergenciais (de sargentos e de cabos) para que cada pelotão, cada companhia, tivesse o efetivo completo”; recordou em entrevista o terceiro-sargento paulista Newton Lascalea (Fröhlich, 2015, p. 30).

Além das instalações e composição das unidades, foi necessário providenciar novos materiais de instrução. Os oficiais, que fizeram cursos em escolas militares americanas, tentavam ensinar a seus pares no Brasil as novas estruturas, as doutrinas e, principalmente, os procedimentos com o material americano, desconhecido da maioria formada pela missão militar francesa. Os oficiais americanos enviados ao Brasil para auxiliar nesses trabalhos eram poucos e a maioria não dominava o idioma português. A solução encontrada foi traduzir às pressas os manuais americanos e distribuí-los, aos milhares, para as unidades expedicionárias. Paralelamente, oficiais foram enviados aos Estados Unidos para treinamento, e oficiais da reserva foram convocados para atualização e adaptação às novas estruturas e práticas de combate (Leite e Novelli Junior, 1983, p. 385; Castello Branco, 1960, p. 81).

Muitas das dificuldades encontradas na preparação efetiva dos recrutados, oriundos da instrução e treinamento do serviço militar regular, para a guerra a ser combatida além-mar, são atribuídas pelas lideranças militares à conversão da doutrina anterior, francesa, para a doutrina dos novos aliados, os Estados Unidos. Embora realmente tenha havido mudanças substantivas na estruturação das unidades, deve-se questionar o impacto

real da troca de doutrinas militares no treinamento e no desempenho das tropas na Campanha da Itália. O combate na frente italiana era efetuado, fundamentalmente, por pequenas unidades (grupos de combate, pelotões, companhias). No que concerne ao treinamento de pequenas unidades, não havia tantas diferenças no treinamento de movimentação e concentração de fogo. Maximiano explica:

é um engano crer que toda a doutrina militar francesa se baseasse em ideias defensivas: as táticas de infantaria adotadas na França eram bastante agressivas, orientadas pelo ataque frontal concentrado mediante apoio de armas automáticas e coordenado com densas barragens de artilharia calculadas a partir de detalhados estudos de terreno (2010, p. 41).

As unidades básicas, como os grupos de combate, os pelotões e as companhias eram muito semelhantes, nas duas doutrinas, em efetivos e armamento individual. Por mais que o armamento não chegasse em quantidade suficiente dos Estados Unidos para o treinamento dos futuros expedicionários, seria possível não apenas treiná-los com as armas individuais de origem alemã, francesa, dinamarquesa ou tcheca, já disponíveis no Exército brasileiro, mas também introduzir nessa preparação as novidades reais, como o uso de armas de apoio – morteiros leves e metralhadoras pesadas – e técnicas de combate nunca praticadas no Brasil, como assalto a fortificações, infiltrações e ataques noturnos (Maximiano, 2010, pp. 45-46).

Havia, contudo, algumas diferenças. O “sistema francês” concebia a guerra de maneira “científica”, e as respostas aos problemas enfrentados nas ações de combate deveriam ser dadas de acordo com os princípios estudados exaustivamente. Além do mais, a iniciativa para certas ações de combate deveria estar a cargo dos oficiais e superiores hierárquicos, evitando-se a delegação de funções. Por seu lado, o “sistema americano”, baseado na análise de sucessos e fracassos das experiências no norte da África, na Sicília e no Pacífico, valorizava a capacidade de adaptação das ações ao terreno, ao inimigo e às situações inesperadas de combate. Assim, era não só comum como até desejável que a capacidade de improvisação e iniciativa fosse estimulada, principalmente nas situações imprevistas de combate, e que tais ações pudessem ser efetuadas não apenas por oficiais, mas por sargentos,

cabos e até soldados. Para que tal mentalidade pudesse ser eficiente, do ponto de vista de combate real, sem perder a liderança e a capacidade de executar as missões, treinava-se exaustivamente, simulavam-se, ao máximo, as situações de combate. A ênfase no treinamento exaustivo era, portanto, a diferença mais sentida pelos expedicionários entre as duas doutrinas, e a delegação de responsabilidades conferia uma operacionalidade maior em face dos imprevistos de combate, bem como uma maior confiança e coesão das unidades de combate, tanto diante do inimigo quanto na retaguarda (Bonalume Neto, 1995, p. 121; Maximiano, 2010, pp. 42-46).

Portanto, as maiores dificuldades foram sentidas não porque um tipo de treinamento e doutrina foi mudado para outro, mas, sobretudo, porque foram muito pouco treinadas as situações que simulavam o combate real. Como recordou o tenente José Conrado de Souza;

O nosso preparo no Brasil foi, basicamente, treinamento físico. Muito pouco de preparação psicológica. (...) Lembro que quando eu estava no Esquadrão ficamos um mês fazendo treinamento na Pedra de Guaratiba. Ali, a única coisa que nós fazíamos era treinamento físico. Entrávamos em forma, corríamos, nadávamos, treinávamos defesa pessoal, voltávamos para o acampamento, comíamos e dormíamos. Assim era a nossa vida. Depois, o Esquadrão saiu e foi para o Morro do Capistrano e nos instalamos num galpão enorme com beliches, sanitários etc. Ficamos muito mal acomodados. A instrução era igual à do quartel. Para mim, especificamente, muito pouco foi ensinado. Eu sei que alguns tiveram instrução mais adequada, mas eu não. (Souza, 2001, p.149).

Por seu turno, somente algumas unidades tiveram a oportunidade de exercitar na Itália o treinamento com situações e uso de armas e equipamentos de combate real.

Além dos programas de vacinação e exame de saúde, havia, para o pessoal do Centro de Reacomodamento, educação física, ordem unida e algumas marchas, mas nenhum exercício de maior vulto, preparatório para a campanha que se avizinhava. Explica-se, acredito eu, pelo desconhecimento do tipo de conflito que iríamos encontrar lá na Itália. Só fomos ter exercícios ligados diretamente à guerra ao

chegar à Itália, porque o armamento era diferente e porque somente lá obtivemos informações sobre o inimigo, equipamento, uniforme etc.

Permanecemos cerca de quarenta dias em Stafolli, onde ficava o Depósito da FEB, e lá recebemos instruções sobre armamento, minas, gases. Sobre uniformes e viaturas, aprendemos a estabelecer a diferença entre os dos inimigos e os nossos, os aliados. Considerei a preparação muito boa, principalmente esse contato com o novo armamento. Nós aqui, no Brasil, tínhamos armas ultrapassadas, algumas, ainda, da Primeira Guerra, e o nosso sistema de instrução, calcado na escola francesa, era completamente diferente (Veras, 2001, p. 268).

Assim, carentes de treinamento adequado, as tropas brasileiras foram para o teatro de operações na Itália e somente os expedicionários do 1º escalão (basicamente, o 6º Regimento de Infantaria (R. I.), além de algumas poucas unidades de artilharia, engenharia, cavalaria, e outras unidades auxiliares), puderam treinar em campos de instrução americanos, com armas, equipamentos, em situação e terreno de combate, na Itália. Os dois escalões seguintes (1º R. I. e 11º R. I.) não tiveram a mesma oportunidade, e acabaram por aprender a combater de verdade na própria ação, no teatro de operações, começando com a ocupação de frentes mais calmas e progressivamente sendo empregados em ações mais complexas e perigosas.

## Seleção e perfil dos combatentes da FEB

Por mais que a mudança de doutrina militar, a estrutura bélica precária e os sistemas de treinamentos no Exército brasileiro fossem preocupantes para a entrada em ação no teatro de operações do Mediterrâneo, o que realmente tirava o sono dos generais que dirigiam a formação da FEB era a seleção física e psicológica dos praças. Os primeiros sinais de tais dificuldades foram as cifras decepcionantes do número de voluntários: 1.570 selecionados entre 2.750 que se apresentaram, de um grupo etário masculino de mais de 2 milhões de jovens. Assim, para preencher as expectativas militares de formar um corpo de exército, que seria armado, equipado e treinado pelas forças americanas e a elas subordinadas no teatro de operações, a solução teria de ser a incorporação de convocados do meio civil.

A princípio, essa incorporação de 3 % da população masculina em idade militar não deveria ser difícil, ainda mais após se testemunharem as entusiasmadas manifestações nas ruas do país, lideradas por estudantes, para que o Brasil declarasse guerra contra o Eixo. No entanto, os resultados dos exames físicos e as solicitações recorrentes de dispensa das tropas expedicionárias mostraram que a tarefa seria muito mais difícil do que se imaginava.

Para criar e moldar uma força expedicionária destinada ao combate no exterior, as lideranças do Exército brasileiro atuaram com o objetivo de selecionar "os melhores e os mais brilhantes" da juventude do país. Isso significava que os recrutas deveriam apresentar os seguintes critérios mínimos: altura de 1,60 centímetros, peso mínimo de 60 kg, 26 dentes naturais, audição normal, visão binocular, sentido cromático normal, equilíbrio mental e emocional e idade mental igual ou superior a dez anos de idade (Gonçalves, 1951, pp. 67-68). Embora não fosse uma regra institucionalizada, o Exército tentou evitar o quanto possível os analfabetos dentro da FEB.

Os primeiros resultados da convocação de jovens entre 18 e 25 anos para exames físicos e psicológicos deixaram alarmadas as autoridades militares brasileiras. O número de inspecionados considerados física e intelectualmente aptos a pertencer às tropas expedicionárias foi menor do que o esperado (Gonçalves, 1951, pp. 77-78). A solução encontrada foi reduzir o nível de exigência dos exames, bem como rever os resultados das incapacidades. Mesmo assim, de um total de 107.609 inspeções de saúde, 23.236 reprovações foram registradas (Gonçalves, 1951, pp. 67-68-117-118; Moraes, 1947, p. 145).

Esses resultados dos exames médicos mostraram uma imagem assustadora das condições sanitárias da população brasileira. A maior causa de reprovação nos exames físicos era a dentição precária (Gonçalves, 1951, p. 104; Piason, 1949, p. 88). Nos que foram inspecionados pelo Conselho de Saúde do Exército, taxas alarmantes de rejeição por motivos físicos foram encontradas em áreas militares do Norte e Nordeste, posto que a situação de saúde da 4ª Região Militar (Minas Gerais) e da 5ª Região Militar (Paraná e Santa Catarina) também fosse preocupante. Em suma, no final de 1943, apenas 59,50 % de todo o país eram considerados capazes (Brasil, 1945, p. 18). A consequência mais importante desses procedimentos oficiais foi tornar possível encaminhar, para o teatro de operações da Itália, expedicionários que tiveram de ser tratados nos hospitais de campanha e, em decorrência disso,

ocupar leitos e a dedicação de médicos, dentistas e psiquiatras, que deveriam ter suas atenções voltadas para os feridos e doentes em combate, e não para sanar as falhas do processo seletivo.

Além do relaxamento dos critérios de recrutamento, havia uma prática comum nas unidades: entender casos duvidosos de incapacidade física como manobra para não ir para a guerra. O oficial da reserva José Alfio Piason, médico na vida civil, que lutou na FEB como tenente do 6º Regimento de Infantaria, afirmou que a seleção “foi baseada no princípio, *a priori* fixado, de que todo convocado queria eximir-se das obrigações que o país exigia”. Por essa razão, o que era indício de incapacidade física ou mental podia ser classificado como simulação, e muitos homens doentes foram selecionados (Piason, 1949, pp. 84-85). Essa mentalidade motivou casos considerados pelos aliados americanos como absurdos, por exemplo, a incorporação do médico Massaki Udihara numa tropa de Infantaria, por este ter realizado o curso de preparação de oficiais da reserva enquanto estudava Medicina. Udihara solicitou a incorporação como oficial médico, mas recebeu a resposta negativa, com a observação do oficial general de que estava “com medo de ir à guerra”. No batalhão de Udihara havia mais quatro médicos que atuaram como infantes; ninguém servindo como oficial médico (Udihara, 1949, p. 142).

Mesmo com tantos esforços para o recrutamento, o tão sonhado corpo expedicionário não se concretizou. Além das dificuldades de seleção, houve um desentendimento entre as lideranças militares brasileiras e americanas sobre o fornecimento de armas para treinamento no Brasil. Assim, somente a primeira divisão expedicionária foi organizada, sustando-se a criação e providências para mobilização das duas outras divisões (Oliveira, 2015, pp. 310-311). Deixava-se de enviar um corpo expedicionário para enviar uma força expedicionária, composta por uma divisão de exército e alguns esquadrões de aviação de caça. Segundo o humor popular, que não acreditava que os brasileiros embarcariam e combateriam os soldados do Eixo, o Brasil estava “tirando o Corpo fora...”.

A missão a seguir era reunir e treinar os selecionados. Mas a seleção inicial não garantiu ao Exército que o recrutado realmente se encaminharia para treinamento e combate. Oficializada a incorporação dos recrutas, os oficiais comandantes da futura força expedicionária tiveram de enfrentar uma avalanche de pedidos de dispensa, de transferência para unidades



não-expedicionárias, de adiamento de incorporação. Como o recrutamento ainda era sediado nas unidades militares locais, antes da reunião de todas as unidades para treinamento no Rio de Janeiro, as possibilidades de acordos locais se multiplicavam. Foram relatados casos de suborno, dispensas de “arrimos de família”, casados e irmãos de convocados já incorporados, transferências de funcionários públicos e diplomados em cursos superiores para outras unidades. Mesmo oficiais regulares se esquivavam de ir à guerra. (Ferreira Junior, 2007, p.119; Arruda et al., 1949, p. 46; Piason, 1949, p. 87; Bonalume Neto, 1995, p. 129).

O apadrinhamento e a legislação não esgotaram os mecanismos para alguém se furtar à tropa expedicionária: se nada funcionasse, podiam-se cometer transgressões disciplinares, uma vez que a FEB poderia aceitar somente homens com comportamento “excepcional” ou “bom”. Alguns praças convocados conseguiram, assim, seu intento. Mas, o aumento de ocorrências fez o comando emitir Nota-Circular Reservada, extinguindo a condição de comportamento. As consequências para a formação da FEB foram piores ainda: vários comandantes de unidades “aproveitaram, com alegria, as ordens de transferência para afastarem os maus elementos” (Klas, 2002, p. 62), direcionando-os para a FEB; houve unidade que encaminhou à FEB “soldados condenados cumprindo sentenças e outros, ainda, em curso de processo” (Brasil, 1945, p. 19; Amaral, 1949, p. 163; Castelo Branco, 1960, pp. 139-140). Estudantes opositores a Getúlio Vargas e à ditadura do Estado Novo também foram direcionados à FEB (Vidigal, 1988, pp. 5-6)

Aqueles que não queriam ou não conseguiram escapar da FEB percebiam tais movimentações. Ver os privilegiados pelos apadrinhamentos escaparem do “tributo de sangue”, ou ser o futuro expedicionário equiparado aos delinquentes do Exército, como se a FEB fosse uma punição, debilitou inicialmente o moral da tropa expedicionária. Segundo o 1º tenente de artilharia da FEB, Elber de Melo Henriques, observador aéreo do Esquadrão de Ligação e Observação, um dos maiores erros da FEB, em sua formação

foi não convocar toda a mocidade, ricos e pobres, além de levar tantos analfabetos, muitos que nunca ouviram falar de Hitler, e, muito menos, entendiam por que o nazismo era uma ameaça à liberdade do Brasil, à

vida do nosso país, que já possuía colônia alemã pronta, no Sul, para assumir o governo (Henriques, 2001, p. 163).

Seria necessário um grande esforço para motivar esse grupo heterogêneo de jovens, que variavam suas motivações desde lutar pela pátria, pelas liberdades, contra a opressão nazi-fascista, até jovens que não compreendiam o porquê de atravessarem o oceano para lutar em local estranho contra um inimigo desconhecido.

### Motivações dos soldados brasileiros para combate

As noções de civismo e patriotismo do serviço militar não foram suficientes para fornecer aos recrutados informações e motivação necessárias para o combate contra o Eixo. Na verdade, os princípios inculcados nos tempos de serviço nos quartéis pouco podiam fazer contra a principal contradição do envio da FEB para a Campanha da Itália: lutar contra o nazi-fascismo além-mar e vivenciar uma ditadura com alguns traços semelhantes no próprio país. Na verdade, faltavam até informações básicas: a maioria dos expedicionários não sabia as razões para estar numa guerra que não entendiam nem sequer como havia começado (Ramos, 1949, p. 27; Castelo Branco, 1960, p. 144; Schnaidermann, 1995, pp. 7-8). Entendiam menos ainda porque eles é que foram escolhidos, quando havia jovens mais robustos, mais escolarizados, que não embarcariam com eles para a guerra. Um tenente da FEB comentou:

a pouca e deficiente preparação moral dada ao soldado produziu (sic) ainda menos resultado do que aquele mínimo previsto. O soldado brasileiro não tinha noção clara daquilo porque (sic) ia lutar e, ao mesmo tempo, sabia que muitos outros, em melhores condições, físicas e mentais, tinham sido excluídos, por manobras nebulosas, do cumprimento daquele dever que lhe impunham (Souza, 1949, p. 212).

O período de concentração dos expedicionários e de treinamento no Rio de Janeiro também não ajudou a aumentar a motivação para combater. Os três regimentos de infantaria foram concentrados na Vila Militar e, nos finais de semana, recebiam licença para passeio na capital federal. Os soldados de outros estados e municípios fora da área metropolitana do Rio de Janeiro

não tinham permissão para sair e rever parentes e amigos. Isso aumentou o descontentamento com o confinamento e produziu uma série de “escapadas”, as chamadas “tochas”. Os soldados se ausentavam até o limite de dias que não configurasse deserção, e retornavam ao quartel. Eram punidos, mas continuavam na unidade expedicionária. Ciente dessas práticas, o general Zenóbio da Costa, comandante da infantaria da FEB, inspecionou cada um dos três regimentos, e frente a frente com os futuros expedicionários declarava que não comandava covardes, ordenando, em seguida, que quem não quisesse ir à guerra, que desse um passo à frente. Prometia que não puniria aqueles que não quisessem pertencer às tropas expedicionárias. Nas três ocasiões, diante da maioria da tropa estupefata com a cena, alguns poucos soldados e cabos que avançaram um passo enfrentaram a cólera do general, que ordenava a prisão daqueles que acreditaram na sua “palavra de honra” (Viotti, 1998, p. 29; Cardoso, 2001, p. 65; Klas, 2002, pp. 72-73; Maximiano, 2010, pp. 380-381).

As relações com o meio civil, durante o tempo de concentração e treinamento no país, também foram de pouca serventia para melhorar o moral. *No front* interno, uma parte da população se preocupava mais com o racionamento e a escassez de gêneros alimentícios e de fontes de energia do que da participação de seus jovens na guerra (Cytynowicz, 2000, p. 82). Outros apostavam que os expedicionários não embarcariam ou, se o fizessem, embarcariam com a guerra já no fim. Para aumentar essa convicção, não faltaram as contribuições, mesmo involuntárias, da imprensa brasileira. Sob a censura do Estado Novo, e no afã de noticiar as vitórias e avanços dos Aliados na Europa, os jornais davam a entender que a guerra já estava ganha, enquanto os futuros expedicionários treinavam no Brasil:

Um ano antes de terminar a guerra, a nossa imprensa só lançava notícias desmoralizando o inimigo. Víamos, na imprensa em geral, notícias de que a Alemanha estava sem comida, de que seus soldados combatiam sem roupas, sem calçados, com meninos e velhos integrando o já derrotado exército, sem gasolina e sem aviões, sem tanques e que o desbaratamento total estava próximo. (...) Somente no dia 22 de setembro de 1944, quando os alto-falantes do navio [transporte] anunciaram o primeiro boletim noticioso de bordo, puderam nossos homens cair na realidade dos fatos e ver que tudo o que se lia ou se ouvia no Brasil eram notícias parciais ou mentirosas. A Alemanha ainda vivia.

Os seus soldados massacraram os paraquedistas aliados lançados na Holanda; o general Patton sofria duríssimo revés e os brasileiros estavam empenhados em seus primeiros combates na Itália (Klas, 2002, p. 71).

Um boato se espalhou, o de que Hitler teria dito, ao saber que o Brasil preparava jovens para combater o Eixo, que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil chegar à guerra. Provavelmente falso, esse boato mostra muito do estado de ânimo da população brasileira em relação ao envolvimento na guerra. Ciente desse boato e do uso corrente, entre os expedicionários, da expressão “a cobra vai fumar” (com significado próximo a “chegou a hora da verdade”), o comando da FEB mandou estampar, nos ombros de cada uniforme dos brasileiros na campanha da Itália, um distintivo com um desenho de uma cobra fumando cachimbo.

Portanto, contra todas as dificuldades, a cobra ia fumar. E assim como o treinamento de verdade para o combate somente aconteceu quando a tropa já estava no teatro de operações, a constituição de motivações para combate foi ocorrendo aos poucos, desde o período de treinamento no Brasil até os duros combates na Campanha da Itália.

Os primeiros elementos de motivação de combate são a coesão em grupos e a formação de um espírito de corpo (Kellet, 1984, pp. 51-52). Nas memórias dos expedicionários consultadas há muito poucas referências ao estabelecimento de laços mais sólidos entre os praças, no período de treinamento no Rio de Janeiro, a não ser às “tochas”. Isso se devia, provavelmente, à composição instável das unidades, sujeita às transferências e às dispensas. No entanto, à medida que os pelotões e companhias eram definidos e mantinham sua composição, com poucas transferências, a coesão dos grupos tendia a aumentar. Na Itália, era comum haver recusa, por parte de praças e oficiais subalternos, de transferências, mesmo que isso significasse promoção ou deslocamento para lugares mais calmos da frente, pois aqueles não queriam deixar os seus companheiros, a quem tratavam como se com eles tivessem laços familiares (Rodrigues, 1969; Silveira, 1997).

A *coesão* expressa sentimentos associativos e de solidariedade entre membros de um mesmo grupo, baseada em interações prolongadas e exposição aos mesmos riscos, conquistas, reveses e rotina. Por sua vez, o *espírito de corpo*, que expressa o sentimento de orgulho à unidade de pertencimento, demanda

um tempo maior de maturação e vínculos, pois se trata de uma identidade construída a partir de uma tradição anterior (Kellet, 1987, p. 59). Com efeito, essa tradição, na FEB, somente pôde ser criada durante a Campanha da Itália, porquanto, apesar de uma origem regional dos regimentos de infantaria (1º R. I. no Rio de Janeiro, 6º R. I. em Caçapava, estado de São Paulo, 11º R. I. em São João del Rei, estado de Minas Gerais), houve esforço do Ministério da Guerra brasileiro para dotar os regimentos de praças e oficiais de todas as regiões do país, guardadas as proporções em que foram recrutadas – aproximadamente 82 % dos expedicionários foram provenientes das regiões sudeste e sul do país.

Há, porém, indícios de certo zelo e defesa da tradição do regimento, ou mesmo competição, pelo melhor desempenho (ou por sua memória). Os expedicionários do 6º R. I., por exemplo, que foram os primeiros a chegar ao teatro de operações e entrar em combate, não apreciavam as comemorações da FEB, que priorizavam as glórias nos combates de Monte Castello (cujas ações concentraram mais pessoal do 1º R. I.) e nos de Montese (com ações mais destacadas do 11º R. I.), preferindo comemorar a rendição da 148ª divisão alemã, em Collechio-Fornovo (Maximiano, 2010, pp. 350-351).

Além do sentimento de pertencimento à unidade regimental, um dos fatores individuais mais conhecidos de motivação para o combate é o sentimento de patriotismo. A inculcação desse valor nos soldados, aliás, era um dos objetivos mais destacados do serviço militar brasileiro, a partir de seus propagandistas. Alguns depoimentos mostram essa necessidade:

A Educação Moral era uma instrução difícil de ser ministrada tendo[-se] em vista as razões que levaram o Brasil à guerra e o moral do povo brasileiro.

Era necessário convencer o soldado que ia para a guerra, de que ia lutar para preservar a integridade de sua Pátria, contra um inimigo que ameaçava usurpá-la, que lutaria para vingar a morte de homens, mulheres e crianças inocentes, em torpedamentos de navios brasileiros, a pouca distância de nosso litoral (Amaral, 1949, p. 171).

O problema, de acordo com o capitão da reserva, era o efeito moral dos exemplos que os futuros expedicionários presenciavam; esses, sim, é que devastavam o moral dos soldados. Em seu entendimento, eles, os soldados da FEB, seriam os sacrificados, enquanto os protegidos dos comandantes, dos

políticos, dos ricos, dos influentes continuariam em sua boa vida no Brasil (Amaral, 1949, p. 172; Schnaiderman, p. 1995, 37).

Assim, de forma análoga ao que ocorreu com soldados americanos e ingleses nas duas guerras mundiais, cujas opiniões e valores foram compilados e estudados por Baynes (1967) e Stouffer (1949), entre os expedicionários brasileiros o sentimento de patriotismo não estava entre aqueles que mais os motivavam para o combate. Os sargentos Boris Schnaiderman e Leonécio Soares lembravam que nem no período de treinamento no Brasil, tampouco no teatro de operações, os futuros expedicionários simpatizavam com discursos patrióticos. Mesmo a ideia de solidariedade pela democracia parecia ridícula entre os expedicionários (Soares, 1984, p. 28; Schnaiderman, 1995, p. 22, 42; Maximiano, 2010, p. 158).

## Duas formas diferentes de disciplina: Exército de Caxias x Exército da FEB

Uma das experiências mais marcantes para os expedicionários brasileiros foi o choque entre dois tipos de disciplina. A primeira, que o expedicionário aprendera quando ainda era recruta no serviço militar brasileiro, era identificada com o exército regular, ou “exército de Caxias”, “homenagem” ao patrono maior do Exército brasileiro, A outra, vivenciada desde a entrada nos navios-transporte americanos, era a disciplina do “exército da FEB”. Nessas embarcações, os expedicionários ficaram impressionados com o tamanho dos navios-transporte e com o funcionamento eficiente da vida a bordo. Todas as rotinas das duas semanas de duração da viagem – limpeza, horários para refeições, higiene pessoal, treinamento para evacuação do navio, frequência ao convés – eram submetidas a regras rigorosas, cumpridas com zelo pelos brasileiros. Aos poucos, percebiam que a disciplina exigida a bordo não era aquela voltada para a mera exteriorização da autoridade, mas sim a forma mais prática e objetiva de solucionar problemas de convivência e segurança de mais de cinco mil homens a bordo (Andrade, 1949, p. 322).

Depois do desembarque, as surpresas continuaram. Relatos de ex-combatentes recordaram a decepção de alguns oficiais brasileiros recém-chegados, ao descobrirem não existir uma cantina privativa para eles nas instalações de recepção. Teriam de comer, no mesmo lugar, a mesma comida e servir-se com os mesmos utensílios dos praças, tal como faziam as unidades

do Exército dos Estados Unidos (Soares, 1984, pp. 31-34). Alguns oficiais brasileiros entenderam tais práticas como uma ameaça à disciplina. Um deles, major, enfatizando as costumeiras punições e castigos nos quartéis brasileiros, deixou claro para seus soldados: “Estamos fora do Brasil. Lá, eu mandava estaquear; aqui mandarei fuzilar!” (Soares, 1984, p. 31).

Cedo ou tarde, porém, oficiais e soldados, à medida que iam se aclimatando ao teatro de operações, se adaptavam também aos novos padrões disciplinares. O relaxamento da obrigatoriedade de continência a cada aproximação de superiores era um dos novos padrões. Não se tratava somente de uma prática disciplinar diferente, mas, sobretudo, de uma estratégia de sobrevivência de oficiais e graduados em uma frente cheia de atiradores de elite alemães (Souza, 1949, p. 219; Soares, 1984, p. 275).

Entre os brasileiros foi desenvolvida, na Itália, também uma diferenciação informal, em que a hierarquia do respeito era concedida indistintamente a praças e oficiais, desde que fossem, de fato, combatentes na linha de frente. Sua contrapartida era o pessoal da retaguarda e dos depósitos, chamados de “saco B”. Essa descrição pejorativa que os combatentes da linha de frente davam aos seus pares na retaguarda se deve ao fato de que cada expedicionário recebeu dois grandes “sacos”, com uniformes, utensílios de alimentação e instrumentos de higiene. Para os que iam à frente de combate eram usados os sacos “A”; para os que ficavam na retaguarda, sacos “B”. Assim, para os soldados “sacos A”, ou seja, para aqueles que travaram ou puderam travar combate contra o inimigo, a distinção da vida na frente era a marca de superioridade pessoal. O respeito aos companheiros da frente contava tanto ou mais que a hierarquia formal. O tratamento na linha de frente chegava a ser pouco cerimonial, como recordou Rubens Bera, sargento da artilharia da FEB, ao dizer que em conversas informais alguns soldados na linha de frente tratavam oficiais por “você” (Salun, 1996, p. 146).

Essa diferença de disciplina aparecia em todos os momentos: o nível de higiene, as relações humanas entre subordinados e superiores, a importância conferida a perdas materiais/territoriais em contraste com as perdas humanas, etc. (Arruda et al., 1949, pp. 64-65; Salun, 1996, p. 119; Ujihara, 2002, pp. 79-80).

Nem todos apreciaram essas experiências de uma nova disciplina. Tais mudanças preocuparam o comandante da FEB, general Mascarenhas de Moraes. Em suas memórias recorda que, se durante a viagem para a Itália,

“o estado disciplinar das tropas se manteve elevado”, algum tempo depois do desembarque “o grau de disciplina baixara muito”. Para o comandante da FEB, “o contato com a sofrida população italiana, a má compreensão de certos hábitos americanos e a iminência da luta desenfreadam a conduta dos nossos soldados. Repetidas infrações às ordens de serviço ocasionavam desagradáveis conseqüências” (Moraes, 1984, vol. 1, p. 166). Uma dessas principais conseqüências foi a disseminação, nas tropas expedicionárias, do “hábito da crítica e comentário às ordens recebidas”. Isso se devia, segundo Mascarenhas, “ao espírito demagógico de alguns oficiais, inclusive da reserva”. As frustradas tentativas de conquistar as posições em Monte Castelo constituíram, segundo Moraes, o clímax das críticas e acusações mútuas de responsabilidade pelos revezes (Moraes, 1984, pp. 167-168). Esses problemas deram muito trabalho para as duas auditorias do Serviço de Justiça da Força Expedicionária Brasileira, juntamente com os delitos e transgressões extradisciplinares e hierárquicas.

Além dos relatos dos combatentes, uma fonte importante para possibilitar a verificação dos problemas de disciplina na FEB é o conjunto de sentenças, despachos e apelações do Serviço de Justiça da Força Expedicionária Brasileira. Não obstante as memórias de soldados e oficiais brasileiros da FEB ressaltarem que a disciplina na Campanha da Itália foi melhor que a dos tempos de paz, sua simples comparação não é recomendável, em termos metodológicos. Os dados disciplinares do período anterior à guerra não estão disponíveis com a mesma sistematicidade como estão os dos meses de atuação da FEB na Itália (nove meses em combate e cinco meses de estacionamento até o retorno do último escalão). Por outro lado, os delitos disciplinares em tempo de paz são de difícil comparação com aqueles cometidos quando se tem um inimigo à frente.

No entanto, nesses processos abertos e julgados durante a Campanha da Itália, é possível entender melhor se os objetivos do serviço e treinamento militares foram atingidos, quanto a sua capacidade de inculcar a disciplina, a coesão do grupo, a eficiência em combate, o cumprimento dos regulamentos entre os expedicionários, o zelo dos bens públicos à disposição da FEB, a diligência e responsabilidade em serviço.

Analisando-se estatisticamente as 196 sentenças individuais emitidas pelo Serviço de Justiça da FEB, observa-se que as denúncias mais frequentes foram relativas aos diversos delitos disciplinares (44) e de deserção (35 casos),



seguidos de lesões corporais (32), furtos/roubos/desvios (27) e crimes sexuais (19). Além desses delitos citados, processos foram abertos para apurar casos de negligência com material do exército na retaguarda, abandono de posto, embriaguez, uso de material sem autorização, e, por fim, mas não como menos importante, homicídios culposos (na maioria, por disparo acidental de arma e direção perigosa/irresponsável de veículos) e homicídios dolosos – um dos casos teve o agravante de ter sido cometido, durante o estupro de uma jovem de 15 anos, e foi a única ocorrência que produziu uma sentença capital.

Sobre o item *deserção*, é necessário esclarecer que a maior parte das denúncias foi originada de “tochas” mal-sucedidas. Os praças que saíam sem autorização retornavam à sua unidade fora do prazo, e cada ocorrência gerava uma denúncia de deserção. Durante o período de combate, o Serviço de Justiça da FEB foi rigoroso nas sentenças, que variavam de alguns meses até 21 anos de prisão. Após o fim das hostilidades as “tochas” foram mais frequentes, mas em geral seus réus eram absolvidos.

Entre os “delitos disciplinares” estão incluídos desacato a superior hierárquico (17), desobediência à ordem superior (16), agressão a superior (06) e insubordinação (05). É nesse item que podemos verificar as tensões entre esses dois tipos de exército, o regular, que ficou no Brasil, e o do *front*. São casos de soldados que, advertidos por superiores hierárquicos, se recusaram a obedecer, ou agrediram verbal e até fisicamente seus superiores. Alguns exemplos podem ilustrar essas ocorrências. Um soldado, que estava sendo levado preso por “alterações”, foi advertido por um major, que lhe exigiu a posição de “sentido”, e reagiu respondendo que “o major não poderia mandar, mas pedir” (Albuquerque, 1953, pp. 105-106). Outros dois soldados, embriagados, estavam agredindo alguns praças em uma barraca, e receberam ordem de prisão de um tenente. Os soldados enfrentaram o tenente, e um deles disse “que não iria e que não havia homem que o levasse”, e o outro, mais desafiador, retrucou ao tenente, dizendo “não vou, não há quem me leve, e eu vou lhe quebrar todo, vou ajustar contas com você, seu Caxias filho da puta”. Quando um soldado e um sargento tentaram segurá-lo, aumentou o tom das ameaças: “esta é a oportunidade que tenho para me vingar deste Caxias filho da puta, que só quer saber de instrução e de traquejar... eu mato... há muito que desejo tirar uma desforra dessa caxiagem” (Albuquerque, 1953, p. 291). Às vezes, após revezes trágicos em combate, a liderança e o desempenho de

oficiais eram questionados. Foi o caso de um cabo do 1º R. I., que ao chegar embriagado ao acampamento e recebendo ordem do capitão para recolher-se, desacatou-o, dizendo que o oficial era “covarde e sacana”, e que “dos capitães do Batalhão, era ele o único que não tinha seguido os pelotões no combate ao Morro do Castelo” (Albuquerque, 1953, pp. 106-107).

Uma particularidade que reforça o fato de que as ações em combate, ao mesmo tempo que contribuíam para a coesão, também aumentavam as tensões, é a proporção de indiciados por indisciplina/desacato/desobediência nas tropas efetivamente em combate. Dos indiciados por aqueles delitos, 75 % eram combatentes da linha de frente, enquanto os soldados da retaguarda, os chamados “sacos B”, eram responsáveis por apenas 25 % das ocorrências. Em compensação, para os outros delitos, o pessoal da retaguarda cometia mais transgressões que o da linha de frente. Esses dados mostram que a experiência da guerra conferiu uma mudança significativa nas relações hierárquicas, tanto a favor de uma coesão e disciplina voltada para a eficiência em combate, quanto, nos casos em que tal coesão falhou, para o aumento de atritos dentro da tropa.

Esse choque entre duas práticas de disciplina e relações entre oficiais e praças não era exclusividade das tropas brasileiras. O principal fator para a transformação nas relações interpessoais dentro das forças combatentes era a esmagadora presença de cidadãos comuns, civis convertidos em soldados. Mesmo nos Estados Unidos, a regra em tempos de paz nos seus quartéis era a insistência dos militares regulares no cumprimento de ordens e rituais pouco úteis em combate, mas capazes de fazer lembrar constantemente aos praças quem mandava e quem deveria obedecer – ou, como os soldados americanos chamavam pejorativamente, “chickenshit”. Quando a mobilização para a guerra inseriu mais de quinze milhões de jovens civis nas forças armadas, a minoria militar de carreira acabou adaptando-se, mesmo a contragosto, a uma sociabilidade mais “paisana”. O ponto de equilíbrio encontrado entre esses dois universos tão distantes foi o da busca da eficiência em combate: pelo menos teoricamente, toda autoridade deveria emanar do mérito e ser canalizada para culminar na vitória, ou seja, na preservação da vida dos seus combatentes e na derrota do inimigo (Fussel, 1989, pp. 79-95; Maximiano, 2010, pp. 94-98). Portanto, mais que o contato com as forças armadas americanas, o que influenciou a diferenciação nas relações disciplinares na

FEB foi a inclusão em uma estrutura militar regular de milhares de jovens civis, que fariam do “exército da FEB” uma estrutura bem diferente daquela do “exército de Caxias”.

## Conclusões

Este estudo procurou entender o papel desempenhado pelo serviço militar regular na preparação dos praças e oficiais da Força Expedicionária Brasileira para o combate na Campanha da Itália. O serviço militar não se propunha apenas à instrução básica para ações de eventual combate, mas à disseminação de valores como patriotismo, civismo e deveres de cidadania. Esses valores seriam colocados à prova desde o processo de recrutamento dos alistados, pois era claramente percebido que, se na teoria todos eram iguais e submetidos às mesmas obrigações, na seleção para o serviço militar em tempos de paz e, sobretudo, na organização das tropas expedicionárias, havia alguns que eram mais cidadãos que os outros.

Como a formação da FEB acabou por incidir preferencialmente nas classes trabalhadoras urbanas e rurais, essa imagem dos expedicionários como “deserdados da sorte” contribuiu, indiretamente, para conferir coesão e espírito de corpo ao grupo, importantes para aprimorar um moral de combate que compensou as deficiências do serviço militar e do treinamento pré-embarque. A comunhão dos iguais, o sentimento de coesão, que leva os combatentes às missões atribuídas pelos superiores, acabou se tornando tão ou mais importante que os ensinamentos de patriotismo e os discursos das razões nobres de combate.

A disciplina das tropas, exercitadas de maneira rígida e às vezes violenta nos tempos do serviço militar regular, chocou-se com um tipo de disciplina muito mais maleável, porém eficiente, na frente de combate. Essa experiência com outras unidades combatentes aliadas foi fundamental para forjar as práticas disciplinares no teatro de operações.

Por fim, constatou-se que, no atinente a treinamento de combate, as atividades de instrução realizadas pelos recrutas durante o tempo de serviço não foram suficientes para provê-los de conhecimentos e técnicas para o enfrentamento real contra um exército experimentado e bem armado. Comparativamente ao treinamento realizado pelos aliados americanos, a instrução efetuada pelos expedicionários brasileiros era muito deficiente.

No entanto, assim como ocorreu com praticamente todos os exércitos combatentes na Segunda Guerra Mundial, boa parte da aprendizagem foi construída através da experiência em ações de combate. Exércitos neófitos, mesmo bem treinados, cometem erros que serão duramente aprendidos e não mais repetidos nas ações seguintes. Esse processo também ocorreu com a Força Expedicionária Brasileira, que compensou a deficiente instrução com a rápida aprendizagem em combate.

## Referências

Albuquerque, B. C. L. L. (1953). *A Justiça Militar na Campanha da Itália; Constituição, Legislação, Decisões*. F.E.B. Fortaleza: Imprensa Oficial.

Amaral, M. (1949). A instrução da F.E.B. Em D. C. Arruda, J. A. Piason, R. C. Mange, M- Udihara, M. Amaral e J. Gonçalves (Coords.), *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB* (pp. 149-193). São Paulo: Cobraci.

Andrade, J. X. G. de (1949). Espírito da FEB e Espírito do “Caxias”. Em D. C. Arruda, J. A. Piason, R. C. Mange, M- Udihara, M. Amaral e J. Gonçalves (Coords.), *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB* (pp.271-323). São Paulo: Cobraci.

Araripe, T. de A (1942). Exército Selecionado ou Milícia. *Cultura Política - Revista mensal de estudos brasileiros*, 15, 203-210.

Arruda, D. C., Piason, J. A., Mange, R. C., Udihara, M., Amaral, M., e Gonçalves, J. (Coords.). (1949). *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB*. São Paulo: Cobraci.

Baynes, J. (1967). *Morale: a study of men and courage*. New York: Praegger.

Beattie, P. (2001). *Tribute of Blood. Army, Race and Nation in Brazil, 1865-1945*. Durham, NC: Duke University Press.

Bilac, O. (1965). *A Defesa Nacional*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Bonalume Neto, R. (1995). *A Nossa Segunda Guerra: brasileiros em combate, 1942-1945*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.

Brasil-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1950). *Censo Demográfico -1940*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Brasil-Ministério da Guerra (1945). *Força Expedicionária Brasileira*.

*Relatório Secreto* (vols.1, 2 y 3). Rio de Janeiro: Arquivo Histórico do Exército. Seção Força Expedicionária Brasileira.

Cardoso, H. C. (2001). Depoimento. Em A. de M. Motta (Org.), *História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial* (vol. 6) (pp. 48-109). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Castello Branco, M. T. (1960). *O Brasil na II Grande Guerra*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Corrêa Neto, A. (1983). *Notas de um médico expedicionário médico*. São Paulo: Almed.

Cytrynowicz, R. (2000). *Guerra sem guerra: a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial*. São Paulo: Universidade de São Paulo/Geração Editorial.

Fernandes, F. L. (2011). *A estrada para Fornovo: a FEB, Força Expedicionária Brasileira, outros exércitos e outras guerras na Itália, 1944-1945*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Ferreira Junior, A. (2007). Uma visceral rebeldia: clientelismo e isenções no recrutamento da Força Expedicionária Brasileira (1943-1944). Em C. R. Andrade dos Santos et al. *Estudos* (vol. 2) (pp. 117-134). Série Grupo de Pesquisa LEPH/Programa de Mestrado em História Social/Universidade Severino Sombra. Curitiba.

Fröhlich, S. S. (2015). *Vozes da Guerra*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Fussel, P. (1989). *Wartime: Understanding and Behaviour in the Second World War*. Oxford: Oxford University Press.

Goes Monteiro, P. A. (1933). *A Revolução de 30 e a finalidade política do Exército*. Rio de Janeiro: Adersen Editores.

Gonçalves, C. P. (1951). *Seleção Médica do Pessoal da FEB, História, funcionamento e dados estatísticos*. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército.

Henriques, E. de M. (2001). Depoimento. Em A. de M. Motta (org.), *História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial* (vol.4) (pp. 111-167). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Kellet, A. (1984). *Motivação para o Combate*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.

Klas, A. B. (2002). *A Verdade sobre Guanella. Um drama da FEB*. Curitiba: Juruá.

Leite, M. R., e Novelli, J. (1983). *Dutra: o dever da verdade*. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira.

Lobo da Silva, A. (1928). *A Antropologia no Exército Brasileiro* (vol.30). Rio de Janeiro, Separata dos Arquivos do Museu Nacional.

Maximiano, C. C. (2010). *Barbudos, Sujos e Fatigados: soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial*. São Paulo: Grua.

McCann, F. D. (2007). *Soldados da Pátria. História do Exército Brasileiro, 1889-1937*. São Paulo: Companhia das Letras.

Moraes, J. B. M. de (1947). *A F.E.B. pelo seu Comandante*. São Paulo: Instituto Progresso Editorial.

Moraes, J. B. M. de (1984). *Memórias* (vol.1). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Oliveira, D. (2015). *Aliança Brasil-Estados Unidos: nova história do Brasil na Segunda Guerra Mundial*. Curitiba: Juruá,

Oliveira, L. A. (2011). *Vivendo entre soldados. A II Guerra Mundial a partir de relatos de expedicionários sorocabanos da FEB*. Itu: Ottoni Editora.

Pandiá Calógeras, J. (1933). *Problemas da Administração*. São Paulo: Cia. Editora Nacional.

Piason, J. A. (1949). Alguns erros fundamentais observados na FEB. Em D. C. Arruda, J. A. Piason, R. C. Mange, M- Udihara, M. Amaral e J. Gonçalves (Coords.) *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB* (pp. 62-110). São Paulo: Cobraci.

Ramos, J. de O. (1949). *A Epopeia dos Apeninos*. Rio de Janeiro: Laemmert.

Rodrigues, A. J. (1969). *Segundo Pelotão, 8ª Companhia*. São Paulo: Edameris.

Salun, A. O. (1996). *Zé Carioca vai à Guerra*. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Schnaiderman, B. (1995). *Guerra em Surdina*. São Paulo: Brasiliense.

Silveira, J. X. da (1997). *Cruzes Brancas. Diário de um pracinha*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.

Soares, L. (1985). *Verdades e Vergonhas da Força Expedicionária Brasileira*. Curitiba, Ed. do autor.

Souza, J. C. de S. (2001). Depoimento. Em A. de M. Motta (org.), *História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial* (vol.7) (pp.168-211). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Souza, T. C. de (1949). Instantâneos de um tenente em campanha. Em

D. C. Arruda, J. A. Piason, R. C. Mange, M. Udihara, M. Amaral e J. Gonçalves (Coords.), *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB* (pp.194-238). São Paulo: Cobraci.

Stouffer, S. (ed.) (1949). *The American Soldier. Studies in Social Psychology in World War II* (vols.1 y 2). Princeton: Princeton Universty Press.

Udihara, M. (2002). *Um médico brasileiro no front. Diário de Massaki Udihara na II Guerra Mundial*. São Paulo: Hacker Editores; Narrativa Um; Imprensa Oficial do Estado; Museu Histórico de Imigração Japonesa no Brasil.

Udihara, M. (1949). Um médico na Infantaria. Em D. C. Arruda, J. A. Piason, R. C. Mange, M- Udihara, M. Amaral e J. Gonçalves. *Depoimento dos Oficiais de Reserva sobre a FEB* (pp. 111-149). São Paulo: Cobraci.

Veras, M. (2001). Depoimento. Em A. de M. Motta (Org.), *História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial* (vol.1) (pp. 234-281). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora.

Vidigal, G. (1988). *O Aprendiz de Liberdade: do Centro XI de Agosto à 2ª Guerra Mundial*. São Paulo: Saraiva.

Viotti, C. A. (1998). *Crônicas de Guerra: a Força Expedicionária Brasileira na Itália*. Belo Horizonte: Ed. do Autor.





# A influência estadunidense na estruturação da Força Aérea Brasileira: Uma análise das transformações arquitetônicas do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos da década de 1940

*Jefferson Eduardo dos Santos Machado*

## Introdução

O Ministério da Aeronáutica, apesar de ter sido pensado a partir de 1935, foi criado apenas em 1941. Sua formação uniu as Aviações Naval (Marinha) e Militar (Exército). O presidente Getúlio Vargas via a Aeronáutica, que abarcava em seu interior os órgãos de organização da aviação civil, como um fator que poderia alavancar o desenvolvimento brasileiro e aproximar o Brasil das potências mundiais.

Quando decidiu, finalmente, iniciar o processo de criação da nova instituição pediu ao advogado Pedro Salgado Filho que viabilizasse o projeto do Ministério do Ar. Depois de tudo encaminhado o nomeou primeiro Ministro da Aeronáutica. Ficaram, então, na responsabilidade de um civil os primeiros passos da nova instituição militar.

A Força Aérea Brasileira nasceu com diversos problemas de pessoal e de logística. E isso era um fator complicador, uma vez que seu surgimento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Como o território brasileiro tinha

fundamental importância estratégica, houve uma disputa entre o Eixo e os Aliados na tentativa de obter a parceria brasileira durante a guerra.

Aproveitando-se disso, logo que ficou definido de que lado lutaríamos, o ministro Salgado Filho optou em usar os Estados Unidos da América como modelo a ser seguido. Nossa força aérea foi sendo treinada e estruturada a partir do que era proposto pela nação do “Tio Sam”. Isso também ocorreu em relação às instalações construídas no período. Algumas delas, como a Rampa<sup>21</sup>, em Natal, foram realizadas pelos próprios estadunidenses. Outras, como a Parque Central de Aviação –que em 1941 passou a ser o Parque Central de Aeronáutica e que hoje é o Núcleo do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos–, foram remodeladas a partir da arquitetura das bases aéreas e escolas militares ianques.

Nesse contexto entra a reforma e recharacterização dos prédios E-001, E-002 e E-003, que em conjunto formam o Prédio do Comando a Guarda e o Cassino dos Oficiais da Unidade Militar. Tal conjunto faz parte de uma série de construções e modificações no parque nos anos de 1940. A necessidade de potencializar a manutenção e montagem de aeronaves, tanto para o treinamento dos cadetes da Escola de Aeronáutica quanto para as unidades operacionais da força, levaram a uma ampliação e modernização da unidade fabril. Como as aeronaves que passaram a fazer parte do efetivo da FAB eram em sua maioria oriundas dos EUA, a direção deste fenômeno passou a ser o ideário norte-americano.

Neste trabalho buscamos responder alguns questionamentos acerca desse acervo patrimonial. Qual é a importância da construção? A que contexto ela está vinculada? Sua concepção sempre foi essa? Quais são as características arquitetônicas atuais e porque elas foram escolhidas?

Para a construção desse texto há a necessidade de primeiro entendermos e olharmos para o conjunto arquitetônico como um documento histórico, da

---

<sup>21</sup> “A Rampa é um conjunto de edificações construídas entre as décadas de 1930 e 1940, nos arredores de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que ajudaram e fizeram parte direta da história da aviação mundial. Apesar de ter recebido figuras importantes como o piloto norte-americano, Charles Lindbergh –o primeiro a cruzar o oceano Atlântico numa aeronave em 1927– a Rampa ganhou notoriedade no início dos anos 1940, quando os primeiros hidroaviões começaram a utilizar o local como base militar”.

mesma forma como o fazemos com os documentos textuais.

Para a instituição ele é um patrimônio por si só, uma vez que foi um local que o teve como protagonista em momentos marcantes de sua existência. Porém, sua história é muito maior, não por terem acontecido nele grandes momentos da história da aviação brasileira, mas por fazer parte de um conjunto.

Vamos aqui justificar a importância de nos debruçarmos sobre sua história, que se mistura a história da Força Aérea Brasileira. Começamos então a dialogar um pouco sobre a questão do mesmo como um bem cultural.

Com o passar do tempo os imóveis por perderem sua utilidade inicial são modificados e por vezes até destruídos. Isso acontece por algumas razões: primeiro devido ao não conhecimento de sua importância. Segundo, por não terem sido o local de acontecimento de um grande fato, ou algo marcante para a história do país ou da instituição. Terceiro, por conta da influência da visão patrimonial do início do século XX, dominada pela ideia de que a arquitetura a ser valorizada e preservada era a do período colonial. Isso ocorria devido ao ideário que via esse tipo de arquitetura como o patrimônio constituinte da nossa nacionalidade.

Essa visão valorizava esse tipo de construção como grandes monumentos de nossa brasilidade. Hoje, porém, a partir de novos paradigmas, esse entendimento mudou e não só os grandes monumentos são vistos como objetos importantes. Os olhares dos especialistas passaram a mirar, também, obras modestas, valorizando-as, principalmente ao se levar em conta a cultura e os processos históricos em que elas estão inseridas (Nascimento, 2016).

Estas mudanças vieram a reboque da transformação sofrida pela maneira que os profissionais passaram a fazer história no início do século XX. A *Revista dos Annales*, publicação acadêmica dos anos 1920, foi responsável pela renovação da forma como os historiadores tratavam suas fontes. Os documentos passaram a ser fonte documental de uma história passível de interpretação, questionamentos, perguntas e problematização pelo historiador. Esse grupo de pensadores da história, capitaneados por March Bloch e Lucien Febvre, propuseram transformações exatamente quanto ao questionamento e a utilização de novas abordagens sobre os documentos (Nascimento, 2016).

A História não era mais o desfiar de um rosário, isto é, uma narrativa factual que retirava somente dos documentos a sua “verdade”. Ela agora

era problematizada. Essa busca tinha como norte a inserção da disciplina no rol das ciências. A História passava a ser escrita a partir de hipóteses e problematizações que vinham antes dos fatos e dos acontecimentos, onde o que ficava em evidência era a construção historiográfica (Reis, 2010).

Essa transformação, no modo como se produzia a história, trouxe a ideia de que tudo que fosse ligado ao modo de vida do homem e trouxesse iluminação sobre suas atividades, gostos e maneiras passaria a ser importante para o historiador. Febvre não abandonou a documentação escrita, mas informou que tudo que for produzido pelo homem pode ser utilizado como fonte para que sejam dadas as respostas das problematizações iniciais (Febvre, 1989).

Segundo Marc Bloch, o que nós temos para acessar o passado são fragmentos. Dessa forma, o conhecimento produzido pelos historiadores depende de vestígios, que por sua própria natureza são extremamente diversos. A escrita, os fabricos, ou seja, qualquer criação material humana ou outra evidência servem para informar sobre a realidade vivida pelos homens e mulheres pesquisados (Bloch, 2001). Não há possibilidade de respondermos as perguntas a partir de um único documento. Sendo assim, nossa tarefa foi reunir variadas fontes, compreender suas lógicas, e verificar as lacunas que tratam do primeiro esforço do historiador para a construção da pesquisa.

Será exatamente assim que vamos trabalhar aqui nessa obra. A ideia é de fazer com que uma gama de documentos seja usada para entendermos onde se encaixa a concepção, a construção e a utilização dos imóveis através do tempo, deste a sua concepção até quando se tornou o complexo onde se encontra Prédio do Comando do Parque de Aeronáutica dos Afonsos nos anos de 1940.

No nosso caso teremos que compreender a arquitetura a partir da ótica da apropriação social pelo homem, a fim de inserir novos problemas e perguntas aos objetos já conhecidos. Não estamos em busca de uma história dos Prédios. A partir da lógica de Jacques Le Goff, que afirmava que todo documento é monumento, assumimos que ele não se separa da sociedade que o concebeu, trata-se do fruto das suas ações e da passagem do tempo na sua existência (Nascimento, 2016).

O que propomos aqui é um desafio. Principalmente diante da constatação que a cultura material como categoria de análise ainda tem seu uso restrito entre os historiadores. Esse tipo de estudo sofre marginalização, ou seus

objetos são utilizados como mera ilustração do que os documentos textuais já haviam apontado (Meneses, 2003).

Então em nosso trabalho buscamos entender o bem cultural, ou seja, o prédio como uma fonte documental. Não o vemos como algo excepcional, um monumento isolado. Trata-se de um entre vários outros que formam um conjunto documental. Ou seja, se os olharmos como algo isolado talvez não consigamos captar seus significados, ou sua importância na história da aeronáutica. Contudo isso é mera verdade. Como prédios são apenas construções como muitas outras. O que vamos fazer aqui é contextualizá-los como parte do conjunto de construções que foram readequadas no Campo dos Afonsos e em todo o Brasil nos primeiros anos da criação do Ministério da Aeronáutica.

Utilizaremos também como documentação uma série de periódicos que circularam durante a década de 1940. Tratam-se das revistas *Esquadilha*, *Avião*, *Aviação e Asas*. Estas dedicavam parte de sua publicação para tratar dos assuntos do Ministério da Aeronáutica. Além disso, publicavam pronunciamentos e entrevistas das figuras mais proeminentes ligadas a criação da pasta.

Outra fonte para o nosso trabalho foi o diário de tarefas e atividades do Ministro Salgado Filho, publicado por Maíza Salgado e Edison Corrêa. Nele temos o cotidiano da autoridade e vários vestígios de seu pensamento e envolvimento com os EUA.

Para ilustrar a nossa retórica utilizaremos imagens do acervo do Arquivo Histórico do MUSAL e as que nós mesmos produzimos. A partir delas poderemos entender as mudanças e adaptações da Escola de Aeronáutica e conseqüentemente da construção do prédio em questão.

As revistas e o diário serão utilizados de maneira sincrônica. Elas nos servem para traçar um raio-x da parceria entre as duas nações durante o conflito, e na organização e treinamento do MAER.

Quanto às imagens, serão utilizadas de forma comparativa e também, em alguns momentos, ilustrativa. Faremos um trabalho de cotejamento das transformações dos Afonsos, das quais os prédios 01, 02 e 03 do Parque de Aeronáutica são resultado.

De antemão temos como norte que ela e as outras construções que

surgiram no mesmo período foram importantes na criação de uma nova maneira de formação dos pilotos brasileiros. Sendo assim, sem o contato ou influência estadunidense, eles não teriam sido modificados e construídos da maneira como foram. Sua arquitetura foi baseada nos prédios das instituições

de ensino militares estadunidenses, mas não somente isso, a ideia era inspirar-se naquele modelo de nação através de todas as características possíveis.

### Criação da Força Aérea Brasileira: Uma produção brasileira com cartilha do Tio Sam

A organização, planejamento e efetivação do Ministério da Aeronáutica do Brasil foi um projeto que contou com a participação direta dos EUA. Essa parceria aconteceu devido a entrada de ambas as nações na Segunda Guerra Mundial.

Vale salientar que esse intercâmbio no âmbito da aviação, apesar de não ter sido feito nas mesmas proporções, não era algo novo. A Aviação Naval (AN) já havia experimentado uma cooperação técnica com os estadunidenses, quando adquiriu as aeronaves Curtiss F, durante a criação da Escola de Aviação Naval. Essa ajuda foi feita através da contratação do piloto e mecânico norte-americano Orthon Hoover, que trabalhava na fabricante das aeronaves (Lavenère-Wanderley, 1975).

Quanto a Aviação Militar (AM), o Exército Brasileiro havia contratado em 1918, junto ao governo Francês, um grupo de oficiais aviadores e mecânicos, a denominada Missão Militar Francesa de Aviação (MMFA). Esses foram responsáveis pela direção da Escola de Aviação Militar (EAvM), no Campo dos Afonsos, que ficou subordinada ao Serviço de Aviação Militar, que era diretamente ligado ao Estado-Maior do Exército (Sales, 2012).

Porém, em 1932, foram adquiridos pela AM, aviões Waco C. S. O., Vought Corsair e Boeing de fabricação norte-americana, a fim de integrarem os combates contra a Revolução Constitucionalista. Dessa forma, iniciava-se o contato dos aviadores do exército com os equipamentos ianques (Lavenère-Wanderley, 1975).

Segundo o Relatório da Aviação Militar de 1934, já havia oficiais estudando em outros países, inclusive dois do Exército Brasileiro nos Estados Unidos matriculados na Escola de Aviação. Além disso, o relatório chama a atenção para as vantagens desse intercâmbio e de que sejam feitos de forma

sistemática, pois a Aviação Militar já não estava mais na mão da MMFA desde 1931 (Batista, 2012). Dessa forma, os oficiais brasileiros poderiam ter contato com os países onde a aviação se desenvolvia de forma considerável (Directoria de Aviação Militar, 1934).

O mesmo relatório já discutia quais seriam os países onde os oficiais brasileiros deveriam se aperfeiçoar. Nessa lista estavam EUA, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Polônia, Rússia e Japão. Estes eram considerados os países na vanguarda do progresso mundial, sendo que, na visão do Exército, ainda era a França o país com maiores condições de adestrar a aviação brasileira (Directoria de Aviação Militar, 1934).

Com a criação do Ministério da Aeronáutica (MAer) em 1941, uniram-se dois grupos heterogêneos, os aviadores do Exército e os da Marinha tanto quanto a doutrina militar, quanto a instrucional, que teriam a disposição equipamentos completamente obsoletos. O Ministro Salgado Filho, civil escolhido para tocar essa empreitada, além desses problemas, iniciou a tarefa com um momento internacional para lá de adverso, pois a guerra cobrava um posicionamento claro do Brasil sobre qual lado apoiaria.

Durante esse conflito, o nordeste brasileiro foi considerado uma área de grande importância estratégica. Sua proximidade com a África deixava os estadunidenses em extremo alerta devido à possibilidade iminente de uma invasão alemã no continente americano (Moura, 2012). Sendo assim, era de fundamental importância, para os americanos, que existissem acordos para que o *saliente nordestino*<sup>22</sup> fosse protegido. Foi a partir dessa necessidade que o ministro Salgado Filho habilmente utilizou todos os meios para manter uma aliança favorável, a fim de estruturar o Ministério da Aeronáutica (Mendonça, 2012).

Diante do desafio que estava por vir, o número de pilotos, técnicos preparados e capacidade logística para a proteção do território brasileiro era insuficiente. Como ficou elucidado no relatório sobre a situação de pessoal, de instrução e de material da Escola de Aeronáutica do Exército solicitado por Getúlio Vargas, em 1939, ao capitão aviador Arnaldo Câmara Canto (Mendonça, 2012).

---

<sup>22</sup> O Saliente Nordeste é uma parte do Nordeste Brasileiro que compreende Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe).

Uma coisa ficava clara após a criação do novo ministério, era preciso uma reestruturação ou uma refundação da Aeronáutica Brasileira, principalmente a de guerra. Segundo o próprio Salgado Filho, em sua descrição sobre os equipamentos que foram apresentados na cerimônia militar de criação do ministério no Campo dos Afonsos:

As trezentas e trinta aeronaves que pertenciam à Aviação do Exército mais noventa e nove da Aviação Naval, alinhadas no Campo para passarem a jurisdição do novo ministério, constituíam uma miscelânea de aparelhos de diversas procedências. Alguns obsoletos e outros em precário estado de conservação, sendo que originários de países envolvidos em estado de beligerância, e, portanto, impossibilitados de receberem peças de reposição para seus motores, aeronaves praticamente imobilizadas em terra. Destes aviões, apenas uns trinta eram utilizáveis para o treinamento dos pilotos militares. Ainda não existia uma confiável estrutura de manutenção para os mesmos (Salgado & Corrêa, 2007, p. 65).

Sendo assim, para que a Força Aérea Brasileira (FAB) pudesse exercer sua função principal, que era o emprego do poder aéreo, deveria possuir uma estrutura que possibilitasse o seu uso. Apesar de o piloto ser o ator das atitudes finais do ataque, era necessária uma cadeia de profissionais em atuação conjunta, além de equipamentos para a execução da missão. Nesse ponto, os Estados Unidos passaram a influir na estruturação do poder aéreo brasileiro sobre a responsabilidade da FAB.

Como a criação do Ministério da Aeronáutica aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, a FAB a partir do apoio prestado aos aliados utilizou o modelo das Forças Aéreas do Exército e da Marinha ianque. Essa influência se deu em toda a estrutura da preparação do efetivo, da aquisição de material e das construções e adaptações das instalações.

O ministro da Aeronáutica em seus escritos<sup>23</sup> deixou claro que se colocar sobre a esfera de influência ou usar as instituições amigas como parâmetro, com o passar do conflito mundial, se mostrou uma atitude acertada pois:

a julgar pelos excelentes resultados que têm sido obtidos pela Força

---

<sup>23</sup> Trata-se das anotações e documentos reunidos pelo ministro Salgado Filho, que foram organizados por Maiza Salgado e Edison Corrêa na obra Salgado Filho Primeiro Ministro da Aeronáutica do Brasil.



Aérea dos Estados Unidos, sinto sem apreensão ou hesitação, que somos justificados na ampliação da experiência destas unidades como uma fundação sobre a qual podemos planejar a construção de nossas futuras Forças Aéreas (Maisa; Corrêa, 2007, p. 78).

Devido ao alinhamento entre as duas nações houve a necessidade de se criar estruturas para a comunicação e comércio efetivos. Destacou-se como órgão de maior relevo nessa troca de solicitações a Comissão Conjunta de Defesa Brasil-Estados Unidos, criada em 1942. Somado a atuação da comissão a lei de Lend & Lease, responsável pela manutenção de um preço bem abaixo do mercado para as aeronaves, o que possibilitou a Força brasileira adquirir aeronaves que foram importantes no período, como o Douglas C-47 da imagem 1, e materiais solicitados pela FAB. As estratégias desenhadas pelas duas nações para a proteção do hemisfério contra as forças do Eixo ajudou na inserção dos EUA no interior da FAB.



**Imagem 1.** Douglas C-47. (Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Outro ponto que foi fundamental para um alinhamento ainda maior entre as instituições de aviação militar dos dois países foi a viagem realizada pelo ministro brasileiro aos EUA em junho de 1943. Já no embarque notamos

que não era uma viagem qualquer. Partindo do Aeroporto Santos Dumont, em um avião posto a disposição pelo governo ianque, o ministro Salgado Filho recebeu cumprimentos no embarque de nada mais nada menos que o embaixador Jefferson Caffery, representante diplomático estadunidense, juntamente com funcionários da embaixada, oficiais norte-americanos, incluindo o adido militar general Claude Adams. Além disso, foi posto a disposição do ministro, fazendo parte da comitiva, o coronel estadunidense Siler. (Força Aérea Brasileira, 1943a)

Em matéria de Agosto de 1943, a revista *Aviação* narrou com detalhes à viagem do ministro. Ele foi recebido em Washington por Roosevelt, por ministros militares e autoridades da aviação. Visitou instalações científicas, industriais e militares da aviação, observando de perto a capacidade e o poderio estadunidense em todos os setores ligados a guerra. Viu os processos de produção, a instrução dos militares, a organização científica que fazia da aviação ianque um exemplo de eficiência e poder. Além da esfera militar, a autoridade brasileira visitou a fábrica de motores e hélice Curtiss, e a fábrica da Fairchild (Força Aérea Brasileira, 1943b)

A *Revista Avião* do mesmo mês informava que a viagem de Salgado Filho tinha como objetivo aprender o que o país precisava saber sobre aviação, pois era essa arma de guerra que decidiria o conflito mundial. Além disso, trazia uma entrevista dada pela autoridade aeronáutica onde se mostrava maravilhado com o país da América do Norte. Tratou do total envolvimento da população na guerra; da participação das mulheres como operárias e motoristas; da obra de engenharia que era Miami, que com seus hotéis alojava os jovens que recebiam instrução militar; da capacidade produtiva da indústria aeronáutica; do número de escolas preparadas para instruir os jovens; da gratidão que os estadunidenses demonstravam pelo esforço de guerra brasileiro e da participação da FAB; da colaboração que iria ser prestada para o aparelhamento da força, e do espanto diante da capacidade de mobilização dos ianques (Força Aérea Brasileira, 1943b).

Essas impressões que irão ser um motor para o trabalho do ministro e dos militares que o auxiliavam. Em seus escritos temos algumas notas oficiais sobre essa viagem. Ele visitou todos os centros onde havia militares brasileiros estudando. Algumas coisas que viu de perto, mas que já havia tomado

conhecimento por informações de seus auxiliares ele buscou implementar por aqui.

## A influência dos EUA na arquitetura dos edifícios da Aeronáutica Brasileira (1941-1949)

A busca da excelência trouxe a escolha de um modelo. Esse modelo tinha duas vertentes: a Army Air Force e a Navy Air Force. Nelas, os aeronautas militares brasileiros buscaram inspiração e apoio em vários aspectos para construir sua instituição, como formação de pessoal, escolha dos equipamentos e na arquitetura, como veremos a partir de agora. Antes discutiremos como a arquitetura pode ser utilizada ou pode ser o sinal de proeminência de uma nação sobre a outra.

### Arquitetura e poder

Segundo Pierre Bourdieu, o poder é algo que está oculto nas formas não-questionadas de ver e descrever o mundo. Não queremos aqui afirmar levemente que houve um plano maquiavélico de imposição de poder por parte da nação do norte. Na verdade, segundo o teórico francês, o exercício do poder não precisa ser consciente. Dessa forma, podemos afirmar que a arquitetura pode ter sido uma das formas silenciosas que marcaram o poder da pátria da América do Norte sobre os países da América Latina.

Outra discussão fundamental é a definição do conceito que ele chama de *habitus*, que seria o conjunto de disposições interiorizadas que induzem as pessoas a agir e reagir de determinadas maneiras e é o produto final do que se costuma chamar de socialização ou enculturação (Stevens, 2003). Pois, segundo o autor, essa ideia faz com que muitas práticas sociais sejam tidas como naturais, objetivas e não percebidas como promotoras dos interesses de alguns membros em detrimento de outros (Bourdieu, 1983).

Parece-nos natural a partir de uma discussão sobre a questão da *americanização*, observar que para o grupo diretor da FAB, principalmente para o primeiro titular da pasta, diante da eficácia e profissionalismo das aviações estadunidenses as escolhessem como modelo. Tornou-se então natural a *inculturação* de valores exógenos entre eles os arquitetônicos.

Para Bourdieu existem três formas de poder. O advindo da força física, da força econômica, e o poder simbólico. Para nós o que interessa é o poder

simbólico, uma vez que trabalharemos com a questão da imposição cultural, que é fruto do envolvimento da manipulação de símbolos, de conceitos, ideias e crenças, para alcançar seus fins (Bourdieu, 1999). Essa forma de poder, segundo o autor, é quase mágica, pois permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao seu efeito específico de mobilização (Bourdieu, 1999). Segundo o autor, esse poder é invisível e é exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber, que lhe estão subordinados ou mesmo que o exercem.

Esse tipo de poder é entendido a partir da análise das *formas simbólicas*, que foram definidas por Émile Durkheim como formas sociais, arbitrárias e socialmente construídas (Durkheim, 1978). A partir disso Bourdieu expressa que os sistemas simbólicos são estruturados e construídos socialmente, por tal motivo exercem um poder estruturante. Segundo ele, o poder simbólico é o responsável pela manutenção da ordem social (Bourdieu, 1999). Dessa forma, mesmo que tivessem que tornar as Forças Armadas brasileiras mais fortes, diante da ameaça do Eixo, os ianques usaram esse estilo de poder para manter-se como a potência das Américas.

Esta forma de poder atua no campo cultural. Para isso o poder é legitimado pelo que Bourdieu chama de *violência simbólica*. Através dela obtém-se o que iria ser conseguido pela força. Seu ponto fundamental é a habilidade de convencimento que possui o grupo dominante de impor seu poder como algo que é natural. Sua maior característica seria não ser percebido como poder por si só, mas como direito legítimo de fazer exigências aos outros. Ela é instituída por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante, ou seja, não é forçada, é quase invisível (Bourdieu, 1999). Por isso, através da *Office of the Coordinator of Inter-American Affairs* (OCIAA), o Estado norte-americano vai praticar essa violência simbólica coordenando toda forma de propaganda das empresas, instituições e do modo de vida americano (Tota, 2000).

Desta forma, a ação silenciosa do poder simbólico, através da violência simbólica, mantém a ordem social. Ele é usado pelos poderosos para manter a dominação. Por ser usado de forma silenciosa, quase invisível, não é visto pelos dominados como arbitrário, mas como algo natural. Desta forma ele consegue obter o que as outras formas de poder não conseguiram. Nesse contexto o grande protagonista na legitimação desse poder é o *habitus*.

O poder simbólico deriva da posse de capital cultural, o qual pode ser adquirido por meio de instituições, como forças aéreas, pela posse de bens simbólicos, como obras de arte, por meio de relações sociais, e pelo fato de ser culto.

E, finalmente, o exercício do poder nem sempre é consciente e seus símbolos assumem o papel de instrumentos de legitimação de poder. Dessa forma, a arquitetura pode transformar-se em um desses símbolos e legitimar a influência estadunidense sobre a construção da nossa Força Aérea Brasileira.

Queremos discutir o processo de transformação que ocorreu na arquitetura do Campo dos Afonsos, tendo como elemento principal o prédio do MUSAL, no período em que houve um profundo estreitamento de relações entre os militares brasileiros e os estadunidenses.

Quanto à arquitetura, não podemos entendê-la separada dos contextos históricos em que é produzida. Iremos à busca do entendimento do espaço e fatores que envolveram a obra, sua criação, seus aspectos funcionais e estéticos que compreendem de uma forma geral uma obra arquitetônica. Para isso, o método maior será a observação e comparação com outras construções do mesmo estilo, que será definido durante o trabalho.

Nessa observação a questão estética deve ser vista lado a lado com a função. Para entendermos a arquitetura devemos nos preocupar em debater seu valor utilitário. Principalmente para essa edificação.

## Estados Unidos e Brasil: Construções para vencer a guerra

Os Estados Unidos da América devido ao conflito mundial possuíam um plano de defesa hemisférica, a fim de possibilitar o uso da Força Aérea, que tinha como base cerca de 50 aeródromos na América Latina. O Departamento de Guerra Americano criou um plano especial, o *Air Development Program* (ADP), que colocou a Pan American como a responsável em iniciar a construção das bases aéreas. Ela então negociou com os governos, o que lhe possibilitou a aquisição de terrenos, a isenção de taxas de importação para equipamentos pesados de construção, a utilização da mão de obra local, a autorização para instalação e operação de equipamentos de rádio; também foram fixadas taxas de pouso e foi liberado o uso dos aeródromos pelas aeronaves militares americanas (INCAER, 1991). Além disso, a Pan-American fez esses contratos com vistas a receber em troca a autorização para operar nos aeródromos

construídos, a fim de rever os investimentos realizados (Teixeira, 2015).

Após a aprovação do presidente Getúlio Vargas, a Panair do Brasil S/A, subsidiária da Pan American, iniciou a construção das bases, principalmente nas 1ª e 2ª Zonas Aéreas<sup>24</sup> que eram consideradas de vital importância para o tráfego das aeronaves e os comboios marítimos. Porém, devido à neutralidade brasileira nesta fase da guerra o empreendimento ganhou uma fachada civil (INCAER, 1991).

Segundo Teixeira, a maneira como foram costuradas essas construções fazem com que possamos ver características arquitetônicas similares nas bases aéreas de Salvador, Natal, Fortaleza, Belém e parte de Recife (Teixeira, 2015).

Salgado Filho durante uma viagem pelo Norte e Nordeste brasileiro, afirmou em entrevista que:

Desde Caravelas até Natal, temos trabalhos executados com esses objetivos, com a padronização de construções e instalações. Aracajú possui novas pistas já em andamento. Em Caravelas, além das instalações já existentes contamos agora com a colaboração Norte-Americana para vencer as dificuldades apresentadas pelo solo para a feitura de nossa infra-estrutura (*Avião*, 1944).

Ao tratar das construções na Região Nordeste existem dois fatores principais para a nossa análise. O primeiro é a questão da padronização das construções e instalações. O segundo é a colaboração estadunidense nas construções, que como vamos ver nesse capítulo vão além das questões de solo.

Quanto às outras zonas aéreas, a responsabilidade das construções e reformas ficou sobre a diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica. Em relatório relativo ao ano de 1945 o diretor Sr. Alberto de Mello Flores informou que em relação aos anos de 1943 e 1944 houve um aumento substancial em

---

<sup>24</sup> A 1ª Zona Aérea compreendia os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão e o então território do Acre, sua sede era Belém. A 2ª Zona Aérea, os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, com sede em Recife. (Em Lavenère-Wanderley, N. F. *História da Força Aérea Brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Gráfica Brasileira, 1975, p. 244.

verbas destinadas para esse fim.

Na segunda parte do relatório ele afirmou que em 1944 houve uma grande dificuldade de recrutamento de profissionais de engenharia; porém, a grave situação que o país atravessava, no momento, demandava uma solução imediata para todas as solicitações relacionadas com as obras de interesse militar, indispensáveis ao esforço de guerra e à segurança nacional. De esta maneira, as dificuldades defrontadas pela administração tiveram de ser vencidas ou contornadas, socorrendo-se a D. O. (diretoria de obras), inclusive, da cooperação de técnicos do Corpo de Engenheiros Americanos para a execução, mediante ajustes regulares, de algumas obras para as quais não se dispunha de pessoal nem de material mecânico apropriado (D.O. Aer, 1945).

Após 1945 a diretoria de obras assume também as zonas sob influência dos ianques. Temos outros vestígios dessa participação. No AHMA encontramos no Álbum 0069, da Diretoria de Obras do Ministério da Aeronáutica, imagens como a número 2 abaixo, que em seu verso nos demonstram essa participação direta dos militares estrangeiros em nossa readequação aeronáutica.



**Imagem 2.** Douglas C-47.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Vemos que a imagem acima retrata a inauguração do Aeroporto Afonso Pena em Curitiba, com a participação direta de três estadunidenses em volta do interventor federal Manuel Ribas. O que nos mostra claramente o quanto existe um entrelaçamento entre os países.

Com o fim do conflito mundial, tanto na África como na Europa, os militares estrangeiros começaram a desmobilização e reduziram os investimentos no território brasileiro. Contudo, podemos afirmar que a influência, ou participação da nação do Tio Sam foi importante na construção de várias unidades militares e aeródromos brasileiros, além das situadas no Norte e Nordeste do país.

### Bases e Aeroportos: Vestígios da Aliança na Arquitetura

Algumas imagens do acervo do AHMA nos levam a observar características que são marcantes quando nos atentamos aos traços arquitetônicos de diversos aeroportos e bases aéreas que foram criados, reformados ou ampliados devido ao esforço de guerra na década de 1940.

Como vimos acima, a PANAIR ficou encarregada de iniciar as construções de aeródromos para preparar a chegada das forças aéreas estadunidenses ao país. Vamos iniciar nosso trabalho a partir da imagem do então terminal de passageiros do aeródromo conhecido como Rampa (Imagem 3). Essa base de hidroaviões passou a ser utilizada pela *Navy*, principalmente para reabastecimento de aeronaves que seguiam para o teatro de operações na África e pelos aviões que realizavam patrulha no Saliente Nordeste.



**Imagem 3.** Terminal de passageiros do aeródromo Rampa.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)



Esse prédio foi um dos primeiros a ser erguido no intuito de criar uma infraestrutura para as operações militares. A partir dele vamos iniciar nossa discussão sobre a arquitetura escolhida para as construções desse período.

Algumas peculiaridades arquitetônicas nos chamam a atenção, como os arcos e a torre. Eles não são comuns nas construções militares, principalmente nas da Aviação Militar e na da Aviação Naval.

No aeroporto da imagem 4, o de Vitória, também observamos alguns detalhes específicos .



**Imagem 4.** Aeroporto de Vitória.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Nesse prédio podemos ver novamente a escolha de arcos, porém outros detalhes nos chamam a atenção também. Temos ornamentos que dão ideia de pedras, luminárias de ferro e uma chaminé, que diante das condições climáticas da localidade onde se encontra tem objetivo de ser apenas um ornamento. Outra possibilidade para a construção desse ornamento é que planta possa ser originária de uma região onde ela seria necessária. Como temos registros de que os estadunidenses participaram da construção de alguns desses aeroportos pode ser que seja influência dos mesmos. Se isso é uma constatação correta, que estilo era esse? E porque foi escolhido para nossos aeroportos?

Temos aqui no Brasil desde o início do século XX a busca por um estilo nacional de arquitetura. Essa busca ficou conhecida como *movimento neocolonialista* e esteve presente em vários países da América. Seu objetivo era resgatar a nacionalidade na arquitetura, negando o movimento característico da época, a arquitetura eclética, que era baseada no internacionalismo.

Tal movimento, que tinha um cunho pan-americanista, buscava atualizar as imagens e proporções arquitetônicas do período colonial, a partir dos avanços tecnológicos da construção civil na área e das modificações na maneira de como as pessoas viviam (Atique, 2010).

No caso das construções que foram realizadas pelo Ministério da Aeronáutica, o que vemos é a adoção de um neocolonial que fugia ao apelo do movimento. Os prédios tinham como inspiração principal um neocolonial hispano-americano. Esse estilo também ganhou outras denominações, e foi conhecido também por *estilo missões*, *estilo mexicano* e *estilo californiano* (Lucena; Filho, 2012).

Segundo Terry Moyle (2015), nos anos de 1930 Los Angeles contava com aeroportos construídos no estilo missões, que era muito popular na Costa Oeste dos EUA. Isto pode explicar a escolha brasileira. O Gran Central Airport de Glendale assim como o Union Terminal de Burbank apresentavam características do estilo, como podemos ver abaixo nas arcadas, luminárias, jardineiras, telhados, janelas, etc.

O neocolonial, oriundo dos EUA, teve seu nascimento em época anterior ao que aconteceu em outros países americanos. Por lá esse movimento remonta ao século XIX, momento em que os estadunidenses passam a redescobrir e se aproximar da arquitetura das regiões mexicanas que foram anexadas ao seu território. Isso se deu devido a uma “exaltação” da cultura europeia presente nas 21 missões franciscanas espanholas que foram fundadas a partir do XVIII. A ideia era apagar a herança mexicana e realçar os EUA como um país plural, ou seja, resultante de várias culturas (Lucena, 2012).

O mito construído a partir da narrativa histórica das missões não foi um movimento saudosista. Ele foi criado com o objetivo de promover os produtos de uma indústria cultural que abraçaria várias áreas, como por exemplo o cinema (Atique, 2010).

A ideia de pan-americanismo, que levou os países a buscarem uma nova leitura da arquitetura do passado colonial, fez com que houvesse um

intercâmbio cultural arquitetônico. O Brasil, assim como outros países latinos, acabou adotando entre suas possibilidades o estilo missões (Atique, 2010).

Na primeira década dos 1900, a Escola Nacional de Belas Artes foi a irradiadora das novidades americanas. Sua biblioteca possuía publicações estadunidenses que passaram a influenciar a nossa arquitetura e nosso urbanismo. Além disso, esse fenômeno não se restringia somente nesses campos, mas, sobretudo na maneira de pensar e agir do brasileiro.

Antônio Pedro Tota (2000), que trata sobre a americanização do Brasil, afirma que a conjuntura mundial de 1940 fez com que a política externa dos EUA olhasse o Brasil como um importante parceiro no hemisfério. Segundo ele, a americanização foi um instrumento que amenizaria as resistências à aproximação política entre os dois países. Ela se deu a partir da política da boa vizinhança do presidente Roosevelt e foi a maneira como se executou essa ideia. Criaram todo um ambiente para que as ideias estadunidenses fossem aceitas entre os brasileiros. O cinema, por exemplo, foi um dos grandes divulgadores do *american way of life* (Tota, 2000).

Quando chegou ao Brasil, a partir das publicações sobre arquitetura e cinema, o estilo missões passou a ter uma linguagem mesclada com elementos do neocolonial brasileiro. Ele foi muito aceito no campo residencial a partir do final da segunda década do século XX. Tal estilo apenas juntava um grupo de características decorativas em uma arquitetura já utilizada. Ou seja, havia poucas alterações nas plantas em relação ao neocolonial brasileiro (Atique, 2010).

Segundo Fernando Atique (2010), a convenção sobre as características do estilo, em termos de composição espacial e de ornamentação, é muito variável. Contudo, alguns dados de uma construção nos fazem identificar essa arquitetura: pátios internos, geralmente conformados por arcadas; prédios baixos, com telhas tipo canal e capa; inexistência de beirais; lajotas cerâmicas ou lajes de pedras como piso (Lucena & Filho, 2012, p. 9), e, além disso, a pedra, o reboco de argamassa trabalhada grosseiramente em espessas camadas, madeira (principalmente no vigamento dos pavimentos superiores), o uso de ferro fundido nos balcões, grades das janelas e luminárias penduradas na fachada e azulejos adornando poços, fontes e painéis de paredes (Lucena & Filho, 2012).

Outros elementos completam esse estilo e algumas modificações aconteceram em sua execução no Brasil. Por exemplo, os pátios e varandas

internas, próprias dessa arquitetura limitam-se a falsos pequenos pátios externos com chafarizes ou poços, cuja profundidade não ultrapassava o nível do pavimento; frontões curvos com inspiração barroca; telhadinhos de barro interceptando segmentos da fachada; barras de pedra; grandes arcos na fachada; grupos de duas ou três pequenas janelas, que podiam ser separadas por pequenas colunas salomônicas.

Muitas dessas características estão em algumas construções do então MAer, sejam elas administrativas, de segurança ou habitações de seu efetivo. Quanto às moradias, o estilo esteve presente tanto nas mais requintadas como nas mais simples. Vejamos alguns exemplos:



**Imagem 5.** Moradias dos oficiais da Vila Residencial Base Aérea de Cumbica – São Paulo.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Na imagem 5, que está acima, temos uma das moradias destinadas aos oficiais da Vila Residencial da então Base Aérea de Cumbica – São Paulo; possivelmente era a residência do subcomandante. Essa imagem data dos anos 1940. Podemos ver que, como características do estilo missões, possui o reboco de argamassa trabalhada grosseiramente em espessas camadas, telhado com telha capa, telhadinho de barro interceptando a fachada, e uso de madeira nas colunas do sobrado e grades.



**Imagem 6.** Residências da Base Aérea de Fortaleza.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Na Base Aérea de Fortaleza, construída no período em que o Brigadeiro Eduardo Gomes foi o comandante da então 2ª Zona Aérea, as residências também aparecem com traços do estilo que aludimos. Na imagem 6, acima, vemos uma residência ainda em construção nos expõe algumas características peculiares. Telhados de telhas meia cana, varandas com arcos e janelas paralelas assimétricas.

Nos prédios funcionais também a utilização foi ampla. Apesar de não serem tão detalhados como certas residências, igualmente são marcados pela escolha arquitetônica, como podemos ver na imagem número 7.



**Imagem 7.** Prédio do comando da Base Aérea de Cumbica – São Paulo.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Tal edificação é o prédio do comando da Base Aérea de Cumbica/SP. Logo vemos a torre circular, que, apesar de por vezes ter utilidade de abrigar as escadas, era um ornamento na maioria das construções. Ela é circundada de uma varanda com arcos marcados por pedras imitando aduelas, além de ter uma pérgola que tem como portais de acesso dois arcos simétricos. Notamos também a ausência de beirais e o sobrado com colunas duplas.



**Imagem 8.** Estação de rádio Base Aérea de Santos.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Na Base Aérea de Santos temos o edifício acima (imagem 8). Ele abrigou a estação rádio e tem a sua construção, que se inspira nas construções californianas. O que podemos notar é que nem sempre são construções com muitos detalhes. Neste caso procurava-se, talvez, unir a necessidade de acompanhar ao estilo com a funcionalidade das construções.



**Imagem 9.** Portão da guarda da Base Aérea de São Paulo.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Esta última imagem, a de número 9, temos uma construção ligada à segurança. Trata-se do portão da guarda da Base Aérea de São Paulo (BASP). Alguns detalhes nos saltam aos olhos. As aduelas de pedra, os portões de madeira trabalhados com detalhes em ferro, falsa chaminé, torreão circular com telhado cônico, três janelas paralelas e portões de madeira.



**Imagem 10.** Terminal de passageiros do Aeroporto de Santos.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Até aqui tratamos somente dos exteriores das edificações. A partir da imagem 10 esse panorama muda. Destacamos daqui em diante que, em alguns casos, inclusive a decoração interna buscava se adequar ao novo ideário. O terminal de passageiros do Aeroporto de Santos apresenta então balcões e vigamentos do telhado de madeira, gradil e colunas torneados, lustres de ferro com copos tipo lamparina, piso em lajotas e elementos decorativos na parede que atribuem ao ambiente certa rusticidade.



**Imagem 11.** Salão Nobre do Prédio do Comando da Base Aérea de São Paulo.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

Nesta outra foto (imagem 11) temos o Salão Nobre do Prédio do Comando da BASP em Cumbica. Nele temos as paredes forradas em madeira, lustres de ferro com copos tipo lamparina e porta tripla de madeira. Dessa forma, podemos ver, a partir do acervo do Arquivo Histórico do MUSAL, que o estilo missões foi corrente em parte das nas construções da Força Aérea Brasileira, ou feitas pela diretoria de obras.

## Prédio do Parque de Aeronáutica: Resquícios de uma inculturação

O hoje Núcleo do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos é a organização militar concebida para proceder a desmobilização do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos (PAMAAF). Em seu sítio foi criada em 29 de março de 1933, através do Decreto n° 2259, o Parque Central de Aviação (PCAv), então unidade vinculada a Aviação Militar do Exército Brasileiro.

Apesar disso, segundo o que foi publicado no periódico *Correio da Manhã* de 19 de novembro de 1931, a ideia de sua criação é anterior. Nesta edição vem estampada a notícia de que os engenheiros da aviação major Antônio Guedes Muniz e o capitão Ivan Carpenter Ferreira foram incumbidos de planejarem a organização do PCAv.

Tal unidade militar surgiu com a finalidade de efetuar os grandes reparos no material de aviação e nos aeróstatos, além de efetuar a construção e recuperação destes tipos de materiais. Seu primeiro diretor técnico foi o major Ivan Carpenter Ferreira, nomeado em 13 de julho de 1933.

No *Livro Histórico* são listadas algumas das atribuições do Parque. Entre elas, além das já citadas acima: construção e aperfeiçoamento de projetos de aeronaves e motores; auxílio nos estudos e instruções da Diretoria de Aviação (DAvM) para otimização dos equipamentos; auxiliar a DAvM no estudo da utilização de matérias nacionais na construção de aviões; realizar ensaios e pesquisas necessários á produção e emprego do material utilizados pelas organizações militares.

Sua fundação é tão importante que em 10 de julho de 1934 o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, fez uma visita juntamente com o ministro da Guerra, general Góes Monteiro. Segundo o *Correio da Manhã* ele percorreu todas as dependências conhecendo parte da tecnologia que estava sendo implementada para a modernização da aviação brasileira (*Correio da Manhã*,



15/03/1935, p. 9).

Desde seu início muitas obras de adequação e construção foram realizadas. Os hangares que hoje são nomeados de tenente Lucena (Hangar Central) e major Hortêncio (Hangar Duplo) já estavam de pé e funcionando como oficinas da Escola de Aviação Militar em 1930.

Em 1933, foram construídos o pavilhão para o Laboratório de Física, Química e Mecânica e o Pavilhão de pintura, decapagem e metalização. A cada ano, desde sua fundação, foram sendo construídas novas instalações e realizadas melhorias como calçamento de ruas, movimento de terras.

Segundo o *Livro Histórico*, em 29 de outubro de 1935 foi encerrada a construção da Companhia de Operários, que é o prédio que nos interessa aqui. Ao observarmos fotografias aéreas da área do que conhecemos como Campo dos Afonsos, como a que está abaixo, observaremos que no local onde é hoje o Prédio do Comando, o que vemos é uma construção completamente diferente. Como podemos ver na imagem 12 abaixo, a edificação possuía outra forma.



**Imagem 11.** Fotografia aérea da área do Campo dos Afonsos.  
(Fonte: Acervo do Museu Aeroespacial)

A partir da criação do MAer houve um grande *boom* de construções e alterações nas áreas das novas instituições criadas: a Escola de Aeronáutica e o Parque de Aeronáutica. Uma destas modificações foi a transformação da função da edificação conhecida como Companhia dos Operários. Ela foi adaptada para ser, na verdade um conjunto de três prédios interligados por passarelas aéreas. Neles estariam o Corpo da Guarda, O prédio do Comando, incluindo o Cassino dos Oficiais e um terceiro edifício administrativo.

A adaptação incluiu uma mudança na concepção arquitetônica da área onde fica a construção. Como vimos acima, assim como em outras unidades, e principalmente na Escola de Aeronáutica, teremos a adoção do estilo missões ou californiano. A empresa responsável por esta obra foi a J. Galego, uma das grandes responsáveis pelas obras que transformaram toda a área dos Afonsos em uma verdadeira réplica das bases aéreas norte-americanas da região da Califórnia.

Podemos entender que a questão da influência é real. Uma vez que através da leitura do *Livro Histórico da Unidade* vemos o crescimento na intensidade das relações entre as duas nações, principalmente no início dos anos de 1940.

Em 1935, portanto, ainda sob a égide do Ministério da Guerra, o diretor técnico interino, major Ivan Carpenter Ferreira, vai realizar uma missão nos EUA. Em 5 de outubro de 1937 visitou a instituição o adido militar da embaixada norte-americana, major Laurence C. Mitchel. Em 1940 o diretor do então Parque Central de Aeronáutica – denominação que a unidade recebeu a partir de 1938 –, Cel Aviador Antonio Guedes Muniz, seguiu para os EUA.

Em 24 de fevereiro de 1944 o coronel Hills, secretário geral da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, também visitou o Parque. No mesmo ano o diretor geral do Parque fez a entrega de ducentésimo avião recuperado para uso da Escola de Aeronáutica. Em agradecimento o comandante da escola, coronel Dyott Fontenelle, agradeceu a ajuda de uma missão americana, que não achamos nenhum rastro administrativo, mas que certamente encontrava-se na unidade de manutenção, ou na Escola de Aeronáutica, ou até nas duas, participando do esforço de guerra.

Em 08 de janeiro de 1945 foram designados seis militares e oito funcionários civis para realizarem um estágio nos parques das Forças Aéreas ianques. Neste mesmo ano, o próprio diretor geral da unidade, Ten. coronel aviador Guilherme Aloysio Telles Ribeiro, realizou uma viagem aos EUA a serviço do MAer.

Ainda em 1945, o *Livro Histórico* cita uma visita de seis horas de cada turma de instrução dos cadetes ao Serviço Técnico de Aeronáutica, a fim de que conhecessem o serviço de tal órgão. Abaixo orienta que o major Hermam Dietze da missão americana, que substituíra ao Ten. Cel. Raul Miller.

Vemos então que a presença e intercâmbio entre os países é algo que realmente aconteceu. Mas como chegar a conclusão de a arquitetura também sofre influência desse contato.



**Imagem 12.** Arquitetura exterior prédios Campo dos Afonsos.  
(Fonte: Acervo privado do autor)

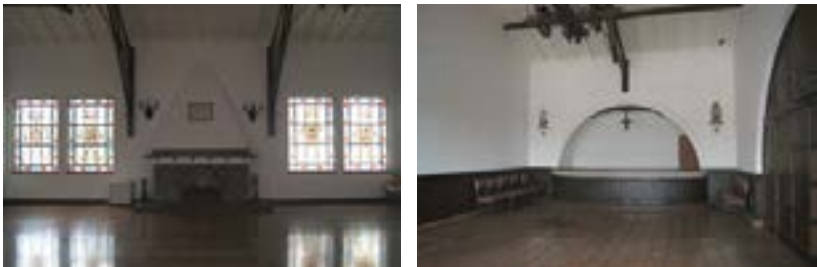
O edifício em questão compreende, na verdade, o 001, que é duplo, pois tem formato em “U”, com parte frontal e traseira, além de possuir três pisos; o 002, que eram as dependências do Corpo da Guarda, e que possui dois pisos, e, por último, o 003, que é um edifício menor ao lado direito do principal e que também possui dois pavimentos.

Na parte do prédio que fica voltada para o interior da unidade poderemos observar, nas imagens 13, 14, 15 e 16, na alameda que fica entre a construção e o Hangar Ten. Lucena, que as fachadas dos prédios e das entradas das passagens que ligam ao interior da área técnica formam um conjunto onde tudo foi pensado em detalhes. Vemos arcadas, telhados com telhas tipo cana, painéis e detalhes em azulejos quadrilobados, parede com textura grosseira, cachorros de cimento pintados na cor das telhas, varandas com telhados, portas com gradis desenhados e luminárias de ferro e vidro penduradas nas fachadas.



**Imagem 13.** Arquitetura exterior prédios Campo dos Afonsos.  
(Fonte: Acervo privado do autor)

Na fachada que fica de frente para a Estrada Marechal Fontenelle, que estão nas fotografias da imagem 13 acima, vemos um grande exemplo desta arquitetura. Torreão circular coberto com telhado cônico, campanário com janelas simétricas paralelas, telhado com telhas canas, reboco de argamassa grosseira, luminárias de vidro e ferro, portão com gradil desenhado, passarela com janelas venezianas em madeira e colunas salomônicas, e, por último, o paisagismo com jardins com as palmeiras que estão em muitos dos prédios dos Campo dos Afonsos e de outras unidades da FAB pelo Brasil.





**Imagem 14.** Arquitetura exterior prédios Campo dos Afonsos.  
(Fonte: Acervo privado do autor)

No interior (fotografias imagem 14) vemos uma forte preocupação em manter a ideia arquitetônica original. Ambientes com pisos em madeira e lajota, falsa chaminé, inclusive com objetos necessários para o acendimento e manutenção, além da lenha no local. Madeiras de sustentação dos telhados trabalhadas e a mostra. Um bar de taverna ornado com lajotas, azulejos e luminárias de ferro e vidro.

A construção nos leva a pensar o porquê da instalação de, por exemplo, uma lareira no Rio de Janeiro em local tradicionalmente muito quente. Isso demonstra muito mais uma arquitetura que não se preocupava com o funcional e sim com o decorativo. Diríamos que a ideia era muito mais parecer-se com o ambiente encontrado em unidades ianques que com a funcionalidade.

## Conclusões

Em nosso trabalho buscamos entender e demonstrar que a influência norte-americana sobre a nascente Força Aérea Brasileira foi além da questão operacional e de formação.

Em um país onde o poder aéreo era insipiente, as condições de criação por meios próprios de uma arma aeronáutica que pudesse garantir a defesa e a soberania do país eram quase nulas. Desta forma, não foi irrelevante a iniciativa de se aproveitar da Segunda Guerra Mundial para, a partir das necessidades dos Países Aliados, buscar a formatação dessa instituição.

Porém, junto a isso, os ianques traziam um pacote de outras iniciativas. Jornais, revistas, cinema entre outros eram meios de influência junto à população. Eles faziam com que a ideia de uma nação forte passasse pelo desejo de seguir seus passos.

Isso também se deu no ambiente militar. Muitos foram os militares que nesse período foram formados e treinados lá e aqui sob a orientação de norte-americanos. Ela era a nação a ser imitada. Seu poder aéreo era algo que nós não imaginávamos ter.

O próprio ministro Salgado Filho deixou essa impressão por várias vezes. Sendo assim, vemos então que foi feito um grande esforço para trazer o ambiente, que era o de um país vitorioso e proeminente, para nossas instituições.

As bases e unidades da Força Aérea que foram construídas e remodeladas nesse período são documentos vivos da importante participação, ou seja, da importante influência do ideário norte-americano sobre os militares brasileiros.

O Prédio do Parque de Aeronáutica seguiu essa lógica. Se eles eram os melhores na construção e manutenção de aeronaves, eles eram o exemplo. Suas instalações eram o que deveriam ser as nossas. Inclusive no que diz respeito à decoração e conforto.

Nesse sentido podemos afirmar que ele é um importante documento do que foi esse período na história militar brasileira.

## Referências

Atique, F. (2010). *Arquitetando a Boa Vizinhança: Arquitetura, Cidade e Cultura nas Relações Brasil – Estados Unidos 1876 -1945*. São Paulo: Pontes Editores.

Batista, J. de Paula, (2012). Da Conturbada Década de 1930 à Modernização da Escola de Aviação Militar no *Campo dos Afonsos (2012)*. Em *Força Aérea Brasileira, Campo dos Afonsos: 100 anos de História da Aviação Brasileira* (pp. 34-53). Rio de Janeiro: Universidade da Força Aérea.

Bloch, M. (2001). *Apologia da História ou o Ofício do Historiador*. Rio de Janeiro: Editora Zahar.

Bourdieu, P. (1983). Trabalhos e projetos. Em R. Ortiz (Ed.), *Pierre Bourdieu*. São Paulo: Ática.

Bourdieu, P. (1999). *O Poder Simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Diretoria de obras do ministério da aeronáutica (1945). *Relatório Referente ao ano de 1945, 2ª Parte: Situação do Ano Anterior (1944)*. Rio de Janeiro: Força Aérea Brasileira.

Directoria de aviação militar (1934). *Relatório da Directoria de Aviação*. Rio de Janeiro: Força Aérea Brasileira.

Durkheim, É. (1978). *As Regras do Método Sociológico*. São Paulo: Ed. Nacional.

Febvre, L. (1989). *Combates pela história*. Lisboa: Editorial Presença.

Força Aérea Brasileira (1943a). Viajou aos Estados Unidos o Ministro da Aeronáutica. *Aviação*, Julho-1943, 9.

Força Aérea Brasileira (1943b). Ministro Salgado Filho nos Estados Unidos. *Aviação*. Agosto, 1943, 3.

Força Aérea Brasileira (1943c). O Regresso do Ministro Salgado Filho. *Aviação*, Agosto, 1943, 17.

Força Aérea Brasileira (1944). Declaração do Ministro em Recife. *Aviação*, Fevereiro, 1944, 54.

Incaer (1991). *História Geral da Aeronáutica Brasileira* (vol. 2). Rio de Janeiro: Incaer/Villa Rica.

Lavenère-Wanderley, N. F. (1975). *História da Força Aérea Brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Gráfica Brasileira.

Lucena, E. V. P., & Filho, I. C. (2017). O Estilo Missões na Cidade de João Pessoa. Em *Anais Eletrônicos Urbicentros: Morte e Vida dos Centros Urbanos*. Recuperado de <http://www.ppgau.ufba.br/urbicentros/2012/ST303.pdf>

Meneses, U. T. B. de (2003). Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*, 23(45), 11-36.

Mendonça, T. S. (2012). A Escola de Aeronáutica e o Campo dos Afonsos (1941-1973). Em Força Aérea Brasileira, *Campo dos Afonsos: 100 anos de História da Aviação Brasileira* (pp. 12-33). Rio de Janeiro: Universidade da Força Aérea.

Moura, G. (2012). Relações Exteriores do Brasil 1939-1950. Mudanças na natureza das relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão.

Moyle, T. (2015). *Art Deco Airports, Dream Designs of the 1920s & 1930s*. London: New Holland Publishers,

Nascimento, F. B. (2016). Patrimônio Cultural e escrita da história: a hipótese do documento na prática do Iphan nos anos 1980. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, 24(3), 121-147.

Reis, J. C. (2010). *O desafio historiográfico*. Rio de Janeiro: Editora FGV.

Sales, M. V. (2012). A Consolidação da Aviação Militar no Campo dos Afonsos (1918-1931). Em Força Aérea Brasileira, *Campo dos Afonsos: 100 anos de História da Aviação Brasileira* (pp. 54-81). Rio de Janeiro: Universidade da Força Aérea.

Salgado, M., & Corrêa, E. (2007). *Salgado Filho: Primeiro Ministro da Aeronáutica*. Rio de Janeiro: Editora Adler.

Stevens, G. (2003). *O Círculo Privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica*. Brasília: Universidade de Brasília.

Teixeira, A. M. (2015). *FAB – Força Aérea Brasileira: Os Reflexos do Alinhamento com os Estados Unidos entre 1941 e 1948*. Curitiba: Juruá.

Tota, A. P. (2000). *O Imperialismo Sedutor: A Americanização do Brasil na Época da Segunda Guerra Mundial*. São Paulo: Companhia das Letras.



# O projeto político do Estado brasileiro sobre colonização, fronteiras e imigração para a defesa territorial durante a Primeira República

*Érica Sarmiento*

## Introdução

Esta investigação tem como proposta analisar o projeto político do Estado brasileiro no processo intervencionista de ocupação do sertão norte brasileiro, face aos interesses de colonização e vigilância. A pesquisa apoiou-se no uso de documentação produzida pelo Ministério da Guerra, articulando essa produção documental com os interesses modernizadores do Império brasileiro, e posteriormente, com os interesses do Brasil republicano, na ocupação do território através da intervenção regional e de uma política relacionada à ocupação do espaço.

Fortalezas militares, cidades, colonização e fronteiras são temas importantes para se entender a formação de parte do território brasileiro. Articulados, esses temas sinalizam a dinâmica da política de Estado implementada nessa parte da América, para ocupar e defender o território.

Abordaremos, de forma introdutória, a política de colonização desenvolvida pelo Estado brasileiro –priorizando a região norte, durante o período da Primeira República–, tomando como base o processo de formação do Estado nacional.

## Alguns aspectos da colonização militar nas fronteiras da Amazônia: ocupação e defesa do território

A política de colonização desenvolvida pelo Estado brasileiro para essa região, durante o Império e a Primeira República, foi articulada com base no processo de formação do Estado nacional. Do ponto de vista mais específico, vale mencionar, ainda que de forma sucinta, as políticas implementadas pelo Império brasileiro no processo de instalação das colônias militares na Amazônia como forma de povoamento e sob o controle da administração militar. Segundo o relatório ministerial do ano de 1854, as colonizações militares não possuíam a obrigatoriedade de ter o caráter essencialmente agrícola:

o que se trata é de estabelecer núcleos de povoações em lugares remotos, centrais e despovoados, onde só á princípio podem resistir ás privações, e permanecer como colonos, indivíduos habitados á obediência passiva, adquiridos pelos severos hábitos da disciplina militar (Ministério da Guerra, 1857, p. 45).

Já nos relatórios ministeriais do início da República observa-se a preocupação do Estado de levar o progresso rumo a um Brasil inóspito e desconhecido. As colônias, constituídas por famílias, deveriam incrementar a produção agrícola para o seu próprio sustento. Por outro lado, o Estado seria responsável pela realização de obras na colônia e pela elaboração de um projeto sanitaria (Ministério da Guerra, 1897, p. 53). As colônias, assim, se constituíram em um programa com objetivo de defesa das fronteiras nacionais e de manutenção do território. Devemos atentar para o fato da região Norte do Brasil caracterizar-se pela sua ampla extensão fronteiriça, e toda a transitoriedade que isso implica, possibilitando migrações e intercâmbios com os países limítrofes, e o possível confronto entre o “eu” e o “outro” que o espaço da fronteira possibilita (Barth, 2000). As fronteiras são reconhecidas principalmente como zonas que possibilitam trocas de lealdade, saberes e linguagens entre cidadãos distintos, podendo propiciar alguns conflitos entre os Estados-nação. Dessa forma, a permanente vigilância do território nacional passou, também, a exigir uma colonização militar.

No século XVIII, a ocupação da região Norte, especificamente da Amazônia, foi ganhando forma, e a principal característica foi o processo de

militarização regional. A colônia agrícola, articulada com a presença de uma guarnição militar, tornou-se face complementar da ocupação portuguesa. Nesse contexto, merece destaque a figura do colono e militar, destinados a agir nesses lugares estratégicos (Gomes, 1999, p. 14).

É importante registrar a posição institucional do Exército, dentro da política de Estado do Império, no século XIX, com relação ao tema, apresentada no relatório do ministro da Guerra, em 1857, que defende a escolha desses locais para colonização militar. Era necessário privilegiar as regiões de fronteiras – os lugares onde se estabeleceriam núcleos de povoações – localizadas nas áreas centrais, remotas e despovoadas. Somente os indivíduos habituados a resistir às privações, à obediência passiva adquirida pelos severos hábitos da disciplina militar, suportariam essa primeira realidade e contato com o território desconhecido.

Como diz o relator: “A escolha desses pontos é, por via de regra, em nossas fronteiras ou em alguns centros, onde se tem acumulado vagabundos e malfeitores, que ameaçam a segurança e a propriedade dos habitantes dos povoados mais próximos” (Brasil, 1857, p. 45). Tais colônias seriam, portanto, criadas com objetivos preponderantemente militares, ainda que nelas se encontrassem elementos econômicos de produção agrícola e de criação de animais. Seriam colônias para atuar na segurança e na defesa, que garantissem o desenvolvimento das povoações locais e a soberania nacional.

Como exemplo dessa política, na região Norte do Brasil –especificamente na província do Pará, no século XIX, quando se iniciava a consolidação do Segundo Reinado– foram fundadas três colônias militares (Nunes, 2015, p. 196), marcando o momento de estabilidade nacional: a Colônia Militar Pedro II, inaugurada isoladamente em 06 de maio de 1840 na margem esquerda do rio Araguari (atual estado do Amapá); a Colônia Militar de São João D’Araguaia, fundada em 1851 na margem esquerda do rio Araguaia na confluência com o rio Tocantins, e a Colônia Militar de Óbidos á margem esquerda do rio Amazonas, fundada pelo capitão do Imperial Corpo de Engenheiro Marcos Pereira de Salles, que recebeu a ordem do presidente da Província –Decreto Imperial 1.363, de 8 de abril de 1854. Com certeza, a implantação dessas colônias militares, embasadas a partir de 1850 por uma política imperial de segurança, também faz parte da história da colonização do sertão norte

brasileiro, assim como as colônias ocupadas por imigrantes europeus no Amazonas e no Pará, tanto no Império como na República<sup>25</sup>.

Na década de 1850 foram criadas vinte e uma colônias militares no Brasil, distribuídas do Rio Grande do Sul à província do Pará. Antes mesmo, no Pará foi instalada a Colônia Militar Pedro II (1840). Esse número, extenso para a época, de colônias militares fundadas na segunda metade do século XIX revela uma política do Estado imperial, apoiada em três instrumentos legais:

- 1) Lei N. 555, de 15 de junho de 1850, §5º, Art. 11º – distribuição do orçamento do Império para o ano financeiro de 1850 e 1851, autorizando o Poder Executivo a estabelecer onde convier, presídios e colônias militares dando-lhes a mais adequada organização;
- 2) Lei N. 601, de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras de 1850) – o artigo 12 previa o uso de terras devolutas para o assentamento de estabelecimentos públicos, e o artigo 18, autorizava o pagamento do deslocamento de colonos livres para serem empregados na formação de colônias nos lugares em que o governo achasse mais conveniente;
- 3) Decreto N. 1.318, de 30 de janeiro de 1854 (normatização da Lei de Terras de 1850) – o qual determinava no Art. 82, o estabelecimento de colônias militares na zona de dez léguas contígua aos limites do Império com países estrangeiros, e em terras devolutas, que o governo pretender povoar e estabelecer colônias militares.

Tudo indica que essas recomendações para instalar as colônias militares nas áreas limites do Brasil com os países estrangeiros sinaliza que esse modelo de colonização era considerado uma estratégia de ocupação das fronteiras nacionais, evitando o avanço indesejável dos nossos vizinhos sobre o território brasileiro.

Para o diplomata Duarte da Ponte Ribeiro (1844, p. 19), que ajudou na formulação e execução da bem-sucedida política de fronteiras do Império brasileiro, havia no final dos anos 1840, o abandono das nossas fronteiras.

---

<sup>25</sup> Os temas referentes às colônias militares precisam ser investigados com mais profundidade pela historiografia brasileira, até mesmo para a melhor compreensão do processo de colonização e de imigração, de forma geral, das áreas do Norte do país.

Em 1847, o tenente general Francisco José de Souza Soares D'Andrea (barão de Caçapava) aprontava o primeiro artigo de suas observações aos apontamentos sobre o estado das fronteiras no Brasil –do diplomata Duarte da Ponte Ribeiro– enfatizando as dificuldades na defesa do território, por conta da sua extensão, e o abandono das fronteiras brasileiras, apontando como solução a criação de colônias militares agrícolas nas fronteiras. Para o barão de Caçapava:

Não basta, também, ter pontos fortificados e destacamentos regulares por toda nossa extensa fronteira, é preciso desenvolver por toda ela uma população agrícola ou industrial da melhor gente do país, nem será isto, de certo, útil ou proveitoso feito com colonos estrangeiros, ou mesmo com homens de cor (Ribeiro, 1844, p. 20).

Com esse posicionamento, percebe-se que o projeto do general D'Andrea enfatizava que não seria apenas a presença militar com patrulhamento que garantiria a proteção das extensas fronteiras brasileiras. Para o militar, deveria ser implantada uma colonização eficaz, na qual os colonos povoariam, produziram e defenderiam os limites nacionais. Como vimos anteriormente, essa proposta foi implantada nas margens do rio Araguari, Amazonas e Araguaia, com a fundação das Colônias Militares Pedro II, Óbidos, e São João D'Araguaia. As colônias militares deveriam ser povoadas com população branca e indígena, que seriam recrutadas pelo Estado ou pelos colonos, como forma de ocupar, produzir e defender as fronteiras norte do Brasil (Silva, 2013, p. 20).

A instalação de colônias militares em toda a extensão do território brasileiro, no século XIX, fez parte do esforço estatal de dominar regiões marcadas pela existência de tensões de várias naturezas: com pequenos agricultores, escravos fugidos, escravos libertos, indígenas e estrangeiros. Os presidentes de províncias utilizavam as tropas localizadas na região como apoio à segurança e à defesa territorial. Como vimos, no Império, com sua estrutura administrativa centralizadora, cabia ao governo legislar e executar os assuntos relacionados à colonização das fronteiras.

Com a instalação da República, em 1889, a autonomia dos Estados foi construída gradativamente ao longo dos anos 1890, principalmente, com a Constituição Federal de 1891, que passou aos Estados o domínio das terras

devolutas. Essas terras eram um dos principais recursos das políticas de colonização fundadas na pequena propriedade.

No final do século XIX, as atividades das colônias militares na região amazônica fracassaram definitivamente, fazendo com que o Estado, através das Forças Armadas, planejasse outras formas de ocupação e controle das regiões fronteiriças. Sendo assim, outros projetos foram implantados ao longo do século XX. Até a primeira metade desse século, dentro dos debates políticos-militares, permanecia o interesse na busca pela ocupação do território, pelo desenvolvimento e pela defesa das fronteiras. Dentre as ações podemos destacar o projeto de construção das linhas telegráficas e a intervenção civilizadora na população nativa a cargo do Exército.

Em 1900, na presidência de Campos Sales, o capitão Rondon foi empossado como encarregado da construção da linha telegráfica que ligaria Cuiabá a Corumbá, entroncando na estação de São Lourenço, com ramificações para Aquidauna e Forte Coimbra. Prosseguiu levando o telégrafo a Nioaque, Miranda, Porto Murtinho, Margarida e Bela Vista na fronteira com o Paraguai, ordem que recebera do governo a fim de prolongar a linha do sul do Estado do Mato Grosso (Brasil, 1900, p. 164). Até esse ano, a comunicação do Rio de Janeiro com o sul do Mato Grosso era limitada. Para chegar à região era preciso navegar pelo Atlântico Sul, entrar na bacia do Rio da Prata e subir o rio Uruguai até desembarcar no destino. Em resumo, não havia estradas contínuas nem comunicação rápida com aquele espaço.

Foram feitas várias tentativas para levar o telégrafo até o centro-oeste do país, mas as áreas do pantanal e da floresta dificultavam toda ação do Estado nesse sentido. No pensamento dos militares, até o ano de 1900, nossas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia continuavam desguarnecidas e isoladas; por isso deu-se a intensificação dos trabalhos da Comissão de construção de linhas telegráficas no centro-oeste.

Em 13 de março de 1906, o general Francisco de Paula Argolo, ministro da Guerra do presidente da república Afonso Penna, incumbira Rondon de chefiar a equipe de construção da linha telegráfica que ligaria através do sertão o Estado do Mato Grosso ao Território do Acre; a equipe estava formada por dois grupos, um por São Luiz de Cárceres e outro por Cuiabá (Brasil, 1907, p. 60).

No período, Bolívia e Brasil disputavam as terras do Acre. O Brasil propôs um acordo para sanar o conflito, garantindo que, em troca das terras, daria

uma saída para o mar, através da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Por essa via, a exportação boliviana seria transportada até o rio Madeira, embarcaria em navios, percorreria o Amazonas e seguiria destino pelo Atlântico. No entanto, para conseguir tal feito, o Brasil precisava estabelecer comunicação rápida com a Amazônia, pois o Estado precisaria controlar o transporte internacional que atravessaria nosso território.

A missão de ligar o Mato Grosso à Amazônia foi desenvolvida em três etapas: em 1907 é estabelecida a base para o início das operações a partir do rio Juruena rumo ao Rio Madeira; em 1908, chega à Serra do Norte, cumprindo mais uma etapa de sua missão; em 1910 chega ao destino no porto de Santo Antônio do Rio Madeira.

Para se entender esse esforço de expansão do poder central deve-se considerar ainda que no início do século XX, e mesmo ainda hoje, as regiões norte e noroeste do Brasil eram vistas como lugares atrasados e desconhecidos, fora do alcance das populações que viviam nas cidades próximas ao litoral, para quem esse imenso território “abandonado” começava pouco depois das fazendas de café do oeste paulista (Domingues, 2010, p. 7). Além disso, como afirma Laura Antunes Maciel, o telégrafo, assim como a expansão da malha ferroviária, era parte de “um grande plano da República nascente para delimitação, ocupação e colonização militar das fronteiras brasileiras com o Paraguai e a Bolívia” (Maciel, 1999, p. 80). Temos a ferrovia e o telégrafo como precursores da civilização, compreendida como o término do isolamento dos espaços e grupos que deveriam ser integrados à nação, rumo ao fortalecimento da presença republicana nas áreas mais desertas do Brasil.

No ano de 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPI) pelo presidente Hermes da Fonseca, que convidou Rondon para chefiá-lo. A liberdade dos índios continuava sendo vista pela ação tutelar do Estado, dali se processaria sua inserção na sociedade civilizada. Os homens do Estado, principalmente os que pertenciam às instituições de formação cientificista, avaliaram esta inserção do índio pelo progresso dirigido, como no trecho abaixo se fez pronunciar Luís Horta Barbosa, que exercera o cargo de diretor do SPI:

O serviço não procura nem espera transformar o índio, os seus hábitos, os seus costumes, a sua mentalidade, por uma série de discursos ou de lições

verbais, de prescrições, proibições e conselhos, conta apenas melhorá-lo, proporcionando-lhe os meios, o exemplo e os incentivos indiretos para isso: melhorar os seus meios de trabalho, pela introdução das ferramentas; as suas roupas, pelo fornecimento de tecidos, e dos meios de usar a arte e de coser, à mão e a máquina; a preparação dos seus alimentos pela introdução do sal, da gordura, dos utensílios de ferro, etc...; as suas habitações; os objetos de uso doméstico; enfim, melhorar tudo quanto ele tem e que constitui o fundo mesmo de toda existência social. E de todo este trabalho, resulta que o índio é não um mísero ente sem classificação social, por ter perdido a civilização a que pertencia sem ter conseguido entrar naquela para onde o queriam levar (Magalhães, 1956, p. 55).

A modo comparativo, em uma breve exposição, gostaríamos de abrir um parêntese para sinalizar que a expansão das fronteiras e o extermínio das populações indígenas, ou de parte significativa delas, já havia ocorrido décadas antes nos países vizinhos, como no caso da Argentina e do Chile. As missões civilizadoras dos projetos nacionais estiveram presentes nas campanhas militares na Argentina, a chamada Conquista do deserto, nas décadas de 1870 e 1880. As populações originárias foram submetidas à aculturação, a perda de suas terras e de sua identidade. Segundo Halperín Donghi, em sua magistral obra *Una nación para el desierto argentino*:

Ya quienes lo vivieron, vieron en los sucesos de 1880 la línea divisoria con una etapa nueva de la historia argentina. En 1879 fue conquistado el territorio indio; esa presencia que había acompañado la entera historia española e independiente de las comarcas platenses se desvanecía por fin. Al año siguiente, el conquistador del desierto era presidente de la nación, tras de doblegar la suprema resistencia armada de Buenos Aires (Halperín Donghi, 2005, p. 143).

No Chile, a experiência Mapuche dominava um extenso território compreendido entre os rios Biobío e Toltén, que separavam o Chile central com a região sul, que havia sido colonizada por alemães. Tratava-se de uma zona rica pelas suas possibilidades tanto agrícolas como florestais. O diário chileno *El Mercurio de Valparaíso* assim se referia à presença indígena:



Eran universalmente reconocidos los beneficios que nos traería arrancar del mapa de Chile ese odioso parche que desde la organización de la república ha venido afeándola con mengua, no sólo de intereses materiales de gran valía mas también con detrimento de prestigio moral de la soberanía del Estado (Estrada, 2012, p. 37).

O preço pago pelos indígenas em relação às obras públicas implementadas pelo governo chileno a partir de 1881 foi alto demais. Milhares morreram e muitos ficaram submetidos ao Estado na qualidade de minifundistas. A fala de um dos indígenas, Lorenzo Colimán, demonstra bem a opressão vivida por esses povos após a consolidação das políticas nacionalistas de extensão das fronteiras: “Lo que hemos conseguido con la civilización que dicen que nos han dado es vivir apretados como el trigo en un costal” (Estrada, 2012, p. 37).

Estamos diante de um modelo paternalista e civilizador de proteção aos índios, fruto de uma lógica colonial. Segundo Hardt e Negri, a dialética colonial se constrói, sobretudo, através de uma lógica maniqueísta de exclusão. A pureza das identidades, tanto no sentido biológico, como cultural, é de máxima importância, e a manutenção da fronteira provoca considerável angústia (Hardt & Negri, 2005, p. 143). No imaginário colonial, o colonizado não é simplesmente outro desterrado do mundo da civilização, mais bem, se o concebe e se produz como o *outro*, como a negação absoluta, como o ponto mais distante do horizonte. Assim, para Negri e Hardt, “el colonialismo homogeneiza las diferencias sociales reales creando una oposición decisiva que lleva las diferencias a un extremo absoluto y luego subsume la oposición en la construcción de la civilización europea. La realidad no es dialéctica; el colonialismo lo es” (Hardt & Negri, 2005, p. 147).

Voltando ao caso brasileiro, como comentando nas páginas acima, o objetivo era integrar o índio ao projeto de nação, no intuito de civilizá-lo. O significado de civilização acentuava a ideia do processo pelo qual passava uma sociedade de um ponto ao outro, e também o resultado final desse processo. O estado inicial era oposto ao final –civilização– e pode ser caracterizado como “natureza, selvageria, barbárie” (Starobinski, 2001, p. 18). Contudo, lançar mão de argumentos em nome da civilização não implicava dizer que o Brasil se encontrava em estado de barbárie, e sim que ainda não havia conseguido

atingir a civilização; isto é, estava em um estágio intermediário entre a civilização e a barbárie.

Além da tentativa de contato pacífico com as tribos indígenas mais arreadas nos serviços de construção, manutenção e operação da linha telegráfica, a comissão Rondon procurou integrá-las como brasileiras, difundindo o culto aos símbolos nacionais através de cerimônias cívicas, realizadas sob os mais diversos pretextos, que incluíam comemorações das datas nacionais, como o Dia da Independência e a Proclamação da República, ou a conclusão de trechos da própria linha telegráfica. Cabe reconhecer que a Comissão de Linhas Telegráficas buscava “nacionalizar” os índios, transformando-os em “brasileiros” (Domingues, 2010, p. 13).

Em relação ao processo intervencionista, vale destacar a ação tutelar do Estado sobre a população indígena do sertão norte e centro-oeste do Brasil, através da ação do Serviço de Proteção aos Índios. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) foi uma agência pública federal criada durante o governo do presidente Nilo Peçanha, em 1910. Encontrava-se subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria, e Comércio, e tinha como objetivo prestar assistência à população indígena que se dividia em quatro categorias: índios nômades, índios arranchados ou aldeados, pertencentes a povoações indígenas, e pertencentes a centros agrícolas ou que vivessem promiscuamente com civilizados. O Serviço foi organizado pelo general Rondon, o seu primeiro diretor, e foi extinto no ano de 1967.

A categorização ajudava a organizar que tipo de unidade administrativa deveria orientar os trabalhos com os índios protegidos, de maneira que a transformação ocorresse da melhor forma. Para os índios que viviam longe do convívio social, instalavam-se Postos Indígenas de atração; para os que estavam em transição para o modo de vida civilizado, os postos Indígenas de assistência, nacionalização e educação. Para aqueles que viviam em contato prolongado com a população civilizada, os postos indígenas de alfabetização e tratamento. Para os grupos indígenas situados nas proximidades das fronteiras nacionais, os postos indígenas de fronteira. Nas localidades onde houvesse interesse, criavam-se os postos indígenas de criação, destinados à pecuária (Corrêa, 2002, p. 127).

Além da proteção e integração indígena, o Serviço deveria se estabelecer em áreas férteis, dotadas de condições de salubridade, de mananciais ou cursos d'águas e meios fáceis e regulares de comunicação, centros agrícolas, constituídos por trabalhadores nacionais que satisfizessem as exigências regulamentadas no decreto.

Administrativamente, a agência executava o serviço de assistência em favor dos índios e orientava no sentido de melhor aproveitamento dos trabalhadores nacionais, colocando-os em condições desejáveis como força produtora que deveria ser utilizada e dirigida, conforme o interesse e as necessidades econômicas do Estado (Ministerio de Agricultura, 1910-1911, p. 53). Esse processo intervencionista coincidia com as necessidades de desenvolvimento capitalista pelo qual o Brasil passava naquele momento de transição.

Na base da unificação das funções relacionadas aos índios e aos trabalhadores nacionais estava a ideia de que o indígena era um indivíduo em estado de transição. Seu destino seria tornar-se trabalhador rural ou trabalhador urbano. Em 1918, o SPI foi separado da Localização de Trabalhadores Nacionais – Lei N. 3.454, de 6 de janeiro de 1918<sup>26</sup>. Em 1934, o SPI foi transferido do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para o Ministério da Guerra por Decreto N. 24.700, de 12 de julho de 1934.

Nesse momento específico da investigação analisaremos o funcionamento administrativo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que operou em diferentes formatos até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Para a administração da vida indígena foi formalizada uma definição legal de índio, através do Código Civil de 1916 e do Decreto N. 5.484 de 1928. Os índios tornaram-se tutelados do governo federal, um direito que implicava num aparelho administrativo único, articulando as relações entre os índios, o Estado e a sociedade. Dessa forma, por força da lei, o Estado passava a administrar a terra, a representação política e modo de vida dos índios.

O funcionamento das unidades administrativas do SPI envolvia a atuação dos indigenistas nos diversos tipos de postos indígenas (de atração,

---

<sup>26</sup> As duas atribuições separam-se e a instituição passou a SPI somente. A tarefa de Localização dos Trabalhadores Nacionais passou para o Serviço de Povoamento do Solo Nacional.

de criação, de nacionalização, de pacificação), assim como em povoações e centros agrícolas. O quadro funcional da agência envolvia desde militares até trabalhadores rurais sem nenhuma formação.

As principais iniciativas do SPI, regulamentadas pelo documento de criação, estavam voltadas para a pacificação e a fixação dos grupos indígenas em terras de colonização recente. Em diversos estados da federação foram instaladas equipes de atração e inúmeros postos indígenas.

No entanto, a atuação da agência foi marcada pelo exercício contraditório, pois tinha por objetivo proteger as terras e a cultura do índio, mas agia transferindo os nativos de forma a liberar terras para colonização. Os agentes do Serviço aplicavam, nos postos Indígenas, a técnica de contato desenvolvida pelo general Rondon durante os trabalhos na Comissão de Construção de Linhas Telegráficas, mantendo atitudes defensivas até estabelecer uma relação de amizade com os índios e consolidar a pacificação. A partir daí, era iniciada a negociação com os governos estaduais com o objetivo de garantir uma reserva de terras para a manutenção da tribo indígena.

A manutenção da ordem e das atividades no posto indígena podia ser feita pela utilização direta ou sistemática de métodos coercitivos ou punitivos para se conseguir os resultados exigidos. Outra estratégia utilizada para conseguir manter a ordem combinava a persuasão com a sanção, como no caso da distribuição de mercadorias no posto. O emprego de indígenas em cargos remunerados, como o de funcionário do posto, também era outra tática utilizada, estreitando, dessa forma, as relações e criando dependências entre os índios e os agentes do SPI. Após esgotados os mecanismos menos coercitivos para manutenção da ordem é que se poderia recorrer às sanções e às punições dos índios (Corrêa, 2002, p. 135).

### A questão imigratória

Um último ponto a ser abordado, de forma muito breve, é a questão migratória. Com certeza, a implantação de colônias militares, embasadas a partir de 1850 por uma política imperial de segurança, também faz parte da história da colonização do sertão norte brasileiro, assim como as colônias ocupadas por imigrantes europeus no Amazonas e no Pará, tanto no Império como na República. De 1870 a 1910, considera-se o maior surto econômico

já verificado na região norte do país, tendo-se como principal indicador o crescente aumento da produção da borracha (Sarges, 2010, p. 94).

A presença estrangeira na Amazônia do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX teve como principal motivação a busca por riquezas decorrentes da exploração da borracha<sup>27</sup>. Segundo Aragón (2009):

Para a Amazônia se dirigiram principalmente portugueses, italianos, espanhóis, e sírio-libaneses, atraídos pela economia da borracha, e na década de 1930 japoneses, por outras razões; mas também havia, na época da borracha, ingleses, franceses, norte-americanos, e de muitas outras regiões e países. Mas ao contrário do que geralmente se pensa, a imigração internacional para a Amazônia se manteve após a decadência da economia da borracha, sendo que foram os estrangeiros, especialmente comerciantes, pequenos industriais e trabalhadores em geral, os grandes responsáveis por sustentar a economia nos anos imediatos após a derrocada da economia da extração do látex. Esses novos migrantes, junto com aqueles que permaneceram, instalaram pequenas fábricas e estabelecimentos comerciais para abastecer o mercado local substituindo produtos que não mais podiam ser importados do mercado europeu (Aragon, 2009, p. 31).

Com as riquezas decorrentes da borracha, o poder público direcionava parte dos recursos financeiros para a implantação de um processo de modernização das cidades. Os migrantes estrangeiros passaram a se inserir em diferentes setores da economia. Houve, também, experiência na colonização agrícola; entretanto, foi o crescimento urbano que propiciou condições favoráveis para criação de um mercado de atividades de prestação de serviços que atraiu boa parte dos imigrantes que chegavam às cidades. O processo de modernização da cidade de Belém, por exemplo, a *Belle Époque*, só foi possível em razão do enriquecimento que atingiu certos setores sociais da região, através da extração e produção do látex, a partir da segunda metade do século XIX. A nova ordem econômica propiciou a composição de uma elite formada por comerciantes, seringalistas, financistas, com destaque para os profissionais liberais. Por outro lado, com as construções e obras públicas nas

---

<sup>27</sup> Sem esquecer as migrações internas, caso da nordestina, a partir de 1870, para os seringais (Sarges, 2010).

principais cidades, como Belém e Manaus, surgiu uma nova força de trabalho propriamente urbana, que vai se juntar a outros ofícios, como os alfaiates, sapateiros, relojoeiros, marceneiros entre outros. A composição desses grupos expressava a camada mais pobre da população (Sarges, 2010, p. 125). Segundo Maria de Nazaré Sarges (2010):

Reforçando o processo de inserção da Amazônia no sistema capitalista mundial, toda a atividade econômica da região passou a girar em torno da borracha a partir de 1840. Em decorrência dessa nova ordem econômica, Belém assumiu o papel de principal porto de escoamento da produção gomífera, canalizando parte do excedente que se originou dessa economia para os cofres públicos ... (Sarges, 2010, p. 20).

Ao longo dos anos 1890, o Congresso Nacional legitimou a legislação sobre imigração, uma prerrogativa dos Estados da federação, deslocando do governo federal para o governo estadual as atribuições de administrar a contratação de imigrantes e empreender as políticas de colonização. Ao governo federal restou o papel de controle dos portos e fronteiras, o recebimento e hospedagem dos imigrantes que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro, e o transporte dos imigrantes do porto até os núcleos coloniais organizados nos Estados.

Essa nova organização administrativa das políticas públicas gerou dois problemas que facilitaram a criação do Serviço de Povoamento. O primeiro foi a questão relacionada aos tratados, acordos e proteções internacionais aos imigrantes, que exigia a articulação entre os chefes de Estado dos países envolvidos e seus representantes ministeriais, ação que contrariava o que estava definido na lei (CF de 1891). O segundo problema está relacionado com a dificuldade da maior parte dos governos estaduais em construir estruturas de imigração e colonização que pudessem substituir as estruturas do governo federal herdadas do Império.

Jair de Souza Ramos, ao analisar a criação e atuação do Serviço de Povoamento do Solo Nacional –Decreto 6.455, de 19 de abril de 1907–, uma agência do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (no período de 1907 a 1930), através das políticas federais de imigração e colonização define as ações do poder tutelar público sobre a formação do Estado brasileiro. A

função essencial da agência era introduzir os imigrantes no interior do Brasil como pequenos proprietários rurais, determinando o povoamento do solo nacional. Uma ação administrativa que se ligava ao movimento migratório do país, realizada através da intervenção do governo federal (Ramos, 2002, p. 51).

Durante a gestão do governador Lauro Sodré, no Pará, foi promulgada a Lei N. 23, de junho de 1894, que autorizava a introdução de imigrantes no Estado. O Estado oferecia o financiamento da passagem do porto de embarque até a cidade de Belém, alojamento gratuito durante o período de 10 dias, transporte até o lugar definitivo de destino, tratamento médico nos núcleos coloniais durante dois anos, concessão gratuita de um lote de 25 hectares, escolhido pelo imigrante, além de ferramentas, e outras concessões. Durante todo o seu mandato, o governador se empenhou em transformar o Pará em uma terra de imigrantes. Estas práticas punham as famílias de imigrantes e colonos no centro do empreendimento de atração de imigrantes e montagem de colônias.

Os espanhóis pertencem a um dos muitos grupos migratórios que se deslocaram à região norte do Brasil. Chegaram ao Pará para trabalharem nas colônias, a maioria procedente da Galícia, mas também havia das províncias de Zamora e Salamanca (González Martínez, 2003, p. 126). O fluxo migratório espanhol era formado por grupos familiares que, subsidiados pelo governo paraense, povoaram os núcleos coloniais de Benjamim Constant, Jambuassu, Marapanim, José de Alencar, Santa Rosa, Ferreira Pena e Couto de Magalhães. Entretanto, as experiências não foram de todo frutíferas e aqueles espanhóis que tinham algum ofício, como os sapateiros, ferreiros, pedreiros, etc., decidiram migrar para a capital, Belém. Aí se instalaram também imigrantes espontâneos, que junto com antigos colonos formavam uma comunidade de aproximadamente 3.000 pessoas, procedentes principalmente da província de Ourense (Galícia). Esses galegos se dedicavam a ofícios manuais, a setores de hotelaria e serviços domésticos (González Martínez, 2003, p. 141).

Segundo Elda González (2003), sobre o fracasso da experiência da chamada colônia Benjamin Constant: del fracaso eran responsables tanto el gobierno, como el contratista y los propios colonos. El primero porque no contaba con los recursos necesarios para llevar adelante el plan (...) el reclutador porque cometió numerosos abusos, entre otros no respetar la condición de que todos

los colonos fuesen agricultores; por último, los inmigrantes que no habían unido sus esfuerzos para conseguir superar las dificultades (González, 2003, p. 131).

No caso dos italianos, os projetos de colonização agrícola do fim do Império e início da República constituíram a porta de entrada desse grupo na Amazônia, a partir de uma imigração controlada pelo Estado, que favoreceu o desencadeamento de imigrações espontâneas para as cidades amazônicas. Esses grupos de italianos fixaram-se em Belém, Manaus, e em alguns municípios localizados ao longo do rio Amazonas e de seus principais afluentes, por onde circulava o capital mercantil decorrente da economia da borracha (Alipandi & Martini, 1932).

No caso das colônias italianas, várias foram as experiências vividas por esses imigrantes no Norte do Brasil, como as colônias agrícolas de Anita Garibaldi, lanetama e Outeiro, localizadas no estado do Pará. As evidências empíricas, para o caso dos italianos, também permitem agrupá-los em dois grandes segmentos: a imigração subsidiada dirigida para as colônias agrícolas e a imigração espontânea dirigida às cidades. Um dos núcleos coloniais do Pará foi a colônia de lanetama, um contrato assinado entre o Estado do Pará e o armador italiano Salvador Nicosia, em janeiro de 1899, para a introdução de 200 famílias de agricultores italianos. Segundo pesquisa realizada por Maria Emilia Ferreira Emmi (2009, p. 267), Salvador Nicosia trouxe para a colônia 48 famílias. No Arquivo Público do Pará, encontram-se as listas nominais dos membros dessas famílias que totalizavam 295 pessoas que embarcaram no porto de Gênova em 1899, com destino a Belém nos navios Rio Amazonas e Rei Umberto da companhia La Ligure Brasileira.

As políticas de imigração e colonização jogaram um papel importante no interior de processos mais amplos de formação de Estados nacionais. Esse papel envolve, entre outros aspectos, o uso de técnicas de poder que, ao conformarem um campo de ações dos agentes que eram objeto destas políticas, contribuíram à construção da autoridade pública do governo federal.

O Serviço de Povoamento do Solo Nacional envolvia interesses do governo federal na promoção do serviço de povoamento do solo nacional, que em parte foi conseguido mediante acordo com os governos estaduais, empresas de viação férrea e de navegação fluvial, companhias ou associações e particulares.



Ao investigar mais detalhadamente o decreto de regulamentação do Serviço de Povoamento observamos o estabelecimento de regras explícitas quanto ao padrão do imigrante que o governo federal desejava para povoar o solo brasileiro. Deveriam ter menos de sessenta anos, não sofrerem de doenças contagiosas, não exercerem profissão ilícita, não serem reconhecidos como criminosos, desordeiros, mendigos, vagabundos, dementes ou inválidos.

Os imigrantes poderiam chegar aos portos brasileiros à custa da União, dos Estados da federação, de terceiros ou com o pagamento da sua passagem. As passagens pagas no Brasil seriam de 3ª classe desde o porto de embarque até o Rio de Janeiro, ou qualquer outro porto nacional em que houvesse montado o serviço de recepção e hospedagem para imigrantes.

A definição de um padrão mínimo de qualidade do imigrante era contextualizada pela necessidade do Estado de criar um povo com padrões aceitáveis de civilização, decorrendo daí essas condições impostas que segregavam os indivíduos indesejáveis pela sociedade. Essa prática discriminatória já vinha ocorrendo em outros momentos históricos, como no final do século XIX, quando o Brasil teve que resolver o problema da substituição da mão-de-obra escrava negra pelos imigrantes.

Pelo Decreto N. 6.455, de 19 de abril de 1907, aos imigrantes produtivos que se dedicassem a qualquer ramo da agricultura, da indústria, do comércio, da arte ou da ocupação útil era garantido o direito pleno da sua atividade, da inteira liberdade de trabalho, desde que não houvesse ofensa à segurança, a saúde e aos costumes nacionais –Decreto N. 6.455, de 19 de abril de 1907. A liberdade de crença e de culto também era garantida, além do gozo de todos os direitos civis atribuídos aos brasileiros conforme a Constituição Federal. Com o Artigo 3º do Decreto, o governo federal tinha por objetivo definir a condição de cidadania aos estrangeiros que chegavam ao Brasil para trabalhar, o que não os eximia dos deveres atribuídos aos brasileiros e de serem penalizados por ofensa aos costumes públicos.

Outra preocupação regulamentada pelo Decreto N. 6.455 foi quanto à política de colonização. Pelo Art. 5º, a definição de *núcleo colonial* era a reunião de lotes, medidos e demarcados, de terras escolhidas, férteis e apropriadas à agricultura, à indústria agrícola ou pecuária, em boas condições de salubridade, com abundância de água potável para as diversas necessidades da população, contendo cada um deles suficiente área para o desenvolvimento

do trabalho do adquirente, servidos por viação capaz de permitir o transporte cômodo e fácil, em favorável situação econômica. Ou seja, era uma definição que não se aplicava aos possíveis lotes localizados no sertão norte e centro-oeste brasileiro. No máximo, no interior do sudeste e sul brasileiro.

Para tanto é importante entender nessa discussão a função de cada participante nacional na fundação dos núcleos coloniais. À União cabia auxiliar os Estados na fundação; aos Estados fundar colônias com ou sem o auxílio do Estado. Nesse caso a escolha da localidade recairia sobre os seus interesses domésticos envolvendo cada região, e às empresas de viação férrea, empresas de navegação fluvial, companhias, associações ou particulares fundar com ou sem auxílio da União e dos Estados, atendendo aos seus interesses.

No entanto, a União poderia intervir na fundação de núcleos coloniais por empresas de viação férrea, navegação fluvial, companhias, associações ou particulares, mesmo que não recebessem auxílios oficiais do governo federal, quando entender ser preciso instituir providências reguladoras do serviço e medidas repressivas de abusos.

Além disso, a fundação de núcleos coloniais, sob a administração direta da União e auxílio do Estado interessado, seguiria a seguinte regra:

1. A União faria a escolha da localidade e efetuaria a formação do núcleo.
2. Em terras devolutas ou propriedade do Estado, o governo federal entraria em acordo com o respectivo governo no sentido de lhe ser cedido a área para a formação do núcleo.

Quando os lotes estivessem medidos e demarcados, conforme a regra acima, ocorreria à efetiva cessão ao governo federal, que deveria vender aos imigrantes, ou utilizá-los em proveito do núcleo. Além disso, se as terras fossem de particulares, seriam adquiridas amigavelmente, por compra ou convenção, ou desapropriadas pelo governo estadual, realizando a União os trabalhos preparatórios e definitivos.

O governo estadual deveria fornecer gratuitamente aos imigrantes ferramentas e sementes, como auxílio ao primeiro estabelecimento, podendo também a União conceder iguais favores, além de outras vantagens. O Estado poderia prestar quaisquer auxílios em benefícios aos imigrantes independente dos concedidos pela União, e instituir prêmios de incentivo à ocupação do solo.

Neste caso, o governo estadual auxiliaria a discriminação, se preciso, nos termos da sua legislação de terras, e permitiria que fossem efetuados os

trabalhos preparatórios e definitivos, tais como: estudos preliminares para a melhor repartição dos lotes e para o traçado das linhas de comunicação interna e externa; medição e demarcação dos lotes rurais; obras de saneamento, quando necessárias; construção de casas, estradas e caminhos; preparo, em cada lote rural, da área destinada às primeiras culturas; organização da sede do núcleo, e localização dos imigrantes.

A escolha da localidade dos núcleos coloniais seria feita mediante prévio estudo regional. Pela legislação estudada, a preferência para implantação das colônias seriam as localidades reconhecidamente salubres. Em Estados onde não existissem colônias antigas ou núcleos coloniais de agricultores estrangeiros, o governo federal poderia adotar providências excepcionais, quando indispensáveis para garantia da formação do primeiro núcleo em condições propícias ao seu desenvolvimento, servindo de centro de atração para o estabelecimento de crescente número de imigrantes – Decreto N. 6.455, de 19 de abril de 1907.

## Conclusões

Em relação às ações intervencionistas do Estado com face à colonização e à imigração, na região Norte do Brasil foi possível verificar certas intencionalidades ao se promover estas políticas, como a ocupação do espaço ao longo das fronteiras terrestres com a América do Sul, que antes pertenciam à Espanha; a preservação da autonomia política através da manutenção da soberania sobre o território, que passou a ser reconhecido internacionalmente; o reconhecimento de um vasto território desconhecido no interior do Brasil, e o processo de integração sertão-litoral via processo de colonização e imigração.

A implantação das colônias militares pode ser compreendida no contexto de um propósito estatal em promover a ocupação territorial e tornar os ocupantes desses espaços em colonos produtivos, a partir de um regime militarizado, baseado na disciplina e em normas jurídicas próprias para os militares. Constitua-se, assim, em um instrumento para criar as condições de produtividade, em um ambiente hostil e isolado, um movimento de povoamento, de segurança e de defesa territorial, que exigia dos colonos a superação das dificuldades impostas pelo espaço.

Por fim, é importante registrar que o Estado incentivou, divulgou e colocou em prática políticas de imigração, para a criação de colônias, para povoar as áreas do interior, assim como estimulou a chegada de milhares de imigrantes espontâneos. A região de fronteiras, por sua vez, exigiu a permanente vigilância do território nacional e, conseqüentemente, coube à colonização militar fazer parte desse processo, que é bem mais complexo, e exige ainda vários estudos complementares para entender essa colcha de retalho que é o processo de formação territorial e social brasileiro.

## Referências

Alipandi, E., & Martini, V. (1932). *Gli italiani nel nord Del Brasile*. Belém: Typografia da Livraria Gillet.

Barth, F. (2000). *O Guru, o Iniciador e Outras Variações Antropológicas*. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.

Brasil (1857). *Arquivo Histórico do Exército. Relatório do Ministério da Guerra de 1857*. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra.

Brasil (1900). *Arquivo Histórico do Exército. Relatório do Ministro da Guerra de 1900*. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra.

Brasil (1907). *Arquivo Histórico do Exército. Relatório do Ministro da Guerra de 1907*. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra.

Brasil (1910-1911). *Relatório do Ministério da Agricultura. 1910-1911*. Rio de Janeiro: Ministério de Agricultura.

Corrêa, J. G. S. (2002). A administração dos índios: as diretrizes para funcionamento dos postos indígenas do SPI. Em A. C. de Souza Lima (org.), *Gestar e Gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil* (pp. 125-146). Rio de Janeiro: Relume Dumará.

Domingues, C. M. (2010). A Comissão de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. *Atas do IV Encontro Regional da ANPUH- Rio Memória e Patrimônio*. Recuperado de [http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273879829\\_ARQUIVO\\_RondonANPUHCesarMachado.pdf](http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273879829_ARQUIVO_RondonANPUHCesarMachado.pdf)

Emmi, M. F. (2009). Luxos migratórios internacionais para a Amazônia brasileira do final do século XIX ao início do século XX: o caso dos italianos. Em L. E. Aragón (Coord.), *Migração internacional na Pan-Amazônia* (pp. 263-280). Belém: UFPA NAEA.

Estrada, B. (2012). *Chile. La apertura al mundo* (tomo 3 - 1880/1930).

Madrid: Fundación Mapfre; Santillana Ediciones Generales.

Domingues, C. M. (2010). A Comissão de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. *Atas do IV Encontro Regional da ANPUH- Rio Memória e Patrimônio*. Recuperado de [http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273879829\\_ARQUIVO\\_RondonANPUHCesarMachado.pdf](http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1273879829_ARQUIVO_RondonANPUHCesarMachado.pdf)

Gomes, F. (Org.) (1999). *Nas terras do Cabo Norte: fronteiras, colonização e escravidão na Guiana brasileira, séculos XVIII e XIX*. Belém: Ed. UFPA.

González, E. (2003). *La inmigración esperada. La política migratória brasileña desde João VI hasta Getulio Vargas*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Halpern Donghi, T. (2005). *Una nación para el desierto*. Buenos Aires: Prometeo.

Hardt, M., & Negri, A. (2005). *Império*. Barcelona: Paidós.

Maciel, L. A. (1999). *A Nação por um Fio: Caminhos, práticas e Imagens da Comissão Rondon*. São Paulo: EDUSC.

Magalhães, C. A. B. de (1956). *Rondon, uma relíquia da pátria*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.

Ministério da Guerra (1857). Colonização militar, p. 45. Recuperado em linha: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2202/000048.html>

Ministério da Guerra (1897). Colônias militares, p. 53. Recuperado em linha: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2238/000061.html>

Nunes, F. A. (2015). Aspectos da colonização militar no Norte do Império: povoamento, defesa do território e conflitos. Em A. Cardoso, C. A. Bastos & S. M. Silva Nogueira (Coords.), *História Militar da Amazônia: guerra e sociedade (séculos XVII e XIX)* (pp.195-210). Curitiba: Editora CRV.

Ramos, J. de Souza (2002). Poder tutelar e formação do Estado brasileiro: o Serviço de Povoamento do Solo Nacional (1907-1918). Em A. C. de Souza Lima (org.), *Gestar e gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil* (pp. 274-296). Rio de Janeiro: Relume Dumará.

Ribeiro, D. da Ponte (1844). *Apontamentos sobre o estado das fronteiras no Brasil. Apontamentos sobre o estado da Fronteira do Brasil em 1844, em adiantamento à memória de 1842 sobre limites do Império*. Rio de Janeiro: Comissão demarcadora de limites.

Sarges, M. de Nazaré (2010). *Belem: riquezas produzindo a Belle Époque (1870-1912)*. Belém: Paka-Tatu.

Silva, R. A. da (2013). *Colônia Militar Pedro II: nação e civilização na fronteira norte do Brasil* (Dissertação de Mestrado). Belém: UFFPA.

Starobinski, J. (2001). *As máscaras da civilização: Ensaio*. São Paulo: Companhia das Letras.

# Ejército Brasileño: demandas por su modernización en las décadas de 1960 y 1970

*Fernando Velôzo Gomes Pedrosa*

## Introducción

Al inicio de la década de 1960, el Ejército Brasileño era una mezcla entre la fuerza militar diseñada por la misión militar francesa que actuó en Brasil entre los años 1920 y 1940, y la que había absorbido la doctrina militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una fuerza expedicionaria brasileña fue enviada a Europa integrando el V Ejército de los Estados Unidos. En plena era de los ejércitos motorizados y mecanizados, el Ejército Brasileño aún contaba con gran número de unidades a pie y montadas.

A partir de los primeros años de la década de 1960 se disparó, en el ámbito de su oficialidad, un intenso debate sobre la modernización y reestructuración de la fuerza de tierra. Ese debate reflejaba antiguos anhelos de modernización, pero también era movido por el deseo de adecuar el Ejército a las reales posibilidades y necesidades de un país que se transformaba, en un movimiento sin precedente de industrialización de su economía y urbanización de su población. Como consecuencia de ese debate, a fines de los años 60 se asistió al inicio de un proceso de reforma militar que le brindaría al Ejército Brasileño las características básicas que, pasados más de 40 años, continúan vigentes, aunque haya sufrido reajustes y adaptaciones puntuales.

Este trabajo analiza en qué medida y de qué forma la coyuntura política interna, el ambiente político internacional y la percepción de amenazas

militares influyeron sobre las demandas por modernización del Ejército Brasileño a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Como parámetros de análisis, se tomaron los siguientes factores: coyuntura política internacional; coyuntura política nacional; tensiones militares en el entorno brasileño; percepción de las capacidades militares adversas y percepción de las capacidades militares propias<sup>28</sup>.

## Coyuntura política internacional

La década de 1960 fue dramática en Brasil. En el plano internacional, el mundo vivía los momentos más tensos de la Guerra Fría. Desde el inicio del decenio, los Estados Unidos habían aumentado su participación en la Guerra de Vietnam. La administración Kennedy amplió el involucramiento militar estadounidense, enviando tropas de Fuerzas Especiales (Clarke, 1988, p. 70). En agosto del 1965, durante la administración de Lyndon B. Johnson, los Estados Unidos habían desplegado dos divisiones de combate completas en Vietnam, iniciando así su participación directa en la guerra terrestre. Hasta diciembre de aquel año, se encontraba en territorio vietnamita el equivalente a cuatro divisiones de combate estadounidenses, que llevaban con ellas un sinnúmero de unidades de apoyo. Hacia el fin de 1965, los efectivos estadounidenses llegaron a cerca de 184 000 soldados (Clarke, 1988, p. 109), con lo que Estados Unidos quedó atrapado en un atascadero militar del que saldría moral y políticamente derrotado una década después.

En el Occidente, la victoria de la Revolución Cubana en enero de 1959 trajo la esperanza de un modelo autónomo de desarrollo para los países de Latinoamérica, libres de la dependencia de los Estados Unidos pero bajo un régimen de libertad y de democracia. Sin embargo, en pocos meses, el nuevo gobierno de Cuba sometió al país a un régimen autoritario, suprimiendo las libertades democráticas, encarcelando y fusilando sus adversarios (Anderson, 2012, pp. 423-426). Sin contar con el apoyo de los Estados Unidos, a los que acusaba de imperialista, el gobierno establecido por Fidel Castro adhirió abiertamente al modelo comunista soviético (Martins, y Liebel, 2015). Castro y su ministro Ernesto “Che” Guevara proponían la revolución continental por

---

<sup>28</sup> Este trabajo es una versión abreviada del segundo capítulo de la tesis presentada por su autor al Programa de Posgrado en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro en marzo de 2018, como requisito para la obtención del título de Doctor en Historia.



la vía armada como solución para los problemas políticos y sociales de los países latinoamericanos (Guevara, 2001, pp. 497-498), y el gobierno cubano pasó a actuar como exportador de la revolución (Rollemberg, 2001, p. 8). Desde el inicio de la década de 1960, bajo la inspiración cubana y su apoyo humano, material y financiero, estallaron focos y movimientos revolucionarios en la mayoría de los países de Latinoamérica. La postura agresiva de Cuba con relación a los demás gobiernos latinoamericanos no adherentes a sus impulsos revolucionarios provocó dos percepciones en los demás países del continente. Para el gobierno de los Estados Unidos, Cuba era vista como una amenaza a la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental y como una base física de la Unión Soviética en el Caribe. Los gobiernos latinoamericanos, a su vez, veían a Cuba como un Estado que adoptaba una política de injerencia armada en los asuntos internos de los demás países de la región, insuflando movimientos revolucionarios.

En Sudamérica, el impulso revolucionario se esparcía con el surgimiento de grupos de guerrillas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. El radicalismo se reflejaba en sucesivos golpes militares y en el establecimiento de una sucesión de gobiernos militares en la región, todos autoritarios y algunos claramente dictatoriales. Estos gobiernos ejecutaron campañas de represión durísimas en contra de los movimientos revolucionarios de izquierda –particularmente en Argentina y Chile que resultaron en miles de muertos y desaparecidos entre los insurgentes, las fuerzas legales y civiles.

Las relaciones entre los Estados sudamericanos tampoco eran las más amistosas. Había fuertes tensiones geopolíticas en el Cono Sur –sobre todo entre Argentina y Chile en torno a la disputa por la posesión de islas en el Canal de Beagle– y en la costa del Pacífico, entre Chile, Perú y Bolivia –consecuencia del contencioso de frontera que resultó de la conquista de provincias peruanas y bolivianas en la Guerra del Pacífico (1879-1883), ganada por Chile (Búlnes, 1911, 1914, 1919)–. Las tensiones entre Chile y Perú tuvieron una fuerte escalada en los años 1974-1975, durante el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú (Arancibia, 2007). La crisis entre Chile y Argentina, a su vez, estuvo a punto de hacer estallar una guerra en 1978, la que solo pudo ser evitada por la intervención del papa Juan Pablo II como árbitro de la disputa.

En cuanto a Brasil, aunque no hubiese ninguna pendencia geopolítica o tensión territorial, el país nutría una antigua rivalidad política y militar con Argentina, que se remontaba a las rivalidades de las metrópolis coloniales ibéricas, a las luchas por la ocupación de la margen norte del Río de la Plata y por el control de la navegación de esta vía fluvial (Bandeira, 1998). Esta rivalidad se amplió en la segunda mitad de la década del 1970 como consecuencia de la disputa por el uso del potencial hidroeléctrico del río Paraná en proyectos de construcción de usinas hidroeléctricas (Bandeira, 2003).

### Coyuntura política nacional

En el inicio de la década de 1960, los partidos y grupos de izquierda brasileños luchaban por “reformas de base” (Silva, 2014, p. 125) –agraria, urbana, bancaria, tributaria etc.–, pero confrontados con la dificultad de aprobación de las reformas propuestas por un Congreso Nacional que era considerado “reaccionario” (Figueiredo, 1993, p. 127), algunas corrientes se disponían a imponerlas “a [la] fuerza” (Fausto, 2013, p. 390). Para ello empezaron a crear grupos paramilitares, enviaron militantes a hacer entrenamiento militar en el extranjero e iniciaron la creación de campos de entrenamiento de guerrilla en el interior del país (Gorender, 1998, pp. 51-52; Rollenberg, 2001; Ferreira y Gomes, 2014, pp. 129-133, 140). La acción de las izquierdas también contempló la infiltración política de las Fuerzas Armadas (Gorender, 1998, pp. 53-54), provocando la aparición de casos de grave indisciplina y motín armado –como la rebelión de sargentos y fusileros navales que estalló en Brasilia el 12 de agosto de 1962 (Ferreira y Gomes, 2014, pp. 179-186).

En el campo de la derecha conservadora, la conspiración en contra del gobierno empezó tan pronto como João Goulart fue investido presidente en septiembre de 1961. Temerosos de la deservoltura con que los grupos más radicales de izquierda se movilizaban y se articulaban, oficiales de las Fuerzas Armadas, líderes políticos y empresarios pasaron a organizarse para contrarrestar lo que percibían como un proceso de desestabilización política y una posible tentativa de toma de poder (Silva, 2014, pp. 157-237). La radicalidad de algunas de las reformas propuestas por el gobierno y la blandura del presidente para con actos de indisciplina y de insubordinación militar, como la rebelión de los marinos ocurrida en Río de Janeiro en 25 de marzo de 1964

(Capitani, 1997), resultaron en que Goulart perdiera el apoyo de la clase media y de la misma gran prensa que había apoyado enérgicamente su investidura en 1961 (Ferreira y Gomes, 2014). Aislado políticamente, João Goulart resultó derrocado por un alzamiento militar iniciado en la madrugada del 31 de marzo en el estado de Minas Gerais, con respaldo político del gobernador del Estado. La adhesión al alzamiento por parte de las tropas del II Ejército (São Paulo) y su movilización hacia Río de Janeiro, en convergencia con las tropas “mineiras”, hicieron que el presidente Goulart volara a Brasilia el 1 de abril y de ahí se trasladara con su familia a Porto Alegre, donde el diputado Leonel Brizola intentaba garantizar su mandato presidencial con el respaldo de las tropas riograndenses del III Ejército. Mientras tanto, en la madrugada del 2 de abril, en sesión extraordinaria, el Congreso declaró vacante el cargo de presidente de la República. Decidido a evitar el derramamiento de sangre, Goulart emigró al Uruguay, donde obtuvo asilo. El presidente de la Cámara de Diputados se hizo cargo del Poder Ejecutivo, pero ahora el poder estaba en manos de los militares (Fausto, 2013, p. 392). Se iniciaba así un ciclo de 21 años de gobiernos militares.

Estos gobiernos obtuvieron algunos éxitos iniciales en la estabilización política del país por la vía autoritaria. Las tres primeras administraciones – Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969) y Emílio Médici (1969-1974)– lograron paulatinamente la recuperación de la economía y el avance de la industrialización, y favorecieron la consolidación y la ampliación de la industria automovilística y de bienes durables. El proyecto de modernización adoptado por el régimen de 1964 abarcó una amplia modernización administrativa, económica y de infraestructura del país, en un modelo que fue descrito como un proceso de “modernización conservadora” (Perlatto, 2014, s/p).

En el plano normativo, el gobierno militar reestructuró el sistema financiero nacional con la creación del Consejo Monetario Nacional y del Banco Central (Brasil, 1964a). En el campo de la administración pública estableció una reforma administrativa que la modernizó y creó instituciones fundamentales para el funcionamiento del país, como la Policía Federal y un órgano de recaudación tributaria federal (Brasil, 1967a; Brasil, 1968a). El régimen militar también logró avances en el área social, en la construcción de infraestructura de transporte, telecomunicaciones y energía, en la ampliación

de la educación pública y en la fuerte expansión de la educación superior y de posgrado (Mota, 2014; Estadísticas, 1990)

Con un accionar tentativo y exploratorio en sus inicios en 1964, el régimen militar fue adquiriendo paulatinamente seguridad en su actuación sobre la economía y en su capacidad de generar desarrollo, no solo en el campo económico, sino también en el social. El gobierno de Castelo Branco (1964-1967) enfocó su política económica en el control de la inflación, pues entendía que retomar una trayectoria de desarrollo sustentable dependía del éxito de la reversión firme del proceso inflacionario (Macarini, 2000, p. 2). A fines de la década de 1960, el gobierno de Emílio Médici (1969-1974) lanzó la iniciativa de un “Proyecto Brasil Gran Potencia” (Plano é para 30 Anos, 1969, p. 1), que se proponía doblar la renta per cápita brasileña en diez años y elevar a Brasil a la categoría de las naciones desarrolladas en el lapso de una generación, es decir, en el final del siglo XX (Brasil, 1971, pp. 14-15). El Proyecto Brasil Gran Potencia no era solo un furor megalómano de los generales que se habían hecho con el poder en abril de 1964. Como constató Luiz Alberto Moniz Bandeira (2003), “lo que Brasil siempre anheló, efectivamente, fue superar el ‘status’ de poder regional y alcanzar el nivel de gran potencia, de acuerdo con el destino que juzgaba manifiesto en sus dimensiones territoriales, demográficas, económicas y geopolíticas” (p. 410) (mi traducción).

Este proyecto de desarrollo tuvo sus cimientos en los estudios sobre planificación estratégica generados por la Escuela Superior de Guerra (ESG) desde la década de 1950 (Arruda, 1983, pp. 108-114), cuyos resultados comenzaron a ser implantados en el gobierno brasileño con la creación de un ministerio extraordinario de planificación en 1962. En febrero de 1967, mediante la reforma administrativa se creó definitivamente el Ministerio de Planificación y Coordinación General y el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Brasil, 1967a). Apoyado sobre esta estructura de planificación y contando con condiciones internacionales favorables, el gobierno de Médici fue capaz de generar el período de mayor crecimiento experimentado por la economía brasileña en su historia. En diez años –entre 1963 y 1973– el Producto Interno Bruto del País creció 110 % (Brasil, s. f., p. 23). Sin embargo, el proceso de desarrollo acelerado que fue conocido como el “milagro

brasileño” (Fausto, 2013, p. 413) perdió impulso a partir del primer *shock* del petróleo en 1973.

Paralelamente a los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo, el gobierno fue implacable con todas formas de oposición. Intervino en las confederaciones de obreros, destituyó a las direcciones de cientos de sindicatos, cerró la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y reprimió movimientos huelguistas contra las pérdidas de sueldos derivadas de la política antiinflacionaria adoptada. Publicado en octubre de 1965, el Acto Institucional N.º 2 (AI-2) puso fin a las elecciones directas para presidente de la República; extinguió los partidos políticos existentes; autorizó la casación de mandatos de parlamentarios y la suspensión de derechos políticos; facilitó la intervención federal en los estados federados; eliminó el fuero especial por prerrogativa de función; permitió al presidente de la República cerrar el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas de los estados y las Cámaras Municipales; e hizo más fácil el decreto de estado de sitio (Brasil, 1965a). En relación con los partidos políticos, el Acto Complementario Número 4, publicado un mes después, estableció reglas tan restrictivas para la formación de nuevos partidos que, en la práctica, impuso al país un sistema bipartidario (Brasil, 1965b).

Aunque al principio el régimen militar se moderó en el uso de la censura, poco a poco fue creando instrumentos de control de la prensa y de las actividades culturales y de entretenimiento. En febrero de 1967 publicó una nueva ley para “regular la libertad de manifestación de pensamiento y de información”. Conocida como Ley de Prensa, el nuevo instrumento legal restringía la libertad de expresión estableciendo penas y multas para “abusos en el ejercicio de la libertad de manifestación del pensamiento e información” (Brasil, 1967b, cap. III). Al año siguiente, la publicación del Acto Institucional Número 5 (AI-5) volvió implacable a la censura y facilitó las dimisiones del servicio público y las anulaciones de derechos políticos (Brasil, 1968b). En enero de 1970, con la publicación de un decreto-ley, el gobierno estableció la censura previa de diarios, revistas, libros, programas de radio y televisión, diversiones y espectáculos públicos (Brasil, 1970).

A pesar del endurecimiento del régimen, la reacción de la oposición se hizo evidente a partir de 1968, en la forma de manifestaciones públicas gigantescas y huelgas. Las acciones violentas de los grupos revolucionarios

habían comenzado en marzo de 1965, con una tentativa fracasada de alzamiento popular a partir de un pequeño grupo armado que invadió el sur del país, partiendo del Uruguay (Gorender, 1998, pp. 134-135). En 1966, una serie de atentados con bombas en Recife agregó el componente terrorista a las tácticas de los grupos revolucionarios armados (Maciel y Nascimento, 2012, pp. 41-43). A partir de aquel año, y particularmente desde 1968, se intensificaron las acciones de grupos revolucionarios armados, e incluyeron ataques con bombas, robos a bancos, secuestros de diplomáticos y asesinatos de empresarios y militares (Gorender, 1998). Entre 1966 y 1968 se calcula que los grupos revolucionarios armados habrían ejecutado por lo menos 50 acciones armadas, entre atentados personales, explosiones de bombas, asaltos a bancos, tiendas de armas y depósitos de explosivos (Gaspari, 2002, pp. 306). La ola de violencia condujo a un cierre aún más severo del régimen, con la edición, en diciembre de 1968, del Acto Institucional Número 5 (AI-5), cuyos poderes excepcionales atribuidos al presidente de la República le daban al gobierno el carácter de una dictadura (Brasil, 1968c).

Para enfrentar la lucha armada, a partir de 1967 el régimen instaló un amplio aparato represivo basado en los órganos de inteligencia militar y con ramificaciones en organismos públicos, universidades y en las grandes empresas privadas. Antes de ello, la represión a la oposición al régimen militar había estado a cargo de las instituciones policiales de los estados, como era la práctica consagrada en Brasil desde los años 1920. En el inicio de la década de 1960, el Estado brasileño estaba completamente incapacitado para enfrentar una insurrección armada. No había una policía federal con jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y de las tres Fuerzas Armadas, únicamente la Marina disponía de un Centro de Informaciones<sup>29</sup>. En junio de 1964 fue creado el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), pero su función era más bien la de órgano asesor del presidente de la República, no de represión y seguridad (Brasil, 1964b). En mayo de 1967, el Ejército creó su Centro de Informaciones (Brasil, 1967d); en el siguiente mes de julio fueron

---

<sup>29</sup> En las décadas de 1960 a 1980, las Fuerzas Armadas brasileñas utilizaban la expresión “Información” para lo que hoy es conocido como “Inteligencia”, es decir, la rama de la actividad de defensa responsable de la producción de conocimientos relativos a hechos y situaciones actuales o potenciales que afecten el proceso decisorio (Ministério da Defesa, 2015, p. 149). Ver también Arruda, 1983, pp. 100-101.

creadas divisiones de Seguridad e Informaciones en los ministerios civiles, con la misión de colaborar con la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional y con el SNI (Brasil, 1967c; Godoy, 2014; Mota, 2014, p. 194).

Un aspecto relevante para esta investigación es la baja participación de la estructura operativa del Ejército en la represión a la izquierda armada. Nunca hubo en Brasil, durante el período de la lucha armada, una guerra insurreccional que demandase el empleo generalizado de unidades regulares del Ejército en combate contra los grupos revolucionarios armados. En las pocas veces en que hubo tal empleo –como en el Valle del Ribeira (estado de San Paulo) y en el Araguaia–, los resultados fueron ineficaces (Maciel y Nascimento, 2012, pp. 547-555; 739-740). La lucha antisubversiva en Brasil entre las décadas de 1960 y 1970 fue conducida básicamente por los órganos de inteligencia de los niveles de comando más elevados del Ejército: el Centro de Informaciones del Ejército (CIE), y los Centros de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de los grandes comandos militares existentes en aquel entonces (Maciel y Nascimento, 2012, pp. 462, 473)<sup>30</sup>. En la estructura de cada CODI, las actividades de recolección y análisis de informaciones y de combate a los grupos armados quedaba a cargo de su Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI), sobre el que caía el peso de la represión (Maciel y Nascimento, 2012, p. 475).

Dada la naturaleza interagencias de los CODI, el personal de los DOI estaba constituido mayormente por agentes de las policías civiles y militares de los estados federados, mientras que los cargos de comando y de jefes de equipos quedaban en oficiales del Ejército. Examinando el caso del DOI-CODI del II Ejército, con sede en San Paulo, el periodista Marcelo Godoy encontró que 70 % del efectivo de aquella organización estaba compuesto por policías militares del estado de San Paulo, que representaban “la columna vertebral del órgano”. De un efectivo de unos 250 hombres (y algunas mujeres), el Ejército ofrecía apenas 40 militares (Godoy, 2014, p. 133). Según la estimación

---

<sup>30</sup> En el período cubierto por esta investigación, el Ejército Brasileño estaba organizado en seis grandes comandos de área: cuatro Ejércitos –con sedes en Porto Alegre, San Paulo, Río de Janeiro y Recife– y dos Comandos Militares de Área –con sedes en Brasilia y Belém (después en Manaus)–. En un nivel organizacional, bajo los cuatro Ejércitos y dos Comandos Militares de Área, el Ejército Brasileño contaba con 12 regiones militares, que tenían encargos administrativos y territoriales (Brasil, 1956a; Brasil, 1956b; Brasil, 1960).

de un miembro del aparato represivo, apenas 500 militares del Ejército, entre oficiales y suboficiales, tomaron parte de la lucha contrasubversiva, de un total de 150 000 hombres que conformaban la Fuerza de Tierra en la época (Ustra, 2006, p. 282). Por esta razón, las unidades operativas del Ejército tuvieron poca o ninguna participación en la lucha contra la izquierda armada durante los gobiernos militares, lo cual le ahorró a su personal las consecuencias deletéreas de una guerra que, muchas veces, fue librada sin respetar límites legales y las costumbres de la guerra. El alejamiento entre el grueso del Ejército y las fuerzas encargadas de la represión a la lucha armada permitió a la Fuerza de Tierra mantener el foco de sus unidades en la doctrina de guerra convencional y en las misiones tradicionales de la institución

### Tensiones militares en el entorno brasileño

A lo largo de los años 60, el Estado brasileño tuvo una baja percepción de amenazas en su entorno. Al inicio de la década, un estudio realizado por un oficial del Estado Mayor del Ejército –Anexo (Secreto) al documento *Subsídios Para a Formulação das Bases de uma Doutrina do Exército*– evalúa que una guerra localizada contra la Argentina o, como era más probable, contra una coalición de aquel país con Uruguay y Paraguay, era una hipótesis remota, considerando las condiciones políticas, económicas, psicosociales y militares de aquellos países (Lima, 1962, p. 1). A pesar de la clasificación sigilosa del documento, la idea de que una guerra continental era remota ya era pública en la década de 1960, como lo demuestra un artículo publicado en la revista *A Defesa Nacional* en su edición de julio-agosto de 1967 (Reis, 1967, p. 77). La baja percepción de amenaza interestatal en Sudamérica tampoco era nueva. En 1957, el general de brigada Humberto de Alencar Castelo Branco ya alertaba sobre la necesidad de una reevaluación del poder militar argentino, pues a su criterio, se seguía atribuyendo a las Fuerzas Armadas del país vecino “un aparato material exagerado, una estrategia vigorosa sin que se sepa por qué, hasta después del justicialismo y de la corrupción del gobierno [de] Perón” (Castelo Branco, 1957, p. 25).

En el comienzo de la década de 1970, sin embargo, las relaciones de Brasil con la Argentina se pusieron tensas. Los resultados positivos de la economía brasileña y la estabilidad brindada por un claro proyecto de desarrollo contrastaban con el estancamiento de la economía argentina y la



desindustrialización provocada por los equívocos de la política económica adoptada por los gobiernos militares instalados con el golpe de 1966. El agravamiento de la crisis económica llevó a la Argentina a una serie de sublevaciones obreras y al inicio de acciones de guerrilla urbana y rural por parte de grupos de izquierda radical. El gobierno argentino se daba cuenta de que había un desequilibrio de poder cada vez más marcado en favor de Brasil, y pasó a asumir una postura defensiva en la relación con su vecino nortero (Bandeira, 2003, pp. 413-414). El apoyo ofrecido por los Estados Unidos al régimen militar brasileño desde su instalación en 1964, su carácter claramente anticomunista, y la apertura a las inversiones extranjeras indujeron al gobierno argentino a percibir a Brasil como un “satélite privilegiado” de los Estados Unidos. Este cuadro de sospechas era agravado por declaraciones como la del presidente Richard Nixon en 1971, cuando dijo que “adonde fuese Brasil, seguiría el resto del continente latinoamericano” (citado en Bandeira, 2003, p. 418). De la visión de sus fragilidades ante los éxitos económicos y políticos brasileños, surgía una “teoría del subimperialismo” brasileño y la resistencia argentina a aceptar el rol de “satélite del satélite” (Bandeira, 2003, pp. 410-411).

La iniciativa brasileña de construcción de una usina hidroeléctrica en el río Paraná, abajo de los Saltos del Guairá (Siete Caídas) y en condominio con Paraguay, provocó protestas del gobierno argentino, que alegó que la cota del embalse proyectado haría inviable un proyecto semejante argentino-paraguayo previsto para ser construido más abajo, cerca de la ciudad de Corpus, en la provincia de Misiones. La disputa sobre las hidroeléctricas se arrastró hasta 1979 e invadió el campo de la seguridad nacional, pues Argentina veía a la represa de Itaipú como una amenaza a su soberanía. Según este punto de vista, el proyecto brasileño-paraguayo era parte de una maniobra brasileña para perjudicar la capacidad argentina de usar su potencial hidroeléctrico y para aislar a la Argentina en el Cono Sur, de acuerdo con un proyecto geopolítico propuesto por Golbery do Couto e Silva. La cuestión fue resuelta finalmente por la vía diplomática, con la firma del Tratado Brasil-Argentina-Paraguay en octubre de 1979 (Ministros Assinam, 1979), pero tensionó las relaciones brasileño-argentinas durante la década de 1970.

La principal preocupación del gobierno militar brasileño en el campo de la seguridad y la defensa en las décadas de 1960 y 1970 era la posibilidad de una

revolución comunista en el país. Desde la victoria de la Revolución Cubana en 1959 y tomando en cuenta el discurso cubano de exportación de la revolución (Guevara, 2001), las Fuerzas Armadas brasileñas estaban alertas ante la amenaza que se podría configurar en el territorio nacional. En los primeros años 60, la revista *A Defesa Nacional* publicó decenas de artículos sobre guerras revolucionarias e insurreccionales, guerras de guerrilla, movimiento comunista internacional y su amenaza a los países de Latinoamérica<sup>31</sup>.

De la lectura de los artículos publicados en las revistas *A Defesa Nacional* y *Revista Militar Brasileira* a lo largo de la década de 1960, se desprende que la oficialidad del Ejército tenía presente que la institución debía prepararse para enfrentar insurrecciones de inspiración comunista, pero que esta preparación no debía desfigurar a la Fuerza, reduciendo su aptitud para enfrentar fuerzas armadas regulares. En general, esos artículos trataban sobre la naturaleza de la guerra revolucionaria o insurreccional<sup>32</sup>, sus características, y proponían formas de preparación para enfrentarla en el campo político, psicosocial y militar, incluyendo aspectos doctrinarios. Sin embargo, las formulaciones doctrinarias para la guerra contrarrevolucionaria se limitaban a procesos de empleo de las fuerzas militares y de su preparación, pero no presentaban propuestas de cambios doctrinarios radicales que resultaran en la reestructuración de las fuerzas o cambios en la organización de las unidades regulares. En un escrito publicado en la *Revista Militar Brasileira* en el primer semestre de 1963, el teniente coronel Ferdinando de Carvalho (1963, pp. 94-95) destacó los riesgos de la infiltración ideológica en el Ejército y de la debilitación de los valores profesionales fundamentales para la preservación de la fuerza militar. Pero fue explícito en cuanto a los riesgos de que la amenaza de la guerra insurreccional pudiera causar degradación doctrinaria, e indujera al Ejército a abandonar sus técnicas convencionales y su aparato clásico para tornarse

---

<sup>31</sup> Solo en la primera mitad de la década de 1960, la revista *A Defesa Nacional* publicó por lo menos 58 artículos sobre estos temas. Otros artículos editados en el mismo período también trataban la cuestión de las insurrecciones y de la guerra revolucionaria de forma lateral.

<sup>32</sup> Uso de manera indistinta las expresiones guerra insurreccional y guerra revolucionaria. Aunque se pueda identificar una clara motivación ideológica en la guerra revolucionaria, en ambos casos se trata de formas de guerra conducidas por fuerzas irregulares contra fuerzas regulares estatales.

una fuerza de guerrillas, apta para el combate de forma descentralizada. Y alertaba: “Un ejército profesional debe aprender a combatir las guerrillas, pero no se puede desorganizar para combatir como guerrillas” (Carvalho, 1963, p. 95). Está implícita en este argumento la idea de que hay una escala de complejidad militar entre las guerras convencionales y las insurreccionales: las primeras estarían entre las que demandan capacidades más complejas en lo que es la organización, sistemas de armas, comando y control, logística y movilidad; y las segundas, entre las militarmente menos intrincadas, a pesar de su eventual complejidad política. Como corolario de esta idea, se concluye que fuerzas armadas capacitadas para conducir operaciones contra fuerzas regulares son más idóneas para adaptarse al combate de fuerzas irregulares que, por naturaleza, son frágiles. Al revés, fuerzas armadas que abandonen sus capacidades militares convencionales para dedicarse fundamentalmente a la contrainsurrección tendrían enorme dificultad para contrarrestar la amenaza de una fuerza regular. Cualquier involucramiento de las fuerzas armadas en una guerra contrainsurreccional debería, pues, preservar sus capacidades para enfrentar conflictos más complejos contra fuerzas regulares.

### Percepción de las capacidades militares adversas

Así como no existía una clara percepción de amenazas militares a Brasil en el inicio de la década de 1960, tampoco había, en el ámbito del Ejército, la preocupación por las capacidades militares de los agentes de las posibles amenazas. Ninguno de los artículos publicados en las revistas militares del período menciona las capacidades de las fuerzas armadas de países vecinos. Aunque hubiese existido una gran preocupación de la oficialidad del Ejército ante la posibilidad de la irrupción de movimientos insurgentes de inspiración comunista durante el período, la percepción de esas amenazas aparece como remota y abstracta, y no caracterizada en términos de la identificación de dos grupos hostiles y sus capacidades militares.

Los informes del Estado Mayor del Ejército (EME) en los primeros años 60 tratan de temas básicamente volcados a la administración y la organización de la Fuerza de Tierra, la educación de los cuadros y la instrucción de la tropa<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Fueron examinados los Informes Sucintos referentes a los años de 1962, 1963 y 1964, presentados por el jefe del EME al ministro de Guerra (Ministério da Guerra, 1962; Ministério da Guerra,

Aunque presentan la situación de la cartografía del territorio nacional, incluyendo las fronteras, el estado de los estudios para la reestructuración de las fuerzas de tierra y la realización de cursillos sobre guerra revolucionaria, no incorporan una preocupación referente a posibles y claras amenazas externas o internas.

## Percepción de las capacidades militares propias

En el inicio de la década de 1960 era evidente en la oficialidad del Ejército Brasileño la percepción de la debilidad militar propia, incompatible con la estatura político-estratégica del país y con sus aspiraciones de liderazgo regional (Mattos, 1965, p. 19). Los militares sabían de las limitaciones de la industria nacional para proveer armamentos y equipos sofisticados a la tropa, pero se daban cuenta de que el país se modernizaba y consolidaba un parque industrial capaz de producir bienes durables, como automóviles y equipos electrónicos. Esta perspectiva permitiría aumentar de manera progresiva, la nacionalización de los equipos empleados por las unidades militares, garantizando la autonomía y la independencia de importaciones y de posibles embargos y restricciones que resultaran de la política internacional.

Sin embargo, el Ejército estaba dotado de una estructura militar arcaica e inadecuada para las necesidades y condiciones brasileñas. El esfuerzo de adaptación a la doctrina militar estadounidense había traído alguna modernización a la institución tras la Segunda Guerra Mundial, pero la simple copia y traducción de manuales de una fuerza armada de elevada capacidad operacional no significaba verdadera innovación doctrinaria. Se adoptaban organización, equipos, métodos y manuales estadounidenses en una verdadera “furia copiadora” (Menezes, 1966, p. 132). Esto se hacía porque copiar era más fácil que crear o adaptar; porque era relativamente fácil conseguir equipos estadounidenses a raíz del Acuerdo de Asistencia Militar firmado entre ambos países en 1952 (Brasil y Estados Unidos de América, 1952) y porque se visualizaba la posibilidad de empleo de una fuerza expedicionaria brasileña en un teatro de operaciones extracontinental, en atención a compromisos internacionales (Menezes, 1966, pp. 133-134). Pero no se tomaban en cuenta los factores políticos, geográficos, militares y materiales de Brasil, ni tampoco la mentalidad del pueblo brasileño, como subrayó el general Castelo Branco en una conferencia impartida en la ESG en 1957 (Castello Branco, 1957, p. 7).

La doctrina estadounidense había sido concebida por una superpotencia con intereses globales, y su destino era enfrentar amenazas de carácter global, específicamente una guerra de grandes proporciones en el teatro de operaciones europeo contra masivos ejércitos soviéticos y de sus aliados del Pacto de Varsovia. Los medios militares a disposición de sus unidades eran abundantes y resultado de los últimos desarrollos tecnológicos. Los costos exorbitantes de esos equipos los hacían prohibitivos hasta para ejércitos de potencias europeas. Además de económicamente inalcanzables, esos equipos no eran necesarios para las reales necesidades brasileñas.

La simple adopción de manuales, reglamentos y tablas de organización y equipo (TOE) estadounidenses también tenía un carácter degradante para los militares brasileños, que confrontaban la pobre realidad material de sus unidades con lo que estaba contemplado por la doctrina adoptada formalmente. La situación paradójica llegaba a las escuelas militares, que enseñaban la doctrina estadounidense casi que de manera integral, llegando a estudiar el empleo de unidades que no existían en su Ejército (Meyer, 1964, p. 20).

La realidad del Ejército Brasileño era más bien otra. La motorización aún era muy limitada. Gran número de sus unidades no disponía de vehículos para el transporte de personal, y contaba con escasos vehículos motorizados para el traslado de equipos. Las unidades de infantería debían moverse a pie en el área de operaciones; de un total de 27 regimientos de caballería, 17 eran unidades montadas y apenas siete regimientos estaban equipados con vehículos blindados, además de tres regimientos motorizados; es decir, no pasaban de unidades de infantería transportadas en camiones (Junqueira, 1967, p. 57).

Los equipos eran casi todos importados, lo que implicaba gran dependencia para la obtención de repuestos y para la realización de un mantenimiento más profundo y sofisticado. Al inicio del decenio de 1960, todos los vehículos blindados y todas los radios militares en uso en el Ejército Brasileño eran estadounidenses (Bastos, 2011)<sup>34</sup>. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, el

---

<sup>34</sup> Las informaciones sobre los equipos de comunicaciones en uso en el Ejército Brasileño en las décadas de 1950 y 1960 fueron prestadas por Paulo Kasseb, especialista y coleccionista de equipos antiguos de comunicaciones militares.

material de artillería de origen europeo fue poco a poco sustituido por otro de origen estadounidense.

La organización del Ejército era divisionaria, es decir, sus grandes unidades<sup>35</sup> de combate eran divisiones de Infantería y de Caballería, una División Blindada y una División Aeroterrestre<sup>36</sup>. Cada división de infantería y la aeroterrestre debían estar compuestas por tres regimientos de infantería, cada uno de ellos con tres batallones; además, debían ser apoyadas por cuatro grupos de artillería de campaña y uno de artillería antiaérea. La división blindada contaría con batallones de infantería blindados y de tanques medios y pesados, apoyados por grupos de artillería blindados y uno de artillería antiaérea autopulsado. Las divisiones de caballería eran una mezcla de regimientos montados con otros mecanizados y motorizados.

Pero esa organización era más bien teórica. En el mundo real, las divisiones estaban incompletas, y compuestas por unidades en idéntica situación y mal equipadas. La mayoría de los regimientos de infantería tenían apenas uno o dos batallones, también incompletos. La División Blindada no contaba con unidades de tanques pesados, ni de artillería blindada, ni de cañones antiaéreos autopulsados. La División Aeroterrestre no pasaba de un núcleo, y nunca tuvo más que un batallón de Infantería Aeroterrestre, un grupo de Artillería, una compañía de Ingenieros y un pelotón de Comunicaciones (Histórico [s. f.]; Araújo, 1969).

La organización doctrinal de las divisiones de caballería era disfuncional, pues mezclaba, bajo un mismo comando operativo, unidades cuyas velocidades de movimiento eran absolutamente incompatibles. Los regimientos mecanizados y motorizados podían desplazarse hasta 300 km por día en carretera, mientras que la etapa diaria de marcha por carretera de los

---

<sup>35</sup> En el lenguaje militar brasileño, “grandes unidades” son formaciones militares con capacidad para la actuación operacional independiente básica, y que comprende una combinación de unidades de diversas armas y servicios. En la doctrina del Ejército Brasileño del inicio de la década de 1960, la gran unidad básica era la división. La División de Infantería de modelo estadounidense de los años 60 tenía un efectivo teórico de 15 000 a 18 000 hombres.

<sup>36</sup> La expresión “aeroterrestre” indica la actividad, operación u organización relacionada con el movimiento aéreo de una fuerza (particularmente paracaidista) y su introducción por lanzamiento o aterrizaje en una determinada área para ejecución de una misión táctica o estratégica con objetivo profundo en tierra.

regimientos montados era de apenas 40 km. Las capacidades de movimiento a campo través también eran incongruentes: los regimientos montados podían moverse a través de prácticamente cualquier terreno, mientras los mecanizados sufrían serias restricciones debidas a los obstáculos del terreno y las condiciones meteorológicas. Por su parte, los regimientos motorizados tenían su movimiento circunscripto a las carreteras. Al estar compuesta por unidades tan heterogéneas, era muy difícil emplear en combate a la división de caballería (Pozzobom, 1968).

El Ejército también se resentía por prácticas administrativas arcaicas adoptadas por la institución y por sus unidades, que incluían el funcionamiento de granjas y almacenes bajo la administración de estas últimas. Esos establecimientos agrícolas y comerciales eran considerados necesarios para generar recursos financieros destinados a la vida vegetativa de las unidades, pero las distraían de sus actividades profesionales de preparación para el empleo militar (Lima, 1962, 2.<sup>a</sup> Parte). También era frecuente el involucramiento de oficiales en actividades políticas, inclusive ejerciendo cargos electivos o nombrados en el gobierno federal o en los estados y municipios, después de los cuales podían volver al Ejército sin ningún desabono para sus carreras, aunque en perjuicio de los intereses de la institución (Villa, 2014, p. 81).

Al inicio de la década de 1960, la oficialidad del Ejército se daba cuenta de la inadecuada organización de las fuerzas de tierra y de la necesidad de acompañar el desarrollo económico y tecnológico del país. Esta percepción era evidente en artículos publicados en las principales revistas militares brasileñas. Existía la sensación de que las Fuerzas Armadas brasileñas vivían uno de sus momentos más aflictivos (Vidal, 1960, p. 148), y de que todos sentían la “desesperada sed por una reorganización” (Amêndola, 1960, p. 136). La sección “Doutrina Militar Brasileira” de la revista *A Defesa Nacional* clamaba por “una verdadera cruzada de Redención Institucional” (Raposo Filho in Amêndola, 1960, p. 137). En gran medida, esta sensación de urgencia resultaba de la percepción de que la organización y la doctrina del Ejército estaban obsoletas, y que la adopción de la doctrina militar estadounidense ya no respondía a sus necesidades (Mattos, 1960, p. 92). También había en el Ejército la confianza de que Brasil “[rompía] las amarras del subdesarrollo y [enfrentaba] la industrialización, que sólo las potencias mundiales [podían]

experimentar” (Vidal, 1960, p. 148), lo que permitiría al país un nivel de capacitación militar impensable algunas décadas antes.

En mayo de 1960, *A Defesa Nacional* ofreció a sus lectores dos artículos de oficiales superiores aún jóvenes y que desarrollaban importante actividad intelectual. Ambos artículos trataban sobre la reorganización del Ejército. El autor del primero era el mayor Amerino Raposo Filho, que en la época se desempeñaba como redactor de la sección “Doutrina Militar Brasileira”, concebida “con vistas al establecimiento de las bases filosóficas-estructurales de una auténtica doctrina militar brasileña” (Raposo Filho, 1960, p. 77). Su artículo sintetizaba más de un año de debates en las páginas de aquella revista en torno al desarrollo de una doctrina militar autóctona, y presentaba algunas ideas referidas a una nueva organización para la fuerza de tierra, resumidas en una serie de preocupaciones relativas a:

- ¿Cómo reorganizar nuestras Grandes Unidades y Unidades Operativas, teniendo en vista la Coyuntura Nacional (...)?
- ¿Cómo conciliar las necesidades de la Guerra Moderna, en sus dos formas igualmente relevantes [guerra regular y guerra revolucionaria], y las posibilidades de la Ciencia, de la Técnica y de la Industria Nacionales, cada vez más expresivas (...)?
- ¿No deberían nuestras Organizaciones presentarse leves, altamente móviles y de efectivos reducidos, dadas las características interiores de cada uno de los TO?
- ¿Cómo preparar las Grandes Unidades y las Unidades de las Fuerzas de Tierra para el completo cumplimiento de las Misiones Constitucionales de las Fuerzas Armadas (...)? (Raposo Filho, 1960, p. 80).

El título del segundo artículo de esa edición, de autoría del teniente coronel Carlos de Meira Mattos, consideraba a la reorganización del Ejército como un “imperativo”. En una nota introductoria al mismo, escrita en su condición de redactor de la sección, el mayor Amerino se refería a la “imperiosa urgencia de reestructurar las Fuerzas de Tierra” (citado en Mattos, 1960, p. 91). Meira Mattos empezó su argumentación afirmando que “nuestro Ejército, como instrumento de guerra, está ultrapasado” (Mattos, 1960, p. 92). Tras hacer consideraciones sobre las incoherencias y el conjunto desordenado



de problemas fundamentales de la institución, Meira Mattos afirmó que la solución a estos problemas no se debía alejar de las realidades psicosociales, geográficas, económicas y financieras de Brasil, y propuso una reorganización del Ejército que lo transformaría en el embrión de un instrumento de guerra moderno, al día con las corrientes de pensamiento que vitalizaban las instituciones militares más avanzadas del mundo (Mattos, 1960, pp. 92-93). Este punto de su argumentación estaba muy de acuerdo con las expectativas de desarrollo del país y de su creciente rol como potencia regional. El autor presentó, a continuación, algunas recomendaciones: la capacidad del Ejército para soportar una agresión con armas nucleares (la guerra atómica era un tema presente en casi todas las ediciones de *A Defesa Nacional* en el período); la preparación para enfrentarse a una guerra revolucionaria o insurreccional; el uso de misiles como la artillería del futuro, tal vez sustituyendo a los cañones; y la adopción de un orden de batalla<sup>37</sup> de tiempo de paz que facilitase la acción de mando, el entrenamiento de la tropa y el espíritu de cuerpo de las grandes unidades. Meira Mattos cerró su artículo con una apelación a "misionarios" para la "gran y ardua cruzada profesional" de revitalización y robustecimiento del Ejército (Mattos, 1960, pp. 93-94).

En noviembre de 1960, como consecuencia del intenso debate desarrollado en las páginas de *A Defesa Nacional*, el mayor Alexandre Amêndola publicó una propuesta concreta de nueva organización de las grandes unidades del Ejército Brasileño (Amêndola, 1960). Tomando en cuenta todos los puntos de vista presentados hasta aquel momento por los diversos autores publicados en la sección "Doutrina Militar Brasileira" del medio, Amêndola sintetizó algunas condiciones para una reorganización del Ejército: la nueva organización de la Fuerza debería ser relativamente potente; simple en extremo, para encuadrarse en las posibilidades de la industria nacional y del soldado brasileño; y altamente móvil, para compensar su simplicidad, su relativa potencia y las reducidas dimensiones del Ejército Brasileño. A continuación presentó una propuesta de nueva organización para las divisiones de Infantería y de Caballería, dándole a la primera casi la mitad de los efectivos previstos en la organización doctrinaria vigente (Amêndola, 1960, pp. 140-144).

---

<sup>37</sup> Articulación de unidades en el terreno, de acuerdo a una concepción de empleo táctico o estratégico.

En abril de 1961, *A Defesa Nacional* trajo un nuevo artículo del mayor Alexandre Amêndola, en el que el autor insistía sobre la necesidad de una nueva organización para el Ejército. Y lo hacía como vocero de “unos sesenta o setenta compañeros con quienes hemos conversado”, refiriéndose a discusiones en los estados mayores, a los debates en las aulas y en las conferencias en las escuelas militares, pero también a los “anhelos de la Tropa” (Amêndola, 1961, p. 52). La propuesta de Amêndola puede ser resumida en lo siguiente: reorganizar las grandes unidades (en la época, las divisiones) con nuevos tipos, que fuesen más pequeñas; que tuviesen sus cuadros completos (oficiales y suboficiales); que utilizasen los cuarteles ya existentes (para evitar gastos en la construcción de nuevos cuarteles); que absorbiesen el armamento ya existente; que utilizasen equipos simples, de bajo costo y ligeros (para facilitar el desplazamiento por las precarias carreteras brasileñas y por vía aérea); y por último, que fuesen motorizadas al máximo, sacando ventaja de la naciente industria de vehículos automotores (Amêndola, 1961, p. 53).

La idea de que la necesidad de cambio era consensual en el Ejército aparece un año después en un artículo del teniente coronel Leonidas Pires Gonçalves<sup>38</sup>. Allí, el autor proponía el establecimiento de un programa de reformas para el Ejército, a fin de superar “el desánimo, la descreencia, la falta de estímulo (...) que campea [sic] en nuestro Ejército”, cuyo resultado era la “creciente evasión, en el cuadro de oficiales”. Evaluaba que el abandono de la carrera por parte de oficiales todavía jóvenes no era consecuencia de la atracción que ejercían las posibilidades materiales de la vida civil, sino “de las decepciones, de las inevitables desilusiones profesionales (agravadas por las notorias y sistemáticas dificultades financieras)” (Gonçalves, 1962, pp. 17-18). En su entendimiento, esta frustración profesional resultaba de la “multidimensional desactualización en que se encuentra nuestro Ejército”. Al igual que en artículos citados con anterioridad, ponderaba que la capacidad tecnológica brasileña ya podría asegurar un apoyo razonable a las demandas del Ejército, “una vez que evoluciona a pasos gigantescos” (Gonçalves, 1962, p. 20).

---

<sup>38</sup> Un cuarto de siglo más tarde, el general Leonidas sería ministro del Ejército en el primer gobierno tras la redemocratización de Brasil, cuando dirigió un gran esfuerzo de modernización del Ejército, conocido como Proyecto Fuerza de Tierra 90 (FT-90).

En síntesis, en el inicio de la década de 1960 había en el Ejército Brasileño una clara percepción de que las capacidades militares de la Fuerza no estaban a la altura de un país que crecía, se desarrollaba y aspiraba a una posición de prestigio, no solo en el escenario regional, sino también en el global. La simple adopción de la doctrina militar estadounidense también parecía impropia e incómoda a la parte de la oficialidad que tenía voz, sea como instructores de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (Eceme), sea como articulistas de las revistas militares. La idea de que la reorganización del Ejército era un “imperativo” –como venía argumentando la sección “Doutrina Militar Brasileira” de *A Defesa Nacional* desde 1960– repercutía en las altas esferas de la institución, donde un documento interno de la Jefatura del EME del fin de 1963 calificaba la reorganización del Ejército Brasileño como “un imperativo indeclinable” (Reorganização do Exército, s. f., 1ra. pág. [no numerada])<sup>39</sup>.

Para estos oficiales, la realidad brasileña de defensa sufría algunos condicionantes: ambiente operacional de grandes espacios y pocas vías de transporte; limitada capacidad para mantener una fuerza de grandes efectivos en tiempo de paz; restringida capacidad presupuestaria para garantizar equipos sofisticados a las tropas; hipótesis de conflicto poco probables en el campo externo y de baja amenaza en el campo interno. Tomando en cuenta estos condicionantes, las soluciones propuestas indicaban la necesidad de mantener una fuerza de efectivos limitados, organizada en grandes unidades y unidades reducidas, ágiles y provistas con equipos producidos mayormente por el parque industrial brasileño, que ya demostraba ser capaz de atender las demandas del Ejército de equipos menos sofisticados, como vehículos de transporte, vehículos blindados y armamentos convencionales.

## Conclusiones

Al examinar las propuestas de cambios militares en Brasil durante el régimen militar se observa que las demandas por la modernización del Ejército fueron impulsadas principalmente en función del prestigio y la legitimidad

---

<sup>39</sup> Se trata de un bosquejo de documento parcialmente mecanografiado y en parte manuscrito, guardado por el mariscal Castelo Branco en su archivo personal. Archivo Castelo Branco, Biblioteca de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, Rio de Janeiro, Carpeta “J” Pensamento Civil e Militar.

de la institución. No fue posible identificar una clara percepción de amenaza externa que justificase motivaciones de carácter competitivo con relación a los vecinos. Sin embargo, había un sentimiento de urgencia por cambios entre la oficialidad, y este sentimiento era causado por la conciencia de lo arcaico de la fuerza de tierra, cuyas unidades carecían de transporte motorizado y equipos modernos. También era evidente para los oficiales del Ejército que Brasil pasaba por un proceso acelerado de desarrollo económico y social que resultaba en la modernización de sus instituciones, de la administración pública y de la infraestructura física del país. La oficialidad del Ejército veía con claridad que el parque industrial brasileño ya era capaz de suministrarles equipos militares básicos, como vehículos y armamento con bajo agregado tecnológico.

Ante este cuadro de optimismo, existía la percepción de que el Ejército de un país que anhelaba consolidar su liderazgo en el ámbito regional y alcanzar mayor relevancia en el global tenía que superar la copia doctrinaria y la pura importación de equipos militares. Por tanto, el impulso de modernización y reestructuración del Ejército Brasileño fue motivado en gran medida por el deseo de insertar a la institución en el proceso de modernización del Estado brasileño desarrollado durante los gobiernos militares.

## Referencias

Amêndola, A. M. (1960). Em Tôrno de uma Reorganização do Exército. *A Defesa Nacional*, 48(556), 135-145.

Amêndola, A. M. (1961). Como Deveriam Ser Nossas Grande Unidades. *A Defesa Nacional*. 48(561), 51-54.

Anderson, J.L. (2012). *Che Guevara: Uma Biografia*. Rio de Janeiro: Objetiva.

Arancibia, P. (2007). Chile-Perú: Una Década en Tensión 1970-1979. *La Segunda*. Recuperado de <https://razonyfuerza.mforos.com/549916/6765546-chile-peru-una-decada-en-tension-1970-1979/?pag=2>

Arruda, A. de (1983). *A Escola Superior de Guerra: História de sua Doutrina*. São Paulo: GRD; Brasília: INL.

Bandeira, L. A. M. (1998). *O Expansionismo Brasileiro e a Formação dos Estados da Bacia do Prata: Argentina, Uruguai e Paraguai – da colonização à Guerra da Tríplice Aliança*. Brasília: Universidade de Brasília.

Bandeira, L. A. M. (2003). *Brasil, Argentina e Estados Unidos: Conflito e Integração na América do Sul (Da Tríplice Aliança ao Mercosul 1870-2003)*. Rio

de Janeiro: Revan.

Bastos, E. C. S. (2011). *Blindados no Brasil: Um Longo e Árduo Aprendizado: 90 Anos de Desafios, 1921-2011. Dos Importados aos Nacionais* (vol. 1). Bauru, São Paulo: Taller Comunicações.

Brasil (1956a). *Lei N.º 2851, de 25 de Agosto de 1956. Dispõe sobre a Organização Básica do Exército*. Rio de Janeiro: Presidência da República.

Brasil (1956b). *Decreto N.º 40 179, de 27 de outubro de 1956. Cria o Comando Militar da Amazônia*. Rio de Janeiro: Presidência da República.

Brasil (1964a). Câmara dos Deputados. *Lei N.º 4595, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências*. Brasília.

Brasil (1964b). *Lei N.º 4341 em 13 de junho de 1964. Cria o Serviço Nacional de Informações*. Brasília: Câmara dos Deputados.

Brasil (1965a). *Ato Institucional N.º 2, de 27 de outubro de 1965. Mantem a Constituição Federal de 1946, as Constituições Estaduais e respectivas Emendas, com as alterações introduzidas pelo Poder Constituinte originário da Revolução de 31.03.1964, e dá outras providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1965b). *Ato Complementar N.º 4, de 20 de novembro de 1965. Dispõe sobre a criação, por membros do Congresso Nacional, de organizações que terão atribuições de partidos políticos, enquanto estes não se constituem, e dá outras providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1967a). *Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1967b). Câmara dos Deputados. *Lei N.º 5250, de 9 de fevereiro de 1967. Regula a liberdade de manifestação de pensamento e de informação*. Brasília: Câmara dos Deputados.

Brasil (1967c). *Decreto N.º 60 940, de 4 de julho de 1967. Transforma em Divisão de Segurança e Informações as atuais Seções de Segurança Nacional dos Ministérios Cíveis e dá outras providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1967d). *Decreto N.º 60 664, de 2 de maio de 1967. Criar o Centro de Informação do Exército e dá outras providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1968a). *Decreto N.º 63 659, de 20 de novembro de 1968. Define a estrutura e as atribuições da Secretária da Receita Federal e dá outras*

*providências*. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1968b). *Ato Institucional N.º 5*, de 13 de dezembro de 1968. Brasília: Presidência da República.

Brasil (1971). *I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) – 1972/74*. Rio de Janeiro: IBGE.

Brasil (s. f.). *II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979)*. Rio de Janeiro: IBGE.

Brasil y Estados Unidos de América (1952). *Acordo de Assistência Militar Entre a República dos Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da América*. Rio de Janeiro: Presidência da República.

Búlnes, G. (1911, 1914, 1919). *Guerra del Pacífico* (3 vols.) Valparaíso: Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

Capitani, A.B. (1997). *A Rebelião dos Marinheiros*. Porto Alegre: Artes e Ofícios.

Carvalho, F. de (1963). Bases da Evolução das Forças Armadas: Doutrina e Documentação. *Revista Militar Brasileira*, 75(1-2), 91-104.

Castelo Branco, H. de Alencar (1957). *A Doutrina Militar Brasileira*. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra. Archivo Castelo Branco, Biblioteca de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Caja F45/1 - F45/14.

Clarke, J. J. (1988). *Advice and Support: The Final Years, 1965-1973. United States Army in Vietnam*. Washington, D. C.: Center of Military History.

Exército Brasileiro (1963). *Reorganização do Exército*. Rio de Janeiro: Archivo Castelo Branco, Biblioteca de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Carpeta “J” Pensamento Civil e Militar.

Fausto, B. (2013). *História do Brasil*. São Paulo: EDUSP.

Ferreira, J. y Gomes, A. de Castro (2014). 1964: *O golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Figueiredo, A. C. (1993). *¿Democracia ou Reformas? Alternativas democráticas à crise política: 1961-1964*. São Paulo: Paz e Terra.

Gaspari, E. (2002). *A Ditadura Escancarada*. São Paulo: Companhia das Letras.

Godoy, M. (2014). *A Casa da Vovó: Uma biografia do DOI-CODI (1969-1991), o centro de sequestro, tortura e morte da ditadura militar*. São Paulo: Alameda.

Gonçalves, L. P. (1962). Urge um Programa Atualizado Para o Exército Brasileiro. *A Defesa Nacional*, 49 (574-575), 17-23.

Gorender, J. (1998). *Combate nas Trevas*. São Paulo: Ática.

Guevara, E. (2001). *Obras Escogidas 1957-1967*. La Habana: Ediciones Políticas.

Histórico (s. f.). *Página de la Brigada de Infantaria Pára-quedista*. Brasil Acima de Tudo! Recuperado de <http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/historico.html>. (Consulta: 7/1/2017).

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Estatísticas Históricas do Brasil. Séries Econômicas, Demográficas e Sociais, de 1550 a 1988* (1990) (vol. 3, Séries Estatísticas Retrospectivas). Rio de Janeiro: IBGE.

Junqueira, F. (1967). Unidades de Cavalaria do Exército Brasileiro (Resumo das suas Origens Históricas). *A Defesa Nacional*, 52(611), 55-75.

Lima, W. dos Santos (1962). *Subsídios Para a Formulação das Bases de uma Doutrina do Exército*. Archivo Castelo Branco, Biblioteca de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Caja F45/1 - F45/14.

Macarini, J. P. (2000). *A política econômica da ditadura militar no limiar do "milagre" brasileiro: 1967/69*. Campinas: IE/Unicamp.

Martins, L. C. dos Passos y Liebel, V. (2015). A Revolução Cubana e sua Recepções: Imprensa e Academia. *Revista Contemporânea*, 5(8), 1-24.

Mattos, C. de Meira (1960). O Imperativo da Reorganização do Exército. *A Defesa Nacional*, 47(550), 91-94.

Mattos, C. de Meira (1965). O Pensamento Revolucionário Brasileiro. *A Defesa Nacional*, 50(599), 11-19.

Menezes, M. J. S. de (1966). Doutrina Norte-Americana, Espirito Alemão e Tradição Brasileira. *Revista Militar Brasileira*, 52(2), 123-144.

Meyer, W. dos Santos (1964). Problemas do Exército: Algumas Reflexões. *A Defesa Nacional*, 50(597), 19-22.

Ministério da Defesa (2015). *MD35-G-01 – Glossário das Forças Armadas*. Brasília: Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

Ministério da Guerra (1962). Estado-Maior do Exército. *Relatório Sucinto Referente ao Ano de 1962. Apresentado ao Exmo. Sr. Ministro da Guerra. Reservado* (vol. CHEB 151 - Relatórios do EME 1962-64). Rio de Janeiro: Arquivo Histórico do Exército. Acervo da Comissão de História do Exército Brasileiro.

Ministério da Guerra (1962-1963). Estado-Maior do Exército. *Relatório Sucinto Referente ao Ano de 1963. Apresentado ao Exmo. Sr. Ministro da Guerra. Reservado* (vol. CHEB 151 - Relatórios do EME 1962-64). Rio de Janeiro: Arquivo

Histórico do Exército. Acervo da Comissão de História do Exército Brasileiro.

Ministério da Guerra (1964). Estado-Maior do Exército. *Relatório Sucinto Referente ao Ano de 1964. Apresentado ao Exmo. Sr. Ministro da Guerra* (vol. CHEB 151 - Relatórios do EME 1962-1964). Rio de Janeiro: Arquivo Histórico do Exército. Acervo da Comissão de História do Exército Brasileiro.

Mota, R.P.S. (2014). *As Universidades e o Regime Militar*. Rio de Janeiro: Zahar.

Maciel, L y Nascimento, J. C. do (2012). *ORVIL: Tentativas de Tomada do Poder*. São Paulo: Schoba.

Perlatto, F. (2014). Interpretando a Modernização Conservadora: A Imaginação Sociológica Brasileira em Tempos Difíceis. *Revista Estudos Políticos*, 5(2), 461-481.

Pozzobom, Z. (1968). Reorganização da Cavalaria Brasileira. *A Defesa Nacional*, 54(617), 81-102.

Raposo Filho, A. (1960). A Doutrina Militar Brasileira e a Reorganizado do Exército: Aspectos Que Urge Considerar. *A Defesa Nacional*, 47(550), 77-81.

Reis, E. de Oliveira (1967). A Artilharia Que Desejamos. *A Defesa Nacional*, 53(614), 77-81.

Rollemborg, D. (2001). *O apoio de Cuba à luta armada no Brasil: o treinamento guerrilheiro*. Rio de Janeiro: Mauad.

Silva, H. (2014). 1964: *Golpe ou Contragolpe?* Porto Alegre: L&PM.

Ustra, C. A. B, (2006). *A Verdade Sufocada: A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça*. Brasília: Editora Ser.

Vidal, G, S, (1960). Nossas Fôrças Armadas e a Nova Doutrina. *A Defesa Nacional*, 47(553), 147-150.

Villa, M. A. (2014). *Ditadura à Brasileira: 1964-1985: A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita*. São Paulo: LeYa.



# Conflicto de límites con Chile y operaciones militares de las Fuerzas Armadas argentinas en 1978. Experiencias de la artillería de campaña en el «Operativo Soberanía»

*Germán Soprano*

## Introducción

El Tratado de Límites establecido por la Argentina y Chile en 1881 no consiguió resolver los diferendos que estos países mantenían por la delimitación de sus fronteras. Desde entonces uno de los conflictos pendientes era aquel producido en torno a la definición de la soberanía sobre las islas australes Picton, Nueva y Lennox (localizadas en la desembocadura del canal de Beagle), el cual escaló hacia fines de 1978 a tal punto que desplegaron sus fuerzas armadas con el objeto de empeñar sus instrumentos militares como medio de resolución de dicho conflicto.

A lo largo del siglo XX también se había procurado dirimir esas disputas por la vía diplomática. El último frustrado intento se impulsó en 1970, cuando recurrieron al arbitraje del Reino Unido, una potencia con intereses geopolíticos en la región que disponía de un enclave colonial desde 1833 en las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur y reclamaba un sector en el continente antártico superpuesto con los de Argentina y Chile. No obstante, las tentativas diplomáticas parecieron agotarse cuando en 1977 el laudo arbitral británico otorgó a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox y dispuso una línea de demarcación en el canal de Beagle que aseguraba la navegación

y el acceso a sus puertos a los dos países. El gobierno chileno aceptó este resultado, pero el argentino lo rechazó. Fue entonces cuando las autoridades dictatoriales que ejercían el poder a ambos lados de la cordillera de los Andes desde 1973 y 1976, respectivamente, apreciaron que el recurso a la guerra era inminente. Las tensiones producidas desde fines del siglo XIX encontraron la oportunidad de desplegarse abiertamente sirviéndose del empleo efectivo del instrumento militar.

En septiembre de 1978 la crisis diplomática escalaba por el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile por la soberanía sobre el canal de Beagle y las islas Picton, Nueva y Lennox. El 16 de septiembre de ese año, tropas del Ejército Argentino que realizaban ejercicios de tiro –unos 200 hombres– pasaron el límite fronterizo, según trascendió en la prensa, “violando involuntariamente” el territorio chileno comprendido entre las localidades de El Turbio (Argentina) y Puerto Natales (Chile) a la altura de Casas Viejas, donde dieron con efectivos de Carabineros. Por aquellos hechos dos tenientes primeros argentinos –aparentemente pertenecientes a la Guarnición Río Gallegos– se excusaron por lo ocurrido. Pero el hecho fue considerado grave por las autoridades chilenas. Posiblemente antes de que esto sucediera (el propio evento pudo haber sido producido de manera intencional), el gobierno argentino había definido una estrategia destinada a invadir partes del territorio del vecino país –algunas de forma temporal y otras permanente– mediante la planificación de una enorme operación militar que, estimaban, forzaría al gobierno chileno a negociar desde una posición de debilidad en su favor en el conflicto por aquellos límites australes. Se trataba del denominado “Operativo Soberanía”.

Las ciencias sociales en la Argentina han destinado nula atención hasta el momento a los aspectos militares del conflicto argentino-chileno de fines de 1978. Tampoco es de conocimiento público si existe o no documentación oficial en las Fuerzas Armadas que pueda servirnos como fuentes de análisis para el conocimiento del tema. Es por esto que he optado por abordar la cuestión del siguiente modo. Primero, me referiré a las dimensiones diplomáticas del conflicto sirviéndome de la literatura académica que se ocupó del mismo. En segundo lugar presentaré, recurriendo a un estudio sobre el Plan Soberanía u Operativo Soberanía publicado por un oficial del Ejército de Chile en 2003, el teniente coronel Rubén Madrid Murúa, una descripción de lo que ese analista

consideraba que eran los objetivos político-militares de los argentinos. Asimismo, como complemento de dicho estudio, incorporaré información publicada por la revista argentina *Somos* el 8 de julio de 1983<sup>40</sup>. En tercer lugar, en el marco de la movilización de las Fuerzas Armadas argentinas, analizaré el desempeño del teniente coronel Martín Antonio Balza como jefe del Grupo de Artillería 102, al tiempo que daré cuenta –a partir de su testimonio e información de la prensa de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires– de la conformación de esta novel unidad y su actividad hasta su disolución. Por último, describiré cómo la prensa local –*La Verdad y Semanario*– registró las perspectivas y experiencias de la sociedad juninense acerca de ese conflicto en el que estuvieron involucrados ciudadanos de ese municipio y de otros de la región noroeste bonaerense, como soldados conscriptos del Grupo de Artillería 101 y del Comando de Artillería 101 –enviados a la provincia de Santa Cruz– y del mencionado Grupo de Artillería 102.

## Dimensión diplomática del conflicto

El Tratado de Límites firmado por la Argentina y Chile en 1881, que estableció el “principio bioceánico” por el cual la primera no podía aspirar a una proyección sobre el Pacífico ni el segundo sobre el Atlántico, no consiguió resolver de forma definitiva los diferendos que estos países mantenían por la delimitación de sus fronteras<sup>41</sup>. Tampoco lo consiguió el Protocolo Adicional de 1893 ni el Protocolo de 1896 por el cual las partes aceptaron el arbitraje del Reino Unido<sup>42</sup>. El conflicto escaló y tuvo su expresión en una carrera

---

<sup>40</sup> Agradezco a Cristian Di Renzo la referencia indispensable de estos dos textos.

<sup>41</sup> Si bien se suele tomar como referencia para el estudio de los antecedentes del conflicto argentino-chileno por el canal del Beagle al Tratado de 1881, es necesario no soslayar la importancia del Tratado de 1856 por el cual se acordó que la Argentina y Chile tendrían soberanía sobre los territorios que hasta 1810 habían sido jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata y de la Capitanía General de Chile, respectivamente, conforme al principio de derecho internacional conocido como *ius possidetis iuris* por entonces reivindicado por los Estados hispanoamericanos (Lacoste, 2003, p. 27 y ss.).

<sup>42</sup> De acuerdo con Lacoste: “El Tratado de 1881 había significado un avance importante pero dejaba todavía algunos puntos sin resolver ¿Por qué parte de la Cordillera pasaría el límite internacional? ¿Había que priorizar la línea de las más altas cumbres o la divisoria de aguas? Si se aplicaba el principio de las más altas cumbres en forma absoluta, como la Cordillera se va sumergiendo paulatinamente en el mar, la Argentina podría terminar con

armamentista por la cual ambos países llegaron a contar con flotas que estaban entre las más poderosas del mundo, al tiempo que las dimensiones de las tropas de sus ejércitos se incrementaron<sup>43</sup>. En ese conflicto, las autoridades chilenas recelaban de las alianzas que la Argentina tejía con sus dos vecinos-rivales del norte –Perú y Bolivia– a los que había derrotado militarmente durante la denominada Guerra del Pacífico (1879-1883); a la vez que los argentinos estaban atentos a la evolución de la rivalidad que, en simultáneo, mantenía con el Brasil por el espacio de la cuenca del Plata.

Las tensiones bilaterales del cambio de siglo se aliviaron finalmente por la vía diplomática. Primero con el histórico encuentro en Punta Arenas de los presidentes Julio Argentino Roca y Federico Errázuriz Echaurren –acompañados por las respectivas flotas de guerra– en el verano de 1899, que permitió resolver el conflicto de límites por la Puna de Atacama con la mediación de los Estados Unidos. Y luego mediante la firma de los acuerdos conocidos como los “Pactos de Mayo” de 1902, que supusieron el compromiso de Argentina de no involucrarse en conflictos en el Pacífico, la limitación

---

algunos puertos sobre el Pacífico; por el contrario, si se consideraba la divisoria de aguas, los valles intermontanos, incluyendo pueblos y ciudades argentinas, quedarían dentro de la jurisdicción de Chile. Para avanzar en las definiciones, se firmó el Protocolo Adicional de 1893, conforme al cual la frontera pasaría por la línea de las más altas cumbres que dividan aguas, sin que la Argentina pudiese pretender punto alguno en el Pacífico ni Chile en el Atlántico, al menos dentro del continente. Este acuerdo fue otro paso adelante. Pero la dilatada extensión de la frontera común, de 5302 km, se resistía a una delimitación clara y aceptable para todos. En efecto, al sur del paralelo 40°, la Cordillera pierde altura y en muchos casos no coincide con la divisoria de aguas. En algunas zonas, las más altas cumbres corren más de 100 km al oeste de la divisoria de aguas. En estos casos, la diplomacia argentina procuraba imponer el principio de las más altas cumbres, mientras que los negociadores chilenos reivindicaban la divisoria de aguas. En estas condiciones, parecía materialmente imposible alcanzar un acuerdo directo. A esto se sumó el diferendo por la Puna de Atacama, una reliquia de la Guerra del Pacífico que vino a entorpecer las relaciones entre la Argentina y Chile. Cuando Bolivia advirtió que las Fuerzas Armadas chilenas avanzaban inexorablemente hacia la victoria, realizó una operación diplomática para amortiguar el impacto de su derrota: le canjeó a la Argentina la Puna de Atacama por el territorio de Tarija que se encontraba en litigio entre ambos países (...) Chile aseguraba que el acuerdo entre la Argentina y Bolivia era nulo, dado que Bolivia no podía canjear un territorio que había perdido en una guerra” (Lacoste, 2003, pp. 328-329).

<sup>43</sup> Solo superadas entonces por las marinas de guerra del Reino Unido, Francia, Rusia (que la perdería en 1905 en la guerra con Japón), Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón (Lacoste, 2003, pp. 322-326).

de la carrera armamentista y la común voluntad de someter los diferendos limítrofes a arbitraje obligatorio e inapelable –el cual fue efectuado en esa oportunidad por el Reino Unido, que dio a conocer su fallo arbitral en noviembre de 1902–<sup>44</sup>. Ahora bien, a pesar de estas apuestas a favor de la diplomacia, el conflicto escaló en 1901 llegando a un punto de tensión tal que algunos protagonistas vaticinaron una guerra inminente.

A lo largo del siglo XX persistieron los litigios por límites territoriales entre Argentina y Chile, pero los sucesivos gobiernos a ambos lados de la cordillera de los Andes procuraron dirimirlos por la vía diplomática, hasta que se desencadenó la crisis del Beagle de 1977-1978<sup>45</sup>. En este sentido, Pablo Lacoste sostiene que los Pactos de Mayo de 1902 sustrajeron esas disputas de la agenda argentino-chilena e instalaron la de la cooperación hasta principios de la década de 1950, cuando el conflicto volvió a ceñirse sobre las

---

<sup>44</sup> Para los analistas argentinos Andrés Cisneros y Carlos Escudé (1998), de los Pactos de Mayo se desprende que las islas al sur del canal de Beagle y hasta el Cabo de Hornos pertenecían a Chile.

Al respecto es importante destacar, siguiendo a Pablo Lacoste, que las clases dirigentes argentina y chilena del siglo XIX consideraban a la cordillera de los Andes como el límite natural de sus respectivos países, de modo que el cambio de percepciones por el cual Chile se volvió un país expansionista y amenazante para los argentinos y Argentina uno que pretendía hacerse de territorios bajo soberanía chilena es el resultado de un proceso histórico del siglo XX que alcanzó mayor intensidad entre los años 1950-1980 por la influencia del nacionalismo y el militarismo. Pero incluso en este último siglo –continúa Lacoste– existieron importantes sectores políticos y de la sociedad argentina y chilena que estuvieron predominantemente a favor de una relación pacífica entre ambos países; es decir, es preciso no exacerbar la hipótesis de una beligerancia natural, tal como sostuvieron no solo protagonistas de la historia sino muchos historiadores que –voluntaria o involuntariamente– reprodujeron sin crítica esas perspectivas. Prueba de esta hipótesis –agrega el autor– es que cada una de las crisis internacionales que se produjeron entre Argentina y Chile entre 1881 y 1978 se resolvieron por la vía de la negociación diplomática. De hecho, Argentina sostuvo guerras con todos sus vecinos en el siglo XIX menos con Chile (Lacoste, 2003, pp. 14-15-16). Por su parte, para Novaro y Palermo (2003), fue el nacionalismo territorialista de la década de 1930 el que estimuló a ambos lados de la cordillera el recelo y/o las apetencias entre países rivales. Por su parte, Ernesto Bohoslavsky (2009) destaca el papel desempeñado en la afirmación de los derechos soberanos de ambos países por los imaginarios de las derechas nacionalistas nativas en el siglo XX (particularmente la extrema derecha) en torno de los complots que diversos actores sociales motorizaban para apropiarse de aquellos territorios, ya fueran los argentinos o los chilenos, en general, los socialistas, comunistas y anarquistas, los masones, británicos, judíos o diversos grupos de inmigrantes.

relaciones bilaterales conforme se exacerbaban las posiciones nacionalistas y/o militaristas (Lacoste, 2003, p. 337). Sin embargo, esta tendencia a favor de las alternativas diplomáticas no desplazó la persistencia de la hipótesis de conflicto vecinal como principio orientador de las concepciones de la defensa nacional y del diseño de las Fuerzas Armadas del Cono Sur al menos hasta la década de 1990, en que aquellas fueron reemplazadas por la cooperación bilateral y regional en materia de defensa y asuntos militares<sup>46</sup>.

En 1971, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse y el presidente constitucional Salvador Allende acordaron someter sus diferencias por la zona del canal de Beagle ante el Reino Unido. Las tentativas diplomáticas afrontadas desde entonces parecieron, no obstante, agotarse cuando en diciembre de 1976 la Corte Arbitral dictó su fallo; en abril de 1977 la reina Isabel II lo ratificó, y el 1.º de mayo de ese año se hizo público el laudo arbitral británico que otorgaba a Chile la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox y dispuso una línea de demarcación en el canal de Beagle que aseguraba la navegación y el acceso a sus puertos a los dos países. El gobierno chileno aceptó este resultado, pero el argentino lo rechazó.

A partir de ese momento las relaciones bilaterales se deterioraron de manera notable y, de acuerdo con Novaro y Palermo (2003), una facción “dura” del gobierno del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” – en la cual eran activos los generales de división Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros– presionó a favor de una opción militar para ganar poder en el gobierno ante la facción que definían como los “blandos” –entre quienes estaban el comandante en Jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, y su segundo, el general Roberto Eduardo Viola–. De allí que aunque ambos países desplegaron tropas en diciembre de 1977, simultáneamente los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet dejaron abierto el canal diplomático que, sin embargo, no conseguía imponerse a la alternativa belicista promovida por una fracción del Ejército y por el comandante de la Armada Argentina, el almirante Emilio Eduardo

---

<sup>46</sup> Un análisis de esta cuestión para las primeras tres décadas del siglo XX ha sido efectuado por Hernán Cornut (2018). Por nuestra parte, hemos analizado la cooperación en defensa y militar entre los ejércitos argentino y de chileno en la década de 1990 y el siglo XXI en otro trabajo (Lafferriere y Soprano, 2015).

Massera. Esta tendencia acabó estimulando una competencia armamentista (Novaro y Palermo, 2003, p. 250 y ss.).

En el mes de septiembre de 1978 el gobierno argentino puso en marcha un plan militar conocido como “Operativo Soberanía” que tenía por objeto empeñar sus Fuerzas Armadas en un ataque ofensivo sobre distintos puntos de Chile para negociar los territorios en disputa desde una posición que –se esperaba– fuera de poder político, diplomático y militar. Ante la inminencia del potencial conflicto armado, tuvieron un papel clave en favor de una opción diplomática en torno a una mediación del Vaticano (el 16 de octubre de 1978 había sido consagrado el papa Juan Pablo II) el cardenal argentino Raúl Primatesta, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina Raúl H. Castro y el nuncio apostólico en este último país, monseñor Pío Laghi. El ofrecimiento de mediación fue comunicado oficialmente por el Vaticano el 21 de diciembre de 1978, cuando –como veremos– el ataque argentino a Chile estaba previsto para el día siguiente. Según Novaro y Palermo:

Mientras que Chile aceptó sin demoras, en la Argentina, la resistencia de los duros del Ejército y de la Marina estuvo cerca de crear un nuevo *impasse*. Inicialmente, en el Comité Militar (la Junta de Comandantes y el presidente), sólo Videla era favorable a la mediación. Viola, Lambruschini y Agosti entendían que ya no era posible retroceder (Lambruschini, recién ungido comandante de la Armada, mantenía la postura más inflexible). Sólo cuando Videla advirtió que si se desataba la guerra él renunciaría, Viola cambió de posición y definió las cosas a favor de la aceptación (...) Cabe preguntarse por qué, después de todo, terminó por predominar la opción de suspender el conflicto armado. En el caso de Videla –el único, en verdad, que mantuvo una posición constante contraria al conflicto–, las razones parecen claras. No solamente porque era consciente de que la guerra, fuera cual fuese el resultado en el campo de batalla, iba a ser una catástrofe con efectos de largo plazo. También, porque percibía que comprometería definitivamente su destino personal: en caso de derrota, el derrumbe del régimen lo arrastraría consigo ignominiosamente, y en caso de victoria, los *halcones* no tendrían dificultades para desplazarlo o convertirlo en una figura decorativa. En cuanto a los militares procesistas en general, y aun los *halcones* que sintieron una rabia impotente frente a la aceptación de la mediación, pesó la *autoridad moral* que sobre el régimen ejercía la Iglesia Católica sin duda. Desde

luego, la participación del nuncio y de otras autoridades del Vaticano fue fundamental y manifiesta (Novaro y Palermo, 2003, p. 254 y ss.).

Así pues, por un lado, si la autoridad moral ejercida por su santidad Juan Pablo II y la Iglesia católica constituían factores que limitaban las perspectivas belicistas entre los militares argentinos; por otro lado, como ha demostrado Cristian Di Renzo (2018) al estudiar las concepciones doctrinarias y profesionales de los militares argentinos en las décadas de 1960-1979, se atribuía a Chile una vocación expansionista cuya voracidad había tenido históricamente como objeto el territorio argentino, en particular la Patagonia<sup>47</sup>.

El 8 de enero de 1979 Argentina y Chile firmaron la denominada Acta de Montevideo, que definió un mecanismo de mediación para resolver el conflicto de límites. El cardenal Samoré mantuvo reuniones con las delegaciones argentina y chilena por separado, pero el proceso se estancó en los siguientes dos años. A fines de 1980, Juan Pablo II presentó su propuesta a ambos gobiernos. Esta establecía la soberanía de Chile sobre las islas Picton, Nueva, Lennox, Evout, Barnevelt, Freycinet, Wollaston, Terhalthen y Sesambre hasta la isla de Hornos y definía que la línea envolvente de dichas islas correspondía al “mar territorial” de ese país. Proponía también una “Zona de Actividades Conjuntas y Concertadas” o “Zona de Mar de la Paz” de exploración y explotación del lecho marino y el subsuelo que sería compartida por Argentina y Chile. Para el gobierno argentino la propuesta no era satisfactoria, pues confirmaba la soberanía chilena sobre las islas en disputa

---

<sup>47</sup> Asimismo, Hernán Cornut (2018) demuestra cómo las concepciones geopolíticas de los oficiales argentinos y chilenos, sus representaciones acerca de la defensa nacional y el diseño del instrumento militar terrestre cultivados en las primeras tres décadas del siglo XX —en ambos casos, fuertemente influidas por la matriz doctrinaria y profesional prusiana-alemana— contribuyeron a estimular la rivalidad vecinal de manera decidida. Para un análisis de las relaciones entre los procesos de profesionalización y modernización del Ejército Argentino en relación con la rivalidad con Chile, véase: García Molina (2010) y Dick (2014). Ahora bien, como demostró Lacoste, también militares, (así como académicos, periodistas y políticos) chilenos concebían a la política argentina como “expansionista”, “imperialista”, “agresiva”, que tenía por objeto el territorio chileno, y tanto argentinos como chilenos reconocían —de forma simétrica— en las decisiones diplomáticas de sus gobiernos unas actitudes “faltas de conciencia nacional”, “ingenuas”, “cándidas” frente a las apetencias territoriales del vecino trasandino (Lacoste, 2003, p. 37 y ss.).



y, además, habilitaba la proyección del vecino país sobre el océano Atlántico con el planteo de una soberanía compartida en el sector del denominado “Mar de la Paz”, rompiendo así con el principio bioceánico definido por el Tratado de Límites de 1881 (Novaro y Palermo, 2003, pp. 257-258). En definitiva, Chile la aceptó y Argentina acabó rechazándola a principios de 1981. Para Novaro y Palermo:

El hecho de que Videla se negase a firmar el comunicado de “rechazo” que finalmente emitió el gobierno argentino [véase] (Escudé y Cisneros, 1998b), es un fuerte indicio de que se trató de una decisión prácticamente arrancada al presidente saliente, probablemente por parte de Viola, quien necesitaba ofrecer algo a los duros, al tiempo que no quería comenzar su gestión dando un paso tan poco gratificante (2003, pp. 37 y ss.).

El litigio, pues, continuaba y solo se resolvería durante la presidencia de Raúl Alfonsín con el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolvió la cuestión del Beagle en virtud de una política del nuevo gobierno democrático a favor de una negociación que tuviera por fin efectivo alcanzar un acuerdo entre ambas partes y tras la sustanciación en la Argentina de una consulta popular que respaldó la propuesta de paz del gobierno del presidente Alfonsín (Míguez, 2018). Posteriormente, en las presidencias de Carlos Menem y Patricio Aylwin se firmó, el 2 de agosto de 1991, un tratado que resolvió veintitrés litigios fronterizos; luego, en la segunda presidencia de Menem y la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 16 de diciembre de 1998 se suscribió otro tratado –que obtendría su respaldo en el Senado argentino y en la Cámara de Diputados chilena el 3 de junio de 1999– que estableció la demarcación de los Hielos Continentales en la Patagonia Austral argentino-chilena (Lacoste, 2003; Eissa, 2005).

## El Plan u Operativo Soberanía

Un puñado de textos de conocimiento y circulación pública han analizado la dimensión militar de este conflicto entre Argentina y Chile en el período de la crisis de fines de 1978 y principios de 1979. Uno de ellos es un artículo del teniente coronel (del Ejército de Chile) Rubén Madrid Murúa (2003). Ciertamente no podemos tomar como definitivos su descripción y análisis, pero de momento es una interpretación plausible de la operación planificada

por las Fuerzas Armadas argentinas para “invadir” territorio chileno<sup>48</sup>.

De acuerdo con el teniente coronel Madrid Murúa, el gobierno de Chile estimaba que la Argentina pretendía asegurarse por medio de una guerra la hegemonía sobre el Atlántico Sur, el control sobre los pasos biocénicos –el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle y el cabo de Hornos– y la proyección sobre la Antártida mediante la posesión de las islas del Beagle –Picton, Nueva y Lennox– y de las islas Wollaston (Madrid Murúa, 2003, p. 58). Para alcanzar ese objetivo político, tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas con el rechazo de la Argentina al resultado del laudo británico, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas elaboró el “Planeamiento Conjunto de las Operaciones previstas contra Chile”. Dos supuestos orientaban dicho Planeamiento:

Que Chile se rindiera en breve tiempo como consecuencia de la acción que se preparaba (hipótesis máxima) y el segundo, la aceptación por parte de Chile de los reclamos territoriales argentinos en el extremo sur (hipótesis mínima), a lo que seguía el repliegue de las tropas desde los puntos alcanzados en el territorio chileno producto de la ofensiva (Madrid Murúa, 2003, p. 59).

Posteriormente las Fuerzas Armadas argentinas elaboraron la “Directiva Estratégica Militar” (Demil) que establecía el concepto general de la guerra, el objetivo político y la organización de las fuerzas militares. Por último, el documento para planificar lo dispuesto por esa directiva fue denominado Plan Soberanía, que determinaba cuál sería la Actitud Estratégica, los

---

<sup>48</sup> Una apreciación crítica del artículo del teniente coronel Madrid Murúa debería formularse al menos las siguientes preguntas: ¿en qué medida la información sobre el plan u operativo argentino es aquella que la inteligencia chilena reunió y analizó, o bien aquella que la inteligencia argentina filtró a sus pares del país trasandino?, ¿es posible que la inteligencia chilena haya sobredimensionado –por desconocimiento, intencionalidad, o previsión– la magnitud del operativo argentino? Como veremos, del testimonio de Balza se desprende una diferencia en la concepción del Plan respecto de aquel expuesto por Madrid Murúa y por un par de artículos periodísticos publicados por la revista argentina *Somos* en 1983 y 1987. Particularmente, Balza menciona un vector de ataque –Dirección Estratégica Operacional Principal– por el paso Pino Hachado que no es citado en los mencionados artículos. Dichas diferencias pueden atribuirse al conocimiento de distintas planificaciones; por un lado, aquella a la que Balza tuvo acceso como oficial jefe de una unidad militar comprometida en el Operativo Soberanía; por otro lado, la que circuló la inteligencia argentina y/o que reunió la inteligencia chilena.

Objetivos Estratégicos, la Maniobra Estratégica y las misiones o tareas de los Órganos de Maniobra y las Fases de la Campaña (Madrid Murúa, 2003, p. 60). El Plan preveía iniciar la guerra de forma “rápida y violenta” para obtener un mayor control sobre territorios chilenos en los primeros días de la invasión, imponer ese *statu quo* y obligar a Chile a negociar desde una posición de fuerza de la Argentina. Señala que el gobierno argentino estaba dispuesto a aceptar la intervención de las Naciones Unidas y de fuerzas de ese organismo internacional para separar ambos ejércitos. Y también que esperaban regionalizar el conflicto con Perú y Bolivia –que mantenían litigios con Chile– presionando desde el norte del país. Ante esa escalada regional, Chile esperaba que:

Ecuador, ante la intervención peruana, respondiera a su alianza histórica con Chile y atacaría a su vez a Perú. De Uruguay y Paraguay se esperaba neutralidad y muchos estrategas trasandinos [de Argentina] temían la intervención de Brasil, por lo que las guarniciones del II Cuerpo de Ejército [argentino] permanecerían en estado de alerta (Madrid Murúa, 2003, pp. 60-61).

Las fases de la guerra prevista en el Plan Soberanía eran las siguientes:

- Fase de preparación: que Madrid Murúa asocia con el “Memorándum para las Operaciones contra Chile” y la Demil, para los cuales no especifica fecha precisa.
- Fase peligro de guerra: anterior a la convocatoria a las reservas del 5 de octubre de 1978 con el “Ejercicio de Movilización Parcial”, pero desconociéndose la fecha precisa de su inicio (aun cuando podría situarse en el mes de septiembre de 1978, cuando el conflicto internacional comenzó a escalar).
- Empleo del potencial bélico: se produciría desde el día D, hora H, esto es las 22:00 horas del 22 de diciembre de 1978. Comprendía dos subfaces:
  - Primera subface:
    - . Con medios de la Armada, conquista de las islas del grupo de las Wollaston e isla de Hornos a partir de la hora H-2 (20:00 horas del 22 de diciembre de 1978). Conquista de las islas Picton, Lennox y Nueva a partir de la hora H (22:00 horas del 22 de diciembre de 1978). Con la Flota de Mar,

apoyar la conquista de las islas del canal de Beagle y oponerse a la acción de la fuerza organizada chilena.

. Con medios del V Cuerpo del Ejército realizar una ofensiva estratégica en la zona general de Santa Cruz a partir de la hora H+2 (24:00 hora del 22 de diciembre de 1978), conquistando el máximo de territorio patagónico.

. Con medios de la Fuerza Aérea, bombardeo de objetivos militares a partir de la hora H+2 (24:00 horas del 22 de diciembre de 1978). Posteriormente, a partir de la hora H+8, aproximadamente (06:00 horas del 23 de diciembre de 1978), destrucción de la Fuerza Aérea chilena en tierra (Madrid Murúa, 2003, p. 62).

- Segunda subface:

. Con medios del III y V Cuerpo de Ejército, Ofensiva Estratégica en la zona general de paso Los Libertadores-paso Maipo y paso Puyehue con el propósito de cortar comunicaciones en el territorio continental<sup>49</sup>.

. Con medios de la Armada, prever apoyar la conquista de una ciudad litoral.

. Con medios de la Fuerza Aérea, continuar apoyando las operaciones terrestres y navales (Madrid Murúa, 2003, p. 63).

• Fase Término del Conflicto: prevista a partir de la rendición de Chile y/o la intervención de las Naciones Unidas (Madrid Murúa, 2003, pp. 61-62-63)<sup>50</sup>.

¿Cómo comprometerían las Fuerzas Armadas argentinas sus medios en el operativo?

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por Madrid Murúa, el V Cuerpo del Ejército Argentino –al mando del general de división José Antonio Vaquero, con jurisdicción sobre las provincias patagónicas– en la primera subface de la ofensiva estratégica tendría como objetivo la conquista de las localidades chilenas de Puerto Natales y Punta Arenas en el extremo suroeste de la Patagonia. En tanto que en la segunda subface –en coordinación con la ofensiva del III Cuerpo de Ejército– empeñaría elementos de la X Brigada de

---

<sup>49</sup> Veremos más abajo que, de acuerdo con el testimonio de Balza, estaba previsto invadir territorio chileno también por el paso de Pino Hachado situado en el centro oeste de la provincia de Neuquén (Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 6 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

<sup>50</sup> También he agregado algunas aclaraciones sobre la base del conocimiento del “Operativo Soberanía” que obtuve a partir de las entrevistas –citadas abajo– al teniente general (R) VGM Martín Antonio Balza.

Infantería por el paso Puyehue (suroeste de la provincia de Neuquén) para cortar las comunicaciones en esa región del sur de Chile. Para intervenir en la primera y la segunda subfaces, el V Cuerpo de Ejército contaba con unidades de la IX Brigada de Infantería y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, además de dos brigadas pertenecientes al I Cuerpo de Ejército: la X Brigada de Infantería y la I Brigada de Caballería Blindada (Madrid Murúa, 2003, p. 64)<sup>51</sup>. El Ejército Argentino también utilizaría medios del III Cuerpo de Ejército –comandado por el general de división Luciano Benjamín Menéndez y con jurisdicción sobre la provincia de Córdoba y las regiones de Cuyo y el Noroeste Argentino– que intervendrían en la segunda subface de la ofensiva estratégica con el objetivo de cortar comunicaciones en la zona centro de Chile, conquistando alrededores de Santiago (capital) y en forma secundaria Valparaíso<sup>52</sup>. Por último, el Ejército Argentino emplearía, por un lado, medios del II Cuerpo de Ejército –con jurisdicción en la región del Litoral/Noreste del país, comandado por el general de división Leopoldo Fortunato Galtieri– pertenecientes a la III Brigada de Infantería y la VII Brigada de Infantería en resguardo de la frontera con el Brasil; y, por otro lado, contaría como reserva estratégica con la II Brigada de Caballería Blindada del II Cuerpo de Ejército trasladándola a las proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia (sureste de la provincia de Chubut) en previsión de un contraataque de Chile por el sector de Río Mayo (Madrid Murúa, 2003, pp. 63-64).

Por su parte, la Armada Argentina dispondría de todos sus medios bajo el comando del almirante Armando Lambruschini. La Flota de Mar –comandada por el contraalmirante Humberto Barbuzzi– tendría por misión oponerse a la acción militar de Chile en respuesta a la invasión, apoyar la ocupación de islas Picton, Nueva, Lennox y –previsiblemente– la localidad de Puerto Williams en la isla Navarino, y también controlar la boca oriental del canal de Beagle y

---

<sup>51</sup> Como veremos en el testimonio de Balza, las unidades que avanzarían sobre territorio chileno por el paso Puyehue –entre las que se contaba el Grupo de Artillería 102– estaba previsto que fueran comandadas por el general de división Luciano Benjamín Menéndez, el comandante del III Cuerpo de Ejército (Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 6 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

<sup>52</sup> Conforme al testimonio de Balza, del comandante del III Cuerpo de Ejército dependían las unidades que invadirían territorio chileno por el paso Puyehue (Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 6 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

del estrecho de Magallanes. Para ello dividiría los medios de la Flota de Mar en dos grupos de tareas: el Grupo de Tareas N.º 1 en apoyo de la ocupación de las islas y el control de la boca oriental del canal de Beagle; y el Grupo de Tareas N.º 2 para controlar el acceso al estrecho de Magallanes por el océano Atlántico. Empeñaría en ello la División Portaviones, la División Cruceros, dos divisiones de destructores, la División de Submarinos, la Escuadrilla de Minado y Antiminado y la Escuadrilla de Apoyo y Sostén. Asimismo, la Armada emplearía el Batallón de Infantería de Marina N.º 5 en la ocupación de las islas Freycinet, Herschel, Wollaston, Deceit y Hornos, y los batallones de Infantería de Marina 3 y 4 para conquistar las islas Picton, Nueva y Lennox (Madrid Murúa, 2003, pp. 64-65).

Por último, la Fuerza Aérea argentina tendría asignado el bombardeo de objetivos militares en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Williams; la destrucción de la Fuerza Aérea de Chile en tierra y el apoyo a las fuerzas de superficie y navales argentinas en sus objetivos (Madrid Murúa, 2003, p. 65)<sup>53</sup>.

De acuerdo con las fuentes de información chilenas, las Fuerzas Armadas argentinas habían previsto que Chile podría responder al ataque con una ofensiva terrestre por la Patagonia en dirección hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia o hacia Río Gallegos, o bien por el noroeste argentino a la provincia de Salta<sup>54</sup>. Para lo primero habría dispuesto emplazar una reserva estratégica en Comodoro Rivadavia y crear una Brigada en Río Gallegos. Pero para lo segundo solo confiaban en que un ataque argentino contundente disuadiera a los militares chilenos de esa opción. Respecto del accionar de la Flota de Mar argentina, se anticipó que debía contarse con fuerte apoyo aéreo para enfrentar el accionar de los helicópteros artillados que tenían los buques de

---

<sup>53</sup> Madrid Murúa (2003, p. 69) advierte que el plan de los argentinos poseía una escasa conjuntes o coordinación entre los servicios de las Fuerzas Armadas. Una evidencia de este problema lo revela —según su punto de vista— la superposición en el Teatro de Operaciones Patagónicas de mandos militares diferentes: V Cuerpo de Ejército, Flota de Mar, Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza Aérea, sin explícitas coordinaciones entre sí.

<sup>54</sup> El teniente coronel Madrid Murúa reconoce como improbable la posibilidad de que el Ejército de Chile realizara una contraofensiva terrestre por la Patagonia argentina en dirección a Comodoro Rivadavia, más aún porque por entonces esa Fuerza no contaba con medios blindados en la zona de Coyhaique (Madrid Murúa, 2003, p. 70).

superficie de la Armada de Chile<sup>55</sup>. Los argentinos estimaban que disponían de una superioridad de 1,8 contra 1 respecto de las fuerzas terrestres chilenas, en tanto que ambos países tenían paridad en sus medios navales y aéreos, quizá con cierta superioridad para los argentinos en esto último. Se había previsto que el conflicto ocasionaría unas veinte mil bajas para ambos bandos (un diez por ciento del personal empeñado) (Madrid Murúa, 2003, pp. 65-66).

El 8 de julio de 1983, la revista *Somos* publicó un informe especial denominado “Cómo se paró la guerra con Chile”, firmado por los periodistas Tabaré Áreas, Santiago Palazzo y Alberto Oliva. Presumiblemente, la información citada era aquella que la inteligencia militar argentina (recordemos que el país aún era gobernado por el teniente general Reynaldo Bignone) había dado a conocer o trascendido a la prensa. El artículo solo invoca el testimonio de un protagonista de aquellos sucesos, el del general Luciano Benjamín Menéndez. Sobre el Operativo Soberanía, los periodistas dicen que el objetivo político era derrotar militarmente a Chile y cercarlo en lo económico hasta forzar una rendición o la aceptación de derechos argentinos en la zona en litigio, esto es, las islas Picton, Nueva y Lennox en la salida del canal de Beagle hacia el océano Atlántico. Alcanzado ese objetivo, las tropas argentinas que hubieran invadido otros territorios chilenos se replegarían al lado argentino de la frontera, tras destruir el instrumento militar del país trasandino. ¿Cómo se lograría ese objetivo político-militar? Veremos que en el relato de los periodistas se reconocen amplias coincidencias con la información y análisis demostrado en el artículo del teniente coronel Madrid Murúa. Dicen Áreas, Palazzo y Oliva:

Faltaban sólo 70 horas para el *cúmplase* de la hora de ataque. La cuenta regresiva se inició el miércoles 20 de diciembre, y la hora *zero* estaba fijada para las 22 del viernes 22. Pero esas últimas horas sólo configuraron el marco para los ajustes de último momento: barcos que zaparon hacia sus objetivos, últimos desplazamientos de tropas hacia las posiciones más avanzadas, traslados de aviones hacia las bases. Antes, más de tres meses antes, en septiembre, ya las unidades comenzaron a ser trasladadas hacia

---

<sup>55</sup> Esa preocupación de los argentinos por los helicópteros artillados chilenos llama la atención del teniente coronel Madrid Murúa, dado que —sostiene— “no representaban una amenaza real” pues “estaban armados sólo con cohetes de bajo calibre” (Madrid Murúa, 2003, p. 70).

el sur. Primero desde la provincia de Buenos Aires (Cuerpo I, Brigada I de Caballería Blindada), del Litoral (Cuerpo II, Brigada II de la misma arma) y también elementos de artillería de asalto y de artillería antiaérea, como el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata.

En la parte final de los preparativos miles de hombres fueron transportados en avión. En la planificación de este movimiento masivo de tropas se decidió utilizar lo que en el lenguaje militar se llama *configuración Vietnam*, modificación que permite a los *Boeing 707* transportar hasta 370 hombres con su armamento en cada vuelo (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, pp. 42).

¿Cuáles eran los objetivos y misiones que tendrían las Fuerzas Armadas argentinas conforme a la planificación de este operativo? De acuerdo con la información reunida, los periodistas sostienen que:

La primera acción se iniciaría a las 22 [horas del 22 de diciembre de 1978] con la ocupación de las islas, comenzando por las Nueva, Picton y Lennox y posteriormente las de más al sur, incluida Hornos. En la isla Nueva, Chile había reforzado su pequeña dotación de 16 hombres llevándola a casi 80. Ese primer objetivo no ofrecía mayores dificultades y se planificó una operación nocturna para que el factor *sorpresa* hiciera la acción lo menos cruenta posible.

Iniciada la acción en las islas, la aviación debía bombardear objetivos militares en la ciudad chilena de Punta Arenas, incluidos otros relacionados con el transporte y el abastecimiento.

En la primera faz de las acciones, y a la cero hora del 23, las tropas terrestres acantonadas en la frontera sur iniciarían su avance sobre territorio chileno (se dice que el avance en el sur se iniciaría por cuatro puntos distintos).

No hay coincidencia respecto a la información de que un objetivo primordial era la ocupación de una ciudad clave, que debía ser determinada (según el curso de las acciones) por *la línea de menor resistencia*. Una fuente insospechable reveló que el primer objetivo era Santiago, teniendo como alternativa a Valparaíso. El avance de las tropas iba a ser constantemente apoyado por la aviación en tareas de ablande de las defensas enemigas. Igual papel estaría a cargo de la Armada, si



el objetivo quedaba establecido en una ciudad marítima, donde se habría desarrollado una acción combinada con la infantería de marina.

Otra fuente dice que, además de esas primeras acciones, el plan estableció una ofensiva generalizada (las tropas del Cuerpo Tres de Ejército entraban en combate en la segunda faz), es decir, sin dejar localizado el conflicto en la zona austral. Se previó que las unidades destacadas en la provincia de Neuquén, cerca del Paso de Puyehue (la Décima Brigada de Infantería con asiento natural en Palermo, entre ellas), irrumpirían en la frontera para *cortar en dos* al territorio chileno. Si bien todos coinciden en que el corte del territorio chileno era objetivo prioritario, no son coincidentes en cuanto al lugar planificado para efectuarlo. Algunos lo ubican al sur del valle de Maipo y otros mucho más al norte de esa zona.

Simultáneamente, la aviación argentina tenía como misión destruir a la chilena si era posible en tierra, con una ofensiva fulminante, tipo israelí. En ese sentido la Fuerza Aérea Argentina se veía favorecida por el hecho de contar con muchos más aeródromos, aunque se descontaba que la aviación chilena tenía un nivel de entrenamiento y preparación comparable a la argentina.

Por su parte la marina debía enfrentarse a la chilena en la región del Estrecho de Magallanes y del Beagle. En noviembre, el alto mando naval hizo saber su requerimiento de fuerte apoyo aéreo ante la amenaza que representaban los helicópteros artillados del adversario (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 42).

Hasta aquí lo que el artículo ofrece sobre la ofensiva argentina. Veamos ahora qué decía respecto de las previsiones atribuidas por los militares argentinos a la reacción o contraofensiva chilena:

Una de las preocupaciones del mando militar argentino fue la vulnerabilidad del territorio en la provincia de Chubut, a la altura de las poblaciones de Río Mayo y Alto Río Mayo, dado que por la poca altura de la cordillera podía entrar los blindados chilenos y permitir su avance hacia la costa, hacia los yacimientos de Comodoro Rivadavia, región que había que proteger con prioridad. Por eso se llevaron allí numerosas unidades, estimándose que no menos de 40.000 hombres se desplegaron

en esa región de Chubut y Santa Cruz (...) Los chilenos tenían también sus planes de acción militar. Hubo por lo menos tres. Uno preveía el ataque a Río Gallegos. Otro, la intervención militar en la provincia de Neuquén, y un tercero, la invasión del territorio argentino por el norte, donde Chile tiene fuerte presencia militar por sus problemas fronterizos con Perú y Bolivia (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 42).

Respecto de la correlación de fuerzas militares de uno y otro país se destacaba –como en el diagnóstico de las fuentes de información citadas por el teniente coronel Madrid Murúa– que los mandos argentinos confiaban en la primacía numérica de las fuerzas terrestres (en proporción 1,8 contra 1) y reconocían una paridad en las fuerzas navales y aéreas, quizá –también en esto hay coincidencia– con una leve ventaja argentina por las características de sus aviones de ataque. Asimismo, las previsiones de bajas para ambos contendientes se estimaban en unos 20 000 efectivos (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 42). Los periodistas mencionan que algunos militares argentinos –entre los que citan al comandante del Cuerpo I de Ejército, el general de división Suárez Mason– consideraban que los chilenos solo ofrecerían una “resistencia simbólica” a la invasión argentina y, por tanto, el Operativo planificado tenía aseguradas las condiciones para concluir en un rotundo éxito (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 43). Se trataba, a todas luces, de una alucinada sobreestimación de las capacidades propias y una notable subestimación de las del adversario, así como del previsible accionar de los organismos internacionales, que verían en la agresión argentina la causa infundada de un conflicto o guerra entre ambos países (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 43).

De acuerdo con el artículo, en la madrugada del día D (22 de diciembre), la vanguardia de las tropas emplazadas en la provincia de Neuquén comenzó a avanzar hacia la frontera y algunos elementos de la misma alcanzaron a ingresar en territorio chileno unos tres o cuatro kilómetros, hasta que recibieron una contraorden y se replegaron. Allí se detuvo la implementación del Operativo Soberanía y se inició, como hemos visto, una nueva etapa en las negociaciones diplomáticas con la mediación del Vaticano, la cual fue aceptada por el gobierno argentino a las 18:30 horas del 22 de diciembre de 1978, apenas tres horas y media antes de que se cumpliera el plazo para el

inicio planificado del operativo a las 22:00 horas (Áreas, Palazzo y Oliva, 8 de julio de 1983, p. 43).

## El teniente coronel Martín Antonio Balza y el Operativo Soberanía

El 18 de octubre de 1978, el teniente coronel Martín Antonio Balza fue destinado “en comisión” desde la Escuela de Artillería en Campo de Mayo – donde cumplía funciones como jefe de Doctrina y Enseñanza– a la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires) por orden (OE N.º 29/77) del Comando de Institutos Militares, para conformar allí una nueva unidad militar: el Grupo de Artillería 102. Este nuevo destino le llegó de forma sorpresiva (normalmente el Ejército definía los destinos en la segunda mitad del año y se sustanciaban al final del mismo) en el marco de los aprestos extraordinarios efectuados por esa Fuerza para el denominado Operativo Soberanía.

Ahora bien, ¿cómo tomó conocimiento y fue involucrándose en el planeamiento del Ejército en el marco de este operativo? Posiblemente en el mes de octubre, cuando Balza viajó a la ciudad de San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro) para asistir a reuniones de coordinación convocadas por el general de división Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército y a la sazón responsable de la operación militar que invadiría Chile –según le fue informado allí– por pasos fronterizos de la provincia de Neuquén<sup>56</sup>.

Una vez en Bariloche, Balza y otros tres oficiales, provistos de un vehículo particular, iniciaron un viaje a Chile para efectuar tareas de reconocimiento en el terreno<sup>57</sup>. Entre los falsos “turistas” que iban en el automóvil estaban

---

<sup>56</sup> Aquí cabe una observación. De acuerdo con Balza, las unidades que invadirían territorio chileno por el paso Puyehue y por el paso Pino Hachado (ambos en la provincia de Neuquén) estaban comandadas por el general de división Menéndez, en tanto que hemos visto que la información reunida por el teniente coronel Madrid Murúa señalaba que el avance por el paso Puyehue estaría a cargo del comandante del V Cuerpo de Ejército, el general de división Vaquero. Asimismo, en el análisis de Madrid Murúa no se contemplaba una invasión por el paso Pino Hachado. Como decía anteriormente, quizás esta diferencia se deba al conocimiento de las planificaciones a las que accedieron uno y otro: Balza como jefe de una unidad de artillería que en el mes de octubre de 1978 se preveía comprometida con el ataque a territorio chileno por el paso Puyehue; y Madrid Murúa como un analista *ex post* de los hechos, que accedió a otras fuentes de información o bien al planeamiento definitivo.

<sup>57</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

el subdirector de la Escuela Militar de Montaña coronel Carlos Rito Burgoa (Promoción 82, Infantería), el jefe de un regimiento de infantería, teniente Roberto Felipe Domínguez (Promoción 84, Infantería) y un coronel retirado del arma de ingenieros –compañero de promoción del general de división Menéndez– que se desempeñaba en el Estado Mayor General del Ejército. Cruzaron la frontera vestidos de civil, pero declarando sus identidades verdaderas<sup>58</sup>. Ingresaron al país vecino por el cruce fronterizo de Puyehue (actualmente paso Cardenal Antonio Samoré). Antes de llegar a la ciudad chilena de Osorno se detuvieron en un centro de esquí y el coronel Burgoa, que llevaba sus esquíes, utilizó los medios de elevación de la pista e hizo un par de bajadas, un poco para demostrar su condición de “turista”. Mientras tanto, sus camaradas degustaban una merienda al pie del cerro, las “once chilenas”<sup>59</sup>. Luego los cuatro se dirigieron a Osorno e hicieron noche. Aunque se hacían pasar por turistas, en aquel enrarecido clima de relaciones entre la Argentina y Chile de la época –reconoce hoy– seguramente la presencia de cuatro hombres argentinos en un vehículo no pasaba desapercibida para la inteligencia chilena. El viaje de ida y vuelta a Chile les insumió casi dos días. De regreso elaboraron un informe y participaron en las reuniones de coordinación en la Escuela Militar de Montaña. Allí se realizó un encuentro con el general de división Luciano Benjamín Menéndez para precisar detalles relacionados con el accionar de la denominada “Agrupación Las Heras”.

Como se ha visto con el artículo del teniente coronel Madrid Murúa y el de los periodistas en la revista *Somos*, el Operativo Soberanía preveía el empeñamiento de medios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea argentinas a lo largo de toda la frontera con Chile. Al Ejército le correspondía la misión de

dividir temporalmente el territorio chileno para forzar al gobierno trasandino

---

<sup>58</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>59</sup> Las referencia a “las once” —según les fuera explicado a los “viajeros”— correspondía al modo en que tradicionalmente los chilenos mencionaban de manera elusiva al “aguardiente”, palabra conformada por once letras. Al parecer, antiguamente la merienda consistía o incluía un trago de aguardiente y, para evitar decir que se consumía esa bebida alcohólica, se pedían “las once”. Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a negociar la soberanía sobre las islas australes en disputa en favor de la Argentina<sup>60</sup>. Ahora bien, de acuerdo con el conocimiento que adquirió Balza en la Escuela Militar de Montaña, el comandante del III Cuerpo de Ejército, el general de división Menéndez, comandaría el ataque a Chile con las unidades que conformaban la Dirección Estratégica Operacional Principal, esto es, siguiendo un línea que se proyectaba desde la localidad neuquina de Zapala hacia Las Lajas, y de allí cruzarían la frontera por el paso de Pino Hachado y continuarían hacia el oeste en dirección a Lonquimay, Temuco y alcanzarían el océano Pacífico.

A su vez, el general Menéndez preveía una Dirección Estratégica Operacional Secundaria conformada por las unidades de la Agrupación Las Heras, que ingresarían desde el suroeste de la provincia de Neuquén por el paso Puyehue (actualmente paso Cardenal Samoré) avanzando hacia el oeste en dirección a la ciudad de Osorno. Una unidad de artillería formaría parte de la Dirección Estratégica Operacional Secundaria<sup>61</sup>.

El avance de las unidades de la Agrupación Las Heras había sido concebido

---

<sup>60</sup> Es posible que las experiencias de las Fuerzas Armadas de Israel en el conflicto de Medio Oriente con los países árabes vecinos haya estado en el horizonte de referencias estratégicas de los conductores militares argentinos del Operativo Soberanía (por ejemplo, la ocupación de la península del Sinaí para negociar con Egipto). También el teniente coronel Madrid Murúa dice que la Fuerza Aérea Argentina tenía como objetivo destruir la Fuerza Aérea chilena en tierra, “buscando una acción similar a la efectuada por Israel en la guerra de los Seis Días” (Madrid Murúa, 2003, p. 65).

<sup>61</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con el conocimiento de Balza, como comandante del III Cuerpo de Ejército, el general de división Menéndez tenía bajo su comando unidades de las brigadas desplegadas desde el noroeste argentino hasta Neuquén, además de la Brigada Blindada I y el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. El Plan de Campaña del Operativo Soberanía comprendía, a su vez, a las unidades del Cuerpo V del Ejército – comandado por el general de división Vaquero- desplegadas en la Patagonia (provincias de Chubut y Santa Cruz). Del V Cuerpo dependía la Brigada Blindada II al mando del general de brigada Trimarco. Recordemos que hay dos diferencias importantes entre el conocimiento al que tuvo acceso Balza y expresó en su testimonio, y el registrado en los artículos del teniente coronel Madrid Murúa y de la revista *Somos*. Por un lado, para Balza, el responsable del avance sobre territorio chileno por el paso Puyehue era el general de división Menéndez (comandante del III Cuerpo de Ejército) y el general de división Vaquero (comandante del V Cuerpo de Ejército). Y, por otro lado, Balza alude a un vector de la invasión que ingresaría por el paso Pino Hachado que los otros no consignan.

de un modo clásico, constituyendo una columna que posiblemente (Balza no lo recuerda con precisión) tenía en la vanguardia un elemento de exploración de caballería, luego tres unidades de infantería motorizada (dos al frente y una en retaguardia) y por detrás la artillería, previsiblemente el Grupo de Artillería 102 con sus cañones SOFMA de calibre de 155 mm trasladados por sus camiones. Según Balza, importantes unidades que participarían de esa ofensiva de la Dirección Estratégica Operacional Secundaria no tenían su asiento natural en la región durante el tiempo de paz; recuerda que una de las unidades era el Regimiento de Infantería de Monte 28 con asiento en Tartagal (provincia de Salta), del cual era jefe el mencionado teniente coronel Roberto Felipe Domínguez.

Por el reconocimiento del terreno efectuado, Balza había concluido que ese avance por el paso Puyehue no ocurriría sin que las características del ambiente o el accionar defensivo del enemigo les impusiera serias dificultades. Así se lo expuso al general de división Menéndez en la Escuela Militar de Montaña. Explicó que su unidad contaba con cañones de alrededor de una tonelada cada uno que debían ser movilizados por camiones pesados. Una vez que ingresaran al territorio chileno debían atravesar dos puentes sobre el río Gol Gol –un río pequeño pero con un cauce profundo y encajonado–. Esos puentes debían estar en poder de la propia tropa antes de que el enemigo los destruyera o los tomara. Por ello, para que los elementos de caballería y las unidades de infantería argentinas contaran con el apoyo de fuego del Grupo de Artillería 102 en su avance sobre territorio chileno, esos puentes debían estar bajo control argentino. Menéndez le planteó que si no podían asegurar los puentes, bien podían sortear el río arrastrando los cañones con los camiones. Pero Balza repuso que se trataba de artillería pesada, que no podrían maniobrar en ese terreno sin puentes y que era previsible que los chilenos los volaran ante la menor sospecha de un avance efectivo de las tropas argentinas. Por tanto, concluyó: “el apoyo de fuego que podía ofrecer mi unidad estaba condicionado a contar con esos puentes para así acompañar el avance de las unidades de caballería e infantería”<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También –retrospectivamente– el teniente coronel Madrid Murúa caracterizó la ofensiva estratégica por los pasos fronterizos de la zona central –pasos Portillo, Bermejo y Maipo– y zona sur –paso Puyehue– entre “difícil o no realizable, en atención a que dichos pasos no tienen la capacidad para materializar operaciones de gran envergadura y en otros, los medios empleados eran inadecuados (medios blindados por Puyehue)” (Madrid Murúa, 2003, p. 69).

Balza sospechaba que a la Dirección Estratégica Operacional Principal, posiblemente conformada por unidades con emplazamiento en la región, también se le presentarían importantes dificultades en su avance por el paso de Pino Hachado. Recuerda que el terreno elegido para el avance no era propicio para el desplazamiento de las unidades blindadas de tanques del Ejército Argentino:

A partir de Las Lajas el terreno va adoptando la forma de un embudo que se cierra a la altura del Paso Pino Hachado. Los tanques debían transitar por el paso de uno en uno. Si los chilenos colocaban ahí una unidad antitanque detenían el avance. En ese terreno se perdía el efecto que produce el tanque: fuego, movimiento, choque y acción psicológica paralizante<sup>63</sup>.

Es por ello que, retrospectivamente, Balza evaluaba de un modo crítico la concepción general del Plan de Campaña del Operativo Soberanía:

El Plan de Campaña contemplaba una actitud estratégica operacional ofensiva: cruzar a Chile y partir en dos el país. Esta insensata ofensiva contrastaba con la actitud defensiva y mucho más fácil de instrumentar de Chile. En el contexto internacional seríamos considerados agresores (invasores), y hasta el Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR) de 1947 –pieza más inútil que un libro de quejas- nos jugaría en contra. Inconscientes estrategias de salón hablaban de imponer un *caso consumado*, como lo hizo Israel en varias oportunidades, claro que no se habían detenido a analizar que el Medio Oriente no era el extremo sur patagónico y que el contexto geopolítico era sustancialmente distinto.

Desde la concepción militar, el tema era mucho más grave. En el sur, los generales Antonio Vaquero y Juan Carlos Ricardo Trimarco dispusieron que los viejos tanques Sherman fueran enterrados en distintas posiciones, lo que impediría emplear la maniobra, velocidad y versatilidad propias de los blindados para combatir en amplios frentes y grandes espacios<sup>64</sup>. Como si todo esto no fuera suficiente muestra de

---

<sup>63</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>64</sup> Aquí vale la pena aclarar para el lector lego en temas militares que “enterrar el tanque” significa, en la jerga castrense, organizar un sector del terreno para que lo ocupe el

improvisación e incapacidad, es necesario aclarar que los tanques se desplazaron sin transportadores más de 1000 kilómetros. Un tanque, aclaremos, es comparable a una máquina de Fórmula 1, se desplaza sobre un vehículo que lo transporta y se baja de él para combatir, como el auto de competición lo hace para correr un gran premio. Un tanque está especialmente diseñado para combatir contra otro tanque, y el alza (distancia) eficaz de tiro de su cañón es del orden de los 2000 metros.

Lo más grave era que los medios más poderosos, los también viejos tanques livianos AMX-13, iban a ser empleados –por impericia del general Luciano Benjamín Menéndez- en la zona de Pino Hachado, en la provincia de Neuquén, donde penetrarían en un área conocida como La Horqueta por la boca ancha de un embudo para terminar saliendo encolumnados y desfilando por la parte angosta de él, por un desfiladero límite montañoso que permitiría al adversario destruir con facilidad a nuestros blindados, empleando efectivos de poca magnitud dotados de armas antitanques. Una vez más, quienes concibieron el plan se olvidaron de los manuales y de la elemental doctrina: los blindados y mecanizados necesitan grandes espacios, obran por el fuego, la maniobra, el choque y la acción psicológica paralizante. Nada de ello se obtendría en un desfiladero en la montaña. Además de lo expresado, carecíamos de una eficaz artillería antiaérea para responder a los ataques de los aviones adversarios.

Si restaba algo para enmarcar la improvisación y la falta de responsabilidad de la conducción estratégica, en los escasos treinta días anteriores a la probable iniciación de las operaciones, previstas para diciembre de 1978, se enviaron comisiones al exterior para comprar tanques nuevos que nunca llegaron. Los “generales de escritorio” también planificaron tomar una ciudad, Punta Arenas, de más de 200 000 habitantes y con fuerte presencia militar, con una brigada de 5000 hombres: ¿cómo la tomaríamos con precarios medios? Y más difícil aún ¿cómo la controlaríamos? (Balza, 2015, pp. 151-152).

Ahora bien, mientras avanzaba en esta limitada reconstrucción del Operativo Soberanía –con escasas fuentes de información e incorporando el

---

tanque con un leve parapeto de protección de tierra. Esto es, no se trata de cubrirlo de tierra sino de fijarlo en una posición por un tiempo determinado y dándole una protección. Como advierte Balza, este procedimiento, en definitiva, anula las capacidades de un blindado.



testimonio de Balza con su experiencia en el mismo como jefe de una recién conformada unidad de artillería de campaña– me preguntaba ¿cómo era posible que, según conocemos hoy, la planificación militar argentina hubiera fijado como día D y hora H el 22 de diciembre de 1978 a las 22:00 horas y, para entonces, el Grupo de Artillería 102 se encontrara en el cuartel de Junín y hubiera incorporado a sus soldados recién el día anterior? ¿Cómo podía ser que en el mes de octubre en la Escuela Militar de Montaña, el general de división Menéndez convocara a Balza y a otros oficiales para coordinar el accionar de las unidades que formarían parte de la Dirección Estratégica Operacional Secundaria, y para el 22 de diciembre el Grupo de Artillería 102 se hallara a cientos de kilómetros del paso de Puyehue por el que debería avanzar brindando apoyo de fuego a los elementos de caballería de la vanguardia y a las unidades de infantería motorizadas? Transmití esos interrogantes a Balza y me respondió:

Quando estuve en las reuniones de Bariloche no me fijaron plazos para la conformación del Grupo de Artillería 102. Nunca recibí aviso sobre cuándo la unidad iba a ser trasladada al sur. Todo era improvisado. ¿Y cómo no lo iba a ser? El jefe del Ejército quién era entonces... [El teniente general Jorge Rafael] Videla, un pusilánime que le dio la Dirección Estratégico Operacional Principal a Menéndez... Menéndez hacía lo que quería y los otros aceptaban porque no tenían pelotas para pararlo. Él tenía jurisdicción desde Salta y Jujuy hasta Neuquén. Tenía una personalidad avasalladora, grosera, prepotente con la que se imponía. [El general de división Guillermo] Suarez Mason y más antiguo que Menéndez lo dejaba hacer. No descarto que algunos incluso aceptaran toda esa improvisación porque imaginaban que la guerra [que ellos decía buscaban] no iba a suceder. Toda esa improvisación se iba a repetir en [la Guerra de] Malvinas. Improvisación desde el punto de vista político, diplomático y militar. Imagínese que no teníamos material antiaéreo adecuado para esa guerra con Chile, a lo sumo misiles TigerCat, cañones Bofors de [calibre de] 40 milímetros y unos radares viejos. Cualquier ataque aéreo de Chile hubiéramos tenido que responderle con eso<sup>65</sup>.

Resulta plausible que las preguntas que formulara puedan ser provisionalmente respondidas invocando la mentada improvisación en el

---

<sup>65</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 14 de febrero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planeamiento militar argentino que mencionaba Balza en su testimonio, y de la que ya había dado cuenta en 2015 cuando señaló que:

Nadie apreció que Chile estaba mejor posicionado política y militarmente: con mucho menos destruiría una inconsistente ofensiva militar. La soberbia de Menéndez lo llevó a expresar: “Cruzaremos los Andes, les comeremos las gallinas, violaremos a las mujeres y mearé en el Pacífico”. La bravuconada era acompañada, en algunas unidades, por cartelitos que decían: “Ahora vamos al mundial del Beagle”, en alusión al triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol. La guerra no es un partido de fútbol (Balza, 2015, p. 152).

Pero también es posible sopesar el siguiente argumento: el Grupo de Artillería 102 era una unidad creada *ad hoc* para ser movilizada en el marco del Operativo Soberanía. Normalmente, las unidades a movilizar constituyen una reserva activa, listas para actuar como reemplazo o refresco de otras unidades cuando el conflicto se empieza a dilatar. De allí que este podría haber sido el motivo por el cual, aunque Balza fue convocado para asesorar al general de división Menéndez en la elaboración del plan de apoyo de fuego de la Dirección Estratégica Operacional Secundaria en el mes de octubre, sucediera que –como veremos– recién el 21 de diciembre de 1978 se incorporaran los soldados al Grupo de Artillería 102 y lo hicieran en el cuartel de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires (lugar que el mencionado Grupo nunca abandonó hasta su disolución a fines de enero de 1979). También es posible considerar otro argumento: que en el plan definitivo de la Dirección Estratégica Operacional Secundaria del Operativo Soberanía estuviera previsto el empleo de un grupo de artillería para dar apoyo de fuego a las unidades que invadieran territorio chileno por el paso Puyehue, pero que esa unidad no fuera, finalmente, el Grupo de Artillería 102. En definitiva, solo cuando podamos producir un análisis del Operativo Soberanía fundado en una pluralidad de fuentes documentales, y elaborar una interpretación más comprehensiva de las perspectivas y experiencias de diferentes actores sociales, estaremos en condiciones de responder mejor a aquellas preguntas.

## Conformación del Grupo de Artillería 102

En este apartado veremos cómo fue la creación del Grupo de Artillería 102. En el Ejército Argentino de aquellos años los grupos de artillería de campaña numerados con tres dígitos (conforme al sistema norteamericano) dependían de los comandos de cuerpo (no del comando de Brigada). En el caso del Grupo de Artillería 102 la dependencia correspondía al Cuerpo I de Ejército a cargo del general de división Guillermo Suárez Mason<sup>66</sup>. A su vez, en Junín tenía su sede el Comando de Artillería 101, que en 1978 estaba a cargo del coronel Leonel Antonio Barrios (D'Andrea Mohr, 1999, p. 240).

Una vez que Balza fue notificado de su nombramiento como jefe del Grupo de Artillería 102, supo que su primera tarea sería constituir dicha unidad. En la jefatura de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, el coronel Juan Carlos Medrano Caro (Promoción 82, artillería) le entregó un bibliorato o carpeta que contenía documentación e información para emprender dicha tarea. Balza cifraba enormes expectativas en la labor que debía concretar: 1978 era su primer año con el grado de teniente coronel y, por primera vez en su carrera militar, era jefe de una unidad.

Por entonces en la Argentina estaba en vigencia la Ley-decreto N.º 17.649 de Movilización sancionada el 1.º de marzo de 1968 durante la presidencia de facto del teniente general Juan Carlos Onganía y siendo comandante en jefe del Ejército el teniente general Alejandro Agustín Lanusse<sup>67</sup>. Dicha Ley-decreto establecía las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para el planeamiento y la ejecución de la movilización en tiempos de paz y de guerra, con el objetivo de satisfacer a las necesidades de la seguridad nacional en caso de guerra. El denominado Plan de Movilización Militar comprendía un Plan Conjunto de Movilización Militar y un Plan de Movilización de la Industria Militar. El primero, a su vez, formaba parte del Plan Militar de las Fuerzas Armadas cuyos componentes eran el plan de movilización económica, el plan de movilización social, el plan de movilización de política exterior y el plan de movilización de política interior. El capítulo III –“De las personas y los recursos”– establecía como carga pública de los habitantes de la Nación proveer a las necesidades de la movilización, proporcionando informes o datos, permitiendo inspecciones

---

<sup>66</sup> Suárez Mason fue comandante del Cuerpo I de Ejército entre 1976 y 1980.

<sup>67</sup> La Ley de Movilización de 1968 fue derogada por la Ley de Defensa Nacional de 1988.

en los lugares alcanzados por actividades de interés para la movilización, prestando servicios de carácter no habitual o extraordinario para los cuales se podía fijar una remuneración o indemnización. El personal movilizado por el decreto 2348 del Poder Ejecutivo Nacional para dar aplicación a la convocatoria a reservas afectaba a los ciudadanos que integraban la reserva fuera de servicio pertenecientes a las clases 1952, 1953, 1954, 1955 y 1958 (la clase 1959 era la que estaba alistada en las unidades), personal del cuadro de oficiales y suboficiales en situación de retiro, personal civil de las Fuerzas Armadas y exalumnos de los institutos militares<sup>68</sup>.

Como el Grupo de Artillería 102 estaba en plena conformación y el Grupo de Artillería 101 –con asiento natural en Junín– había sido destinado con todo su personal y sus medios a la provincia de Santa Cruz, era imperioso dotar a la nueva unidad de medios, entre ellos vehículos. Fue así que, sirviéndose de la vigencia de la Ley de Movilización (que no fue de aplicación hasta tres años después, en ocasión de la Guerra de Malvinas), Balza recurrió al registro de vehículos de la municipalidad de Junín para hacer un relevamiento de aquellos disponibles en el distrito que pudieran ser de utilidad para su unidad, especialmente camionetas y camiones para el transporte de personal y efectos. Una vez identificados los vehículos en el registro, se procedió a localizar a sus dueños para solicitárselos. Según recuerda Balza, el procedimiento requería ciertas formalidades que debían cumplirse entre el Ejército y los propietarios, pero estos últimos –según dice– los entregaron temporariamente sin manifestar inconvenientes<sup>69</sup>. También debieron comprar combustible, pilas, raciones de comida fría, entre muchas otras cosas, financiadas con recursos que proveyó el Estado Mayor General del Ejército. Balza envió a uno de sus oficiales a procurar financiamiento a Buenos Aires, y a su regreso, este le mostró una valija en cuyo interior había una cantidad considerable de dinero, destinado a solventar esos gastos. Supusieron que este procedimiento *sui generis* se correspondía con las urgencias impuestas por la movilización, pero para evitar cualquier complicación decidieron organizar la rendición de las adquisiciones de efectos con ese dinero mediante el mismo sistema de

---

<sup>68</sup> Las clases 1956 y 1957 fueron exceptuadas del servicio militar obligatorio.

<sup>69</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

rendiciones habituales –con *tickets* y facturas– que utilizaban para dar cuenta de los fondos de la unidad<sup>70</sup>.

El segundo jefe del Grupo de Artillería 102 era el mayor Aldo Antonio Valenzuela (Promoción 89, artillería); el oficial de Personal (S1) era Alfredo Noberasco (Promoción 95, artillería); el de Inteligencia (S2) y de Operaciones (S3) era Miguel Ángel García Moreno (Promoción 94, artillería); el de Logística era Horacio González (Promoción 96, artillería). Algunos de estos oficiales venían destinados de la Escuela Superior de Guerra, donde hacían el curso de oficiales de Estado Mayor. A su vez, los jefes de las baterías eran tres: Alfredo Leonardo Lafuente (Promoción 96, artillería), Carlos Esteban Pla (Promoción 96, artillería) y Julio Aníbal López (Promoción 96, artillería)<sup>71</sup>. Recibió otros oficiales –estima que en total serían unos 18 o 20– y unos 70 u 80 suboficiales para completar la dotación de la unidad<sup>72</sup>. Entre estos últimos había diez suboficiales que fueron destinados al Grupo de Artillería 102, al igual que Balza, desde la Escuela de Artillería<sup>73</sup>.

Los soldados eran ciudadanos residentes en los municipios de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires que habían hecho el servicio militar obligatorio previamente. Fueron convocados por imperio de la Ley de Movilización y, según cuenta Balza, la campaña de difusión se hizo por la prensa escrita y radial de la región. En la incorporación no se presentaron dificultades, pues recuerda que la inmensa mayoría respondió a la convocatoria. Los soldados fueron incorporados al Grupo de Artillería 102 el 21 de diciembre de 1978. Según estima Balza, fueron aproximadamente unos 400 soldados<sup>74</sup>. El bibliorato o carpeta que Balza había recibido en el

---

<sup>70</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>71</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>72</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>73</sup> Se trata del suboficial principal de intendencia Henry Edssel Ortiz, el sargento Juan Domingo Barzola, los cabos primero Hugo González, Julio Maldonado, Javier Britos, Sergio Chávez, Tomás Ponce de León y Ramón Aredes, y los cabos Bartolo Gutiérrez y Carlos Morales.

<sup>74</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 6 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estado Mayor General del Ejército contenía las funciones que los soldados habían desempeñado durante su servicio militar obligatorio. Sin embargo, esta información poco se adecuaba a la realidad:

Apenas un cincuenta por ciento de lo que decía el bibliorato coincidía con lo que habían hecho los soldados, así que a muchos de ellos los tuvimos que instruir de nuevo. Además había una novedad: los [cañones] SOFMA de 155 mm era nuevos, así que los que se habían desempeñado en las baterías no los conocían, porque había operado con los viejos [cañones] Schneider<sup>75</sup>.

Como señala Balza, al Grupo de Artillería 102 le fueron asignadas tres baterías –cada una con seis piezas– de cañones SOFMA de calibre de 155 mm recientemente producidos por Fabricaciones Militares acorde con un proyecto del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las FF. AA. (Citefa). Fueron a buscar los cañones a Buenos Aires y los trasladaron hasta Junín con camiones del Ejército<sup>76</sup>. El 6 de enero de 1979 el Grupo de Artillería 102 los disparó por primera vez en una instrucción en campos cercanos a la ciudad de Junín, y se constituyó así en la primera unidad de artillería del Ejército que disparó con ese nuevo material<sup>77</sup>. “Fue una unidad creada de un bibliorato, de la nada. Pero a fines de diciembre ya estaba conformada la unidad. Los soldados movilizados sabían que se los había convocado por el conflicto con Chile”<sup>78</sup>.

El Ejército también destinó a la ciudad de Junín oficiales jefes, oficiales subalternos y suboficiales retirados (en total, unos treinta cuadros) que se hicieron cargo de la seguridad del cuartel y de las responsabilidades del Área 131, que normalmente tenía asignado el Grupo de Artillería 101 e incluía los municipios de Junín, General Arenales, Rojas, Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bragado, Alberti y General Viamonte. Ya el

---

<sup>75</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>76</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 6 de abril de 2016 y 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<sup>77</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>78</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

27 de septiembre de 1978 el comandante del Grupo de Artillería 101, coronel Leonel Antonio Barrios, había convocado a todos los suboficiales retirados que residían en Junín y localidades cercanas a una reunión en el Teatro Municipal Horacio de la Cámara para tratar aspectos relativos a su situación de revista. Dicha reunión fue presidida por el teniente coronel (R) Lázaro Oscar Alberto Damonte (Promoción 75, artillería), jefe del Centro Subregional Junín de Enlace para el Personal Retirado del Ejército (Sepre).

El intendente municipal de Junín era un militar retirado, el capitán (R) Roberto Antonio Sahaspé<sup>79</sup>. Balza lo conocía de sus tiempos como cadete en el Colegio Militar de la Nación, pues Sahaspé también era artillero y pertenecía a la Promoción 83, dos años más “antiguo” que Balza<sup>80</sup>. En Junín se vieron en varias oportunidades, pero solo por cuestiones relacionadas con las actividades de Balza como jefe del Grupo de Artillería 102. El intendente Sahaspé, las “fuerzas vivas” (asociaciones civiles, empresarias, medios de comunicación, entre otros) y los vecinos de Junín ofrecieron su apoyo en el proceso de conformación del Grupo de Artillería 102. Uno de esos apoyos se materializó –como ya se mencionó– en una cuestión sensible para los propietarios de vehículos: la entrega de estos por un período no determinado para uso de la unidad, pues el Grupo solo disponía de los camiones proporcionados por el Ejército para trasladar los cañones SOFMA de calibre 155 mm. Como jefe de la unidad, a Balza se le asignó una furgoneta civil que lucía la propaganda de una conocida marca de pilas: “Eveready: una pila de vida”<sup>81</sup>.

La municipalidad de Junín donó al Grupo de Artillería 102 su bandera de guerra. La entrega se produjo el día 9 de enero de 1979 en la plaza de armas del cuartel del Grupo de Artillería 101 (donde en ese momento tenía su asiento el Grupo de Artillería 102). De la ceremonia participó el intendente Sahaspé y el inspector de Artillería del Ejército, coronel Félix Cambor, que había sido jefe de la subzona de Defensa 13<sup>82</sup>. También asistieron autoridades municipales, policiales, judiciales –el presidente del Tribunal de la Cámara de

---

<sup>79</sup> El pase a situación de retiro de Sahaspé se hizo efectivo el 1 de octubre de 1970.

<sup>80</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>81</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 13 de abril de 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<sup>82</sup> El 23 de enero de 1979 el coronel (R) Félix Cambor asumió como intendente del municipio del conurbano bonaerense de La Matanza.

Apelaciones, doctor Juan Carlos Venini, y otros magistrados–, representantes de instituciones de la sociedad civil –el ingeniero Diego González, del Departamento de Mecánica de la Línea San Martín de Ferrocarriles Argentinos; el presidente de la Sociedad Rural, Jorge Cogorno, y el presidente de la Sociedad de Comercio e Industria, Carlos Screpis; y por el Banco de Junín, Alfredo Bergamini y C. R. Terragno–. Según consigna el artículo de prensa, los asistentes estaban distendidos, porque poco tiempo antes los gobiernos de Argentina y Chile habían firmado un “documento” o “pacto de no agresión”.

La ceremonia comenzó con la presentación de las tropas a la autoridad militar que presidía el evento: el coronel Félix Camblor (Promoción 78, artillería). Luego este último y Balza revistaron a las tropas en la plaza de armas del cuartel. En su mensaje como jefe de la unidad, Balza agradeció a las autoridades y a la sociedad juninense por el apoyo y acompañamiento, y ponderó el desempeño de los oficiales, suboficiales y soldados a su mando. De estos últimos dijo:

Incorporados el 21 de diciembre, tras quince días de intenso período de instrucción, se puso en evidencia la alta eficiencia técnica alcanzada al abrir el 6 de enero de 1979, a las 9:20 horas el fuego con el material de artillería más moderno que se posee, durante un ejercicio efectuado en la zona.

Soldados: crear es producir, es materializar una cosa que antes no existía. Con el esfuerzo de todos hemos logrado dar vida a una unidad más de artillería del Ejército. Este aliento nos llevará, sin duda ninguna con el correr de los años a recordar con orgullo, con cariño y con respeto, a este Grupo (*Semanario*, Editorial, 14 al 20 de enero de 1979, p. 1).

A continuación, el secretario de Gobierno de la municipalidad, el doctor Eleodoro Sciutto, procedió a la lectura del documento firmado por el intendente por el cual se donaba la bandera de guerra al Grupo de Artillería 102. En los considerandos, el intendente Sahaspé invocaba el orgullo que sentía como “soldado a quien el destino ha puesto al frente del gobierno de la ciudad”, al hacer entrega de esa bandera de guerra. Luego de que esta fuera bendecida por el presbítero Gregorio González, se adoptó el dispositivo de desfile y se dio comienzo al mismo. Tras la desconcentración, la ceremonia culminó hacia las 20:30 horas y como cierre se ofreció un ágape en el casino



de oficiales, del cual participó –como se destacaba en el artículo– el coronel Camblor en su calidad de exjefe de la Guarnición Junín y máxima autoridad militar allí presente.

La ceremonia de despedida del 29 de enero de 1979 que acompañó la disolución del Grupo de Artillería 102, también contó con la presencia y el apoyo de las autoridades municipales y de la comunidad de Junín. Estuvo además el comandante de la Subzona de Defensa 13, coronel (R) Rómulo Horacio Bustos (Promoción 69, artillería). Esta vez el acto ocurrió en las calles de la ciudad. La convocatoria que circuló por la prensa el día anterior invitaba a la población a darse cita en la intersección de la calle Almafuerte y Avenida San Martín (*La Verdad*, Editorial, 28 de enero de 1979, p. 5). En esta oportunidad correspondió a Balza pronunciar el mensaje de despedida como jefe de la unidad. Dijo entonces a sus soldados:

Ustedes han concurrido al llamado de la Patria dejando detrás de sí padres, esposas, hijos, seres queridos, ocupaciones y posponiendo problemas particulares, lo que constituye un gran sacrificio por lo que supone también una fuerza moral ejemplificadora.

Vuestro esfuerzo, al igual que el de los integrantes de otras FF. AA. y en particular el de los camaradas del Comando y Grupo de Artillería 101 que pronto estarán con nosotros, permitió que la Nación alcanzara su objetivo sin llegar al empleo del poder militar, pero debemos ser conscientes que el éxito de las negociaciones está directamente relacionado y descansa en el sacrificio y la vigilancia del Soldado Argentino.

Vuelvan a sus hogares, a sus quehaceres cotidianos con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción de que para Dios no hay héroes anónimos.

Como jefe de esta Unidad estoy orgulloso de haber mandado a caballeros soldados que sin distinción de grados se caracterizaron por el fiel cumplimiento del sagrado deber militar (*Semanario*, Editorial, 4 al 10 de febrero de 1979, p. 1).

Tras los mensajes, el personal de la unidad desfiló con sus poderosos cañones SOFMA de calibre 155 mm y sus respectivos camiones, por las calles

la ciudad al concluir el acto. El público (numeroso, según la prensa) aplaudió a las tropas en el desfile. Cabe mencionar que el periodista del *Semanario* que cubrió el evento destacaba de la personalidad de Balza el “respeto que siempre ofrendó hacia el periodismo” al brindarles información cuando se le requería, en una actitud que –de acuerdo con el autor del artículo– es necesaria para que el periodismo cumpla con su función social. Una función que –ampliaba en tono de queja– “no siempre tiene la interpretación debida o el respeto esperado” por parte de los interlocutores con los que lidian los periodistas. Por el contrario, decía, “Balza permanentemente esclareció e hizo conocer las actitudes y rendimientos castrenses de las disciplinas a su cuidado” (*Semanario*, Editorial, 4 al 10 de febrero de 1979, p. 1).

Los gestos de apoyo de la comunidad juninense se expresaron también en circunstancias muy particulares. Como habitualmente hacía en todos sus destinos, Balza se ocupaba de la preparación física del personal a su cargo y de la propia. Así fue que pronto acostumbró al personal a salir a trotar. En una ocasión trotó junto con unos 15 oficiales y suboficiales en horas de la tarde, con el agobiante calor de los meses de diciembre o enero. Cuando regresaron al cuartel descubrieron que no había una gota de agua. Alguien dijo que conocía al dueño de un hotel cercano y que podía preguntarle si les permitían bañarse allí, pues estaban muy transpirados. Hicieron las consultas y la respuesta fue positiva. Se trasladaron –quedaba cerca– y al llegar descubrieron que se trataba de un hotel alojamiento, es decir, uno que ofrecía habitaciones por horas para parejas de la ciudad, especialmente aquellas que no disponían de un sitio para estar en intimidad. Como el calor apretaba y la transpiración tras el ejercicio era insoportable, no se echaron para atrás. Poco después fueron saliendo del hotel, la mayoría vestidos con su uniforme, sin olvidar agradecer al dueño por facilitarles aquel reparador servicio, que, según dicen, el hombre ofreció con buen ánimo aun a sabiendas de que aquel día, algunos clientes habían dado la vuelta cuando ingresaron al establecimiento y se toparon con la tropa<sup>83</sup>.

Ahora bien, con la disolución del Grupo de Artillería 102, los vecinos de Junín y de los municipios cercanos no clausuraron su experiencia directa con

---

<sup>83</sup> Entrevista al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 31 de enero de 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

el conflicto entre Argentina y Chile. Aún restaba el regreso desde Santa Cruz del personal del Grupo de Artillería 101 al mando del teniente coronel Rodolfo Jorge Rodríguez (Promoción 82, artillería) y del Comando del Artillería 101, que había sido despla-zado hacia el sur patagónico, próximo a la ciudad de Río Gallegos, a fines de sep-tiembre de 1978, con su tropa de unos 600 hombres. Su regreso se produjo en la mañana del 6 de febrero de 1979. Una enorme movilización popular los recibió en la estación de trenes, los acompañó aclamándolos en su desfile por las calles de Junín y fue rompiendo de manera progresiva la rigidez del dispositivo a medida que familiares y amigos abrazaban a los soldados para darles una afectuosa bienvenida. Frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola, el cura párroco monseñor Domingo Cancellieri ofició una invocación religiosa, y el intendente Sahaspé dio su mensaje de bienvenida a los hombres que habían partido meses atrás hacia el sur “dispuestos a dar la vida por un mismo ideal: la defensa de nuestra soberanía”. Este último agradeció especialmente a los jefes, oficiales y suboficiales del Ejército, “hombres que han hecho de la profesión militar un culto, guiados por una profunda vocación de servicio”, por ser los “responsables de la vida de sus hijos, señora madre, de sus hermanos, de sus nietos, de sus esposos, de sus novios, de sus amigos” y, en última instancia, de esos “ciudadanos que un día llegaron al cuartel y aprendieron el arte de la guerra para poder mantener la paz en un marco digno”. Es por ello –decía– que “la ciudad de Junín se siente orgullosa de tener en su seno a esta guarnición de artilleros (...) Viva el Ejército Argentino” (Semanario, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1).

### Percepciones sobre el conflicto del Beagle en Junín

La colaboración de la dirigencia y sociedad juninense con las Fuerzas Armadas en relación con la movilización militar, las manifestaciones de reconocimiento ofrecidas en ocasión del regreso de las tropas del Grupo de Artillería 101 y el Comando de Artillería 101 y la disolución del Grupo de Artillería 102 durante los meses más álgidos del conflicto internacional (septiembre de 1978 a principios de febrero de 1979) son expresivas no solo de la legitimidad social de la que gozaba el Ejército en el ámbito local – donde tenía una fuerte presencia con la Guarnición Junín–, sino también del apoyo popular que suscitó en diversos sectores de la sociedad argentina la inminencia de una guerra con Chile, que se libraría –según esa percepción–

en pos de un fin patriótico fundamental: la salvaguarda de la soberanía nacional en el Beagle.

Pablo Lacoste (2003) sostiene que el nacionalismo y el militarismo, pero también la producción y difusión de conocimientos históricos y geográficos sobre el tema efectuadas por historiadores, periodistas y educadores argentinos, promovieron en la sociedad argentina la apropiación de representaciones de Chile como un país “imperialista”, “expansivo” y “usurpador” y, contrariamente, de la Argentina como una nación que a lo largo de su historia fue perdiendo o cediendo soberanía territorial frente a las pretensiones de sus vecinos. Es por ello que para el autor, estas representaciones del otro fueron decisivas en la construcción de un amplio consenso en torno a las reivindicaciones territoriales argentinas puestas en juego durante el conflicto con Chile, así como en la popularidad que alcanzó la movilización militar y el potencial escenario de guerra hacia fines de 1978<sup>84</sup>. Una revisión de la prensa local de Junín en los meses de septiembre de 1978 a febrero de 1979 es bien representativa de esto:

La Nación en busca de su destino de Grandeza que se obtiene no solamente en la consolidación económica, sino también en la realización soberana de una voluntad. No corresponde pecar por soberbia, pero tampoco ser humillados en aras de la buena voluntad, la paz y la hermandad. Las intenciones sublimes pasan una sola vez en la vida de los hombres, es necesario saber aprehenderlas en esa instancia fundamental. La ARGENTINA tal vez vive su hora decisiva (*Semanario*, Editorial, 27 de octubre de 1978, p. 1).  
La imagen que acompañaba aquellas afirmaciones en esa edición especial

---

<sup>84</sup> Dice al respecto: “la aceptación del resultado de los arbitrajes y el pacifismo fueron tradición en la diplomacia argentina desde 1875 en adelante. Por eso llama tanto la atención lo sucedido en 1977 y 1978: el rechazo del laudo arbitral del Beagle y la movilización masiva de fuerzas militares hacia la frontera con vistas a invadir Chile. Llama la atención porque no fueron medidas unilaterales de un gobierno de facto sino que contaron con el apoyo explícito de dirigentes políticos, entidades gremiales, empresarias y de trabajadores; medios de prensa, incluyendo periodistas de prestigiosa trayectoria, que firmaban sus notas. ¿Cómo puede explicarse este vuelco casi unánime de la opinión pública argentina –más allá del atenuante que pudo significar la presencia de un gobierno de facto- hacia posiciones claramente antichilenas? Evidentemente, se había consagrado la tesis de la ‘Argentina fantástica’ y el mito de Chile como un país eminentemente expansionista y, por tanto, amenazante para la Argentina. Por eso había que ‘decir basta’ y ‘ponerse de pie’ de una vez para hacer frente al ‘agresor’ (Lacoste, 2003, pp. 379-380).

de *Semanario* tenía en primer plano una composición que reunía a unos soldados en formación, escolares con la bandera argentina y de fondo una estatua ecuestre del general José de San Martín, el “Padre de la Patria”. Esa edición especial incluía, asimismo, extensos artículos que fundamentaban la soberanía argentina sobre las islas Picton, Nueva y Lennox sirviéndose de argumentos históricos y geográficos y con cartografía. En otro número de la misma publicación, un artículo titulado “Rumbo al sur” relataba y retrataba con fotografías un contingente de tropas destinadas a Santa Cruz que partió desde la estación ferroviaria de Junín. El texto destacaba algunas expresiones:

Un compromiso histórico insoslayable coloca a LA PATRIA de Pie frente a una decisión inminente y trascendental. Una prueba de fuego para todos los argentinos, que como nuestros antecesores asisten al cumplimiento de un deber fundamental, la defensa de nuestra soberanía. El Sur se presenta como un bocado apetitoso para las aspiraciones expansionistas chilenas. Precisamente para reforzar aquel sector de la Argentina partió en horas de la tarde un tercer contingente de nuestro Glorioso Ejército (...) Padres, hermanos, novias, hijos, amigos y familiares concurren a despedir a los jóvenes patriotas hacia el sur a cumplir una sublime misión (*Semanario*, Editorial, 10 al 16 de diciembre de 1978, p. 1).

Estas expresiones eran acompañadas con fotografías de las tropas y de las personas que acudieron a despedirlas. El texto también decía:

Soldados y oficiales estaban confundidos en un solo compromiso: el de defender la soberanía argentina, la soberanía de todos nosotros. Con dignidad, con altura, con la frente bien alta, marchaban todos a cumplir el compromiso. La gallarda imagen del Ejército Argentino, con su vocación de servir a la Patria andará en la montaña, el ripio, el mar, en el aire evocando las gestas gloriosas del Gran Capitán [el general José de San Martín]. Soldados y oficiales, hombres valientes, no permitirán ni dejarán que se avasalle los sublimes derechos legados social, histórica y políticamente a lo largo de nuestra independencia.

Mucha gente de Junín ya se encuentra en la zona austral argentina. No es el primer contingente de hombres que parten hacia allí. Ya lo han precedido otros numerosos grupos. Y en los próximos días lo harán más.

En esa hora que estuvimos junto a ellos pareció que el tiempo nos hizo retroceder, como si la historia hubiese dado vuelta. Nos estaba haciendo comprender el deber, el sacrificio, la función que cumplen las Fuerzas Armadas en la vida de un país, de una nación que no quiere ser avasallada. Vimos en sus caras, a los Faluchos, a los Belgranos, a los Güemes. Vimos en sus caras a los héroes legendarios que hicieron posible inscribir con orgullo un nombre en la universalidad de este mundo. Cambiaron los hombres pero no murió la doctrina. Hoy, vibraron las almas, se hincharon los pechos. Todo era celeste y blanco (*Semanario*, Editorial, 10 al 16 de diciembre de 1978, p. 1).

Conforme se sucedían los días del mes de diciembre, el conflicto internacional parecía escalar y el horizonte cercano de la guerra era percibido como inevitable según el punto de vista expresado en la prensa juninense, pero ampliamente reconocible en diversos sectores de la sociedad argentina, debido a la intransigencia chilena frente los legítimos reclamos soberanos argentinos. Tal apreciación omitía dos hechos importantes: que Chile había aceptado el laudo británico y la Argentina lo había rechazado, y que las Fuerzas Armadas argentinas habían planificado y estaban dispuestas a ejecutar una ofensiva militar sobre territorio chileno cuyo día D era el 22 de diciembre de 1978. Veamos pues cómo se caracterizaba aquel momento decisivo en el *Semanario* de Junín:

HORA GRAVE. Difícilmente el país se ha encontrado en una encrucijada tan delicada, tan extremadamente grave como las que comienzan a vivirse a partir de estas horas. La cuenta regresiva parece haberse puesto en marcha a raíz de la intransigencia chilena a encontrarse un arreglo justo, decoroso y digno para ambos países. Todos los esfuerzos realizados por el gobierno argentino, tendientes a hallar una solución pacífica han sido en vano, Chile no ha dado un paso para modificar su postura. A esta altura de los acontecimientos, que parecían a primera vista incontrolables, LA PATRIA debe estar de pie, con la frente alta y los hombres erguidos para afrontar las graves consecuencias que parecen desencadenantes de una actitud histórica incuestionable que lleva implícita todo el sentir y el amor hacia los grandes ideales impregnados en nuestro suelo. La Nación amenazada debe ya tomar conocimiento de estas difíciles circunstancias por las que atraviesa. No escapa al consenso público que las relaciones

argentino-chilenas han entrado en un estado crítico. HORA CERO, hora de decidir el destino y el futuro de esta tierra de paz que es la Argentina. Miles de soldados se han movilizado con un idéntico objetivo: DEFENDER LO NUESTRO, junto a ellos todos los argentinos, junto a ellos sus familiares, sus padres y sus madres que se unen a través de una comunicación simbólica como es la comunicación del corazón. Miles de almas en juego, el país convoca, la Patria llama y el cumplimiento de un deber sublime lo exige (*Semanario*, Editorial, 10 al 16 de diciembre de 1978, p. 1).

La soberanía nacional como bien simbólicopreciado para todo ciudadano era asociada a otros valores fundantes de la sociedad como la familia. Así pues, la publicación del poema escrito a su madre por Sergio Perrela, soldado conscripto del Grupo de Artillería 101 destinado en Santa Cruz, agradeciéndole “por todo lo que me diste y me seguirás dando” en la vida, era presentado con el siguiente texto en otro ejemplar de *Semanario*, junto con una fotografía del joven con su uniforme y su fusil:

La Patria le está pidiendo su presencia en carácter de soldado. Allá lejos. En una zona distinta. En Río Gallegos. En un sitio por dónde anda con sus pasos de joven, viviendo de cerca la experiencia total que significa en la vida del hombre, al consubstanciarse con expresión castrense. Y es entonces cuando en los momentos de silencio, pareciera cobrar más vigencia los valores permanentes de la familia. Y por sobre sus integrantes aparece más nítida la presencia casi ilustre e inconmensurable de la madre (*Semanario*, Editorial, 12 al 18 de noviembre de 1978, p. 1).

En otro número se publicó una carta escrita por los soldados juninenses Miguel Ángel Chami y Ricardo de la Fuente, dirigida al director de ese medio de prensa gráfica, Alberto Marrese, donde reconocían el apoyo recibido por sus conciudadanos en aquellas semanas que llevaban destinados en el sur argentino:

Siendo soldados nos hemos dispuesto a servir a nuestro país, y siendo Argentinos nos sentimos orgullosos de nuestro Junín, porque Junín es un amigo fiel, que en este mal trance, apoyó a todos los que con él crecemos y convivimos. Sucede que nos ponemos a pensar todo lo hecho hasta aquí, y nos viene a la mente, nuestra reincorporación al

Ejército, nuestros preparativos, vuestro adiós, esto que hoy vivimos y el calor y la generosidad, puesta de manifiesto, en los regalos que fuimos recibiendo de nuestros vecinos. Porque nuestra Navidad este Nuevo Año, han comenzado con calor de hombres y el sentir de una ciudad. “Junín nos enseñó muchas cosas; sobre todo a quererla, y con ese sentimiento, es que dos juninenses nos unimos en las malas para gritarle a nuestra tierra: GRACIAS JUNÍN!!! Por la desinteresada [sic] colaboración de la Sociedad de Comercio e Industria. Por las pequeñas cosas que al llegar a nuestras manos, pusieron color y sabor a familia, a todo este grupo de soldados reservistas que compartimos; la fe que también ustedes sienten. Por eso nuevamente GRACIAS JUNÍN. Como deseamos que estas pocas líneas lleguen a toda la ciudad, nos hemos dirigido al ‘SEMANARIO’, que fue el único medio de difusión que al partir nos acompañó con un HASTA PRONTO (Semenario, Editorial, 21 al 27 de enero de 1979, p. 1).

La llegada de la Navidad de 1978 y, pocos días antes, del ofrecimiento de la mediación del papa Juan Pablo II, suscitó expectativas de que el conflicto internacional se reencausara por la vía diplomática. De allí la tapa del *Semanario* de entonces, que anunciaba que la Navidad se vivía “entre la angustia y la fe” (Editorial, 24 al 31 de diciembre de 1978, p. 1). A principios de enero de 1979 este medio publicó un artículo de autor no determinado que reunía testimonios de los vecinos acerca del conflicto. Preguntaba: “¿Qué dicen o qué piensan los juninenses del Beagle? (...) ¿Estamos concientizados entonces de lo que está sucediendo en el sur de nuestro territorio?” (Semenario, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1). La respuesta a estos interrogantes era que, de los 84 encuestados en la vía pública, 57 “adujeron no saber nada en profundidad lo que está aconteciendo (...) 70 por ciento de la población, casi podríamos afirmarlo, ignora el significado, el profundo dilema que implica el ‘caso Beagle’” (Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1). De esas 57 personas que no tenían un conocimiento en profundidad, 25 dijeron saber algo a través de la prensa y seis

... dijeron fríamente no saber nada, y mucho menos interesarles lo que está pasando a tantos kilómetros de distancia, pues no se puede decir hasta qué punto ello no es tan solo una maniobra del gobierno para aplacar los comentarios acerca del aumento del costo de la vida,



manteniendo a la población preocupada por otra circunstancia y que no piense en ello (*Semanario*, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1).

Estas afirmaciones acerca del desconocimiento –e incluso el desinterés– por el conflicto internacional contrastan con el apoyo popular que la movilización militar y la causa por la soberanía argentina sobre las islas Picton, Nueva y Lennox había encontrado en la ciudad, tal como el propio *Semanario* lo había registrado en las semanas previas. En este sentido, pienso que, salvo en el caso del manifiesto desinterés por el tema, no hay contradicción entre no conocer en profundidad –según la expresión del periodista– y apoyar la causa. Lo que el artículo revela es que el autor esperaba diagnosticar el grado de precisión de los conocimientos históricos y geográficos que explícitamente decían tener sus conciudadanos, y, como resultado de su pesquisa, resultó que estos últimos declararon no tener un saber preciso sobre aquellos. Es por esta razón que completaba su diagnóstico afirmando que, desde que comenzara la mediación papal, “Todo se viene dilatando, no hay información oficial de la realidad de las negociaciones” y era “muy peligroso” que “los ciudadanos” dejaran de “preocuparse” (*Semanario*, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1). Y dado que Junín había enviado al sur del país a jóvenes soldados conscriptos del Grupo de Artillería 101 y del Comando de Artillería 101, era indispensable –a su criterio– que sus vecinos tuvieran un conocimiento cabal del porqué del conflicto con Chile. De allí que si un 70 % de los encuestados carecía del mismo, esto debía considerarse como un hecho preocupante. Afortunadamente, concluía, esa tendencia no era del todo negativa, pues:

... ninguno estuvo de acuerdo en aceptar que los chilenos nos arrebaten así porque sí nomás, territorio que es nuestro. Luego del total unos 23 asintieron que si “es necesario la guerra, pues que se haga, aunque nos cueste mucho a los argentinos”, pues ‘no podemos dar el brazo a torcer’ (*Semanario*, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1).

Ese 27 % de los encuestados que dijo estar a favor o no descartar la alternativa de una solución bélica al conflicto tenía, como contrapartida, un porcentaje (no especificado en el artículo) de personas que se manifestaron

contrarias a la opción de una guerra. Entre estas últimas posiciones se encontraban los testimonios de tres mujeres y dos hombres que decían:

Nélida Izaguirre: “Yo leo los títulos de los diarios nada más, así que realmente no sé nada. Me preocupa que no haya guerra. Que haya paz”.

María Susana Franco: “No tengo un conocimiento profundo. Pienso lo mismo que puede pensar todo argentino, que sería una gran pavada, aparte de un gran desastre, llegar a enfrentarnos en guerra con Chile. Son dos países que aún les cuesta mucho superarse por sus propios medios. Y una guerra nos haría tocar fondo. Me preocupa. Y aparte pienso que ningún enfrentamiento bélico puede después devolver los hijos que van a morir. Además creo profundamente que en la Argentina no hay conciencia de guerra y en Chile menos. Allí las paredes de las casas están pintadas con inscripciones que rezan: ‘No queremos guerra, queremos comida’ y creo que ahí está la conciencia del pueblo”.

Elena Sosa: “Yo tengo mucha fe en los argentinos. No debemos derramar sangre, si, analizar las cosas con tranquilidad y buscar un arreglo tan anhelado por las mamás. No interesa islas más o islas menos, si interesa un arreglo para siempre”.

Julio Ruzzi, operador televisivo: “Siempre Chile ha tratado de quitarnos territorio, ahora lo quiere hacer sacándonos por la fuerza a las islas Lennox, Nueva y Picton. Como argentino aspiro a una pronta solución, siempre y cuando sea en paz. Confío plenamente en lo que se arribará con la intervención del Cardenal Samoré. Pero también que lo que es nuestro siguiera siéndolo”.

Rodolfo Troiano, relojero: “El conocimiento que tengo, es a través de lo que he leído en los diarios y los comentarios generales que hay en la calle. Yo tengo fe y esperanza que se va a solucionar, la solución no te la puedo dar, porque no sé cómo están las transacciones [sic]. Pienso que va a ser en paz. Ahora el arreglo que puede llegar a haber ni idea” (*Semanario*, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1).

En otros testimonios, sin ser necesariamente belicistas, no se descartaba la opción a favor de la guerra. En estos se destaca la denuncia contra la

usurpación chilena y la necesidad de ponerle un límite a sus pretensiones sobre territorio argentino:

Humberto Schneider, mozo: “Si vos estás en mi casa y querés ocuparla ¿qué tengo que hacer yo? Es difícil saber qué camino tomar, si por las buenas o por las malas. Se ve en la gente que sale y va a las confiterías. Porque aquellos que tienen familiares directos, esos no tienen ganas de salir. Lo[s] que no pasamos por esos momentos muchas veces decimos: ‘que se arme de una vez por todas así se acaba todo de una buena vez’. Pero no es tan solo eso. La cuestión es pensar en los que están allá, que son los que van a sufrir. Y en las madres que van a quedar aquí sufriendo. En realidad es bastante complicado el asunto”.

Ceferino Rojo, empresario de sala cinematográfica: “Conozco sobre el diferendo a través de lo que se ha publicado. No he podido profundizar en el tema como realmente me gustaría. De cualquier manera creo que los chilenos tratan de robarnos ese sector de las islas porque es una fuente de recursos naturales de excelente calidad, además de significar para ellos el comienzo de una protección alimenticia futura. Todos sabemos las riquezas existentes en el sur de nuestro país. Creo que a los chilenos eso le [sic] interesa sobremanera. Como así también que las intenciones de ellos están puesta [sic] en algo más que quizás aún no alcancemos a vislumbrar. Personalmente creo que una guerra con Chile sería el chispazo que encendería la mecha mundial. Las condiciones están dadas como para que ello ocurra así. Hay muchos intereses de otras potencias extranjeras en todo esto. Pero de cualquier manera soy optimista y pienso que se va a solucionar en forma pacífica”.

Arnoldo Franco: “Pienso que llegó el momento de decirle basta a los chilenos. Pero habrá que ver si este basta nos conviene o no. Eso tendrán que decirlo quienes están tratando de superar esto. Pero no vaya a ser que le hagamos la guerra a los chilenos por tres islas que no valen ni cinco centavos. Pero... deben tener su importancia” (*Semanario*, Editorial, 7 al 13 de enero de 1979, p. 1).

Cuando regresaron las tropas a Junín se publicaron en la prensa local adhesiones de municipios, asociaciones civiles, cámaras empresarias,

empresas (grandes, medianas y pequeñas) y cooperativas de la ciudad y de la región, apoyando la causa argentina en el Beagle y agradeciendo a las Fuerzas Armadas, a los soldados, al pueblo e incluso en un caso, a las madres argentinas. Así lo hicieron por ejemplo:

- Municipalidades: General Arenales: ‘Al Comando y Grupo de Artillería 101 –oficiales, suboficiales y tropa- en esta hora feliz del reencuentro, nos adherimos con orgullo junto a los gloriosos hijos de Nuestra Patria’. General Viamonte: ‘El Pueblo todo se estremeció a tu regreso de las tierras del sur, y con orgullo de ser Argentino queremos llegar con nuestro reconocimiento a Ti Soldado de San Martín’ (*Semanario*, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1)<sup>85</sup>.
- Asociaciones civiles: Club Defensa Argentina: ‘La defensa de nuestro territorio es una obligación de todo quien habita este suelo, y al encontrarte en estos momentos soldado con el deber cumplido, lleva contigo el reconocimiento profundo de todos los argentinos’. Liga Deportiva del Oeste: ‘Al Comando y Grupo de Artillería 101 –oficiales, suboficiales y tropa- en esta hora feliz del reencuentro, nos adherimos con orgullo junto a los gloriosos hijos de Nuestra Patria’. Club Atlético Mariano Moreno: ‘Recién al retorno a sus hogares y recibir el abrazo de los hijos o la bendición de los padres, nuestros soldados abandonaron la disciplina de la patria que comprometía sus valientes decisiones’. Club Rivadavia: ‘El pueblo todo se estremeció [sic] a tu regreso de las tierras del sur, y con el orgullo de ser argentino, queremos llegar con este reconocimiento a ti soldado de San Martín’. Club Social y Deportivo Suixtil (*Semanario*, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1).
- Cámaras empresarias: Sociedad Rural de Junín: ‘El Pueblo es la Patria y por eso es dable decir que la Patria salió a relucir sus banderas de gloria al poner en las calles de Junín su sentir en el recibimiento a los soldados de la Soberanía. El gobierno como espectador de la emotividad y firmeza de las decisiones del pueblo y soldados, puede engullecer su responsabilidad con lo ocurrido. Soldados de Junín:

---

<sup>85</sup> En la nota se decía que el intendente de Junín —al que tácitamente criticaban por ser “nativo de Azul”—se había rehusado a saludar con una adhesión a los soldados desde las páginas del *Semanario*. Archivo Histórico de Junín.

las instituciones se hacen presente y saludan a la Patria en el Pueblo y sus Soldados' (*Semanario*, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1).

- Empresas y cooperativas: Casa de acopio de cereales Cogorno y Cía.: 'Bravo Soldado Argentino'. La Juninense: '¡Bienvenidos soldados argentinos!'; Liga Agrícola Ganadera Cooperativa Limitada: '¡La patria los convocó y dijeron presente!'. Sanitarios, aberturas, bronces y artículos para el hogar de Eugenio Conchiglia: 'Saludamos al soldado y pueblo, quienes demostraron entereza y valor, por la defensa de nuestro territorio'. Cooperativa de Consumo Unión Ferroviaria Ltda.: 'Saludamos al soldado y pueblo, quienes nos demostraron entereza y valor, por la defensa de nuestro territorio'. Cooperativa el Hogar Obrero: '¡Gracias Soldado! Estuvieron cerca de la guerra, por eso aprendieron a amar la paz'. Círculo Médico de Junín: 'La ciudad embanderó sus casas, una multitud voceó la soberanía nacional en sus calles. Nuestros soldados fijaron límites sureños de la Patria. La historia se los agradecerá'. Sanatorio Junín S. A.: '¡Viva la Patria!... Representada por nuestro soldados en pie de guerra. Nuestro enhorabuena por su retorno a los hogares'. Cincotta Neumáticos y servicios de gomería: 'Al despedirnos porque sus hijos iban a la vida o la muerte, las madres iniciaron el heroísmo nacional. Un homenaje para ese valor silencioso'. Albino Rozzi e Hijos: '¡Gracias argentinos guapos!'. Junín Refreshcos: 'Gracias soldados, por defender nuestra soberanía'. Caños de Escape Nica: 'Por este medio saludamos a las Fuerzas Armadas, soldados y pueblo en general, quienes afrontaron con estoicismo la defensa de nuestra soberanía'. Sociedad Protectora de Animales y Estación de Servicio Julio A. Roca: 'La soberanía territorial de la patria reclama el esfuerzo y nuestros soldados se presentaron a un tiempo a los cuarteles. El pueblo lo despidió con un abrazo que acaba de repetirlo al recibirlos de vuelta ¡Un gran saludo a nuestros soldados argentinos!'. Farmacia de Paul: 'Con pleno orgullo de ser Argentino, nuestra adhesión a quienes defendieron nuestra soberanía'. Mendi: 'Saludamos al soldado y pueblo, quienes nos demostraron entereza y valor, por la defensa de nuestro territorio'. Luis A. Velazco: 'Nuestro afectuoso reconocimiento a las Fuerzas Armadas de la Patria'. Palpalá Automotores: 'Gracias soldado, gracias...'. Industrias Plásticas Martínez: '¡Viva la Patria! Un abrazo a sus soldados. El corazón de Junín latió estremecido'. Pintec: 'Bravo soldado y pueblo argentino que supiste defender con orgullo y valor nuestro territorio'. Di Marco Combustibles S. A.: 'A quienes estuvieron en nuestros límites sureños,

a quienes defendieron con firmeza y valor nuestro destino soberano. GRACIAS, mil veces GRACIAS'. Electricidad Junín: 'Saludamos al soldado y pueblo, quienes demostraron entereza y valor por la defensa de nuestro territorio'. Romero y Quarín Ingenieros Civiles: 'Hacemos llegar nuestro reconocimiento profundo a las Fuerzas Armadas y Soldados, que en un momento tan trascendental para nuestro País, supieron actuar con prudencia y firmeza por la defensa de nuestro territorio'. Ricardo Delmastro Moda Argentina: '¡Soldado! Síntesis de Soberanía, Libertad y Patria'; entre otros (Semanario, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1).

También una solicitada agradecía al Ejército Argentino: "Un ayer y un hoy cargado de gloria. Un compromiso que nunca se eludió. La historia jamás olvidará a Junín. El Ejército Argentino lo hizo posible" (Semanario, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1). Y el propio *Semanario* publicó un extenso mensaje donde enlazaba el protagonismo que los soldados juninenses tuvieron en esos meses con la gesta sanmartiniana de la independencia nacional y americana:

El Ejército convocado en sus soldados, la juventud de la Patria, vuelve a sus cuarteles y la ciudad de Junín celebra los actos conmemorativos, el pueblo en la calle, ávido de reencuentro histórico (...) Libertador de Pueblos de América: estos soldados son tus hijos del alma, que siguen en copia la arrogancia de aquellos que formaste en El Retiro, cuando preparabas el combate de San Lorenzo y soñabas con trasponer la Cordillera de los Andes. ¡San Martín! Te pido la venia para esta representatividad espiritual de la ciudad de Junín y déjame expresarte lo que el pueblo te reconoce: esa fuerza moral sanmartiniana, muchas veces inalcanzable, pero siempre perseguida como ideal de las generaciones. Aquí, en tu redor, están las madres de los soldados que desfilan bajo la indicación de tu bronce, señalando dónde estaba el triunfo de la batalla. Son copia de las madres mendocinas que te llevaron sus joyas para que las transformaras en cañones. Aquí están a tu redor, y porque te ofrecieron las joyas de sus hijos merecen todos los honores de tu celebración (Semanario, Editorial, 11 al 17 de febrero de 1979, p. 1).

Tales fueron algunas de las manifestaciones de apoyo más elocuentes que la sociedad de Junín dispensó públicamente a sus “soldados” y a las Fuerzas Armadas en aquellas circunstancias del conflicto entre Argentina y Chile.

## Conclusiones

Las negociaciones argentino-chilenas con la mediación del Vaticano continuaron en los meses siguientes y la percepción de una guerra inminente con el país vecino se desvaneció en la sociedad juninense y, más ampliamente, en la Argentina. El papa Juan Pablo II quizá consiguió con su intervención evitar una guerra, pero la propuesta que finalmente presentó a ambas partes a fines de 1980 fracasó. Recién cuando el gobierno democrático del presidente Alfonsín retomó las negociaciones y plebiscitó su propuesta de acuerdo a la sociedad argentina y obtuvo su aprobación, entonces la cuestión del Beagle quedó resuelta.

La facción del Ejército y de la Armada argentinos que los analistas denominan “dura” perdió en 1978 la oportunidad de desencadenar una guerra externa con vistas a consolidar su poder político interno y obtener apoyo popular, pero volvería a intentarlo poco después, el 2 de abril de 1982, al concretar la “Operación Rosario” por la cual ocupó militarmente Port Stanley –renombrado Puerto Argentino–, dando comienzo con ese evento a la Guerra de Malvinas. En ese momento la invocación pública de una causa nacional volvió a concitar masivos apoyos en la dirigencia y la sociedad argentina. En el caso de Junín, el Grupo de Artillería 101 fue movilizad nuevamente al sur patagónico y parte de su personal y cañones SOFMA de calibre 155 mm fueron agregados a la unidad que en esa ocasión conducía el teniente coronel Martín Antonio Balza: el Grupo de Artillería 3, unidad de la artillería de campaña que participó –con Balza como su coordinador– en el dispositivo de apoyo de fuego en la defensa de Puerto Argentino. Y así como en el período diciembre 1978 - febrero 1979, entre abril y junio de 1982 la sociedad juninense volvió a seguir con atención el destino de los oficiales, suboficiales y soldados de su unidad de artillería movilizad en el continente y en las islas Malvinas durante la guerra.

## Fuentes documentales

Editorial (27 de octubre de 1978). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (12 al 18 de noviembre de 1978). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (10 al 16 de diciembre de 1978). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (24 al 31 de diciembre de 1978). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (7 al 13 de enero de 1979). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (14 al 20 de enero de 1979). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (21 al 27 de enero de 1979). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (4 al 10 de febrero de 1979). *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (11 al 17 de febrero de 1979) *Semanario*, p. 1. Archivo Histórico de Junín.

Editorial (28 de enero de 1979). *La Verdad*, p. 5. Archivo Histórico de Junín.

## Referencias

Áreas, T., Palazzo, S. y Oliva, A. (8 de julio de 1983). Cómo se paró la guerra con Chile. *Somos*, pp. 42-43.

Balza, M. (2015). *Bitácora de un soldado. Mis memorias de Perón a Kirchner*. Buenos Aires: Atlántida.

Bohoslavsky, E. (2009). *El complot patagónico: Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile (siglos XIX y XX)*. Buenos Aires: Prometeo.

Cisneros, A. y Escudé, C. (Dir.) (1998). *Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina. Desde la incorporación de Buenos Aires a la Unión hasta el tratado de límites con Chile* (tomo VI). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano / Centro de Estudios de Política Exterior/ Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Cornut, H. (2018). *Pensamiento militar en el Ejército Argentino (1920-1930)*.



*La profesionalización, causas y consecuencias*. Buenos Aires: Argentinidad.

D'Andrea Mohr, J. L. (1999). *Memoria debida*. Buenos Aires: Colihue.

Dick, E. (2014). *La profesionalización del Ejército Argentino (1899-1914)*. Buenos Aires: Academia Nacional de Historia.

Di Renzo, C. (2018). *Entre la diplomacia parcial y la guerra total. Concepciones geopolíticas de militares argentinos en el marco del conflicto por el canal de Beagle y las islas Picton, Lennox y Nueva (1977-1979)* (Tesis de Maestría en Historia). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Eissa, S. (2005). *Hielos Continentales. La política exterior argentina en los 90*. Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales.

García Molina, F. (2010). *La prehistoria del poder militar en las Argentina*. Buenos Aires: Eudeba.

Lacoste, P. (2003). *La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica/Universidad de Santiago de Chile.

Lafferriere, G. y Soprano, G. (2015). *El Ejército y la Política de Defensa en la Argentina del siglo XXI*. Rosario: Prohistoria.

Madrid Murúa, R. (2003). La estrategia nacional y militar que planificó Argentina, en el marco de una estrategia total, para enfrentar el conflicto con Chile el año 1978. *Memorial del Ejército de Chile*, 471, 50-70.

Míguez, M. C. (2018). El Canal Beagle y consulta popular en 1984. Relaciones internacionales y política interna argentina. *Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos*, 18(2), pp. 78-102.

Novaro, M. y Palermo, V. (2003). *Historia Argentina. La dictadura militar. 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.



# De las palabras a las armas: las concepciones geopolíticas de Isaac Rojas y Osiris Villegas entre las décadas de 1960 y 1970

*Cristian Di Renzo*

## Introducción

En el presente capítulo trabajaremos principalmente sobre las producciones intelectuales de dos militares argentinos, Osiris Villegas e Isaac Rojas, escritas entre las décadas de 1960 y 1970, con el conflicto Beagle entre Argentina y Chile como caso de análisis particular<sup>86</sup>. En principio, conviene subrayar que en este período se van a desarrollar una serie de concepciones geopolíticas tendientes a, por un lado, explicar el comportamiento de los Estados colindantes a la Argentina en materia de política exterior, y por otro, influir sobre la orientación adecuada que debería adoptar el gobierno argentino con respecto a las disputas limítrofes o al correcto aprovechamiento de los recursos naturales en zonas fronterizas.

Dicho esto, la elección particular de dos figuras destacadas dentro de las Fuerzas Armadas como fueron el general Osiris Villegas y el almirante Isaac

---

<sup>86</sup> Este trabajo forma parte de la tesis de Maestría en Historia de quien escribe, titulada: “Entre la diplomacia parcial y la guerra total. Concepciones geopolíticas de militares argentinos en el marco del conflicto por el canal de Beagle y las islas Picton, Lennox y Nueva (1977-1979)”. La misma cuenta con la dirección del doctor Germán Soprano y la codirección del doctor Antonio Manna.

Rojas, se justifica, en primer lugar, por el hecho de que ambos estuvieron involucrados en momentos críticos del conflicto Beagle. El almirante Rojas, en el incidente del islote Snipe del año 1958, y el general Osiris Villegas, en el proceso de negociación iniciado tras la recepción del laudo arbitral entre Argentina y Chile en el año 1977<sup>87</sup>. En segundo lugar, porque se trata de dos personalidades importantes cuya producción intelectual estuvo centrada en temáticas relacionadas con los conflictos limítrofes o con el aprovechamiento de los recursos naturales en zonas fronterizas, en las que desarrollan concepciones geopolíticas para justificar sus posiciones. Si bien existen algunas diferencias entre ellos, sostenemos que ambos forman parte de la corriente nacional-territorialista-irredentista. En este sentido, la asociación intelectual de Estanislao Zeballos y Vicente Quesada con Osiris Villegas e Isaac Rojas se torna evidente en los escritos que analizaremos<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> En enero de 1958, el gobierno chileno instaló una baliza ciega en el islote Snipe localizado en el canal de Beagle y cercano a la isla Picton. El almirante Isaac Francisco Rojas se encargó de reemplazar esta baliza chilena (ciega, sin luz) por una luminosa. Posteriormente, el gobierno chileno, al tomar conocimiento de tal situación, procedió de similar manera, e instaló nuevamente una baliza ciega. La decisión tomada por el canciller argentino Carlos Alberto Florit y el secretario de Marina, Adolfo Estévez fue ocupar el islote con un cuerpo de infantería de marina que se encargó de remover el artefacto chileno. Finalmente se llegó a la redacción de una Declaración Conjunta.

El 22 de julio de 1971 se suscribió el acuerdo para el arbitraje en la ciudad de Londres. En el Tratado de Solución de Controversias (1972), el árbitro británico aceptaba designar una Corte Arbitral para determinar el límite en el canal de Beagle y la potestad sobre las islas Picton, Lennox y Nueva e islotes adyacentes. La Corte de Arbitraje *ad hoc* estaría compuesta por cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia, quienes formularían un informe que sería entregado a Su Majestad Británica, que decidiría aprobarlo o rechazarlo. La sentencia tendría carácter obligatorio e inapelable para cualquiera de los dos países involucrados (Lanús, 2000, p. 511; Sanchís Muñoz, 2010, p. 452). El 31 de diciembre de 1976 la Corte Arbitral emitió su decisión y estableció los términos del laudo el 18 de febrero de 1977. La reina Isabel II aceptó sin objeciones la decisión de la Corte Arbitral el 18 de abril de 1977 y el 2 de mayo del mismo año se produjo la notificación de ambos países, y se inició una serie de intercambios entre ellos, en los cuales estuvo involucrado el general Osiris Villegas.

<sup>88</sup> Ambos autores elaboraron sus teorías en el contexto del cambio de siglo (XIX-XX), momento en que las distintas unidades administrativas de Latinoamérica comienzan a consolidar sus fronteras nacionales y en el cual surge una serie de conflictos por la soberanía territorial. En el detenido análisis de las fuentes pertenecientes a estos reconocidos políticos y diplomáticos argentinos realizado para la tesis de Maestría citada, constaté que realizan

Asimismo, pretendemos matizar la propuesta de Bosoer (2005), que sostiene que dentro de las Fuerzas Armadas existen dos tendencias, una territorial-pretoriana y otra neodesarrollista. Básicamente plantea que dentro de la primera tendencia la cuestión de la seguridad nacional está asociada a la llamada guerra contrarrevolucionaria, las hipótesis de conflicto interno y externo y la adaptación del esquema institucional a una mayor participación militar en la conducción del Estado. La segunda, en tanto, más institucionalista, vincula el concepto de seguridad nacional a una estrategia de desarrollo económico y social y al aprovechamiento de los recursos naturales (p. 288). En este esquema, Rojas y Villegas se encontrarían dentro de la primera corriente, mientras que en la segunda estarían otras personalidades destacadas, como los generales Juan Enrique Guglielmelli y Carlos Rosas. No obstante, nuestra investigación señala que existe –al menos en el plano intelectual– una corriente nacional-territorialista-irredentista, que pone el acento en la importancia del territorio nacional como base para los diferentes proyectos, y que se encontraría por encima de las dos tendencias mencionadas. Las propuestas en cuanto a los métodos para dar solución a la situación de crisis –un elemento compartido dentro de la corriente nacional-territorialista-irredentista– fueron varias; por ejemplo, el énfasis en el desarrollo económico, tal como lo ha planteado el general Juan Enrique Guglielmelli (Di Renzo, 2020). Del mismo modo, dentro de la primera corriente no se opta necesariamente por las armas para la resolución de los conflictos limítrofes. Tal es el caso del almirante Isaac Rojas, que en el conflicto Beagle varió sus planteos a medida que la disputa fue *in crescendo*; o dentro de la segunda, cuando el general Guglielmelli deja abierta la posibilidad de que una guerra termine con los problemas existentes entre Argentina con Brasil y Chile, o bien su énfasis en la importancia de la conducción del actor militar en su proyecto (Di Renzo, 2020). Por lo tanto, aunque en ocasiones las dos tendencias aparecían enfrentadas, en el plano intelectual existían coincidencias en sus argumentos centrales, al igual que en las concepciones geopolíticas.

---

repetidas denuncias de “pérdidas territoriales”, producto del avance de los países vecinos, pero también de un accionar poco elogiable de la diplomacia argentina en cuestiones limítrofes, y plantean la necesidad de adoptar una postura más agresiva –en el caso de Estanislao Zeballos– y de irrenunciabilidad de la soberanía que nutrirá a la corriente que podemos denominar como nacional-territorialista.

Probablemente, las concepciones geopolíticas a las que adhieren estos militares se hallan condicionadas, por un lado, por la pertenencia a la corriente nacional-territorialista-irredentista, y por otro, por el contexto de la Guerra Fría desde el lugar que les tocó ocupar a la Argentina y al resto del Cono Sur dentro de las constelaciones de los diferentes Estados nacionales. En efecto, las innovaciones intelectuales de estos dos militares de carrera encuentran su explicación, más que en la creación de nuevas concepciones geopolíticas, en la adaptación del contexto histórico global a los conflictos territoriales y de aprovechamiento de los recursos naturales que posea el Estado argentino.

Dicho esto, la asociación que hallamos –analizada en profundidad en una investigación de mayor alcance (Di Renzo, 2018)– se basa en la pesquisa de la producción intelectual de dos figuras de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: Estanislao Zeballos y Vicente Quesada, que por un lado contribuyeron directa o indirectamente a la creación de una imagen negativa del otro (Lacoste, 2003) –en este caso de Chile, y en particular de su política exterior –, y, por el otro, a la génesis del mito virreinal (Cavaleri, 2004). Estas consideraciones aportaron elementos a la hipótesis del destino inevitable de grandeza nacional (Escudé, 1984).

Cuando hacemos referencia al mito virreinal, estamos hablando de aquellas elaboraciones intelectuales que se apropian del imaginario histórico y político y confluyen hacia la consideración de un pasado de grandeza argentina, cargado de nostalgia e imperfecciones, proveniente de la etapa inmediatamente anterior a la revolución de 1810. En este sentido, las obras de Vicente Quesada aportan hipótesis basadas en supuestos teóricos que serán reiterados en la posteridad<sup>89</sup>. Asimismo, tales construcciones se encontraban, en ocasiones, nutridas de concepciones geopolíticas, como en el caso de Estanislao Zeballos<sup>90</sup>. De este modo se evidencia cómo a través de

---

<sup>89</sup> Las obras de Vicente Quesada con las que hemos trabajado son: *La provincia de Corrientes* (1857); *La Patagonia y las tierras australes del continente americano* (1878); *Virreinato de Río de la Plata* (1776-1810), *Apuntamientos crítico-históricos básicos para servir en la cuestión de límites entre la República Argentina y Chile* (1881); (Víctor Gálvez) *Memorias de un viejo* (1888); *Historia Colonial Argentina*, (1915).

<sup>90</sup> Las fuentes seleccionadas de Estanislao Zeballos son los artículos de su autoría publicados en la *Revista de Derecho, Historia y Letras* entre los años 1898 y 1921, y la reconocida obra *La conquista de quince mil leguas*, del año 1878. Para una descripción detallada de cada una de ellas, véase Di Renzo (2018).

las repetidas denuncias de pérdidas territoriales –producto tanto del avance de los países vecinos como de un accionar poco elogiabile de la diplomacia argentina en cuestiones limítrofes–, se plantea la necesidad de una postura más agresiva y de irrenunciabilidad de la soberanía que alimentará a la corriente que podemos denominar nacional-territorialista (Di Renzo, 2018). Por otra parte, el análisis en profundidad de las producciones intelectuales de ambos autores (que excede a este trabajo) nos permitirá tener una visión más cercana sobre la inexistencia de uniformidades en torno a la cuestión limítrofe Argentina-Chile; pues, si bien ambos realizan similares “denuncias” y mantienen aspiraciones de grandeza nacional, se distancian en relación con el empleo de la fuerza.

A continuación, presentamos el análisis de la producción intelectual de los dos militares de carrera seleccionados, Osiris Villegas e Isaac Rojas, en la búsqueda de aquellas concepciones geopolíticas que gravitaron en las décadas de 1960 y 1970.

## Las concepciones geopolíticas del almirante Isaac Rojas

El almirante Isaac Rojas ha quedado signado en la historia argentina por ser uno de los responsables, junto al teniente general Eduardo Lonardi, del golpe de Estado del año 1955 (autodenominado “Revolución Libertadora”) que lo situó como vicepresidente de facto entre el 21 de septiembre de 1955 y el 1 de mayo de 1958<sup>91</sup>. En lo que respecta a su labor como funcionario en el período previo al golpe del año 1955, destacamos que se desempeñó como agregado naval en las embajadas de Brasil y Uruguay (1950-1952), en donde tuvo contacto con el general Aramburu, también destinado como agregado militar en Río de Janeiro y como edecán naval del presidente de Chile, general Ibáñez del Campo, en su visita a la Argentina durante el mes de julio del año 1953<sup>92</sup>.

Posteriormente participó del intento de golpe de Estado fallido del año 1963, autodenominado “Revolución del 2 de abril”, contra el presidente José

---

<sup>91</sup> Posteriormente sostendrá que “La revolución del 16 de septiembre de 1955 no fue un golpe de Estado... Fue una revolución a la que teníamos que apelar como derecho para terminar con un régimen de oprobio” (Isaac Rojas, en González Crespo, 1993, p. 18).

<sup>92</sup> Véase la cronología biográfica de Isaac Rojas en [http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/fondoRojas/7\\_fifr\\_bibliografia\\_cronologica11112014.pdf](http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/downloads/fondoRojas/7_fifr_bibliografia_cronologica11112014.pdf). Consultado en línea: 18/3/2018.

María Guido; fue apresado por la policía el 6 de abril de ese año, enviado a la isla Martín García y luego liberado. En lo que respecta a su producción intelectual, hallamos su primera obra, *Intereses argentinos en la Cuenca del Plata*, en el año 1969<sup>93</sup>.

## Intereses argentinos en la cuenca del Plata (1969). La denuncia del expansionismo brasileño

En un reciente artículo (Di Renzo, 2020) planteamos la hipótesis de que la geopolítica ofreció –desde sus diferentes vertientes interpretativas– una amplia gama de concepciones que permearon durante el recorte temporal seleccionado, a una gran parte de las producciones intelectuales argentinas ligadas al análisis de los conflictos limítrofes pendientes, al aprovechamiento de los recursos en las zonas fronterizas y a otros temas afines. Tales concepciones giraron en torno al aparente expansionismo territorial de los países vecinos, la necesidad de afianzar el Estado en zonas fronterizas, la historia (equivoca) de la política exterior, el factor poblacional, la relación entre extensión del territorio y fortaleza de la nación, la proyección y posicionamiento en el esquema sudamericano por parte de Argentina en calidad de potencia, entre otras<sup>94</sup>. En este sentido, se hace evidente tal hipótesis en la producción intelectual de Isaac Rojas (y de Osiris Villegas), ya que la geopolítica aparece como eje vertebrador de sus trabajos.

En consonancia con lo anterior, las décadas de 1960 y 1970 fueron el

---

<sup>93</sup> En realidad, esta primera aparición en formato de libro es, en principio, una compilación de dos colaboraciones de Isaac Rojas en el diario *La Prensa*, del 4 de agosto de 1968, titulada “Hay que evitar la asfixia de los puertos del Paraná”; y en *La Nación*, bajo el título “Cuenca del Plata. Aspectos no resueltos que causan inquietud”, del 5 y 7 de septiembre de 1968. Asimismo, el tercer capítulo del libro (los dos nombrados fueron los primeros), se realizó sobre la base de una conferencia pronunciada el 4 de octubre de 1968 en el Instituto de Conferencias de *La Prensa*, el día 4 de octubre de 1968.

<sup>94</sup> Nuestro trabajo se encuentra en sintonía con aquellos que consideran que la geopolítica servía de caja de herramientas para líderes (militares) que pensaban en sus términos, pues proveía explicaciones sobre un adecuado desarrollo nacional, integración territorial y sobre las relaciones con los países vecinos (Fornillo, 2015). Deciancio (2017) sostiene que “durante la última dictadura civil-militar en Argentina, la geopolítica se convirtió en una caja de herramientas que proveyó una explicación consistente sobre los esquemas de desarrollo nacional, integración territorial, las relaciones con sus vecinos y el mundo” (p. 200).



escenario de diversos enfrentamientos diplomáticos y de intercambios de posicionamientos entre Argentina con Brasil y Chile por la explotación de recursos en zonas fronterizas o por cuestiones limítrofes pendientes. En particular, la problemática entre Argentina y Brasil en el período citado fue la explotación de los recursos hídricos en la cuenca del Plata<sup>95</sup>. Nuestro autor no se hallaba exento de la influencia del clima de enfrentamiento reinante entre ambos países y su producción intelectual da cuenta de ello, ya que en el año 1969 se publicó su obra *Intereses argentinos en la Cuenca del Plata*.

En la misma introducción de *Intereses...* se puede vislumbrar una serie de lineamientos coincidentes con la corriente nacional-territorialista-irredentista que encuentra en la producción de Estanislao Zeballos una referencia. Tomando por ejemplo las obras hidroeléctricas que estaba realizando el gobierno de Brasil sobre el río Paraná, Rojas evalúa posibles efectos adversos de las mismas:

Así planteadas las cosas, importantísimos intereses argentinos vendrían a quedar sometidos, unos directa y otros indirectamente, a una especie de “curatela” ejercida por una potencia extranjera, quedado vulnerada, por lo tanto, la soberanía nacional (Rojas, 1969, p. 7).

Según las concepciones de Rojas, cada acción de los países vecinos afectaría el normal desarrollo de la Argentina, sobre todo en materia de aprovechamiento de recursos en zonas fronterizas. En este caso, Brasil aparece como un claro adversario en el ámbito regional, que atenta contra el desarrollo de las capacidades argentinas. Para justificar su posición, apela a los antecedentes jurídicos de procedimientos en torno a la explotación de los recursos en la cuenca del Plata, en particular a un dictamen firmado el 23 de julio de 1932 donde se establece que es necesario un acuerdo previo entre los estados ribereños afectados. En sintonía con esto último, insta en su prosa a los otros países que podrían ver perjudicados sus propios intereses nacionales: Bolivia, Uruguay y Paraguay. Su denuncia frente al “avance” del Brasil es acompañada por la alusión a la tranquilidad: “silencios de la nación argentina” (Rojas, 1969, p. 17); argumentos similares utilizaban Zeballos y

---

<sup>95</sup> El conflicto tiene inicio con la firma del Acta de Yguazú entre Brasil y Paraguay del año 1966. En el mismo se plantea el proyecto de construir una usina binacional.

Quesada. En consonancia con estos intelectuales –más con el primero que con el segundo– expone que tales acciones llevadas a cabo por aquel país, “crean el peligro potencial de un manejo discrecional de los caudales, y, en consecuencia, entrañan para nosotros un avance sobre nuestros derechos, además de una amenaza real que se impone neutralizar con urgencia y energía” (Rojas, 1969, p. 25). Sostiene que: “Fatalmente la inmovilidad argentina va acompañada por una declinación de nuestro prestigio y por una creciente amenaza para nuestras aspiraciones e intereses nacionales (...) Nuestra reacción no puede esperar más” (Rojas, 1969, p. 26). Su juicio se asemeja a los postulados de Vicente Quesada al otorgarle centralidad a la Cancillería en el proceso de negociaciones bilaterales, siempre sujetos a los intereses nacionales que involucran directamente a la voluntad del pueblo argentino. No obstante, su visión acerca del rol que Argentina estaba destinada a cumplir en el contexto internacional lo acerca notablemente a Estanislao Zeballos, aunque con una perspectiva que lo asocia más a las nociones de potencia regional –propia de las décadas de 1960 y 1970– que a las de potencia mundial<sup>96</sup>.

También su diagnóstico de atraso, demora en obras importantes de energía y el desaprovechamiento de recursos –tal como lo expone en el tercer capítulo– lo aproximan a los intelectuales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX<sup>97</sup>. Precisamente, es este período de cambio de siglo el momento en el que Rojas ve un proyecto nacional completo, con miras hacia el futuro:

---

<sup>96</sup> Siguiendo los planteamientos teóricos de Hoolbrad (1984), entendemos como potencias regionales a aquellos Estados cuyas aspiraciones son proclives a establecerlos como enclaves estratégicos dentro de la región en la cual están inmersos. Cabe destacar que estos Estados tienen como prioridad desarrollar estrategias destinadas a solucionar problemas regionales, de integración o de vinculación, con la aspiración de convertirse en una suerte de mediadores entre las grandes potencias (EE. UU.-URSS) y los Estados regionales. Al mismo tiempo, estos Estados conciben la posibilidad de transformarse en potencias regionales-mundiales o en potencias medias. Este autor hace un recorrido histórico del término y describe a las potencias medias como “aquellos Estados que tienen una posición intermedia”, es decir, que son más fuertes que los Estados más pequeños, pero están en desventaja con respecto a las superpotencias.

<sup>97</sup> Rojas hace referencia a las obras del Chocón Cerros Colorados, Salto Grande y Yacyretá-Apipé, como la “trilogía del agua”, que podrían traer al país “incalculables beneficios” (Rojas, 1969, p. 38). Asimismo, alude a la Central Hidroeléctrica de Acaray (Paraguay) y los canales del Bermejo, como potencialidades desperdiciadas que retrasan la proyección argentina.

En un país rico, en crecimiento, con inmensas y visibles posibilidades, resulta un contrasentido no atender a las previsible necesidades de un mercado interno de consumo en expansión. Opuesta fue la visión y la dinámica de los grandes estadistas del pasado fin de siglo, menos aferrados al laboratorio, pero con más clara conciencia de las exigencias del progreso nacional (Rojas, 1969, p. 51).

Asimismo, se asemeja a aquellos intelectuales incluso en la convicción de que Brasil sí posee un plan integrador que contempla todas las posibilidades de crecimiento, y en especial en la creencia de que el mismo se basa en el expansionismo:

Los hechos se han encargado de demostrar la tenaz continuidad de una política expansionista (...) que reconoce sus orígenes en el formidable avance hacia el oeste y hacia el sud, realizado por las “bandeiras” paulistas a partir de las últimas décadas del siglo XVI (Rojas, 1969, p. 55).

Probablemente, Rojas basaba sus apreciaciones acerca de la política exterior brasileña en la doctrina geopolítica de los intelectuales militares Lysias Rodrigues y Golbery da Couto e Silva<sup>98</sup>. Las divisiones internas, las diferencias en torno a los intereses nacionales, el acceso a determinados créditos provenientes del exterior destinados a financiar la industria, son puntos que en el Brasil no encuentran oposiciones, sino univocidad y, por lo tanto, marcan la diferencia con la Argentina, en donde no existe una política lúcida y coherente<sup>99</sup>. Esta visión, cargada de comparaciones que intentan realizar un contrapunto para evidenciar cuánto ha perdido la Argentina en detrimento del Brasil, no es novedosa, como tampoco lo es la necesidad

---

<sup>98</sup> Lysias A. Rodrigues (1896-1957) fue un militar de carrera dentro de la Fuerza Aérea brasileña, especialista en geopolítica. Al respecto véanse Meira Mattos (1969) y Miyamoto (1981).

Principal ideólogo de la dictadura militar brasileña (1964-1984), Golbery do Couto e Silva desarrolló la estrategia de ocupación territorial del interior de Brasil, como tarea de seguridad para garantizar el control estatal sobre el territorio nacional basado en su doctrina geopolítica. Participó en varios gobiernos de la dictadura militar, que incluyen a Castelo Branco (1964-1966), Ernesto Geisel (1974-1979) y, finalmente, João Figueiredo (1979-1985). Al respecto véanse Fernandes (2009) y Da Luz (2015).

<sup>99</sup> La imagen integral que se brinda acerca de la política exterior de Brasil debe problematizarse. En futuras investigaciones volveremos sobre este punto.

imperiosa de detener el avance constante de los países vecinos. En este caso, al menos, Rojas no hace un llamado a la defensa de los intereses nacionales por medio de las armas; pero sí una convocatoria a la reflexión, con cierta tendencia a generar indignación, pero con miras al futuro de grandeza que otorga poco espacio –cuando no nulo– al crecimiento territorial de los países vecinos, ya que no se condice con el devenir inevitable de la Argentina. Al respecto, sostiene que:

El vacío que vamos dejando alrededor nuestro será llenado, no tengamos duda, por naciones mejor preparadas para el avance, más dinámicas, con mayor conciencia de su destino. Las necesidades masivas de adentro y de afuera, pueden llamar a nuestras puertas. Debemos adelantarnos, comprenderlas y tender la mano aquí, y por encima de nuestras fronteras (...) La función que nos toca a los argentinos está signada por un mandato histórico, herencia intransferible, y por la natural gravitación que nos otorgan los bienes de nuestra tierra y la cultura y aptitudes de nuestro pueblo (...) (Rojas, 1969, p. 85).

En suma, vemos cómo la recurrencia a los antecedentes jurídicos e históricos como medios para sustentar su posición, como también la denuncia de una potencia mayor que avanza sobre el territorio nacional –afectando, por ende, la soberanía directamente asociada a ella debido a la estrecha relación existente entre ambas– y el imperativo de un accionar acorde a las necesidades del momento, conforman las estrategias utilizadas por Isaac Rojas en consonancia con el grupo nacional-territorialista-irredentista, sin proponer argumentos o artilugios legales novedosos. La conclusión que se desprende sustenta lo que hemos propuesto acerca de que Estanislao Zeballos y Vicente Quesada son dos de los principales creadores de tal corriente, y parte de su producción intelectual, pionera en lo que respecta a la integridad territorial teniendo en cuenta las relaciones con los países vecinos, sus intereses nacionales y la influencia de las potencias extranjeras en la región. De ello resulta la construcción –consciente o inconsciente– de un enemigo, que se materializa en los distintos peligros que representa en este caso Brasil. Estas concepciones se verán reforzadas años más tarde, cuando se publique

*La ofensiva geopolítica brasileña en la Cuenca del Plata* (1979)<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Esta obra, resultado de las diferencias existentes en torno a la construcción de las represas de Yacretá-Apipé y de Corpus-Itaipú, ambas sobre la cuenca del Plata,

En suma, Brasil es percibido como un potencial enemigo, algo poco novedoso pero que refuerza la imagen del otro en el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior, ya que las respectivas cancillerías definieron las políticas bilaterales a partir de criterios geopolíticos y de teorías de equilibrio de poder y balance militar en América del Sur (De la Balze, 1995, p. 77)<sup>101</sup>.

Dada las concepciones geopolíticas de Isaac Rojas, en el período que trabajamos, Brasil no sería el único país que aparece como una amenaza a la integridad territorial argentina, sino que en el ámbito regional, Chile se presenta como el otro factor de peligro. En lo que sigue analizaremos, entonces, sus concepciones acerca de la política exterior chilena y cuál debería ser la adecuada actitud argentina.

### La Argentina en el Beagle y el Atlántico Sur (1978)

Las relaciones entre Argentina y Chile sufrieron un notable deterioro entre 1977 y 1979. Precisamente entre el año 1977, fecha de recepción del laudo arbitral (rechazado por el gobierno de facto argentino) y la firma del Acta de Montevideo en el año 1979, existieron tanto expresiones de convivencia pacífica entre Argentina y Chile (las reuniones entre representantes oficiales) como de violencia (ejercicios de desembarco y de defensa hacia ambos lados de la frontera, por ejemplo). En ese lapso se osciló entre una diplomacia parcial –puesto que la representación exterior argentina no se encontraba unificada y confrontaban distintas posturas– y la guerra total, ya que las tres Fuerzas Armadas argentinas –Ejército, Armada y Fuerza Aérea– estaban en condiciones efectivas de dar inicio a las hostilidades. Asimismo, las producciones de especialistas civiles (académicos, políticos y diplomáticos) y militares sobre la temática tuvieron un rol central en la construcción del conflicto, puesto que las tesis y los conceptos asociados a ellas fueron

---

contiene algunos elementos ya presentes en la que hemos trabajado y otros con los que va a profundizar su posición. Nos encontramos frente a un texto que combina la importante variante geopolítica del control del agua, con denuncias directas a la política regional de Brasil y en segundo lugar de Paraguay, el tercer país involucrado en las construcciones previstas sobre el río Paraná. Asimismo, establece una continuidad histórica entre la etapa previa a la formación del estado nacional brasileño hasta la actualidad, partiendo de las mismas concepciones de la relación territorial Virreinato del Río de la Plata- Nación argentina.

<sup>101</sup> Para un análisis geopolítico y de equilibrio de poder y balance militar en América del Sur, véanse Jarvis (1976) y Herrero de Castro (2006).

utilizados como fundamento para el accionar de los distintos actores sociales involucrados, especialmente de aquellos que apostaban a la salida armada (Di Renzo, 2018).

En consonancia con esta hipótesis, en el año 1978 va a aparecer una obra compilada por Isaac Rojas titulada *La Argentina en el Beagle y Atlántico Sur*. La misma, cuya portada es un claro reflejo de su contenido, es el resultado de una serie de artículos, comentarios y conferencias que tuvieron lugar en las Jornadas del Beagle y Atlántico Sur, del año 1977. En la imagen 1 podemos observar banderas argentinas en las islas en disputa.



**Imagen 1.** Tapa del libro *La Argentina en el Beagle y Atlántico Sur*

En el prefacio Rojas expone los lineamientos generales de sus concepciones geopolíticas. En principio, su noción de frontera se acerca a aquella que dominaba en el ámbito de la geografía que tuvo un claro desarrollo durante la última dictadura cívico militar argentina (Cicalese, 2007; Rodríguez, 2015). Parte de la concepción de que la Argentina es una nación pacífica, heredera natural del territorio que abarcaba el virreinato del Río de la Plata, y todo su fundamento teórico gira en torno a tales cuestiones. Entonces, para este representante de la corriente nacional-territorialista-irredentista, en el proceso de formación de los diferentes Estados nacionales tras la ruptura del pacto colonial, estos no serían más que pérdidas para la Argentina, con lo que abona al mito virreinal, aquel presentado por Vicente Quesada:

Heredera del vastísimo territorio que comprendía el Virreinato del Río de la Plata, cuya extensión sobrepasaba los cinco millones de kilómetros cuadrados, hoy está reducida a un sector continental que no llega a tres millones, gracias a las sucesivas mutilaciones que ha sufrido por obra de los países vecinos, por obra de nuestros hermanos (Rojas, 1978, p. 1).

En lo que respecta al sistema de arbitraje como medio de solución de conflictos limítrofes, Rojas se manifiesta en contra, ya que, en su perspectiva, los arbitrajes han sido históricamente desfavorables para la Argentina. La concepción de mutilación territorial acompaña esta hipótesis<sup>102</sup>. El laudo del año 1977 era un reflejo de tal situación, y por lo tanto se lo debía desestimar por completo. No obstante, su justificación no se detiene allí, sino que avanza sobre el gobierno que aceptó tal mecanismo jurídico en el año 1971. Califica al mismo, correctamente, como un gobierno de facto, responsable del dañino compromiso arbitral, que “el actual Gobierno Nacional ha reparado (...) mediante la histórica Declaración de Nulidad del laudo arbitral (...)” (Rojas 1978, p. 6). Al respecto, Rojas no formula ninguna salvedad en cuanto a que el gobierno del autodenominado “Proceso de reorganización nacional” fuera también un gobierno de facto. Es así como el centro de los ataques del almirante es la República de Chile y el mismo general Pinochet. La consideración de que Chile es un país expansionista desde su formación es una de las ideas que se repiten en su prosa.

Las concepciones geopolíticas expuestas por el almirante Rojas son acompañadas al final de la obra por un conjunto de láminas que tienen la función de justificar su posición. Las mismas ponen de manifiesto, en consonancia con la corriente nacional-territorialista-irredentista, el proceso de mutilación nacional que sufrió la Argentina desde finales del siglo XVIII (mito virreinal), así como el constante avance expansionista chileno sobre la región austral y su perspectiva de futuro tendiente a convertirse en

---

<sup>102</sup> El mismo concepto de “mutilar” encierra una especificidad en sí mismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, mutilar significa cercenar una parte del cuerpo, y más particularmente, del cuerpo viviente. Y también puede definirse como cortar o quitar una parte o porción de algo que de suyo debiera tenerlo. Este último elemento (que debiera tenerlo) está presente tanto en los escritos de Rojas como de Villegas, y tiene un componente de nostalgia que los acerca a las hipótesis de Zeballos y de Quesada.

una potencia bioceánica. Ambas cuestiones, abordadas con explicaciones históricas, no dan espacio a divergencias y se postulan como verdades absolutas.

En suma, tras el análisis de los trabajos compilados en la obra y de los expositores, destacamos que los mismos eran figuras importantes en los campos en los que se desenvolvían, doce de ellos civiles (70,58 %) y cinco de formación militar, incluido Rojas (29,42 %). Asimismo, buena parte de ellos firmó en la declaración inicial del Movimiento por impunidad del laudo arbitral del Beagle (64,70 %) del 2 de diciembre de 1977<sup>103</sup>. De igual manera, un grupo de los expositores había cumplido funciones vinculadas a las relaciones exteriores (47,05 %) y poseían, en el momento de la edición del libro mencionado, obras o publicaciones en prensa sobre el conflicto Beagle o la región sudamericana (58,82 %).

Ambas obras, *Intereses...* y *La Argentina...*, guardan similitudes tales como el uso de concepciones geopolíticas en sus planteos, en las que se evidencian denuncias frente al expansionismo territorial de los países vecinos; la historia (equívoca) de la política exterior y la necesidad de un cambio en la conducción; la relación entre extensión del territorio y fortaleza de la nación; la proyección y posicionamiento en el esquema sudamericano de Argentina en calidad de potencia, entre otras. Estos elementos que se encuentran ya presentes en los escritos de Vicente Quesada y de Estanislao Zeballos, se encumbran dentro de la corriente nacional-territorialista-irredentista, en consonancia con otros militares y civiles cuyas producciones intelectuales se centraron en los conflictos limítrofes o por el aprovechamiento de los recursos naturales de Argentina con Brasil y con Chile. Sin embargo, no todos los escritos alcanzaban la repercusión de las obras de Isaac Rojas o de Osiris Villegas, en gran parte debida a la importancia que ambos tenían dentro de las Fuerzas Armadas.

## El general Osiris Villegas: de la cooperación latinoamericana al enfrentamiento con Chile

En la memoria de la sociedad argentina contemporánea, la figura del general Osiris Villegas quedó asociada a la defensa ante el Consejo Supremo

---

<sup>103</sup> Formaban parte del Movimiento citado Isaac Rojas, José Campobassi, Ernesto Fitte, Bernardo Rodríguez, Julio Irazusta, Medardo Gallardo Valdez, Ovidio José Salinas, Arturo Medrano, Alberto Marini, Ernesto Sanmartino, Domingo Sabaté Lichtschein y Norberto Fano. Todos ellos participaron de la obra compilada por Isaac Rojas



de las Fuerzas Armadas del general Luciano Benjamín Menéndez por su actuación durante la Guerra de Malvinas. No obstante, su desempeño en el plano militar, político e intelectual exige un análisis más detenido.

En principio, debemos considerar que tuvo participación en el golpe de Estado de 1955 que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, aunque con menos intervención que el almirante Rojas. También fue interventor interino en la provincia de Neuquén entre los meses de abril y junio de 1962. Luego de esta intervención, formó parte del gobierno de José María Guido, que sufrió un intento de derrocamiento fallido del que participara el almirante Rojas. Se desempeñó entonces como ministro del Interior, nombrado por Juan Carlos Onganía (que pertenecía al bando “azul” dentro del Ejército argentino). Posteriormente el presidente Arturo Illia lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército y años más tarde participó del golpe de Estado contra este, golpe que fue encabezado, justamente, por Juan Carlos Onganía, y que derivó en la instauración de la dictadura civil-militar autodenominada “Revolución Argentina”. En los primeros años de ese gobierno de facto asumió la dirección del Consejo Nacional de Seguridad (Conase)<sup>104</sup>.

En lo que respecta a su contribución intelectual dentro de las Fuerzas Armadas, sus trabajos se centraron, en primer término, en la teorización sobre la seguridad nacional y el “peligro comunista”; en segundo lugar, en cuestiones ligadas a la geopolítica del Cono Sur, y particularmente en la década de 1970, sobre el conflicto Beagle (Alonso, 2018). Para Buchrucker (2007), los escritos de Villegas incluyen fobias antimodernas y antidemocráticas en lo que respecta a su “programa heterogéneo” para la Argentina (p. 46). Como veremos, su programa apuntaba más allá de estos rasgos y se enlazaba con uno mayor, que tenía como marco general una propuesta geopolítica que se vinculaba con aquellas desarrolladas en la Alemania de entreguerras, cuyo exponente era el general Haushofer<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> En cuanto a su desempeño en puestos ligados a la política exterior argentina, fue miembro de la misión argentina en el Paraguay entre los años 1955 y 1956 y cumplió funciones como embajador argentino en Brasil entre 1969 y 1973, momentos en los cuales existían disputas en torno al aprovechamiento hídrico de la cuenca del Plata. Finalmente, en el período 1977-1979, formó parte de misiones diplomáticas-militares entre Argentina y Chile.

<sup>105</sup> Karl Haushofer nació en Múnich, Alemania, en el año 1869 y en 1887 ingresó

## Acerca de la seguridad nacional y el comunismo

En este apartado identificaremos aquellos elementos de relevancia que nos permitan asociar criterios referidos al diseño de la pretendida política hacia el interior de la Argentina con la posición respecto de los conflictos exteriores.

En su obra *Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional* (1969), cuyo prólogo está a cargo de Benjamín Rattenbach, Villegas intenta brindar un panorama general acerca de los “problemas” existentes en torno a la seguridad nacional y al desarrollo argentino<sup>106</sup>. A lo largo de este libro, Villegas realiza una síntesis analítica entre la noción de interés nacional y seguridad que engloba a todo el resto del estudio. Considera al interés nacional como:

Las necesidades de existencia y las aspiraciones de la sociedad argentina, debido a las características del ámbito geográfico en que vive y de su cultura, que conforman su estilo de vida, adquieren, como bien común, una singularidad respecto a otras sociedades que, por serle, propia, signamos como el interés nacional (Villegas, 1969, p. 54).

Sin embargo, no debemos obviar el hecho de que su conceptualización acerca del interés nacional comparte algunos elementos con los postulados de Hans Morgenthau, proveniente de la corriente realista de las relaciones internacionales<sup>107</sup>. Así, para Villegas, el interés nacional “tiene su punto de partida

---

al ejército bávaro. Luego de participar en la Primera Guerra Mundial, escribió su tesis doctoral: “Las líneas directrices de la evolución geográfica del imperio japonés 1854-1919”. Posteriormente, se desempeñó como profesor en el Instituto de Geografía de la Universidad de Múnich y fue el director de la revista *Cuadernos de Geopolítica*, hasta el año 1934. Sobre su figura véase Cairo (2013).

<sup>106</sup> Benjamín Rattenbach (1898-1984) fue un militar argentino, conocido por el informe que lleva su apellido (Informe Rattenbach), en cual se realiza un análisis sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en ocasión de la Guerra de Malvinas (1982).

<sup>107</sup> Hans Morgenthau señala, a grandes rasgos, que el interés nacional debe actuar como el elemento fundamental de la política exterior de los Estados. En este sentido, tal noción está ligada al concepto de supervivencia de cada Estado en un escenario mundial, potencialmente hostil, en donde la tarea de preservación de la seguridad le compete directamente al Estado. Asimismo, en las relaciones internacionales, el concepto de interés nacional ha permeado gran parte de los estudios, sobre todo los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y

en la tarea de preservar a la Nación de presiones que afecten a sus elementos básicos y evoluciona en la proyección del Estado al sistema internacional del futuro (...)" (Villegas, 1969, p. 57). Una vez que deja en claro estos lineamientos, formula la idea de que Argentina se encuentra atrasada en múltiples aspectos que le impedirían su posicionamiento en el sistema internacional.

Tampoco podemos obviar que, contemporáneamente, en Latinoamérica se venían desarrollando una serie de teorías basadas en los estudios de los casos nacionales desde una perspectiva periférica, motivados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y su respuesta regional, expresada en la escuela de la dependencia. Si bien el objetivo de tal organización era dar respuestas frente al deterioro de las economías latinoamericanas producto del comercio internacional desfavorable, surgieron en las décadas siguientes una serie de planteos teóricos que se encuadraban, en líneas generales, en la necesidad de cambio de rumbo y de accionar inmediato<sup>108</sup>. Como señalan Cicerchia y Llanos (2017), en América Latina tuvieron peso las teorías económicas basadas en la modernización de la economía, tales como el desarrollismo, y dentro del período de posguerra hasta mediados de los 70 existió un importante crecimiento económico y de los mercados internos.

En este sentido, los escritos de Villegas no son una excepción en el ámbito intelectual, pero el general deposita su confianza en la dictadura civil-militar de la llamada Revolución Argentina, que debería accionar en pos de consolidar el interés nacional mediante la creación y fomento de una serie de políticas y estrategias tendientes a lograr el desarrollo necesario para posicionar a la Argentina como una potencia emergente, dentro del contexto bipolar. Para ello, manifiesta la necesidad de que exista una política que favorezca al desarrollo de los "intereses vitales" de la Nación, que podemos resumir en la explotación de los recursos naturales desde una perspectiva que incorpore a las diferentes economías regionales, las industrias básicas y la infraestructura, todo bajo el esfuerzo mancomunado del sector público y el sector privado. En esta línea es

---

constituyó uno de los principales elementos del acervo de la corriente teórica realista clásica (Deciancio, 2017, p. 186).

<sup>108</sup> Alejandro Simonoff (2012) destaca que, a la par de estos planteos, surgen las teorías de la autonomía de Helio Jaguaribe y de Juan Carlos Puig.

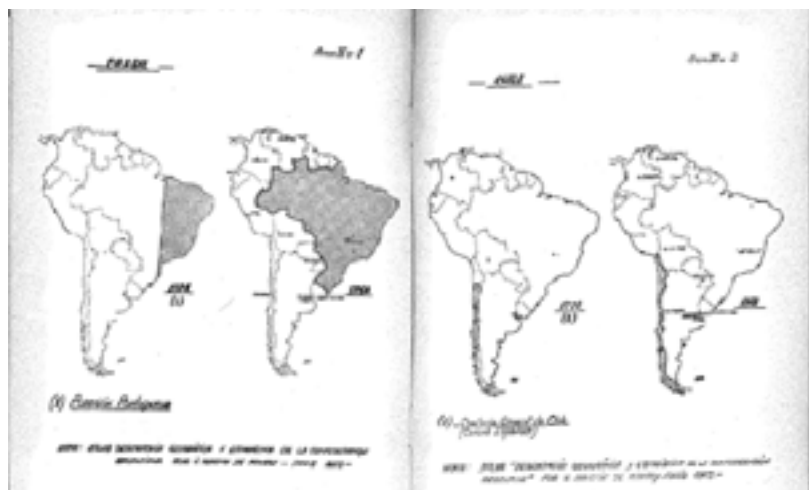
que Villegas piensa en una lógica binaria de desarrollo-seguridad, en la que ambos elementos comprenden el mismo propósito de situar a la Argentina desde una posición de ventaja frente al escenario mundial. De hecho, cada uno de los elementos que componen el desarrollo económico –la industria, la ciencia y la tecnología, la política energética (nuclear e hídrica) y la política de frontera, entre otras – contiene en su propio devenir una estrecha relación particular con uno o más aspectos ligados a la seguridad nacional. A su vez, este compendio de “valores materiales” en conjunto con los “valores espirituales” conformarían el potencial nacional que, movilizado, se constituye en potencial de guerra. En este sentido el general Juan Enrique Guglielmelli elabora una doctrina basada en sus concepciones geopolíticas, destinada al desarrollo económico argentino (Di Renzo, 2020). Ambas doctrinas, la de Villegas y la de Guglielmelli, acabarán transformando el concepto de seguridad al vincularlo con el de desarrollo (Cisneros y Escudé, 1998).

Otro de los elementos que lo acercan a los postulados de Morgenthau es su concepción de las fronteras nacionales. Para el general argentino, representante de la corriente nacional-territorialista-irredentista, el territorio nacional tiene un peso central en sus producciones, que presenta con cierto detenimiento en esta obra y que se consolidará como eje en sus trabajos posteriores<sup>109</sup>.

Si bien la noción de mutilación territorial, fundada en el mito virreinal, no es el tema central en esta obra, en los anexos XI a-1 y XI a-2 se evidencia su postura, que no desentona con la corriente de la cual forma parte y a la que contribuirá más adelante con sus obras ligadas a la geopolítica y a la cuestión Beagle (Villegas, 1969, pp.274- 275), tal como se reproduce en la imagen 2.

---

<sup>109</sup> En esta ocasión, y refiriéndose específicamente a la región patagónica, sostiene que: “La mejor forma y la más eficaz para delimitar nuestra frontera, es la fuerza positiva del quehacer humano, que dé evidencia de que estamos en territorio argentino, y esa fuerza o elemento no puede ser otra que la población argentina con todo el apoyo privado y del Estado” (Villegas, 1969, p. 111).



**Imagen 2.** Representación de la concepción geopolítica de la “mutilación territorial” de la Argentina según Osiris Villegas (1969)

La nostalgia por un pasado de grandeza asociado a la extensión territorial, y la necesidad de comprender la posición geopolítica desfavorable de Argentina en el concierto de naciones de las décadas de 1960 y 1970, le permiten a Villegas plantear su propuesta de un cambio que aparece como necesario, y, en ocasiones, como un imperativo que se debe cumplir con suma urgencia. Dicho de otro modo, se parte de una situación de crisis y se tiene como referencia territorial la etapa virreinal asociada a una nación que se encuentra en peligro de seguir siendo cercenada por el accionar vecinal y por la conducción equívoca de la política exterior argentina. Esta última tiene como constante, desde el siglo XIX, el desconocimiento de la importancia geopolítica de los recursos naturales en zonas fronterizas y de otras concepciones claves que hacen de la defensa nacional un elemento de vulnerabilidad. Como veremos a continuación, estas concepciones son retomadas en el texto *Tiempo Geopolítico Argentino*.

### Tiempo Geopolítico Argentino (1975)

En esta obra, publicada en el año 1975, parte de la idea de que la Nación Argentina transitó por un ciclo histórico desde 1810 hasta el momento en

el cual escribe. Con un claro sentido evolutivo, sostiene que tal ciclo se encuentra inacabado, pues se logró sucesivamente, por el esfuerzo del pueblo y de las Fuerzas Armadas, la independencia política (1810/1816), la organización jurídica (1853), la soberanía popular (1912, Ley Sáenz Peña) y la justicia social (1943); pero restaría, entonces, la necesaria independencia económica. Así, las concepciones que desarrolla en esta obra, si bien parten del análisis del devenir histórico, también contemplan un plan de acción a futuro. Es decir, en un principio, la obra parte del diagnóstico de “amputaciones” territoriales, propio de la corriente nacional territorialista-irredentista, en donde la nostalgia por la grandeza territorial virreinal –como lo presentaba Vicente Quesada – es central. Posteriormente señalará una serie de elementos necesarios para llevar a cabo el “destino manifiesto” de la Argentina en la región sudamericana y en el mundo, planteo que lo asemeja, al menos intelectualmente, a los escritos de Estanislao Zeballos. En este relato incorpora otra noción temporal, “la hora del tiempo límite”, que representaría el presente desde el cual escribe.

En el capítulo “El Sentido de la historia”, Villegas presenta una explicación del atraso argentino y latinoamericano en cuanto al progreso económico. Este respondería a un plan pertrechado por los “intereses europeos”, que desde el inicio del siglo XIX impulsaron la parcelación de las naciones americanas bajo el lema “dividir para reinar”. El propósito de tales acciones no sería otro que impedir el desarrollo nacional y regional en Latinoamérica con el fin de fortalecer una cadena de dependencia que encontraba el primer eslabón en Inglaterra. En cuanto a las acciones perjudiciales para la Argentina, sostiene que Inglaterra alentó a la ya existente “vocación expansionista” lusobrasileña. El resultado de tales acciones sería, en resumidas cuentas, que la “mutilación” territorial (de los 5 087 000 km<sup>2</sup> en 1816 se pasó a 2 795 000 km<sup>2</sup>) perturbó la organización de la Nación, determinó que Argentina sea el abastecedor de materias primas, y así retrasó el desarrollo industrial, alentó conflictos limítrofes con los países vecinos para llegar a laudos arbitrales siempre contrarios al patrimonio nacional y evitó que se pudieran afianzar bloques políticos-económicos subregionales.

Es así como, partiendo de este diagnóstico, postula que:

Las naciones sudamericanas forman un todo geopolítico, ensamblado por la herencia histórica y la indudable comunidad de objetivos regionales presentes y futuros, frente al orbe circundante y a los intereses internacionales que no son coincidentes con los nuestros, podemos acotar que es esta lucha en el ámbito mundial, la que más compromete a nuestros países y les impone constituir un bloque sólido (Villegas, 1975, p. 12).

Presentado de esta manera, el proyecto de Villegas puede ser interpretado como latinoamericanista. No obstante, no debemos confundir las perspectivas de integración regionalistas con lo propuesto por nuestro autor, pues en ningún pasaje de su obra plantea la posibilidad de eliminar las fronteras entre los países. De hecho, en repetidas ocasiones remarca la importancia de consolidar las individualidades nacionales para llevar a cabo el objetivo de consolidar un bloque sólido en el Cono Sur, que estaría centrado sobre todo en el ámbito económico, luego en el científico-tecnológico, en el político –atendiendo a la necesidad de realizar acuerdos internacionales a favor de la paz regional– y finalmente en las comunicaciones, para terminar así con el aislamiento. En su opinión, el rol de la Argentina no sería el de ser un país más dentro del orbe internacional, sino más bien el de constituirse en la potencia rectora de tal unificación. Al respecto, sostendrá que:

La Argentina fue, para el centenario, una potencia regional y, si se cura de los males que hoy la aquejan, está llamada a serlo en el futuro que se avecina y, por ello, debe asumir cuanto antes una política internacional en consonancia con su propia energía histórica y el papel protagónico que le incumbe en función de su gravitación en el proceso político latinoamericano (Villegas, 1975, p. 15).

Es decir que en su planteo a futuro, la región latinoamericana necesita para un desarrollo íntegro la suma de todas las naciones que la componen, que deberán aunar esfuerzos en pos de consolidar un bloque único. En tal unión, de carácter asimétrico, la Argentina sería –por su devenir histórico y proyección a futuro– la potencia rectora de la región, sin renunciar, por ningún motivo, a su soberanía territorial, base de la proyección hacia el resto del mundo. Las perspectivas de proyección como potencia de la Argentina en Latinoamérica estarían relacionadas, según Villegas, con la proximidad

geográfica, pero también con las similitudes culturales e históricas que le permitirían desenvolverse y acrecentar su poderío regional, pues el mercado internacional –y en especial Inglaterra y EE. UU. – le habían marcado que el rol que debía cumplir no excedía el de ser un país proveedor de materias primas<sup>110</sup>.

En el esquema de crecimiento propuesto se retoman algunas de las concepciones presentadas en la obra *Políticas y Estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional* (Villegas 1969), que comprenden el crecimiento demográfico –ya que el extenso territorio nacional necesita poblarse para ser explotado fehacientemente y para lo cual el aporte inmigratorio sería importante dada la baja tasa de natalidad – así como un reajuste de la redistribución, con base en la justicia social, pero sin descuidar la salvaguarda de la soberanía y la seguridad nacional. Dicho esto, una de las premisas que debemos subrayar es que ningún pasaje de su obra lo muestra como un partidario del belicismo. De hecho, manifiesta abiertamente su postura al respecto:

Para esta última etapa del ciclo histórico que se cierra, la Argentina deberá otra vez trasponer sus fronteras y proyectarse solidariamente sobre la América sureña. Pero en estas circunstancias, no serán sus ejércitos, como en 1810-1824, los que irán a consolidar, junto con la suya, la independencia sudamericana. Las modernas ballonetas [sic] argentinas que recorrerán el mismo ámbito humano y geográfico, en procura de la emancipación económica regional, serán: su cultura, su capacidad técnico-científica, su potencial industrial, su mayor desarrollo relativo (Villegas, 1975, p. 52).

Este posicionamiento, como veremos, tendrá un cambio abrupto en los años posteriores, en ocasión del conflicto Beagle. No obstante, en *Tiempo*

---

<sup>110</sup> En este proyecto nacional-regional, los actores involucrados en la elaboración de este y en su puesta en marcha serían los sectores ligados a la producción, el empresariado nacional, los trabajadores en relación de dependencia, los intelectuales y los organismos e instituciones formadores, informativos y académicos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el Estado con su organización político-jurídica. Podemos decir, entonces, que estamos ante un proyecto no autoritario, ya que comprende al andamiaje político-jurídico estatal que es, como hemos mencionado, uno de los elementos centrales e insustituible para lograr el éxito del proyecto nacional, que exige, además, que cada una de las partes se comprometa y realice el esfuerzo necesario desde sus posiciones correspondientes. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales no estarían incluidos, ya que los mismos, “no sienten la necesidad de un replanteo económico profundo” (Villegas, 1975, p. 53).



*Geopolítico Argentino*, Villegas no da muestras de ser un partidario de la guerra. Incluso llega a sostener que los sucesivos golpes de Estado en Argentina –como el que se avecinaba al momento de la escritura de este texto– fueron producto del incumplimiento de la meta económica<sup>111</sup>. Entonces, la “hora del tiempo límite” desde la cual escribe su obra, sería un momento de implementación de acciones concretas, sin las cuales la Argentina continuaría por el sendero de la pobreza y el atraso. A estos elementos le sumará la inviabilidad de resignar más espacios territoriales, “el espacio vital”, ya que ello atentaría contra el destino de potencia regional de la Argentina.

### El conflicto con Chile en la región austral (1978)

Esta obra forma parte del contexto en el cual fue redactada. Se publicó en agosto de 1978, momento en el que las tensiones entre Argentina y Chile por el conflicto Beagle se encaminaban hacia la posibilidad de un enfrentamiento armado (Lanús, 2000; Madrid Murúa, 2003). Contiene elementos de las otras obras citadas, aunque también algunas diferencias conceptuales.

En principio, el texto es una invocación directa al pueblo argentino y en él existen numerosos llamamientos al “despertar” y a la toma de conciencia nacional. Tal invocación tiene como eje vertebrador la intención de generar empatía con el lector y la causa Beagle y posicionarlo como interlocutor activo de cara al conflicto existente. Además, la conciencia nacional, a la que menciona en repetidas ocasiones, está asociada a la visión propia de la corriente nacional-territorialista-irredentista. Por otra parte, las concepciones geopolíticas que esgrime en esta ocasión contienen elementos de su propia producción intelectual, aunque la diferencia principal radica en la importancia que le otorga al espacio geopolítico argentino y al accionar perjudicial de los países vecinos, en particular, de Chile. Para demostrar estas ideas, se vale de una serie de argumentos como los utilizados por Estanislao

---

<sup>111</sup> “Las fuerzas Armadas no son un poder constitucional, sino un organismo necesario para la existencia del Estado. La subordinación de las Instituciones Militares a los poderes constituidos hace a la esencia de la organización política argentina, toda vez que sus gobiernos reposen sobre el principio de la soberanía del pueblo. La obediencia es debida a la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto ésta deviene de la soberanía popular (...) Si esto no fuera así, quedaría trastocada su misión fundamental que compete a las Fuerzas Armadas, que dejarían de ser apolíticas y se convertirían en guardias pretorianas. Este principio es axiomático y tradicional (...)” (Villegas, 1975, p. 179).

Zeballos y Vicente Quesada. De hecho, en la misma portada de la obra se retoma la imagen del anexo XI a-3, que hemos reproducido anteriormente, donde se realiza la comparación entre “la Argentina de 1776 y la del año 1978”, abonando la teoría del mito virreinal e indicando con qué razonamientos se va a encontrar el lector a lo largo de toda la obra<sup>112</sup>.

Desde la introducción están presentes los conceptos de mutilación y cercenamiento; esta utilización es similar a la realizada en los escritos contemporáneos por Isaac Rojas y gran parte de la corriente a la que pertenece. Con esos autores afines comparte también la necesidad de dar una respuesta rápida a los problemas existentes en torno a los conflictos internacionales. Como veremos, en este punto existen algunos matices que lo acercan a uno u otro, dependiendo del caso.

Al igual que Vicente Quesada, se vale de la historia –y en particular de los títulos provenientes de la etapa virreinal – para justificar su postura, y a la vez para denunciar el expansionismo chileno en detrimento de la Argentina y los otros vecinos del Cono Sur:

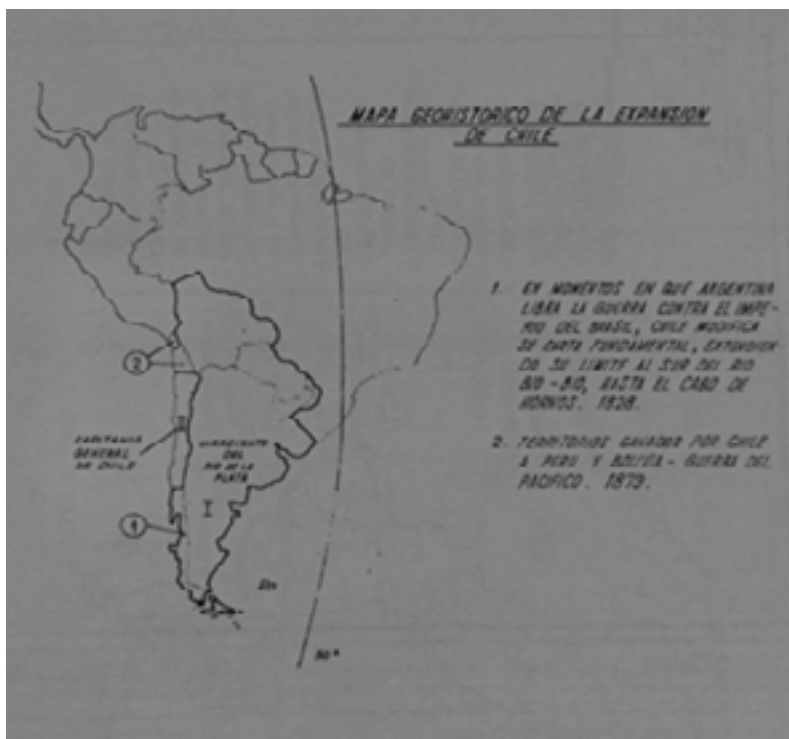
Los rasgos salientes que caracterizan la política de Chile, en cuestiones territoriales son: -La constancia de los motivos que la imponen -La permanencia de su objetivo en el tiempo -La variabilidad de los recursos que utiliza, en el momento oportuno, para expandir su territorio a expensas de sus vecinos -La actividad intelectual orientada a esos fines, en la clase dirigente chilena, formativa de la conciencia nacional del pueblo -La conducta ofensiva permanente, real o potencial, paciente pero pertinaz, en cuanto a su voluntad de expansión –Un agresivo proceder en los actos de jurisdicción y ocupación de territorios de dudoso dominio– Una tendenciosa y artera acción psicológica para el manejo de la opinión pública ( interna y externa) –La esperanza de ejercer, en el largo plazo, una mayor influencia en el Atlántico Sudoccidental para mejorar su posición geoestratégica relativa – La subestimación de los países colindantes (Villegas, 1978, p. 48).

En esta cita –extensa, pero que resume buena parte de lo que desarrolla en la obra– se pueden detectar lineamientos determinantes de su posición

---

<sup>112</sup> El año de la imagen (1978) es el único cambio, con respecto a la reproducción del anexo citado, que presenta la situación hacia 1968.

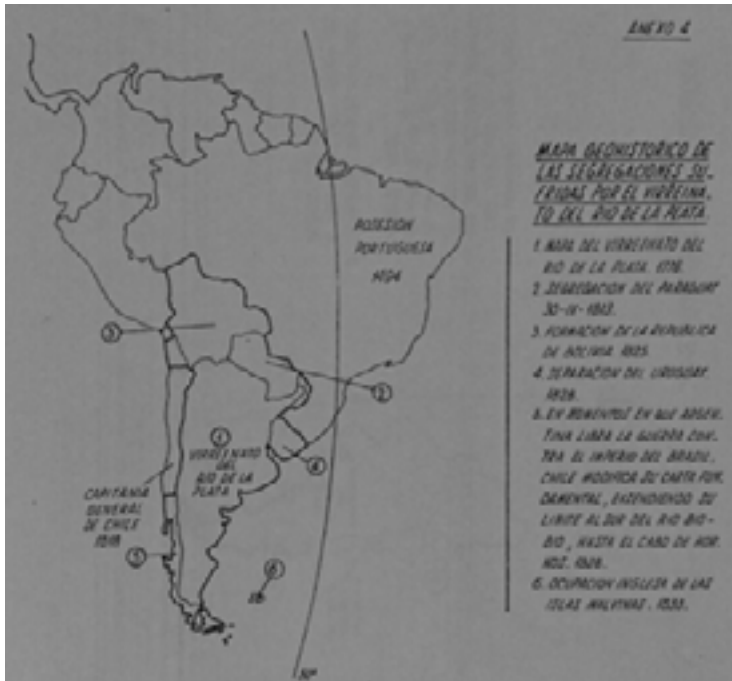
sobre el conflicto. Se acerca a la posición de Vicente Quesada al considerar que la política exterior chilena contiene una linealidad histórica constante, basada en objetivos que no mutan según los gobiernos que se encuentren al frente del país. Como vemos en los siguientes anexos, Villegas sostiene que el expansionismo chileno tuvo como consecuencia la retracción del territorio nacional argentino y de los demás países limítrofes (Villegas, 1978, pp.180-181), según se muestra en la imagen 3.



**Imagen 3.** Representación del “expansionismo chileno” según Osiris Villegas (1978, p. 181):

Sin embargo, su argumento acerca de las pérdidas territoriales no se detiene allí. Como anticipamos, se incluye dentro de la lógica de continuidad virreinato-Argentina, con lo cual toma al año 1776 como fecha de referencia de la grandeza territorial argentina, tal como lo expresa la portada de la

obra pero también el anexo 4 (Villegas, 1978, p. 182), y que en este artículo reproducimos en la imagen 4.



**Imagen 4.** Representación de segmentaciones territoriales sufridas por el Virreinato del Río de la Plata, según Osiris Villegas (1978, p.182)

La explicación de este “cercenamiento” territorial radica en la concepción de una política exterior argentina identificada como “entreguista” y desinteresada por el territorio. Alineándose con los postulados de los intelectuales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX ya analizados, Villegas opina que la política exterior argentina estaría caracterizada por:

La desaprensión en los asuntos de frontera; la ingenuidad; el manejo errático y confuso de los problemas litigiosos, juntamente con decisiones inexplicables que han puesto en peligro la integridad territorial del país, básicamente definieron, hasta hace poco tiempo, la política exterior argentina en lo que hace a la cuestión del límite con Chile (Villegas, 1978, p.50).

La existencia de una conciencia territorial chilena representada en el espíritu mismo del pueblo, es algo que ya había postulado Estanislao Zeballos. Esto no es presentado por Villegas como algo negativo, pues el propósito de su obra apunta en este sentido. No obstante, el expansionismo y la subestimación de los vecinos colindantes a la República de Chile sí son elementos negativos y de allí su postura intransigente, que deja abierta la posibilidad de que la guerra sea la solución al problema en caso de que el país trasandino no modifique tal conducta. De hecho, en el último párrafo de la obra, previo a los apéndices, sostiene lo siguiente:

Por el contrario, si Chile prosigue precipitando el conflicto por ausencia de la buena fe internacional en los procedimientos, manifestaciones anacrónicas e intempestivas; rigidez en la conducta negociadora que no se compadece con la amistad y armónica convivencia que proscriben los instrumentos interestatales suscriptos, irá modelando un cuadro de la situación que sólo dejará para la Argentina una única alternativa que, muy a su pesar, no es otra que la guerra (Villegas, 1978, p. 120).

La posibilidad de que un enfrentamiento armado sea la solución definitiva al conflicto Beagle es una de las hipótesis que Villegas considera a lo largo de su obra. Así, este planteo proveniente de uno de los hombres que tuvo participación en las comisiones negociadoras, con presencia dentro de la Junta Militar y referente de la facción más dura con respecto al conflicto, refuerza la hipótesis de que el enfrentamiento armado era una de las posibilidades que se barajaban dentro del abanico de soluciones. En este sentido, la contemporaneidad de la redacción del libro con el momento más crítico de las relaciones bilaterales no es un dato menor, y lo convierte en una fuente que merece un doble tratamiento: a) como expresión de la corriente nacional-territorialista-irredentista (emparentada en este acontecimiento con la línea más dura de las Fuerzas Armadas), y b) como reflejo de la situación bilateral existente, pues su publicación responde al creciente deterioro de las relaciones entre Argentina y Chile, sobre todo en el año 1978, momento en el cual se pone en marcha el Operativo Soberanía y el plan de defensa chileno. El texto será reimpresso en julio de 1981, en otro momento de tensión bilateral.

Al mismo tiempo, la denuncia que formula Villegas con relación al accionar histórico de Chile se conjuga con su percepción acerca de los planes

futuros del país trasandino. Dicho de otro modo, el conflicto Beagle pone de relieve la existencia de dos proyectos antagónicos: ambas naciones aspiran a ser potencias regionales. En la perspectiva de las concepciones geopolíticas desarrolladas por este autor, el antagonismo entre ambas naciones es insoslayable y tiene cierto sentido de inevitabilidad; los conceptos de ambición y necesidad son presentados como antagónicos, pues el primero siempre aparece asociado a Chile y el segundo a la Argentina. La ambición chilena en torno al conflicto Beagle, entonces, pasaba por su interés en convertirse en potencia regional y por tener proyecciones sobre áreas que históricamente no le pertenecerían, afectando directamente al “espacio vital” argentino (ver imagen 5). De ahí que Villegas centre su atención en la necesidad de un accionar claro y dirigido de la política exterior argentina que contemple, de ser ineludible, un enfrentamiento armado (Villegas, 1978, p. 184).

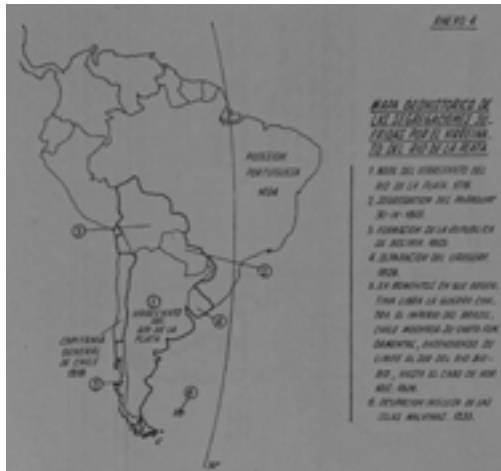


Imagen 5. Representación de la proyección bioceánica de Chile, según Osiris Villegas (1978, p.184)

Estos anexos reflejan lo expuesto y señalan además que si la Argentina cedía territorios frente al avance chileno, este no se detendría allí, sino que continuaría avanzando hacia el este, desplegando su estrategia de convertirse en potencia regional, aspiración que Villegas alberga para el futuro inmediato de la Argentina.

En suma, en sus escritos se observa que las concepciones geopolíticas del

general Villegas ponen énfasis en el expansionismo territorial de los países vecinos, la consideración de la política exterior argentina como una suma de fracasos, la relación directa entre la extensión del territorio y la fortaleza de la nación, y la posibilidad de hacer frente a la crisis contemporánea con un proyecto de desarrollo que permita la proyección del país en calidad de potencia. Tales concepciones serán utilizadas en el año 1984 durante las campañas a favor o en contra de la consulta popular no vinculante sobre este conflicto, pero ya en democracia y con nuevos actores en escena (Míguez, 2013; 2018).

## Conclusiones

Podemos sostener que los trabajos del almirante Isaac Rojas y del general Osiris Villegas comparten con los de Vicente Quesada y Estanislao Zeballos, salvando la distancia temporal, el hecho de ser escritos en momentos en los que existieron tensiones bélicas entre Argentina y Chile, cuando el riesgo de guerra fue muy alto (sobre todo con la puesta en marcha del Operativo Soberanía de 1978). También, que todos ellos ocuparon cargos ligados a la política exterior y en particular con Chile, con lo cual tenían, además de conocimientos al respecto, una perspectiva particular que intentaron expresar y llevar a cabo –con mayor o menor éxito– en el momento en que les tocó desempeñarse. La actuación de Rojas en el incidente del islote Snipe, y la intervención de Villegas en las comisiones negociadoras de 1977, reflejan sus posturas ideológicas llevadas a la práctica.

Asimismo, la utilización de los conceptos de mutilación, cercenamiento, la nostalgia por un pasado de grandeza territorial y la ubicación del enemigo tras las fronteras nacionales, son elementos que emparejan a estos militares de carrera con aquellas figuras fundacionales de la corriente nacional-territorialista-irredentista del cambio de siglo pasado, así como las citadas son características centrales de tal corriente, nutrida, a su vez, por los conceptos geopolíticos provenientes de la perspectiva alemana, especialmente los postulados por el general Haushofer.

Del mismo modo, en los proyectos de nación propuestos en sus obras hallamos una matriz modernizadora y militarizada en la conducción, con una importancia central otorgada a la consolidación de las fronteras nacionales, que se lograría solo con el progreso e integración de las regiones más

alejadas de la región pampeana. En consonancia con lo planteado por Melisa Deciancio (2017), observamos que desde la instauración de la dictadura civil-militar de Juan Carlos Onganía en adelante, algunos de los trabajos en los que nos detuvimos tendieron a priorizar en sus análisis la transferencia de las claves conceptuales de la geopolítica a problemas concretos, y a evaluarlos en términos prescriptivos. Además, se compartieron ciertos supuestos básicos que guardan relación con lo que algunos caracterizan como la “falencia de una geopolítica nacional”, que contribuyó al análisis de cuestiones profundamente descuidadas, a saber: el componente espacial de las regiones fronterizas vinculadas al crecimiento de los países vecinos y su presión sobre las áreas de frontera, la relevancia de los recursos humanos y energéticos para la potenciación de la nación.

Más allá de las diferencias existentes entre las dos figuras analizadas, encontramos una matriz conceptual que tiene como eje vertebrador una serie de concepciones geopolíticas compartidas por gran parte de la corriente nacional-territorialista-irredentista, con fuerte presencia en las décadas de 1960 y 1970 entre militares y civiles que destinaron sus trabajos al estudio de los conflictos limítrofes pendientes y al aprovechamiento de los recursos naturales en áreas fronterizas. En investigaciones posteriores analizaremos qué sucedió con tales concepciones tras la Guerra de Malvinas, sobre todo en el nuevo escenario sudamericano que encuentra a naciones que solían estar enfrentadas, devenidas en aliadas en materia de defensa.

## Referencias

Alonso, D. (2018). La “guerra revolucionaria” en las memorias retórico-argumentales golpistas de la Argentina desde 1983. *Athenea Digital*, 18(3), 1-19.

Bosoer, F. (2005). *Generales y Embajadores. Una historia de las diplomacias paralelas en la Argentina*. Buenos Aires: Vergara.

Buchrucker, C. (2007). Los conflictos del siglo XX y las corrientes ideológicas en la Revista Militar. *Revista Ciclos*, 14(31/32), 25-54.

Cairo, H. (2013). La Geopolítica como “ciencia del Estado”: el mundo del general *Hausshofer*. *Geopolítica(s). Revista sobre espacio y poder*, 3(2), 337-345.

Cavaleri, P. (2004). *La restauración del Virreinato. Orígenes del Nacionalismo territorial argentino*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Cicalese, G. (2007). Ortodoxia, ideología y compromiso político en la



geografía argentina en la década de 1970. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 12.

Cicerchia, R. y Llanos, C. (2017). Performances del pensamiento económico. América Latina a lo largo de los Siglos XIX y XX. En R. Cicerchia (comp.), *Región y Naciones. Instituciones, ciudadanía y performances sociales. Chile y Argentina (Siglos XIX-XX)*. De lo local a lo global (pp. 211-240). Rosario: Prohistoria.

Cisneros, A. y Escudé, C. (1998). *Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina* (tomo XIV). Buenos Aires: Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE)-Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Da Luz, A. (2015). Geopolítica do Brasil: a trajetória de Golbery do Couto e Silva e sua perspectiva no campo intelectual. *Revista Ágora*, 22, 350-360.

De la Balze, F. (1995). Argentina y Brasil: Enfrentando el Siglo XXI. En F. De la Balze (comp.) *Argentina y Brasil. Enfrentando el Siglo XXI* (pp. 9-17). Buenos Aires: Cari/Abra.

Deciancio, M. (2017). La construcción del campo de las Relaciones Internacionales argentinas: contribuciones desde la geopolítica. *Revista de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad*, 12(2), 179-205.

Di Renzo, C. (2018). La comunidad imaginada por Estanislao Zeballos: entre la defensa de la soberanía nacional argentina y la instigación a la solución de los conflictos por medio de las armas. *Conjuntura Austral*, 9(45), 43-56.

Di Renzo, C. (2020). Geopolítica, desarrollo económico y política exterior: Juan Enrique Guglielmelli y su proyecto de nación en la Revista Estrategia, 1969-1983. *Folia Histórica del Nordeste*, 38, p. 51-72.

Escudé, C. (1984). *La Argentina: ¿paria internacional?*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Fernandes, A. (2009). A reformulação da Doutrina de Segurança Nacional pela Escola Superior de Guerra no Brasil: a geopolítica de Golbery do Couto e Silva. *Antíteses*, 4, 831-856.

Fornillo, B. (2015). Centralidad y permanencia del pensamiento geopolítico en la historia reciente de Sudamérica (1944-2015). *Estudios sociales del Estado*, 1(2), 118-148.

González Crespo, J. (1993). *Memorias del almirante Isaac Rojas*. Buenos

Aires: Planeta.

Herrero de Castro, R. (2006). *La realidad inventada*. Madrid/México DF. Plaza y Valdés.

Hoolbrad, C. (1984). *Middle Powers in International Politics*. New York: St. Martin's Press.

Jervis, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. NY: Princeton University Press.

Lacoste, P. (2003). *La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile*. (1534-2000). USA: Fondo De Cultura Economica.

Leaños, J. (2000). *De Chapultepec al Beagle. Política exterior argentina: 1945-1980*. Buenos Aires: Emecé.

Madrid Murúa, R. (2003). La Estrategia Nacional y Militar que planificó Argentina en el marco de una estrategia total, para enfrentar el conflicto con Chile el año 1978. *Memorial del Ejército de Chile*, 471, 50-69.

Meira Mattos, C. (1969). A geopolítica brasileira-predecessores e geopolíticos. *Revista da Escola Superior de Guerra*, 39, 58-82.

Míguez, M. C. (2013). Los partidos políticos y la política exterior argentina. Buenos Aires: Ariel.

Míguez, M. C. (2018). El Canal Beagle y consulta popular en 1984. Relaciones internacionales y política interna argentina. *Si Somos Americanos*, 18(2), 78-102.

Miyamoto, S. (1981). Os estudos geopolíticos no Brasil: uma contribuição para sua avaliação. *Perspectivas: Revista de Ciências Sociais*, 1, 75-92. *política exterior y sus interpretaciones históricas*. Rosario: Prohistoria ediciones.

Quesada, V. (1857). *La provincia de Corrientes*. Buenos Aires: Imprenta de El Orden.

Quesada, V. (1878). *La Patagonia y las tierras australes del continente americano*. Buenos Aires: Imprenta y Librerías de Mayo.

Quesada, V. (1881). *Virreinato de Rio de la Plata, 1776-180, Apuntamientos crítico-históricos básicos para servir en la cuestión de límites entre la República Argentina y Chile*. Buenos Aires: Tipografía de M. Biedma.

Quesada, V. (1888). (Víctor Gálvez) *Memorias de un viejo*. Buenos Aires: Peuser.

Quesada, V. (1915). *Historia Colonial Argentina. La cultura argentina*. Buenos Aires.

Rodríguez, L. G. y Soprano, G. (2015). La producción de un consenso en defensa en la última dictadura en Argentina. Militares y civiles en la Escuela de Defensa Nacional. *Século XXI, Revista de Ciencias Sociales*, 5(1), 53-77.

Rodríguez, L. G. y Soprano, G. (2015). La producción de un consenso en defensa en la última dictadura en Argentina. Militares y civiles en la Escuela de Defensa Nacional. *Século XXI, Revista de Ciencias Sociales*, 5(1), 53-77.

Rojas, I. F. (1979). *La ofensiva geopolítica brasileña en la cuenca del Plata*. Buenos Aires: Ediciones Nemont.

Rojas, I. F. (coord.) (1978). *La Argentina en el Beagle y el Atlántico Sur*. Buenos Aires: Editorial Diagraf.

Simonoff, A. (2012). *Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares de la* Villegas, O. (1969). *Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional*. Buenos Aires: Círculo Militar.

Villegas, O. (1975). *Tiempo geopolítico argentino*. Buenos Aires: Pleamar.

Villegas, O. (1978). *El conflicto con Chile en la región austral*. Buenos Aires: Pleamar.

Villegas, O. G. (1969). *Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional: enfoques y temas*. Buenos Aires. Pleamar.

Zeballos, E. (1878) *La conquista de quince mil leguas*. Versión digital, Editado por el Aleph (2000).



## Los autores

### Francisco Cesar Alves Ferraz

É Professor Associado do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, Brasil. É Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu atividades de Pós-Doutorado como Pesquisador Visitante no Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e no Center for the Study of War and Society, na Universidade do Tennessee (EUA). Tem pesquisado nas áreas de História Militar, História do Brasil Contemporâneo e História dos Estados Unidos. Publicou os livros *A guerra que não acabou: a reintegração social dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, 1945-2000* (Londrina, EDUEL, 2012); *Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial* (Rio de Janeiro, Zahar, 2005) e *A Sombra dos Carvalhos: Escola Superior de Guerra e Política* (Londrina, EDUEL, 1997), além de vários artigos e capítulos de livros.

### José Miguel Arias Neto

Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2001). Realizou estágio pós doutoral no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas UNESP/USP/PUC-SP (2015). É professor associado de História Contemporânea no curso de Graduação em História e Docente do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em História Social da Universidade Estadual de Londrina e do Programa de Pós-Graduação em História e Regiões da Universidade do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO. Pesquisa Imprensa e História Militar no século XIX. É coordenador dos Grupos de Pesquisa: Estudos Culturais, Política e Mídia. Bolsista Produtividade 2 CNPq.

## Hernán Cornut

Licenciado en Estrategia y Organización (Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF) (2002), Magíster en Estrategia y Geopolítica (UNDEF) (2005), y Doctor en Historia por la Universidad del Salvador (USAL) (2017). Se ha desempeñado en el área de educación del Ejército Argentino, en particular en la Escuela Superior de Guerra de la que ha sido profesor titular por concurso de las materias Organización y Pensamiento Militar Contemporáneo. Ha sido subdirector de la Escuela Superior de Guerra, así como director de la misma durante el trienio 2014-2016. Es miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar. Integra el Grupo de Trabajo de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia y el Grupo de Estudios Históricos de la Guerra del Instituto Ravignani (UBA). Su línea de investigación está centrada en la historia militar latinoamericana del siglo XX, con preeminencia sobre la realidad regional del Cono Sur.

## Fernando da Silva Rodrigues

Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1997), Especialista em História do Século XX pela Universidade Cândido Mendes (2002), Mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra (2005), Doutor (2008) e Pós-Doutor (2013) em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, coordenador do Grupo de Pesquisa História Militar e Fronteiras do CNPq, coordenador do Grupo de Trabalho de História Militar da ANPUH-RJ, pesquisador sênior sobre Forças Armadas e História Militar do Centro de Estudos Estratégicos do Exército brasileiro, e Jovem Cientista do Estado, pela FAPERJ.

## Cristian Andrés Di Renzo

Profesor de Historia (2012), Licenciado en Historia (2016) y Magíster en Historia (2018) por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Becario tipo “B”, se encuentra trabajando en el proyecto de Doctorado en Historia titulado “De la hipótesis de guerra a la cooperación en Defensa: actores, estrategias y políticas en las relaciones entre Argentina y Chile entre las décadas de 1970-1990” bajo la dirección de los doctores Germán Soprano y Julio César Melón, GAP/ GEL (Escuela de Gobierno y Administración Pública/Grupo de Estudios Latinoamericanos), (Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata) CEHIS.

## Jefferson Eduardo dos Santos Machado

Graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004), Mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007), Doutor em História Comparada Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016), Pós-Doutor em História pela Universidade Salgado de Oliveira (2018). Atualmente é Pesquisador do Museu Aeroespacial e Pesquisador colaborador do Programa de Estudos Medievais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

## Érica Sarmiento

Professora Adjunta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração (Labimi/UERJ). É pesquisadora Jovem Cientista Nosso Estado da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Autora do livro *Galegos nos trópicos: presença e invisibilidade da imigração galega no Rio de Janeiro (1880-1930)*. Porto Alegre: EdPucRs, 2017. Entre outros. Nos últimos anos vem se dedicando a estudos de imigração em diferentes sociedades americanas, e estudos comparados Brasil e Argentina, enfatizando temas relacionados com associativismo, fronteiras, e cadeias migratórias.

## Germán Soprano

Doctor en Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones), Magíster en Sociología (Universidad Federal de Río de Janeiro) y Profesor de Historia (Universidad Nacional de La Plata). Investigador Independiente del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales-IdIHCS de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor Titular ordinario de Teoría Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Se ha especializado en estudios de antropología de la política, teoría política y del Estado, e historia social argentina. Ha investigado en perspectiva histórica y etnográfica sobre políticos peronistas, académicos universitarios y funcionarios estatales civiles y militares. Actualmente investiga sobre formas de la guerra contemporánea, política de defensa, educación, profesión y liderazgos militares en la Argentina de los siglos XX y XXI. Es autor de *¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo XXI* (2016) y de *Martín Balza. Un general argentino entre la república y la democracia* (2019).

## Gonzalo Manuel Torchio

Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Actualmente realiza investigaciones de carácter sociohistórico sobre las Fuerzas Armadas argentinas en la Antártida en el siglo XX.

## Fernando Velôzo Gomes Pedrosa

Coronel del Ejército Brasileño (arma de Infantería, retirado). Licenciado en Ciencias Militares por la Academia Militar de las Agujas Negras (AMAN) (Resende, RJ), (1978). Magíster y Doctor en Historia por el Programa de Posgrado en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue instructor de la AMAN (1983-1985), de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (Eceme) (Río de Janeiro, 1997-1999 y 2006) y del Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala (1999-2001). Fue subcomandante y subdirector de enseñanza de la AMAN (2007-2009). Es profesor colaborador de la Eceme y del curso de especialización (diplomado) en Historia Militar de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio).



El libro tiene por objeto de estudio las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los procesos de configuración histórica de las fronteras y territorios de los Estados nacionales en América del Sur en las perspectivas y experiencias de actores sociales de la Argentina y el Brasil en el siglo XX. A tal efecto comprende los desafíos que supuso para el Brasil la ocupación y la defensa de su soberanía en un país que limita con todos los otros en la región, excepto con Chile; las conflictivas relaciones diplomáticas y militares entre Argentina, Brasil y Chile; las implicancias de la participación militar del Brasil en la Segunda Guerra Mundial; la proyección antártica de la Argentina y el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en ella; los proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas y brasileñas y las concepciones geopolíticas, de la defensa nacional y de la seguridad internacional predominantes en ambos países en el siglo XX.